



30

años de democracia en Bolivia

Repaso multidisciplinario a un proceso apasionante (1982-2012)



Raúl Peñaranda U.
Isabel Mercado, Boris Miranda
Clara Berríos

30

años de democracia en Bolivia

Repaso multidisciplinario a un proceso
apasionante (1982-2012)

Raúl Peñaranda U.
Isabel Mercado, Boris Miranda
Clara Berríos



30 años de democracia en Bolivia

Repaso multidisciplinario a un proceso apasionante

Dirección:

Raúl Peñaranda

Coordinación editorial:

Isabel Mercado

Boris Miranda

Revisión hemerográfica y testimonios:

Clara Berríos

Diseño y armado:

Rubén Aruquipa

Fotografías:

Lucio Flores

Fred Ramos

Richard Sánchez

Wara Vargas

Oscar Olivera

Luis Enrique Ramos

Amancaya Finkel

Este libro se imprimió con el apoyo financiero de la Fundación UNIR Bolivia, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Fundación Friederich Ebert, Fundación Hanns Seidel e IDEA Internacional (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral).

La publicación es propiedad de Página Siete. ©

Impreso en Bolivia

Octubre de 2012

Índice

Presentación	7
---------------------------	----------

Capítulo 1

Años 1982-1985: El difícil arranque	31
30 años de democracia sin hoja de ruta	13
El tiempo de la hiperinflación	21
1982-1985 El costo de la democracia.....	27
Millonarios de papel.....	33
Testimonio: Gustavo Fernández.....	39
Testimonio: Simón Reyes.....	41

Capítulo 2

Años 1986-1999: Estabilidad y reformas liberales.....	49
Los años en que nos cambiaron las preguntas.....	51
Del ajuste a la privatización	59
Campo político, reformismo liberal y movimiento popular.....	65
De actores a ciudadanos.....	71
Testimonio: Guillermo Bedregal.....	77
Testimonio: Marcial Fabricano.....	79

Capítulo 3

Años 2000-2005: Turbulencias y movilizaciones en pro del cambio.....	87
Algo así como un proceso de cambio y dos “guerras”	89
La crisis golpea a las puertas.....	97
2000-2005: El tiempo de las sublevaciones.....	103
El inicio de un proceso sin retorno	109
Testimonio: Óscar Olivera.....	115
Testimonio: Fernando Rodríguez	117

Capítulo 4

Años 2006-2012: Avances y retrocesos de una etapa de cambio.....	125
--	-----

Luces y sombras del proceso de cambio	127
La vuelta del estatismo	135
2006-2012, vaivenes de un régimen poderoso	143
Mayor inclusión, pero también más confrontación	149
Testimonio: Pablo Groux.....	155
Testimonio: Emiliano Noza.....	157

Capítulo 5

Diversas miradas sobre tres décadas históricas	165
La conflictividad boliviana en 30 años de democracia	167
Ideas e instituciones de la democracia boliviana	177
Recorridos y sentidos de la interculturalidad en Bolivia.....	185
La conquista del Parlamento (1982 – 2012)	195
Pueblos aymaras, quechuas y urus en 30 años de democracia	201
Pueblos indígenas de tierras bajas en 30 años de democracia.....	209
El agro boliviano en tiempos de la democracia y el neoliberalismo.....	217
Una mirada a la institucionalidad democrática	225
Cultura ciudadana a 30 años de la recuperación democrática	231
De la crisis de la política a la crisis de los medios	237
30 años a puerta abierta.....	245

Capítulo 6

Presidentes en primer plano	253
Guido Vildoza, “Yo busqué redimir a las Fuerzas Armadas”	255
Jaime Paz Zamora, “Elegimos lo menos dañino para el país”	263
Gonzalo Sánchez de Lozada, “Mi mandato fenece legalmente en 2007”	271
Jorge Tuto Quiroga, “Hice oposición sin poner bombas ni públicas”	277
Carlos D. Mesa, “Muestras quién eres cuando tienes poder”	287
Eduardo Rodríguez Veltzé, “La democracia hizo muy poco por la justicia”	295
Evo Morales Ayma, “En temas de servicios básicos tenemos un control total del Estado”	303

Capítulo 7

Anexos	315
Resultados electorales	317
Conflictividad en Bolivia	318
Índices socioeconómicos	320
Gabinetes 1982 - 2012.....	326

30 años de democracia en Bolivia

PRESENTACIÓN

Raúl Peñaranda U.

Bolivia cumple 30 años de democracia. En un país caracterizado por la inestabilidad política y la falta de institucionalidad, éste es un hecho verdaderamente extraordinario. Significa que, contra las tradiciones del pasado y enfrentando una serie de amenazas, los bolivianos lograron ponerse de acuerdo en ciertos aspectos básicos de convivencia social y política.

El más largo período democrático anterior se registró hace un siglo, durante la era liberal, cuando se sucedieron cinco presidencias elegidas por voto, completando una etapa de 21 años. Hoy, el país ha cumplido un tercio más de estabilidad democrática que en ese entonces.

Sin embargo, existen algunas diferencias, muchas de ellas trascendentales: en la etapa liberal que mencionamos (y, en realidad, en toda la historia boliviana antes de la aprobación del voto universal en 1956) estuvo vigente la democracia censitaria y solamente tenían derecho a sufragar los hombres alfabetos que tuvieran una propiedad. También sólo ellos podían acceder a cargos electos. Ello significaba que únicamente un porcentaje pequeño de la sociedad podía emitir su voto. Por ejemplo, en las últimas elecciones antes del voto universal, registradas en 1951, sufragaron 126.123 personas. El número se multiplicó por siete y fue de 931.825 en los comicios de 1956.

Hoy, por el contrario, los bolivianos registran uno de los más elevados porcentajes de participación electoral en las Américas con respecto a la población en edad de votar, que se estima en 87,8%. En 2009, al finalizar el empadronamiento biométrico, se habían registrado 5,13 millones de bolivianos en el territorio nacional (sin contar los inscritos en el exterior) y para ese año, el INE tenía una

estimación de 5,85 millones de personas en edad de votar (mayores de 18 años). En el proceso electoral de ese año votaron 4,8 millones de personas, es decir 94,4% de los registrados y 82,9% de la población en edad de votar.

Aunque ejercer el voto de manera libre e informada es el principal requisito de la democracia, existen otras condiciones que deben cumplirse para que una sociedad pueda decir que vive, efectivamente, en un régimen democrático, que construye un estado de derecho. Éste se registra cuando toda acción estatal se encuentra bajo la majestad de la ley, creando un ambiente de respeto al ser humano y a las actividades públicas. El poder del Estado queda, así, subordinado al orden jurídico.

Para acotar conceptos y debido a que la definición de estado de derecho es elusiva y tiene innumerables acepciones, es de utilidad mencionar aquí la descripción que hace de éste las Naciones Unidas: “(el estado de derecho) se refiere a un principio de gobierno según el cual todas las personas, instituciones y entidades, públicas y privadas, incluido el propio Estado, están sometidas a unas leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia, además de ser compatibles con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. Asimismo, exige que se adopten medidas para garantizar el respeto de los principios de primacía de la ley (...) separación de poderes, participación en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y transparencia procesal y legal”.

Aunque Bolivia tiene resultados interesantes en varios de los planos mencionados en esa definición, también se demuestra que el camino por recorrer es todavía muy largo. Puede decirse entonces que ese estado de derecho es incompleto y parcial.

Hay muchas demostraciones de ello en los últimos 30 años de democracia. Las más importantes son quizás los ejemplos sucesivos y permanentes de abuso de la ley por parte de algunos sectores de la sociedad, la incapacidad de combatir la corrupción, la colusión entre quienes detentan el poder y el sistema judicial, etc. En estas tres décadas de sistema democrático un presidente de la Corte Suprema fue ilegalmente exonerado del cargo por el Legislativo, con evidentes muestras de injerencia; además, algunos de los miembros de un grupo armado que secuestró al empresario Jorge Lonsdale en 1990 fueron ejecutados tras haber sido detenidos vivos; diversos acusados de pertenecer a otras organizaciones subversivas fueron torturados y perseguidos con métodos que prohibía la ley; las protestas sociales, especialmente a mediados de la década del 90 y

a principios de la de 2000, fueron criminalizadas; las muertes por acción de las FFAA y la Policía durante manifestaciones de protesta llegaron a ser de entre 10 y 15 por año, según estimaciones, un número muy elevado.

Por eso es que hasta antes del año 2006, cuando llega al poder el presidente Evo Morales, trayendo consigo una serie de reformas políticas, sociales y culturales de alta significación, la democracia boliviana era vibrante, pero tenía también muchas deficiencias.

La llegada de Morales al poder implicó un cambio trascendental porque cortaba casi dos siglos de vida republicana en los que la participación de los sectores indígenas en el poder había sido reducida e inestable. Por lo menos, no se había tenido un ejemplo en el que el propio Jefe de Estado hubiera sido (o se hubiera declarado él mismo) un indígena. El poder simbólico de ello ha sido enorme y, de facto, ha enriquecido la democracia boliviana. Junto con eso se ha dado un positivo y alentado recambio de élites, cosa que ayuda a la movilidad social y a la inclusión en la toma de decisiones de sectores que en el pasado por lo general habían sido mantenidos fuera de ella.

Pero tampoco bajo la presidencia de Evo Morales y tras la construcción del nuevo Estado Plurinacional –aunque éste tiene mucho más de cambio de nombre que de realidades concretas– la sociedad boliviana ha logrado vivir genuinamente bajo un estado de derecho, con plena independencia de poderes y la capacidad de las instituciones de colocar bajo la ley a todas las personas, independientemente de cuál sea su cargo, filiación política o poder económico o de otro tipo.

Hoy, los más importantes líderes opositores enfrentan juicios, muchos de ellos motivados políticamente; por lo menos un centenar (aunque hay fuentes que señalan que la cifra es de cuatro veces superior) de bolivianos vive en Brasil y otros países bajo las figuras de refugiados o asilados políticos, un escenario completamente nuevo para la todavía joven democracia boliviana; existen medios de comunicación independientes procesados penalmente, situación que no se había registrado en las tres décadas anteriores; y líderes opositores están detenidos, sin juicios, en cárceles públicas por mucho mayor tiempo que el que permite la ley.

Con todo, se puede asegurar que los logros de la democracia son mayores a sus defectos y permiten que una enorme parte de la sociedad viva sin temor a retaliaciones partidarias o políticas, ejerza su voto libremente, tenga diversas fuentes de información y cumpla sus derechos de libre asociación y expresión.

Este grupo de derechos, sin embargo, tampoco es fruto solamente de los últimos 30 años de democracia, sino de innumerables eventos del pasado, de los que podemos resaltar las grandes reformas introducidas en el país por la Revolución Nacional de 1952, que remeció al país desde sus cimientos, reconoció la falta de derechos que tenían indígenas y campesinos, nacionalizó las minas, dio el voto universal y puso un énfasis muy grande en la integración física del territorio nacional, entre otros aspectos.

De todos estos temas habla este libro, gracias al concurso de los mejores periodistas y ensayistas del país, que abordan los asuntos desde innumerables miradas y enfoques. Página Siete, con el apoyo de instituciones comprometidas con el desarrollo democrático, se honra en haber coordinado y dirigido la iniciativa.

Los textos se caracterizan por su profundidad, equilibrio y por basarse en información objetiva. En el conjunto, la mirada obtenida es pluralista y compleja. Página Siete está seguro de que este texto se convertirá en un libro de referencia para estudiosos y especialistas, y que también será de interés del público en general.

El libro no hubiera podido plasmarse sin el trascendental apoyo de las siguientes instituciones: Fundación UNIR Bolivia, Capacitación y Derechos Ciudadanos (CDC), Fundación Friederich Ebert, Fundación Hanns Seidel e IDEA Internacional (Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral). Estas entidades no sólo dieron un valioso respaldo económico, sino que también aportaron con provechosas sugerencias e ideas. A todas ellas va nuestro agradecimiento.

Y, mientras tanto, felicidades democracia boliviana por cumplir 30 años. Y que cumplas 30 veces 30 más.

Raúl Peñaranda es director de Página Siete

Años

1982-1985

**El difícil
arranque**

Capítulo

1

Los ideales democráticos germinaron en Bolivia en medio de muchas restricciones: no sólo fueron postergadas las libertades, también se rifaron los recursos económicos. En ese clima fue parida la democracia: grandes expectativas para un escenario más bien poco auspicioso.

Y si la economía hizo aguas, arrastrando en su debacle a la sociedad, los actores políticos también fueron abatidos por el sismo: partidos de izquierda, sindicatos y organizaciones sociales que acunaron la llegada de la democracia se convirtieron en los principales detractores de su primer gobierno, el de la emblemática UDP.

30 años de democracia sin hoja de ruta

Lupe Cajías

Para conquistar la democracia en 1982, no sólo fue necesario derrotar a la dictadura. Las herencias dejadas por largos decenios de manejo discrecional del poder habían afectado a la economía, y la sociedad, con un exceso de expectativas en torno a los beneficios de un régimen de respeto a las libertades y derechos, no pudo acompañar el proceso de edificación de una institucionalidad que casi se derrumba en sus primeros pasos.

El más largo período de democracia, entendida como la alternancia del poder político a través de elecciones, empezó en Bolivia con la esperanza del pleno ejercicio de las libertades ciudadanas y con la amenaza del colapso económico, después de 18 años de gobiernos militares en el país y un lustro de desajustes económicos.

Aunque otros se referirán en este mismo tomo a la situación de las exportaciones bolivianas y al agotamiento del modelo del capitalismo de Es-

tado impulsado desde 1952 (minería), es necesario recordar que la década de los 80 fue un período perdido para el desarrollo económico, industrial y social de los países del llamado Tercer Mundo. La crisis de la deuda externa afectó a todos, mucho más a naciones dependientes de los mercados externos como era y es el caso de Bolivia. Es difícil entender el conflictivo camino por el que transitó la democracia desde el 10 de octubre de 1982 si no tomamos en cuenta este naufragio.

Es imprescindible también nombrar entre los escollos el cerco económico desde Washington y desde Europa al gobierno de facto de Luis

Lupe Cajías, periodista e historiadora, publicó 16 libros relacionados con la investigación en medios de comunicación y con la historia boliviana, principalmente de las organizaciones populares, durante el siglo XX.

García Meza y a sus sucesores militares pues se truncaron programas, sobre todo en salud y en el agro. La frágil estabilidad se agravó con el manejo incorrecto de los fondos públicos en beneficio de personas, de grupos y de camaradas de las Fuerzas Armadas en desmedro de planes de desarrollo o de la atención social.

No había atención al mediano o al pequeño productor agrícola y los gran-

“Gobernar Bolivia hoy es algo muy difícil por el ruinoso estado en que quedó tras las sucesivas administraciones de facto, por eso confío en el pueblo del país y en la solidaridad internacional y lo que es fundamental, en que el gobierno sea ejemplo de autoridad, de decencia, de responsabilidad y de conducta, y no de la declamación sino en la práctica”.

(Hernán Siles Zuazo, 14 de octubre de 1982)

des programas como el algodón en el departamento de Santa Cruz o el azúcar en el norte del departamento de La Paz ya eran un fracaso. La agroindustria era incipiente y la producción a gran escala estaba todavía en sus inicios.

No existía un contrato de venta de gas al Brasil y las relaciones comerciales con Argentina enfrentaban un dilema político, pues la Junta Militar de ese país había ayudado directamente a los fascistas bolivianos y el vínculo se manejaba a esa instancia y no para aprovechar las divisas por la venta de ese recurso natural.

El cambio del dólar era un indicador del creciente proceso inflacionario desde el gobierno de Celso Torrelio en 1981, y los sucesivos “paquetes económicos” desde diciembre de 1979 reflejaban la crisis interna.

Por otra parte, crecía el contrabando de gran escala (de esa época datan espacios ciudadanos como el Miamicito en La Paz) y los ingresos del circuito coca-cocaína distorsionaban los datos estadísticos, fenómeno que duró las tres décadas democráticas.

Aunque con brochazos gruesos, ése era el panorama de la base económica que acompañó al gobierno de la Unidad Democrática y Popular (UDP), cuando Hernán Siles Zuazo y Jaime Paz Zamora juraron como el primer binomio elegido en las urnas desde 1964.

EL CONTEXTO INTERNACIONAL

La democracia en Bolivia comenzó con un primer intento fallido en 1977, con la convocatoria a elecciones generales en las cuales participaron todos los partidos un año después, por la presión del ayuno voluntario de cuatro mujeres mineras y la gran movilización que logró la amnistía general.

Desde junio de 1978 hubo tres elecciones (1978, 1979, 1980), tres golpes militares (dos en 1978 y uno en 1979), movilizaciones populares, hasta los comicios de junio de 1980, la victoria relativa del frente izquierdista UDP, la subversión de los militares (generales, coroneles y mayores, algunos todavía activos) el 17 de julio de 1980, otros dos golpes militares

hasta la entrega del mando el 10 de octubre de 1982.

Bolivia había sido seleccionada como un primer laboratorio para retornar al sistema constitucional con el respaldo del gobierno demócrata de James Carter. En 1982, el nuevo presidente de Estados Unidos era el republicano y anticomunista Ronald Reagan, a quien no le preocupaban los derechos humanos como a su antecesor y convivía sin incomodarse con los gobiernos militares de la región; es más, auspiciaba guerras internas como en Nicaragua, Panamá o Granada por la inclinación izquierdista de sus mandatarios.

La era Reagan acentuó los conflictos armados en Centroamérica, sobre todo en El Salvador -después de la fallida ofensiva final de la guerrilla en enero de 1981- y en Guatemala, donde la práctica del exterminio arrasó con poblaciones civiles completas.

Posiblemente por la gravedad de lo que pasaba en el antiguo patio trasero, EEUU descuidó al Cono Sur y confió en la fortaleza de las dictaduras en Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina y Chile. El pueblo boliviano logró ser el primero de la región en luchar y conquistar la democracia y dio la pauta para el cambio regional.

Por otra parte, la formación del Grupo de los Cuatro, posteriormente Grupo de los Ocho y más tarde conocido como Grupo de Río, mostró que América Latina comenzaba un período de relaciones internas alejadas del mandato de Washington y de instrumentos hasta entonces dependientes de EEUU, como la Organización de Estados Americanos (OEA).

Los cuatro iniciales eran los únicos gobiernos elegidos en las urnas al inicio de los 80: México, Panamá, Colombia y Venezuela. A pesar de sus

(Presencia, 13 de octubre de 1982)

García Meza viajó a Buenos Aires junto a Pérez Esquivel

El general Luis García Meza salió casi subrepticamente hoy en la mañana del país, visiblemente abrumado e irritado, en compañía de un grupo de guardaespaldas.

La intempestiva salida del ex dictador se produjo en vuelo regular del Lloyd Aéreo Boliviano hacia la capital argentina, que hizo escala en esta ciudad, de donde decoló a las 9.00 horas.

La gente de prensa, al saber que García Meza hacía uso del salón VIP, se dirigió hacia ese lugar para obtener infor-

mación acerca de su viaje y del proceso democrático que la nación inició anteaer. Al ser informado por sus colaboradores de los propósitos de los periodistas, García Meza optó por abandonar aquel lugar destinado a visitantes distinguidos para dirigirse a la sección Migración del aeropuerto.

En el mismo avión en que salía García Meza, lo hacía también el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, quien vino a Bolivia invitado para la transmisión de mando al gobierno democrático.

propios problemas, estos países impulsaron la comprensión de los problemas continentales desde la tensión Norte-Sur y no desde la confrontación Este-Oeste, como presionaba Reagan. Su primera tarea fue iniciar las cumbres políticas a nivel presidencial (actualmente multiplicadas en distintos instrumentos de integración) para buscar caminos de paz en Centroamérica y el Caribe y elecciones democráticas en el Cono Sur.

Uno de los fuertes interlocutores del grupo era la Conferencia de Partidos Políticos de América Latina (COPPAL), ligada a la Internacional

Juan Lechín, en Lima

La COB no participará en el Gobierno a menos que ocupe la mayoría de ministerios

La Central Obrera Boliviana (COB) no participará en el futuro gobierno del presidente Hernán Siles Zuazo, a menos que obreros y mineros sean designados en más de la mitad de los ministerios y se implante un programa económico de “liberación nacional”, dijo hoy el secretario ejecutivo de esa organización, Juan Lechín Oquendo. Lechín afirmó en esta capital que ese programa económico debe ser “antiimperialista y sin ninguna vinculación con el FMI”.

“La única forma que la COB aceptará gobernar sería con un programa de economía de liberación, es decir, antiimperialista y sin ninguna vinculación del FMI, y que el gabinete sea integrado en más de 50%”, declaró.

(AP, 8 de octubre de 1982)

Socialista, en la que participaba el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), partido del candidato vicepresidente por la UDP, Jaime Paz Zamora.

El rol de los gobiernos democráticos y la labor internacional del MIR –incluso en un momento para preparar un golpe de Estado contra los militares, desde Panamá– fueron esenciales para que la recuperación democrática boliviana contase inmediatamente con respaldo externo. Europa, sobre todo los gobiernos socialdemócratas, apoyó política y económicamente a la Bolivia democrática, desde el Estado o desde fundaciones políticas y a través de grandes redes de organizaciones no gubernamentales que fortalecieron las ONG locales, algunas emblemáticas de la época como el IPTK.

Sin embargo, Bolivia estaba rodeada de gobiernos militares, aunque agónicos después de la derrota en Las Malvinas en Argentina y la apertura controlada en Brasil. El Plan Cóndor daba sus últimos aletazos. Muchos exiliados llegaron a Bolivia y desde La Paz, como desde Panamá para Centroamérica, se concentraron esfuerzos para contar con cabeceras de playa en solidaridad con los perseguidos argentinos, chilenos, uruguayos.

Bolivia fue el primer país sudamericano en unirse al Grupo de los Cuatro, que pronto se amplió a Ecuador y a Perú, naciones intermedias entre gobiernos de facto y democracias en esos años 80. La democracia directa daba sus primeros puntazos. Paz Zamora quiso ser un vicepresidente gestor de encuentros internacionales,

dentro y fuera de Bolivia, aunque el provincianismo de los parlamentarios frustró esa iniciativa que pudo darle una presencia internacional muy importante al país mediterráneo.

Es importante recordar que en esa etapa el mundo vivía dos acontecimientos que lograrían desequilibrar el orden mundial surgido de la Segunda Guerra Mundial: la victoria del sindicato católico Solidaridad en Polonia, uno de los países de la órbita soviética y patria del flamante papa Juan Pablo II, militante contra la Teología de la Liberación; y la situación en Irán con la caída del sha Pahlevi en 1979 y la victoria de corrientes radicales islamistas, la crisis de los rehenes en la embajada de Estados Unidos en 1980 y la guerra contra Irak (EEUU respaldaba a Sadam Husein), además de la invasión y derrota soviética en Afganistán.

El mundo cambiaba y el final de la Guerra Fría se anunciaba paso a paso; otros actores surgían y las pertenencias étnicas comenzaban a pesar más que la lucha de clases sociales.

UN GOBIERNO A MEDIAS

En ese contexto llegó a La Paz el flamante presidente Hernán Siles Zuazo, quien junto a su colaborador inmediato, Jaime Paz Zamora, prometió —en una multitudinaria concentración en San Francisco— terminar con la crisis económica en 100 días.

Aunque la pareja aparecía unida en las fotografías, era de dominio público la fractura entre los aliados por las diferencias de enfoque para enfrentar la dictadura y las alianzas externas. Siles y su partido, una frac-

ción izquierdista del antiguo Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNRI), habían aceptado la tesis mirista del “entronque histórico”, pero en el exilio comenzaron a desconfiar de sus “herederos naturales” por el protagonismo de Paz Zamora en los foros políticos internacionales.

Después hubo quejas por la relación del mirista con militares institucionalistas involucrados en intentos de golpes contra García Meza.

Pese a ello, la ocupación de ministerios fue equilibrada, incluyendo a otras fuerzas menores dentro de la UDP como al pro soviético Partido Comunista de Bolivia (PCB), el Movimiento Popular de Liberación Nacional (MPLN) y otros. En cambio, en los espacios sindicales, en las dirigencias universitarias, la batalla interna fue permanente durante los tres años de la UDP para controlar al poder popular.

Una de las diferencias entre el MNRI y el MIR fue la aceptación de la fórmula de transición. Siles quería otras elecciones y no aceptar los resultados del 80, pues suponía que lograría una victoria contundente y evitaría el cerco hostil de un Poder Legislativo mayoritariamente opositor. Los miristas opinaban que la democracia era todavía frágil, que amplios sectores militares querían quedarse como sus pares argentinos y que había que aprovechar el resquicio conseguido en las negociaciones con las Fuerzas Armadas.

Los hechos posteriores mostraron que la oposición parlamentaria creó permanentemente ingobernabilidad para la UDP. No sólo la bancada del

derechista MNR, sino —más que todo— los diputados de Acción Democrática Nacionalista (AND), partido fundado en 1978 con el objetivo de defender al gobierno de Hugo Banzer (evitar un juicio de responsabilidades) y continuar con el manejo político, aunque afuera del Poder Ejecutivo.

La izquierda había perdido a un importante líder, el socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, y su bancada era pequeña y sin la potente voz de quien fue el primer asesinado por el régimen de 1980. El pro chino Partido Comunista Marxista Leninista, las fracciones trotskistas, sobrevivientes del guevarismo, intentaron sin mucho éxito plantear alternativas electorales desde 1978.

En cambio, los pequeños partidos izquierdistas y el anarquismo tenían importante representatividad en la Central Obrera Boliviana (COB) conducida por un tradicional adversario de Siles Zuazo, el líder minero Juan Lechín Oquendo. Lechín era el protagonista histórico de las grandes movilizaciones sindicales (mineras) desde 1944 y desde 1963 distanciado del MNR y de Siles; además era apoyado por su propio y pequeño Partido Revolucionario de la Izquierda Nacional (PRIN), por los anarco-sindicalistas y por partidos radicales.

Desde los años 50, la COB y su columna vertebral, la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), constituían un poder dual, cuyo tenaz contrapunteo se expresó en la asamblea popular de 1971, y en el cogobierno y el control obrero de 1956 que quiso reeditar en el gobierno de la UDP.

La COB presentó un pliego de peticiones que el Gobierno no podía atender. Los sindicalistas habían luchado, incluso clandestinos y perseguidos, por una democracia con pan y veían que sus antiguos patrones ligados a la dictadura aprovechaban mejor la crisis económica para enriquecerse más. Por otra parte, las demandas acentuaban la inflación, la más alta de la historia regional y superior incluso a la de la República de Weimar en los años 20, que a su vez acentuaba el descontento popular.

Existen diferentes interpretaciones sobre esta confrontación entre el sindicalismo y un gobierno democrático que se presentaba como izquierdista. Algunos historiadores llaman la atención sobre la situación crítica de los obreros y artesanos, cansados de esperar soluciones. Otros responsabilizan a la COB por el rápido desgaste de la UDP y la inevitable consecuencia: la recuperación de la derecha.

A la devaluación se sumó la desdolarización decretada por un ministro mirista, Ernesto Aranibar Quiroga, que disparó aún más la crisis económica, la pérdida de ahorros en la clase media, la especulación en los alimentos de primera necesidad y un peligroso clima de huelgas de hambre y paros.

Los cambios de gabinete no lograban enderezar el timón. Siles parecía cansado y ajeno a la dinámica de los nuevos tiempos, diversa a su primera presidencia en 1956.

El propio Presidente se sumó a las protestas con una huelga de hambre. Nada fue tan dramático como

su secuestro por un grupo de jóvenes militares en uno de los episodios más absurdos de la nueva democracia. Aunque los conjurados aparecieron como un grupo aislado y salieron a Argentina, evidenciaron las amenazas latentes de las Fuerzas Armadas contra el gobierno civil.

El desconcierto era generalizado. Ni los actores políticos ni los actores sociales tenían preparada una hoja de ruta: ¿cómo debían cumplir sus roles en democracia?

LAS JORNADAS DE MARZO

La espiral de conflictos sociales, huelgas de hambre, paros, marchas, alcanzó las cifras más altas de la historia (hasta entonces). Hubo protestas llamadas “salvajes” como las de los bancarios o las de servidores públicos, trabajadores en salud, etc.

La red se expandía a otras ciudades y otros centros de producción. En marzo de 1985, los mineros de la empresa estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y de algunas empresas privadas decidieron llegar con sus reclamos hasta el centro paceño, sede del poder político.

Los proletarios asistieron con sus familias a manifestaciones diarias, acompañados de dinamitazos y el apoyo de otros grupos sindicales, al punto de poner en riesgo la continuidad del Gobierno.

Siles Zuazo declaró el estado de sitio y los mineros tuvieron que retornar a sus campamentos. Surgió un partido político radical, la Coordinadora Revolucionaria de Marzo (CR14), ligada a los embriones del futuro Movimiento Al Socialismo (MAS).

La tensión precipitó una reunión entre los máximos líderes políticos y se acordó adelantar las elecciones generales para mediados de 1985. Los partidos tradicionales se afianzaron, la UDP se deshizo y el MIR se dividió.

El MNR histórico ganó parcialmente las elecciones bajo la conducción de Víctor Paz Estenssoro, que logró un acuerdo político con ADN con el objetivo de conseguir gobernabilidad y controlar el Parlamento.

En agosto, Paz firmó el famoso DS 21060 que se convirtió en un completo plan económico para modificar la estructura heredada de los años 50. La caída de los precios del estaño precipitó (ayudó) el despido de miles de mineros, el cierre de fábricas y la privatización de empresas estatales y de servicios públicos.

Comenzaba una nueva etapa en la historia boliviana, graficada con la

Presencia, La Paz 7 de octubre de 1982

Paz Estenssoro no asistirá al nacimiento de la democracia

El ex presidente Víctor Paz Estenssoro comunicó ayer al Congreso nacional que “por motivos de salud” no asistirá a la transmisión presidencial para Hernán Siles Zuazo.

Paz agradeció la invitación que le hizo llegar el Congreso, mediante un cablegrama que dirigió ayer desde Tarija: “Honrado y agradecido por la invitación del primer poder del Estado, lamento que motivos de salud no me permitan viajar de inmediato a esa ciudad (La Paz), impidiéndome asistir al solemne acto de reiniciación de la vida democrática”, dice el cablegrama.

Marcha por la Vida en agosto de 1986, cuando el proletariado minero se despidió de su antiguo protagonismo y cedió los estandartes a nuevas vanguardias.

LAS HERENCIAS PERVERSAS

La democracia boliviana comenzó con dos herencias perversas:

La con mayores ramificaciones fue el narcotráfico, el crecimiento de las plantaciones de coca, su desvío al comercio ilegal y la relación del tráfico de cocaína con la política.

Como grupos y como individualidades varios paramilitares estaban en el negocio desde la época de Hugo Banzer y más de uno murió acibillado en las vendetas internas. El mismo día que comenzaba el gobierno democrático, una balacera en el aeropuerto de Santa Cruz y el apresamiento de narcoterroristas evidenció una podredumbre que nunca fue totalmente aclarada.

La nación conoció asombrada la propuesta de un importante ganadero beniano, Roberto Suárez, ofreciendo pagar la deuda externa boliviana a cambio de más beneficios al ilícito negocio de la cocaína. Un grupo de políticos multipartidarios intentó sin éxito

concretar la oferta, suspendida por la presión de la opinión pública.

La otra herencia perversa fue la corrupción, hermana siamesa de la dictadura, que alcanzó volúmenes y formatos muy superiores a los de la época del MNR.

DERECHOS HUMANOS

Finalmente, es también importante recordar la importancia de la lucha por los derechos humanos antes y durante la dictadura de 1980 a 1982 y después. El juicio de responsabilidades a Luis García Meza y 40 de sus principales colaboradores, la mayoría militares, fue fundamental para avanzar en una catarsis social. Juan del Granado, un antiguo militante mirista, se comprometió a gestar el proceso hasta la extradición y el encarcelamiento del ex dictador. Ese ejemplo fue sustancial para el continente.

El aprendizaje social, incluso desde la prensa y el espacio desconocido de tener amplia libertad de expresión, fue complejo. Todavía los bolivianos no logran combinar las libertades democráticas con la responsabilidad ciudadana al servicio del bien común. Aunque todas las encuestas muestran la opción preferencial por este sistema, el desorden y la ingobernabilidad lo erosionan cada vez más.

El tiempo de la hiperinflación

Fernando Molina¹

La democracia llega con un masazo para el bolsillo de los bolivianos. Son los tiempos de la desdolarización, de índices históricos de inflación. Paradójicamente, la flamante democracia casi sucumbe ante la quiebra del Estado.

En 1982 la democracia, flamante conquista del pueblo boliviano, parecía capaz de todo. Aquellos que la habían hecho triunfar oponiéndose a los gobiernos militares esperaban que les trajera un mayor bienestar mediante la figura, fundamental en el imaginario nacional, de la “empresa pública”, que se quería multiplicar y potenciar, y mediante un sustancial aumento de los salarios, que entonces eran el principal tipo de ingreso de los trabajadores. Al mismo tiempo se esperaba que la democracia resolviera las amenazas

económicas que suponía la “herencia militar” y que en esos años había adquirido una creciente gravedad. Infortunadamente, una expectativa contradecía a la otra.

LA HERENCIA MILITAR

En general, los 70 habían sido años de alto crecimiento por el aumento del valor de las exportaciones mineras y gasíferas, sobre todo entre 1974 y 1976, y por el fácil acceso del país a los fondos que habían puesto en el mercado internacional los países que se beneficiaban del auge de los precios del petróleo (o “petrodólares”). El cuadro 1 combina estos datos; nótese en especial el salto de la deuda externa

¹ Periodista y escritor. Director del semanario Nueva Economía entre 1995 y 1998. Autor de numerosos ensayos, entre los que aquí cabe citar los de temas económicos: *Capitalización: Balance y resultados* (Cedoin, 1998), *Pros y contras de la capitalización* (Pulso, 2004), *Biografía del Bonosol* (Milenio, 2006), *El ciclo privatización-nacionalización-privatización* (Pazos Kanki, 2010).

boliviana de 591 millones de dólares en 1971 a 2.311 millones en 1980 (esto elevó su servicio anual a 289 millones de dólares).

Cuadro 1. Los años 70, una década de crecimiento

Año	Crecimiento del PIB (%)	Exportaciones (millones \$US)	Deuda externa (millones \$US)
1971	4,9	198	591,2
1972	5,9	225	680,7
1973	6,9	286,9	707,8
1974	6,1	593,4	786,2
1975	5,1	485,7	896,6
1976	6,8	623,4	1.123,8
1977	3,4	695	1.476,9
1978	3,1	703,4	1.799,7
1979	2	854,6	2.034,3
1980	0,8	1.043,2	2.311,2

Fuente: Datos citados por Óscar Zegada (2005)

En países pobres como Bolivia los recursos extraordinarios suelen emplearse en gastos estatales. Este proceso “normal” suele causar inflación, en especial si las autoridades monetarias no actúan con responsabilidad (y aquí hay que tomar en cuenta que desde la Revolución Nacional el Banco Central dependía de una u otra forma del Ministerio de Finanzas). En efecto, la inflación fue alta durante esta década. Como resultado directo, el público compró dólares para protegerse, al punto de agotar las reservas de divisas del país. El cuadro 2 resume estos datos.

Cuadro 2. Más inflación, menos reservas

Año	Tasa de inflación (%) (base 1980)	Nivel de las reservas internacionales (millones de \$US)
1970	3,8	36,2
1971	3,6	32,5
1972	6,5	48,6
1973	31,4	41,4
1974	62,8	166,1
1975	7,9	115,4
1976	4,4	171,5
1977	8,1	241,8
1978	10,3	169,1
1979	19,7	3,1
1980	47,2	-90,6

Fuente: Datos citados por Óscar Zegada (2005)

Este proceso también fue impulsado por tres sucesos simultáneos: a) la caída de los ingresos nacionales por la disminución de los precios de los minerales, que se debió a su vez a la aparición de nuevos materiales y tecnologías de explotación minera, b) la inestabilidad política, que aumentó la irresponsabilidad del gasto y la fuga de divisas, c) la crisis mundial que comenzó en 1980 con la caída de los precios del petróleo y que se volvió “crisis de deuda” dos años más tarde, cuando México no pudo seguir pagando a sus acreedores, lo que detuvo los flujos de libre disponibilidad que habían estado llegando a los países subdesarrollados.

La desaparición de las reservas de las arcas del Banco Central obligó al Gobierno militar a suspender, en julio de 1981, la venta al público de los dólares que el país obtenía de las empresas estatales exportadoras (Comibol y YPFB), estableciendo una línea de “control de divisas” que el primer

Gobierno democrático continuaría y profundizaría. Esta medida generó un mercado paralelo que comenzó a transar el dólar a precios mayores que los oficiales.

En 1982, durante el gobierno del general Celso Torrelio, se hizo un breve intento de liberar el tipo de cambio. Como no estuvo respaldado por una cantidad suficiente de divisas ni por controles del gasto público, este intento no detuvo la fuga de divisas y, en cambio, aceleró la devaluación del peso.

A mediados de 1982 el mercado oficial cotizaba un dólar en 145,5 pesos bolivianos, mientras que en el paralelo éste costaba 250 pesos, un 71% más. En 1985, el dólar negro llegó a valer 1.700% más que el oficial.

Esta creciente diferenciación, como es lógico, ahogó el comercio exterior. Los importadores prefirieron vender las divisas que conseguían del Estado antes que usarlas en la compra de productos extranjeros. Los exportadores privados, obligados a entregar sus dólares al precio ilusorio del mercado oficial, dejaron de exportar. Comibol y YPFB tendieron a independizarse del Estado para gastar por su cuenta una parte de los dólares que obtenían. De este modo, entre 1981 y 1984 las exportaciones bajaron de 912 a 719 millones de dólares, y las importaciones, de 975 a 492 millones de dólares.

Como es lógico, esto agravó aún más la carencia de divisas y de ingresos públicos, al mismo tiempo que los gastos del Estado aumentaban sin cesar; así se produjo una escalada del dé-

ficit fiscal, que si en la década de los 70 había registrado cifras de alrededor del 7% del PIB, en 1982 fue del 14%, de casi 18% en 1983 y de 21% en 1984.

DESDOLARIZACIÓN, DEVALUACIÓN Y MORATORIA

Algunos esperaban que el primer presidente democrático, Hernán Siles Zuazo, quien había estabilizado la economía en un anterior mandato (1956-1960), haría otro tanto en el segundo. Pero las condiciones políticas de los dos períodos eran muy diferentes: esta vez Siles no podía hacer un ajuste drástico como el que había realizado en los 50.

Así que en noviembre de 1982 lanzó un “paquete” de medidas de estabilización de carácter “gradualista”, el cual: a) obligó a los exportadores privados a entregar el 100%

Ministerio de Minería, 11 de enero de 1985

En 30 días de huelga, la Comibol perderá 28 millones de dólares

El ministro de Minería y Metalurgia, Sinfороso Cabrera, dijo ayer que la Comibol perderá en 30 días de huelga (que se cumplen mañana) 28 millones de dólares. Agregó que en el sector privado aún no han sido cuantificadas las pérdidas por la falta de producción de minerales.

En el sector de los trabajadores mineros existe preocupación por la huelga de hambre. Se dijo que en la “historia de las huelgas de los trabajadores, ésta es la primera vez que se llega a los 30 días”.

de las divisas que obtuvieran al Banco Central, b) aumentó el precio de los carburantes vendidos por YPF para subir los ingresos internos del Estado (un objetivo que se mantiene hasta hoy y que fue crucial entre 1982 y 1985, lapso en el que, por la inflación y el crecimiento de la informalidad, los impuestos prácticamente no existían), c) ajustó los controles de precios, d) subió los salarios para compensar el encarecimiento de la canasta familiar, y d) canjeó los depósitos y las deudas bancarias nominadas en dólares por pesos bolivianos, al tipo de cambio de 145,5 pesos por dólar (“desdolarización”).

Esta última operación estaba destinada a apropiarse de las divisas del público y ahorrar reservas, pero no logró sus objetivos y, en cambio, desordenó profundamente la economía.

Presencia, 24 de agosto de 1895

Descontrolada acción de librecambistas

Los librecambistas de la avenida Camacho, de la ciudad de La Paz, continúan con su descontrolada acción. Sus propósitos de hacer subir el dólar norteamericano, infructuosos en parte durante dos semanas, en los últimos días han tenido algún efecto debido a declaraciones de autoridades y el retraso en la adopción de medidas económicas. El presidente Víctor Paz afirmó que la demora se debe al cuidado, coordinación y responsabilidad con que se desea actuar. Dijo que los principales afectados serán los librecambistas, que ya no contarán con circunstancias ventajosas para su especulación.

En respuesta a ella (y, luego, a la inflación misma) los ahorristas sacaron su dinero de los bancos —los depósitos en pesos constantes cayeron de 10.469 millones en 1982 a 5.873 en 1983, y a 2.020 millones en 1984— y lo usaron para comprar dólares, con lo que el drenaje de divisas continuó. Al mismo tiempo, el Estado tuvo que usar sus escasas reservas para responsabilizarse por el descalce cambiario de los bancos, a los que sus prestatarios comenzaban a pagarles en pesos, mientras ellos mismos seguían endeudados en dólares con los bancos extranjeros.

Además, la “desdolarización” acabó con la credibilidad económica del Gobierno.

Los siguientes cuatro “paquetes” que Siles aprobó tuvieron características similares: Devaluaron el peso, para cerrar un poco la brecha entre el cambio oficial y el paralelo y desincentivar la posesión de dólares, con efectos siempre contrarios; trataron de aliviar el déficit fiscal, sin lograrlo por la necesidad de seguir aumentando los salarios; endurecieron infructuosamente los controles de precios. Eran medidas que restringían la demanda y, al mismo tiempo, la impulsaban, que intentaban apagar el fuego con gasolina. Por eso las expectativas de la población no cambiaron: la gente seguía apostando a que el Estado gastaría más, los precios continuarían subiendo y el peso, devaluándose.

En suma, el “gradualismo” fracasó, pero este fracaso creó las condiciones políticas para poder ensayar medidas más audaces.

Otra medida relevante de Siles fue la suspensión del pago de la deuda externa en 1984. Confirmó la tendencia a la mora que ya mostraba el país desde 1980 por las razones que se supondrán: si en 1985 las reservas internacionales eran de 160 millones de dólares, ¿cómo pagar más de 200 millones a los acreedores internacionales? La moratoria era inevitable, pero trajo un nuevo problema: la imposibilidad de conseguir financiamiento externo.

QUIEBRA DEL ESTADO, SEQUÍA E HIPERINFLACIÓN

De todas las causas que se sumaron para provocar la hiperinflación de 1983-1985, la principal fue el crecimiento descomunal de las empresas del Estado en un momento de disminución de los ingresos que ellas generaban.

En los 70 el Estado creció tanto que llegó a ocupar al 30% de la fuerza laboral no campesina del país. Su principal compañía, Comibol, tenía 26.500 empleados, de los cuales el 65% trabajaba fuera de las minas; el 50% de sus pérdidas operativas se debía a sus pulperías subvencionadas.

Luego de la “crisis de la deuda”, el Estado tuvo que financiar sus enormes gastos acudiendo al Banco Central. En 1981, el crédito del ente emisor al Gobierno fue de 3,6% del PIB; en 1982, de 13,5%, y los dos años posteriores de más de 18%. Aumentó así la cantidad de moneda nacional que no tenía respaldo de dólares, los cuales, además, como ya hemos visto,

eran cada vez más escasos por la caída de las exportaciones y la crisis del financiamiento externo.

También hemos visto que, puesto que lo escaso sube y lo abundante baja, el precio del peso boliviano respecto al dólar se fue devaluando sistemáticamente. Y que, a finales de 1982, esta tendencia recibió un fuerte impulso gracias al intento de “desdolarizar” las transacciones, lo que provocó una mayor ansia por los billetes extranjeros.

Pese a ello, las autoridades se negaron a abandonar la ilusión de un

“Éste es un momento de orgullo y esperanza para todos los bolivianos. Bolivia es un árbol que cuando crece no se puede extirpar, ojalá los hijos de nuestros hijos puedan cobijarse en el churqui de la democracia. Bolivia debe sentirse orgullosa de un gran presidente que se va y un gran presidente que comienza”.

Gonzalo Sánchez de Lozada, presidente del Congreso, minutos antes de ser posesionado Víctor Paz Estenssoro. 7 de agosto de 1985.

“cambio oficial” muy inferior al real, que les servía para esquilmar a las empresas estatales y privadas exportadoras, las cuales estaban obligadas a entregarles sus divisas a ese precio ilusorio. El Gobierno usaba estas divisas baratas para pagar la deuda externa (hasta donde pudo), para reponer reservas y también para repartirlas entre sus allegados, que luego las revendían obteniendo grandes ganancias.

Resultado: el peso boliviano, que costaba 390 después de la “desdolari-

zación”, pasó a costar 1.200 a finales de 1983, 23.381 en diciembre de 1984 y 1.149.354 en agosto de 1985.

Para defenderse de un peso en caída libre, los fabricantes, comerciantes y campesinos subieron sus precios, con la esperanza de reponer de esta manera sus productos. Así la inflación, que ya era alta en 1979 (casi 20%), pasó a 47% en 1980 y se convirtió en hiperinflación (275, 1.281, 11.749% en los siguientes años) a partir de la carestía de alimentos que causaron las sequías e inundaciones de 1983. Estos desastres tuvieron un efecto particularmente fuerte en un

momento en que no estaba permitido importar productos agrícolas.

En 1985, Siles se marchaba al Uruguay. Bolivia vivía el alza de precios más aguda que hasta entonces había sufrido un país en tiempos de paz y su economía se encontraba muy cerca del colapso.

Fuentes

Óscar Zegada (2005): *El BCB y el período de la estabilidad de precios*, en BCB, *Historia monetaria contemporánea de Bolivia*, La Paz.

Juan Cariaga (1997): *Estabilización y desarrollo*, Los Amigos del Libro/FCE, La Paz-México.

ANF, 25 de junio de 1984

Llegaron a Cochabamba 20.000 millones de pesos

Ochocientas cajas con la suma de 20.000 millones de pesos bolivianos, en cortes de a 1.000 pesos bolivianos, llegaron a esta capital, transportados por un avión chárter desde Londres, Inglaterra, para su circulación en varios distritos del país, informó el gerente regional del BCB, Eduardo Rodríguez.

El nuevo cargamento de billetes lle-

gó al aeropuerto Jorge Wilstermann, en medio de rigurosas medidas de seguridad de parte de la Policía Militar de la Fuerza Aérea Boliviana. Como se sabe, ya en una oportunidad anterior llegó a esta capital, por los mismos medios, una partida de 15.000 millones de pesos bolivianos, con el mismo propósito.

1982-1985

El costo de la democracia

Boris Miranda¹

El fracaso de la cogestión, el empecinamiento de la COB y la feroz arremetida de la oposición de derecha fueron el contexto que precedió a la derrota definitiva de la UDP. Con su salida, Hernán Siles Zuazo asumió los costos de permitir que la democracia sea.

“Bolivia retorna a la democracia”. Era el titular de portada con el que el matutino *Presencia* celebraba la inauguración de un nuevo período en la historia del país. La tarde de ese domingo 10 de octubre de 1982, los militares saldrían definitivamente de Palacio de Gobierno entre silbidos e insultos para permitir que Hernán Siles Zuazo asuma la Presidencia.

Una multitud acompañó aquel histórico juramento. No sólo en la plaza Murillo, también en federacio-

nes sindicales y centros mineros. Los presidentes de Colombia, Ecuador y Perú estuvieron presentes, además de numerosas delegaciones de países de Europa, Asia y África. Bolivia fue el último país de la región en lograr su independencia, pero fue el ejemplo que seguir para los países del Cono Sur que luchaban para librarse de la bota militar en los años 80.

La democracia nacía en un ambiente de fiesta. Con una inmensa expresión de voluntad ciudadana reflejada en las multitudes que se reunieron ese fin de semana y los meses previos. Daba sus primeros pasos con esa sil-

¹ Autor del libro *La mañana después de la guerra* y periodista responsable de los reportajes del suplemento *Ideas*, de análisis político, del diario *Página Siete*. Ganador de la beca latinoamericana de periodismo de investigación del Instituto Prensa y Sociedad en 2011 y del premio de Periodismo Municipal del PADEM en 2010.

batina de despedida a las Fuerzas Armadas que dejaban el poder después de una seguidilla de cuartelazos que comenzaron en noviembre de 1964.

Nació digna, porque a diferencia de otros procesos de restauración democrática en América Latina, la clase política no negoció beneficios vitales ni impunidad con los militares para que les devuelvan el poder. Pero nació pobre. Casi irreconocible. Había pasado mucho tiempo desde su interrupción en 1964.

En su discurso, Siles Zuazo pidió 100 días para salir de la crisis y se comprometió a gobernar “para reconstruir la patria”. Su flamante

vicepresidente, Jaime Paz Zamora, enfocó su discurso hacia la comunidad internacional. Ambos sabían que el país necesitaba toda la ayuda posible para reponerse del descalabro económico e institucional que dejó el tiempo dictatorial.

LAS FUERZAS DE LA UDP

La Unidad Democrática y Popular estuvo compuesta de forma mayoritaria por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNRI), el partido de Siles, y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Una era la facción más progresista de quienes se identificaban con la Revolución Nacional de 1952 y la otra representaba la primera generación de miristas que se formó bajo la mística de resistir al banzerato. Era un proyecto de alianza denominado “entronque histórico”.

Otras fuerzas de izquierda también eran parte del bloque, entre ellos comunistas, ex guerrilleros y algunos líderes sindicales. Sin embargo, los socialistas que acompañaron al desaparecido Marcelo Quiroga Santa Cruz prefirieron tomar distancia del primer Gobierno democrático, al igual que la Central Obrera Boliviana, controlada por Juan Lechín Oquendo. La UDP contaba con un programa obrerista que incluía varias medidas a favor de los trabajadores mineros, sin embargo no pudo hacer que estos sectores sean parte del Gobierno. Todo lo contrario. La relación fue cada vez más tirante. Poco tiempo después de la posesión, la crisis política e inflacionaria provocaría que las concentraciones multi-

AP, 9 de octubre de 1982

Emprendieron retorno decenas de bolivianos en exilio

Decenas de bolivianos en el exilio emprendieron en los últimos días desde varias capitales latinoamericanas el retorno a su país, alentados por el restablecimiento de la democracia en esa nación, dijeron fuentes políticas y de defensa de los derechos humanos.

Perú, Venezuela, Ecuador y México son los países donde hubo mayores concentraciones de bolivianos como consecuencia del cruento golpe militar de 1980 que interrumpió la vida democrática de Bolivia, según esas fuentes, que aseguran que en los últimos dos años el número de exiliados de aquella nación fue de unos 2.000.

Venezuela, cuyo Gobierno repudió ostensiblemente el golpe de 1980, envió una misión de alto nivel para asistir a la instalación de la presidencia de Siles Zuazo.

tudinarias ya no aclamen al binomio Siles-Paz Zamora, sino que pidan su salida de Palacio.

Otro peligroso factor para el novel Gobierno era la rápida y profunda división entre los dos aliados más importantes. Siles Zuazo tenía enemigos trabajando al lado de su despacho y sólo era cuestión de tiempo para que los miristas se desmarcaran de manera definitiva del proyecto udepista.

El 6 de agosto de 1983, con apenas diez meses de gobierno, el periódico Hoy describía así la situación:

“Las desinteligencias acerca de cómo administrar el Estado fueron una de las causas del desgajamiento de un ente político que en apariencia caminaba hacia un fortalecimiento. Este fenómeno se presentó provocando la separación del MIR, que con el tiempo parece hacerse irreparable.

El Mandatario (Siles) buscó el retorno al Gobierno de su antiguo compañero de lucha, aunque la distancia que los separa se extiende cada vez más.

La situación llegó a tal punto que los ministros miristas renunciaron a sus cargos después de una pelea entre el secretario del Comité Ejecutivo del MIR, Óscar Eid, con el ministro del Interior de ese entonces, Mario Roncal. Las autoridades del partido de Jaime Paz se retiraron y su bancada sabotó una autorización de viaje a Francia para Siles, quien tenía una importante invitación de parte del presidente galo François Mitterrand”.

En menos de un año, ése era el panorama dentro de la UDP.

EL PRINCIPIO DEL FIN

Desde luego que la Unidad Democrática y Popular no tenía sólo enemigos internos. Las bancadas del Movimiento Nacionalista Revolucionario Histórico (MNRH, de Víctor Paz Estenssoro) y Acción Democrática Nacionalista (ADN, de Hugo Banzer Suárez) rechazaban sin contemplaciones las acciones que la administración de Siles Zuazo pretendía impulsar desde el Parlamento. La UDP, minorita-

EFE, 16 de octubre de 1982

Narcoterrorista planeaba asesinato de Siles Zuazo

Mientras el Ministerio del Interior italiano niega la participación de la Policía en la captura del ultraderechista Pier Luigi Pagliai en Bolivia, informaciones de prensa señalan otras versiones recogidas en aquel país.

El ministerio desmintió ya dos veces la participación de dos agentes italianos de la Policía secreta, que trajeron a Pagliai desde Bolivia, en la operación de captura en Santa Cruz de la Sierra.

Por su parte, el diario Corriere della Sera dice, en informaciones propias desde Santa Cruz, que las autoridades policiales de aquella ciudad boliviana niegan la autoría de la operación y afirman que “policías extranjeros no identificados” la realizaron.

Finalmente, según la información del Corriere della Sera, el detenido Pagliai planeaba asesinar al presidente Hernán Siles Zuazo y el pasado 2 de octubre depositó en un banco de Buenos Aires 15 millones de dólares, producto del tráfico de cocaína, del que era uno de los jefes en Santa Cruz de la Sierra.

ría aún con su bancada completa, era incapaz de aprobar leyes y sus acercamientos a otras fuerzas políticas del espectro izquierdista, como el Partido Socialista 1, fueron infructuosos.

Pero el verdadero rival no se encontraba en el Congreso, sino en la COB: la plataforma más grande de trabajadores sindicalizados, que era considerada un ejemplo de unidad de la clase obrera a nivel latinoamericano por su capacidad de movilización. El Presidente y Juan Lechín llevaban décadas distanciados y durante todo el mandato udepista no hubo forma de que ambos líderes históricos de la Revolución Nacional se encontraran. De nada servían las reuniones maratónicas y las invitaciones para conformar el cogobierno con los obreros. Siles estuvo al límite de suplicar a la burocracia de la Central Obrera Boliviana para que se integraran al Poder Ejecutivo.

El 2 de agosto de 1983, desde Palacio salió una carta para Juan Lechín

Oquendo en la que se oficializaba la invitación para incorporar al Gobierno a los trabajadores sindicalizados del país. Las conversaciones llegaron a plantear una posibilidad real de que la clase proletaria, fundamentalmente los mineros, tenga una cuota mayoritaria en el gabinete y la administración de varias empresas estratégicas del Estado.

Algunos operadores del Gobierno se habían propuesto la seria posibilidad de construir el socialismo a partir del modelo de cogestión, una opción que había fracasado casi 30 años antes, durante la primera gestión de Siles Zuazo. Pero un ampliado extraordinario de la COB, realizado el 23 de agosto de aquel año, decidió suspender las negociaciones e iniciar una nueva ola de protestas exigiendo la implementación de la escala salarial móvil para frenar la erosión del poder adquisitivo que generaban la inflación y la especulación de los comerciantes. Lechín estuvo detrás de esa decisión, que se-

Presencia, 1 de julio de 1984

Así se produjo el rescate del Presidente

En una operación comando realizada por oficiales del Ejército ayer, aproximadamente a las 15:00, el presidente de la república, Hernán Siles Zuazo, fue rescatado de sus secuestradores, que lo tenían cautivo en una casa de Miraflores.

El reportero de Presencia, Román Cordero, quien fue el primero en ingresar a la casa, evidenció la presencia del

Presidente en una habitación del piso superior al identificarlo en una de las ventanas pintadas de blanco desde donde el Mandatario hizo una seña.

Posteriormente, después de dialogar con los secuestradores, ingresó a la habitación donde se encontraba el Primer Mandatario, quien vestía un abrigo azul sobre su pijama. Siles estaba sereno y dio garantías a sus captores.

pultó tal vez el intento más audaz por transitar hacia un nuevo modelo productivo en el país durante el siglo XX.

Sin la participación de los proletarios y con cada vez más sindicatos mineros en contra del régimen, la UDP quedaba huérfana de la base social con la que pretendía combatir la crisis económica interna y al sistema financiero internacional.

1983 cerraría con 252 paros y huelgas decretadas por sectores mineros, petroleros, fabriles y constructores, entre otros.

LAS CONDICIONES DE LA TRANSFORMACIÓN

Sin la infraestructura político partidaria para imponer su programa en el Legislativo o en las calles y con el país perforado por la crisis económica que dejaron las dictaduras, a la UDP se le acababan las cartas. La deslealtad y la incapacidad de varios de los protagonistas de aquel Gobierno también pesó en el derrumbe de la administración de Siles Zuazo. Fueron designados 80 ministros en menos de tres años. Algunos de ellos se pasaron al “bando conspirador” apenas dejaban sus funciones en el Ejecutivo.

Las gestiones de Jaime Paz Zamora por crear un colchón financiero internacional para la democracia boliviana tampoco pudieron hacer mucho contra las inclementes leyes del mercado.

En marzo de 1985, La Paz estaba virtualmente tomada por los trabajadores de la Corporación Minera de Bolivia y otras empresas privadas. Los dinamitazos con los que los mi-



neros se abrieron paso en las calles paceñas fueron el marco de la derrota del proyecto de la UDP. Pero hubo muchos analistas y militantes que advertían ya que con esa ofensiva obrera el movimiento popular estaba a punto de derrotarse a sí mismo durante esas históricas jornadas de marzo. Desde el punto de vista de la izquierda y de los sindicatos, se venía la noche.

Ante el clima de ingobernabilidad, Siles Zuazo aceptó acortar su mandato. Hasta el último momento mantuvo a las Fuerzas Armadas fuera del conflicto pese a los reclamos constantes del Alto Mando militar para sacar los tanques a las calles y controlar con ellos las protestas. Desde el primer día

Siles mantuvo su compromiso de no reprimir a la población. Dejar el poder un año antes era el costo de la democracia.

“A la hora de dejar el Gobierno, y al transmitir la experiencia de los 34 meses transcurridos desde aquel 10 de octubre en que nuestro país retornó a la vida democrática, debo decir con orgullo de boliviano y con

la frente en alto de ciudadano honesto, que nadie sufrió bajo mi mando cárcel, persecución ni exilio. Que ninguna madre ni hijo llora la pérdida de sus seres queridos. (...) Es imperioso que nuestra tierra siga siendo tierra de hombres libres”, dijo el Presidente minutos antes de pasarle el mando a Víctor Paz Estenssoro, el 6 de agosto de 1985.

Millonarios de papel

Abdel Padilla¹

Sedienta de derechos. Así se encontraba la sociedad boliviana ante la recuperación de la democracia. Sin embargo, ni el Gobierno ni los demás actores políticos estuvieron a la altura de esta expectativa. La democracia nació con la crisis.

Después de 18 años de autoritarismo, la ciudadanía, en 1982, había decidido tomar por asalto las libertades restringidas, en especial la libertad de expresarse. Ni siquiera la dramática inestabilidad política ni la crisis económica extrema aplacaron este impulso. No estuvieron, empero, a la altura de este tiempo histórico, al menos no en conjunto, ni Gobierno, ni partidos políticos ni sindicatos. No era la primera vez en la historia nacional que la apertura polí-

tica derivaba en una frustración social; esta vez, sin embargo, el desenlace sería otro: un recambio sin tanques ni fusiles. Un traspaso democrático, en 1985, hacia una nueva era: más ortodoxa, en lo económico, y con mayor participación ciudadana, en lo social.

SOCIEDAD FRÁGIL

A inicios de la década del 80, Bolivia bordeaba los cinco millones de habitantes, distribuidos casi equitativamente en las ciudades y el campo, aunque ya con la tendencia de un crecimiento urbano ascendente, que luego se consolidaría en las cifras demográficas de los censos de 1992 y 2001.

¹ Abdel Padilla es periodista, publicista y especialista en salud pública. Trabajó en periódicos de circulación nacional como La Prensa, La Razón y el semanario Pulso. Recibió el premio nacional de periodismo en prensa y la medalla Huáscar Cajías, como periodista destacado de las nuevas generaciones. Actualmente es corresponsal del diario Clarín, de Buenos Aires.



El porcentaje de indígenas para ese entonces era del 54%. El 78% de la población hablaba castellano y algún otro idioma, y alrededor del 60%, quechua o aymara.

Esta realidad fue representada por la llamada Generación del 75, un grupo de artistas que adoptó al cholo en todos sus matices, como objeto estético, y, como tema, al hombre urbano, sin olvidar al indio emigrado, al narco-trafficante y sus víctimas, relata Pedro Querejazu.

El desarrollo vigoroso de los llanos, en el oriente, respecto de los valles y el área andina, determinaría una clara concentración en el llamado eje troncal: La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra. Esta última multiplicó su población respecto a 1950, de 42.000 a 350 mil habitantes.

Tres factores, entre otros, determinarían este movimiento migratorio: la explotación de los recursos naturales, las economías de escala y el desarrollo del transporte, refiere Miguel Urquiola.

Pero la población boliviana era por esos años frágil y marcada por la desigualdad social y económica. Con alrededor del 37% de analfabetismo, 80% de la población en primaria y niveles de mortalidad materna e infantil muy por encima de los promedios regionales. Según cálculos basados en el censo de 1976, por cada 1.000 nacidos vivos, 167 morían antes de cumplir un año. Las causas: diarreas, neumonías, poliomielitis, sarampión y bocio. De acuerdo con datos oficiales, el bocio endémico afectaba a seis de cada diez niños de seis años.

He aquí que el gobierno de Hernán Siles, en medio de la adversidad y en plena crisis económica, marca un hito en la historia de la salud pública del país a través de los comités populares de salud, creados en 1983 por su ministro de Salud, Javier Torres Goitia.

Fue gracias a esta forma de organización comunal y movilización popular de dirigentes vecinales y clubes de madres que se lograron dar los primeros pasos para la erradicación del bocio y la polio.

La tarea no fue fácil porque hubo que convencer a actores fundamentales –como la Central Obrera Boliviana (COB)– del valor del capital social frente a la carencia económica y material para implementar este ambicioso plan de salud.

La respuesta, como lo relató después Torres Goitia, fue impresionante: cada sector se organizó por su cuenta y cada junta de vecinos tenía sus propios dirigentes, que actuaban según las circunstancias y requerimientos: a veces para campañas de vacunación y otras para el incentivo del consumo de yodo. Todo a base de la organización popular y la movilización colectiva.

NUEVOS ACTORES

Fue uno de los pocos momentos en los que la ciudadanía participó al unísono de una convocatoria del Gobierno y quizás la única en que la COB actuó como su “aliado”.

La sociedad, en su conjunto, venía de una dura etapa de transición que comenzó con la salida de Banzer en 1978, con nueve gobiernos en cuatro

años: ocho presidentes y una junta militar, a razón de un Gobierno cada cinco meses y medio, como registra el historiador Carlos Mesa.

De modo que la susceptibilidad por un posible golpe militar y la desconfianza hacia el nuevo Gobierno estaban a flor de piel.

En esta fase, nuevos actores irrumpieron en la escena política. Entre ellos, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), creada en 1979 bajo el liderazgo de Genero Flores.

Los campesinos, como refiere Manuel Contreras, orgánicamente pretendían una mejor inserción a la COB pero sin perder su independencia. Fruto de este ávido protagonismo, entre 1983 y 1984, presentan un proyecto de nueva Ley Agraria Fundamental, con un alcance nunca antes visto.

Otro sector ineludible y que desde entonces marcará el sino del país es el de los productores de coca y su participación en el consiguiente influjo del narcotráfico.

Es la etapa, según Mesa, de la

Presencia, 9 de septiembre de 1985

Micros 100 mil pesos en área central, 130 mil a villas y taxis, 200 mil

La Alcaldía de La Paz fijó ayer “tarifas reales y no políticas” para el servicio de transporte urbano, después de un estudio que hizo en coordinación con el Ministerio de Transporte. Las nuevas tarifas toman en cuenta la estructura de costos del transporte, que incluye mano de obra, valor del ve-

hículo, repuesto, carburante y lubricantes.

Las nuevas tarifas son de 100 mil pesos para el perímetro central; de 130 mil en rutas que sirven a las villas y zonas periféricas; la tarifa escolar ha sido fijada en 30.000 pesos y la universitaria y de institutos de educación superior en 60.000 pesos.

expansión del negocio, con más de 60.000 productores trabajando en cerca de 23.000 hectáreas de coca, que a fines de 1985 crecieron a 65.300, para alcanzar una producción de más de 100 mil toneladas, 85% de las cuales estaba destinado al narcotráfico.

Se calcula –sigue Mesa– que casi el 10% de la población estaba directa o indirectamente vinculado a la economía del narcotráfico, que de acuerdo con estimaciones variables movía en 1985 entre 600 y 3.000 millones de dólares al año.

Se sentía también, aún con fuerza, el legado de los sacerdotes vinculados a la llamada Teología de la Liberación, que relacionaba cristianismo con marxismo, y cuyo mártir e ícono fue Luis Espinal, asesinado en marzo de 1980. Más de 70.000 personas asistieron a su entierro.

EL REMEDIO, PEOR...

En el campo político-popular, Siles pretendía –refiere Ibáñez Rojo– un relanzamiento parecido al de 1952, y lo haría a través de un modelo de distribución gradual del ingreso. Para ello, en noviembre de 1982 dicta un paquete de medidas convencionales pero impopulares, entre ellas la llamada “desdolarización”.

No fue suficiente, como compensación, el 30% de incremento para los asalariados ni el congelamiento de los precios de los productos del consumo básico y ni siquiera la inclusión de 1.500 trabajadores eventuales a la planilla de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Los sindicatos sabían que la gobernabilidad dependía de ellos, por lo que una posible ruptura con la COB, que no tardó en reaccionar, era el inicio de la caída por el despenadero.

Por otro lado, la dictadura había

Presencia, 23 de octubre de 1982

Se devolvió al Poder Legislativo el local que DOP utilizaba para celdas

El llamado Departamento de Orden Político (DOP) fue la central de una cadena de sitios de concentración de prisioneros políticos, que estaba integrada, además, por otras “casas de seguridad”, afirmó el ministro del Interior, Mario Roncal, al entregar esas instalaciones a la directiva del Senado Nacional.

“Este local que restituimos a propiedad del Poder Legislativo, como bien sabe todo el país, fue un día parte del edificio del Congreso, heredado de la

Compañía de Jesús, eventualmente, recinto universitario”.

Dijo que ese local, desde tiempos de la Colonia, sirvió como centro de reclusión, se hizo extrañamente recurrente en diversos períodos de gobiernos oligárquicos y de las dictaduras militares en el presente siglo.

Afirmó que –en los últimos 18 años– ese local se convirtió en una especie de traspatio del terror, en la vecindad del Congreso.

dejado como legado una fuerte regresión del consumo obrero, lo que originó una reacción casi natural aunque no justificable de demandas salariales en sectores como el minero.

La base de las demandas de la COB fue el célebre “salario mínimo vital con escala móvil”, calculado sobre el costo de las necesidades familiares básicas, y que es sólo como un referente “ideal” de lo que los trabajadores deberían justamente percibir.

Si bien el equipo económico de Siles era consciente de que sin política de austeridad salarial no había manera de detener las presiones inflacionarias, también era consciente -destaca Ibáñez Rojo- que debían contener el proceso inflacionario y atender, por igual, las demandas de consumo.

Después de todo, quién diría que fue la propia UDP la que alentó las expectativas del pueblo durante la “etapa de transición” con la famosa consigna mirista del “hambre no espera” para forzar la retirada del gobierno de Vildoso.

Al final, la desdolarización terminó empobreciendo a quienes quería beneficiar y con ello la debacle: filas en las calles para la compra de pan, harina y otros alimentos; descontento en el aparato burocrático e inquietud en las Fuerzas Armadas... Por las calles se esbozaba un chiste de humor negro: “Siles ha convertido a los bolivianos en millonarios de papel”, con miles de billetes en los bolsillos, pero con los que no se podía comprar nada.

El 7 de enero de 1983, el MIR, principal brazo de la UDP, abandona el Gobierno, aunque Paz Zamora se

mantiene estratégicamente en el cargo de vicepresidente. Para mal de males, arrecian por esos días las sequías y las inundaciones, lo que incide en la escasez de los productos básicos en los mercados.

La COB, por su parte, empezaba a perder control de ciertos sectores de clase media que negociaban por su lado. El sector fabril, por ejemplo, había prometido asumir medidas por cuenta propia para no “morir por inanición”.

El conflicto y las movilizaciones eran inminentes. Más de un millar de huelgas se habían registrado hasta entonces. De ellas, la de más convocatoria: las “jornadas de marzo” de 1985, cuando alrededor de 12.000 mineros marcharon por La Paz, y a la que luego se sumaron artesanos, desocupados, vivanderas, amas de casa, estudiantes y sectores medios. El propio Siles apeló, sin éxito, a una huelga de hambre de cuatro días para sensibilizar a los movilizados y a la ambivalente oposición.

Ya para entonces se gritaba en las calles: “Fuera Siles...”.

A esa altura, ya nadie se acordaba de lo hecho con los comités populares ni que dos años antes Siles inauguró el aeropuerto Viru Viru o que en octubre de 1984 apareció la televisión privada, que incidió directamente en la democratización de la información.

Presionado, no convencido, Siles llamó a elecciones y pasó el mando a Víctor Paz, que el 29 de agosto de 1985 enunció un programa ortodoxo para “salvar” Bolivia y por el cual la clase obrera debió enfrentar el primer

estado de sitio en democracia. Aún se hablaba de cogestión, pero, aclara Ibáñez Rojo, la racionalización de la mi-

Boletín informativo, 30 de octubre de 1985

Abundancia en los mercados

Existe abundancia de productos en los mercados de la ciudad de La Paz, pero la demanda ha disminuido notablemente, circunstancia que ha determinado que bajen aún más los precios de algunos de ellos, como en el caso de la carne de res y de pollo. La Intendencia Municipal ha instruido a la Gendarmería, debido a la política de la oferta y la demanda, dedicar todo esfuerzo al control de peso y calidad de los productos, así como a brindar las mayores condiciones de higiene y comodidades de quienes concurren a estos centros de abasto.

nería pública estaba ahora en manos del Banco Mundial.

Fuentes

Ibáñez Rojo, Enrique (2002) *Los Sindicatos en el Gobierno: la crisis del movimiento obrero boliviano (1982-1985)*. Biblioteca de la Universidad Complutense, Tesis Doctoral.

Mesa J, Gisbert T, Mesa D, (2001): *Historia de Bolivia*, Ed. Gisbert, La Paz-Bolivia.

Urquiola M, Contreras M, Querejazu P, (varios autores) (1999) *Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea*. Harvard Club Bolivia, La Paz-Bolivia.

La Razón (2007): *25 años de democracia*. La Razón, La Paz-Bolivia.

Las experiencias personales eran duras, yo ganaba 60 dólares, ése era mi sueldo de ministro de Relaciones Exteriores; obviamente jamás nos interesó el salario, estábamos trabajando por una misión. La situación era muy difícil, no había abastecimiento; mi esposa pasaba las mismas dificultades que toda la gente para conseguir harina, azúcar. En eso el doctor Siles era muy correcto y austero, y transmitió esa manera de actuar a todo su gabinete, nadie pensaba en aprovechar su posición.

Extraordinariamente difícil y complicado fue el día que secuestraron al presidente Siles; yo era jefe del gabinete, el Vicepresidente se encontraba en Lisboa, el país estaba en emergencia; si el Presidente no aparecía en el curso de ese día, no sabíamos qué iba a pasar en la noche, si los militares golpistas decidían continuar con su “aventura” iban a encontrarse con la gente que estaba dispuesta a salir a las calles. Esa noche iba a haber un enfrentamiento, buscamos en el transcurso del día, por suerte y gracias a la información que logramos conseguir vía la embajada de Venezuela, de unos ex policías asilados ahí, es que el Presidente pudo volver a su despacho. La experiencia de vivir ese momento desde las seis de la mañana, el momento en el que lo secuestraron, hasta las cuatro de la tarde, hora en que volvió a Palacio, se vivió un proceso que pudo tener consecuencias terribles; yo estaba en el centro de ese proceso en Palacio de Gobierno, convocamos una reunión con la COB. Los partidos de la UDP, los militares y el gabinete en pleno tuvimos una reunión en la que decidimos resistir el golpe, enfrentarlo y llegar hasta donde debiera llegarse, pero esta vez decidimos que ya no podíamos volver a lo mismo, esa experiencia es probablemente la que más me marcó.

La otra, la sensación de trabajar con un hombre que tenía una enorme calidez humana; yo no he encontrado un presidente que tuviera la humanidad, la humildad que transmitía el presidente Siles, la sonrisa del doctor Siles. Era un hombre de verdad valiente, dedicado a su país y que estuvo dispuesto a dar todo por él, era un hombre excepcional. Había vivido mucho, conocía a todos los actores de la política boliviana, es el hombre de la revolución de abril,

Adelantar las elecciones fue la enorme contribución del doctor Siles a la crisis y al proceso democrático



Gustavo
Fernández
.....
Abogado de
profesión.
Fue ministro
de Relaciones
Exteriores durante
el gobierno de
Hernán Siles
Zuazo. Entre
1983-1984
desempeñó las
funciones de
embajador de
Bolivia ante el
Gobierno del
Brasil; cónsul
general de Bolivia
en Chile (2000-
2001), ministro
secretario de
Integración en
1978; ministro
de la Presidencia
entre 1989 y 1993.
Fue candidato a
la Vicepresidencia
en 1989. Autor de
libros y consultor
en organismos
internacionales.
.....

el dirigente político de las bases, es el hombre que tenía la experiencia del plan de estabilización de 1956, que había enfrentado muchas tormentas políticas. Un día yo le pregunté: “¿Cuál es la hora más difícil que ha pasado, señor Presidente?”, y me dijo: “Ésta”. Yo creí que la más difícil fue la de la revolución del 9 de abril, o la experiencia del plan de estabilización monetaria de 1956; ninguna de esas dos circunstancias presentaron elementos tan negativos como los que tuvo que enfrentar en el gobierno de la UDP, esa debilidad política -frente a una oposición encarnizada- era una tenaza de la cual le fue muy difícil salir.

Él trabajaba hasta muy tarde en la noche, fumaba mucho, ésa era la época en la que las reuniones de gabinete eran habituales, quincenalmente más o menos. La relación conmigo era muy constante porque teníamos que trabajar temas de política exterior, tenía una relación bien estrecha, bien próxima con el presidente Siles. Yo estaba en el grupo de los independientes, otros eran los cuadros políticos, yo no participaba de esas reuniones. Su relación con Jaime Paz era buena y muchos ministros del presidente Siles eran del MIR; uno de los más cercanos era el secretario de la Presidencia, Camacho, que era dirigente del MIR. La relación entre el MIR y el MNRI no era necesariamente muy intensa, había celos de unos respecto de los otros, varios dirigentes del MNRI pensaban que el presidente Siles daba demasiadas preferencias al MIR y a la inversa. Él tenía que equilibrar esa relación entre esos dos importantes partidos del Gobierno. La Democracia Cristiana y el Partido Comunista eran partidos importantes, pero los dos núcleos centrales eran del MIR y el MNRI, esa relación no era la mejor, pero el presidente Siles tenía que administrarla, primero porque el MNRI era su partido y segundo porque consideraba que la inyección de juventud y vigor que le daba el MIR era muy importante para su proyecto y para el país, por esas razones tuvo que equilibrar a los dos.

La COB tuvo una relación muy dura, Lechín fue de los más duros con el Presidente, cosa de la que hoy se arrepienten, pero era el espíritu de la época, pensaban que era el momento de un salto revolucionario; la crisis desembocaría en una revolución.

Siles Zuazo estaba tratando de hacer un gobierno conjunto con Jaime Paz Zamora, y con el PCB en Lima se juntaron solamente el MNRI y el MIR, y terminaron estando de acuerdo en que había que restablecer el Congreso de 1980; yo fui parte de ese Parlamento. Siles al principio estaba de acuerdo en no formar un gobierno y llamar a elecciones ese año 1982, pero fue el MIR el que presionó la situación y precipitó todo; la mayoría la tenían ADN y el MNR. El Congreso del 80 fue con ese tinte de Banzer y de Paz Estenssoro; el MIR quería más poder, hicieron dos intentos y fracturaron el gabinete para buscar más poder, pero no lo lograron. Para mí el MIR jugó mal, ellos fueron los que planificaron la situación política y llevaron al fracaso a la UDP. Jaime Paz haciendo fraude fue rehabilitado para participar en las elecciones, fue anticonstitucional y presionó para que lo habiliten como candidato. En esa etapa la UDP ya estaba derrotada, a tal extremo que tuvo que convocar a elecciones y en las elecciones salió Paz Estenssoro y el segundo fue ADN y el MIR; como si nada hubiera sucedido hicieron su “juntucha” y ganaron haciendo un acuerdo con Banzer. En 1989, Jaime Paz se “corona” presidente de la República, con la condición de que el siguiente período iba a ser de ADN.

Jaime Paz ha jugado sucio con el MIR, hizo fracasar a Siles Zuazo y el MIR ha sido el partido que llevó la posición política que fue un desastre; el PCB tenía dos ministerios, el de Minería y el de Trabajo, los dos no hicieron nada; el MIR podía cambiarse libremente.

Lamentablemente, el doctor Siles Zuazo no tuvo la fuerza necesaria para imponerse, dejó que el MIR haga su política y fracturó el gabinete, y Siles Zuazo no asumió la responsabilidad que le correspondía, dejó pasar y al final tuvo que transar con Paz Estenssoro un nuevo gobierno, en 1985, en el que hizo su primer decreto con Guillermo Bedregal, que dijo que era un ministro que respetó todo, pero se olvida de decir que no era una nueva política, sino una vieja política. Hizo volver la historia, antes era una política del Estado y Paz Estenssoro se afincó en que tenía que ser la empresa privada la que domine la situación.

El movimiento sindical fue arrastrado por Lechín para enfrentar a Siles Zuazo. Lechín era enemigo de Siles



Simón Reyes

Nació el 5 de enero de 1933 en la ciudad de Tarija. En 1951 comenzó a militar en el naciente Partido Comunista de Bolivia. Fue secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana durante los años 1987 y 1988. Encabezó la Marcha por la Vida en 1986.

El movimiento sindical fue arrastrado por Lechín para enfrentar a Siles Zuazo, hay que recordar que Juan Lechín era enemigo de Siles, al extremo que en una reunión un día sábado en Irpavi llegué al local de la COB, ahí me encontré que la gente había acordado con Lechín en cortar las líneas telefónicas, el agua y la luz eléctrica, y yo les dije que era un sabotaje y que yo no podía estar con eso, que lo que estaban haciendo era para contradecir a Siles Zuazo.

La Marcha por la Vida no surgió con Lechín y Víctor Hugo López, que estaban en Ginebra, en el congreso XXI, y después de haber aprobado con un documento en Catavi con Filemón Escóbar, Juan Lechín dijo: “No estoy de acuerdo y renuncio”, y Víctor López

igual renuncia; yo era el secretario de Relaciones y me puse al frente y llevo la Marcha por la Vida. Si hubiera llegado a La Paz hubiera sido otro el cantar, pero en Calamarca caímos, ahí había un contingente militar, tres regimientos que nos hostigaban. Un miembro permanente de ADN, el señor McClean, el alcalde de La Paz, estaba “arriando” a la gente, con buses llegaron; era muy difícil. Estuve en Patacamaya, nos cerró parte la guarnición militar, que revisó todo lo que teníamos, había algunas dinamitas, pero básicamente teníamos vituallas, pero ya no quedaba nada. En una de las estaciones el monseñor Lamas hizo una misa por los mineros, fue antes de que lleguemos a Calamarca; al llegar nos alojamos donde pudimos, estaba el subsecretario del Ministerio del Interior en el sitio de represión, yo era diputado nacional y me dijo: “Gracias a que eres diputado no te apreso”. Llegamos a las 11 de la noche, llegó la comisión episcopal y hablamos largo con los obispos y mencionaron que se iban, yo les pedí por favor que se queden, que en la noche era cuando iban a hacer atrocidades, pero los obispos se fueron y dejaron a la intemperie a la gente. Y realmente hicieron una atrocidad, pero la comisión episcopal no quiso quedarse, yo pedí por favor que se queden, porque si se quedaban no había posibilidad de que hagan los atropellos que han hecho, pero eso ya es historia.



BIENVENIDO, DOCTOR

Dos días antes de ser posesionado, la población paceña dio la bienvenida a Hernán Siles Zuazo, fue el 8 de octubre de 1982. Un día antes el Congreso votó por él de manera mayoritaria.



CONTRA LA DEVALUACIÓN

Una multitud de trabajadores que veía cómo sus ahorros estaban por desaparecer se reunió en la plaza San Francisco para protestar contra la decisión del gobierno de la UDP de devaluar el dólar 500 veces.



BIENVENIDA, DEMOCRACIA

Hernán Siles Zuazo luce la banda presidencial ante el Congreso que lo posesionó. Era el 10 de octubre de 1982, el primer día de la democracia.



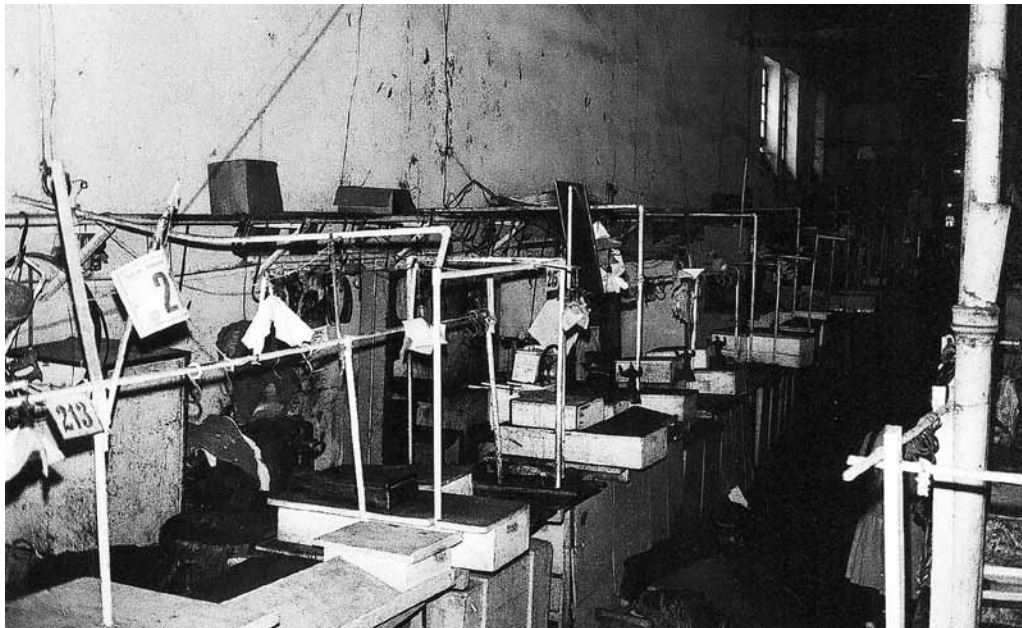
LA COB EN LAS CALLES

Un mes antes de que retorne la democracia, la Central Obrera Boliviana tomó las calles paceñas con una de las denominadas “marchas del hambre”. Sucedió en septiembre de 1983.



PASARON LOS 100 DÍAS

Los 100 días que pidió Hernán Siles ya habían pasado. Era febrero de 1983 y el Presidente seguía evaluando medidas para frenar la inflación junto a su gabinete económico.



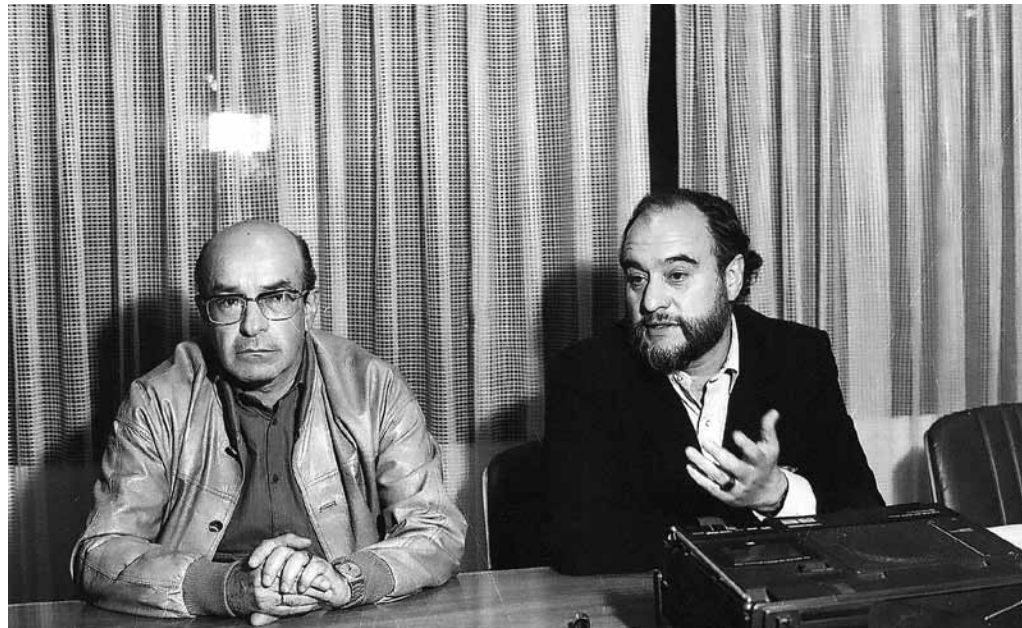
ESCASEZ Y ESPECULACIÓN

Los mercados de La Paz no exhibían ningún producto durante los primeros meses de 1982. Los comerciantes aprovecharon la crisis económica para enriquecerse y ocultaban los productos a la población.



LA MARCHA DE LECHÍN

Algunas de las movilizaciones que mantuvo la COB durante la democracia fueron las “marchas del hambre” que siempre convocaba Juan Lechín. Al final de cada movilización, el líder sindical daba un discurso.



EMPRESARIOS EN HUELGA

Con mitad del país en paro, en febrero de 1984, los empresarios privados decidieron entrar en huelga de hambre contra la UDP. Un año después, Siles Zuazo aceptaría el recorte de su mandato.



LA HUELGA DEL PRESIDENTE

Hernán Siles Zuazo fue el primer presidente en ingresar en huelga de hambre. Lo hizo para presionar a los partidos y sindicatos que pedían su salida de Palacio. Sucedió en agosto de 1984.



VUELVE VÍCTOR PAZ ESTENSSORO

Después de que Hernán Siles Zuazo accedió a recortar su mandato, Víctor Paz Estenssoro resultó electo presidente de la República. En agosto de 1985 asumió el mando y posesionó a su gabinete.

Capítulo

Años

1986-1999

**Estabilidad
y reformas
liberales**

2

El 21060, el decreto más conocido de la historia de la democracia boliviana, representó un punto de inflexión en el proceso de construcción democrática. Ante las fragilidades del Estado que se heredó de las dictaduras, el modelo se refugió en un conjunto de medidas de ajuste económico (el denominado consenso de Washington) que no hicieron más que alejar a distancias impensables las aspiraciones de mejores oportunidades y calidad de vida de los ciudadanos bolivianos.

La estabilidad fue un fin en sí mismo. Y aunque es en este periodo que se construye gran parte de la institucionalidad del actual Estado boliviano, las brechas de exclusión y pobreza no hicieron más que profundizarse.

Los años en los que nos cambiaron las preguntas...

Guimer Zambrana Salas¹

La etapa 1985 – 1999 es como una vuelta de página en la historia del país. Se cierra el ciclo de capitalismo de Estado, inaugurado en 1952, y se abre el del libre mercado. Las nuevas respuestas alcanzaron para controlar la hiperinflación y dinamizar la actividad productiva, pero no resolvieron –más bien lo empeoraron– el eterno problema del acceso al trabajo digno. ¿500 mil empleos?

21060. No, no es un número cualquiera. Con su antecesor, el Decreto Supremo 21059, fue nombrado ministro del Interior Fernando Barthelemy, pero ¿alguien se fijó en el guarismo? Claro que el 21060 no fue conocido de entrada, si hasta el periódico Presencia lo anotó como 21080 en la tapa de su edición de aquel 30 de agosto de 1985, el día después de su promulgación. Fue luego que se lo repitió en diversos idiomas, hasta en el mal castellano de Goni. Se lo alabó, rechifló, coreó, re-

futó... No era para menos. Sin pedir permiso se metió en los bolsillos de todos los bolivianos. No es virtud del numerito, por supuesto, sino de su polémico y duro contenido...

Y es que esta norma –de ocho títulos y 170 artículos– cambió el libreto a generaciones de millones de bolivianos y bolivianas nacidos luego de la Revolución Nacional de 1952. De un diestro golpe hirió de muerte al ya débil sistema de capitalismo de Estado. El alicaído Hernán Siles fue el primero en advertirlo: “El régimen de Paz Estenssoro constituye la negación de la Revolución Nacional”, sentenció

¹ Es periodista. Fue director ejecutivo de radio Yungas (Chulumani), jefe de Informaciones de ERBOL, editor de Sociedad y Grandes Reportajes de La Razón, editor de Política y Cultura de La Prensa y en la actualidad es productor de radio de PADEM.

12 días después de la promulgación del 21060, pero ya era irreversible. El nuevo decreto lograba el milagro de estabilizar el tipo de cambio boliviano – dólar, mientras que en los vacíos mercados comenzaban a sonreír algunos choclos.

Paradojas de la historia, fue la propia izquierda la que ayudó a tender la alfombra por la que regresó la derecha a Palacio Quemado. Sí, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), de Víctor Paz, y Acción Democrática Nacionalista (ADN), de Hugo Banzer, bloquearon la gobernabilidad de la Unidad Democrática y Popular (UDP) desde el Parlamento, pero fueron los movimientos y partidos de la propia izquierda los que terminaron de acogotar las escasas posibilidades de éxito de la propuesta udepista. El lobo –o mejor dicho el *Mono*– se veía venir, pero los revolucionarios eran una lata de sapos.

Las estruendosas marchas diarias de los miles de mineros de la Comibol, que se trasladaron a La Paz cama adentro, los paros hasta las últimas consecuencias en todos los sectores, los ayunos voluntarios e involuntarios... Es jodido cuando hasta la normalidad se declara en huelga. Peor si los miles de millones de pesos bolivianos que llevas en la cartera te sirven para comprar nada, porque eso es lo único que existe en los centros de abasto. Un mazazo como el del 21060 habría sido imposible en otra coyuntura, fueron la izquierda y los movimientos sociales los que pusieron la vaselina para que el enema sea puesto sin mayores dificultades. “¡O volvemos a la UDP!”, fue la advertencia en adelante.

En las elecciones de 1985, la UDP se presentó partida en cuatro. Obtuvo apenas una tajadita de la torta que, prácticamente, terminó repartida entre ADN (28,57%) y MNR (26,42%). Durante la campaña electoral, ambos partidos habían ofrecido tomar las riendas del galopante caballo de la inflación y devolverle autoridad al Poder Ejecutivo. La legislación boliviana permitía llegar a la Presidencia a los tres primeros, pero el tercero – el MIR– estaba tan lejos que Banzer y Paz eran los únicos con posibilidades. Los adenistas reclamaban respeto al ganador, pero los movimientistas preferían mantener el atajo legal del Congreso para llegar a plaza Murillo. Y más sabe el MNR por viejo que por MNR. La historia les daba un centímetro de ventaja de negociación e iban a aprovecharlo. Sí, Víctor Paz había respaldado el golpe de Estado de Banzer, en 1971, pero era el general el que tenía las manos manchadas de sangre. El pequeño bloque parlamentario de izquierda no iba a votar por su verdugo. El MIR inventó la teoría del “mal menor” para justificar su apoyo a la candidatura movimientista. Siguieron ese camino el MNRI, MNR-V, PDC y MRTKL. Pero el respaldo mirista no fue gratuito: se quedó con la cuarta parte de las cuotas de poder del Parlamento en la legislatura 1985-1986.

La noche del 29 de agosto de 1985, el líder histórico del MNR mandó al país ese mensaje con tinte de epitafio: “Bolivia se nos muere”. Luego firmaría el Decreto 21060. Los considerados pintan su sombrío punto de partida: “grave crisis”,

“verdadero colapso”, “pérdida de confianza”, “hiperinflación”, “recesión económica”, “desabastecimiento”, “desempleo”, “distorsión en el sistema de precios” y los adjetivos suman y siguen... De lo primero que se ocupa la disposición es del tipo de cambio entre boliviano y dólar, la piedra –no, la roca- en el zapato del anterior Gobierno. En su primera semana de funcionamiento, el Bolsín del Banco Central controló al chúcaro caballo del mercado paralelo.

Luego viene la disposición que volvió a abarrotar los mercados urbanos de alimentos y a terminar de vaciar los siempre escuálidos bolsillos de los campesinos: la libre importación. Los centros de abasto, en los que se vendía más hambre que tomates durante el anterior Gobierno, rebalsaban de productos extranjeros. Además, papá Estado se quitaba de encima la picante tareíta de fijar los precios hasta del locoto. En adelante, señor Mercado se encargaría de ponerle precio a las cosas, al vaivén de la libre oferta y demanda. La medida volteó la tortilla: si antes había miles de millones en los bolsillos y nada para comprar en el mercado, ahora que existía todo, los bolsillos estaban vacíos.

Los salarios estaban más fríos que el invierno paceño. El decreto no incluía ningún incremento y apenas soldaba al salario los bonos creados hasta entonces. El decreto rebautizaba la palabra despido: en adelante se llamaría “relocalización”. La Academia Española no incluyó hasta ahora la acepción del término, pero en el len-

guaje común debería entenderse como localizar un trabajador en otro lugar, en este caso en la calle.

LOS ÚLTIMOS CARTUCHOS

La COB se había dado un respiro desde la posesión de Víctor Paz. La misma noche de la promulgación del 21060, la Federación de Mineros declaró paro de 48 horas, mientras que los dirigentes del organismo matriz convocaron un ampliado nacional. Un paro nacional de 48 horas fue la tarjeta de bienvenida. El 9 de septiembre se declaró la huelga general y días después comenzó la huelga de hambre. La madrugada del 20 de septiembre, Víctor Paz recurrió al estado de sitio para controlar la situación. 144 dirigentes sindicales fueron confinados a Puerto Rico, en Pando. Con los representantes laborales fuera del tablero y

Presencia, 25 de julio de 1986

Alcaldía de Cochabamba creó nuevo impuesto a la chicha

La Alcaldía municipal de esta capital ha creado un nuevo impuesto a la chicha. Ahora se cobra por internación de aquel producto hacia la ciudad en mayor proporción que el impuesto por elaboración.

Autoridades comunales de Cliza y Punata informaron a Presencia que en la tranca del kilómetro 10, de la carretera Cochabamba - Santa Cruz, se están cobrando 3.200 pesos por botella como impuestos de internación, siendo así que en las alcaldías provinciales se cancela sólo 250 mil por impuestos de elaboración.

un decreto que comenzaba a mostrar sus frutos, la primera partida estaba terminada.

Pero faltaba aún el golpe definitivo, el que afectaría al *alma mater* del sindicalismo boliviano: los mineros. La caída de los precios del estaño no encontraba fondo y el nuevo modelo no estaba dispuesto a subvencionarlo. El Gobierno mostró la bocamina de salida a los trabajadores de la Comibol. El aletazo de ahogado fue la Marcha por la Vida, una movilización de miles de obreros que salió de Oruro con rumbo a La Paz. El 28 de agosto de 1986, la caminata fue detenida por tropas militares en Calamarca. Se temía lo peor. Al final del día, los dirigentes aceptaron el retorno a sus cen-

tros de trabajo. Luego, el anzuelo de los sueldos extras a quienes se acojan a los despidos se encargaría de vaciar los campamentos. Como canta Luis Rico, “el Tío ha quedado solo en un rajo abandonado...”.

VIENDO EN COCA...

Durante su segundo mandato, en 1961, Víctor Paz adscribió al país a la Convención de Viena sobre Estupefacientes. De acuerdo con ésta, el país debería erradicar todos sus cultivos de coca en 25 años. Al cumplirse el plazo, el Mandatario estaba nuevamente en Palacio Quemado y la coca se encontraba vivita y pisando. La lucha contra el narcotráfico se había convertido en política mundial para el gobierno de EEUU y Bolivia tenía vela en el entierro.

Los conflictos con los productores de la hoja comenzaron el mismo día en que se empezó a hablar de la posible aprobación de una norma específica que regule el cultivo del arbusto. La Ley 1008 fue promulgada en 1988, pese a la férrea oposición de los cocaleros. La disposición reconoce como zona “tradicional” para el cultivo de la hoja a los Yungas de La Paz, en “transición” a desaparecer al trópico de Cochabamba e “ilegal” al resto del territorio. La aplicación de políticas de eliminación de las plantaciones fue respondida por los productores con bloqueos, marchas y huelgas. Decenas de muertos y cientos de heridos quedaron entre los huachos de cocaleros. Un dirigente comandaba la resistencia campesina y comenzaba a mostrarse al país: Evo Morales Ayma.

Presencia, 5 de julio de 1986

Amas de casa mineras se oponen a despidos y al cierre de minas

Los comités de amas de casa mineras se han declarado en “estado de emergencia frente a la amenaza del cierre de las minas y la imposición de la ley tributaria”.

Esos comités han dispuesto, asimismo, la movilización de ese sector y piden “que se profundice el pacto minero-campesino-estudiantil, en el sector de las mujeres”.

La reunión se ocupó asimismo de otros aspectos como los peligros de la desocupación, del consumo de drogas, de la desnutrición de los niños y la juventud. Las amas de casa mineras dicen que todo plan de colonización de ingresos al Chapare por parte de desempleados mineros debe ser regulado y planificado.

EL SOFISMA MIRISTA

El “triple empate”. Ése fue el sofisma que inventó el mirismo para justificar la aspiración presidencial de su líder Jaime Paz. Sí, llegó tercero, pero la Constitución le daba margen de maniobra. Dicen que la política es el arte de lo posible, los del MIR mostraron que hasta de lo imposible: el MNR, ganador de la contienda, mantenía la hipótesis de que los “izquierdistas” no saltarían “los ríos de sangre” que los separaban del segundo, el ex dictador Hugo Banzer. No los saltaron, los pasaron a nado sincronizado: la bancada del MIR no votó por Banzer, fue la bancada banzerista la que hizo presidente a Paz Zamora.

El MIR había prometido, durante la campaña, la “relocalización del 21060”. El no hacerle ni cosquillas a esa norma fue parte de las condiciones de la alianza. La inédita aventura adeno-mirista fue denominada Acuerdo Patriótico. En las calles comenzaba a circular la irónica pregunta: ¿Sabes por qué Hugo Banzer persiguió a Jaime Paz en los años 70? Porque quería hacerlo presidente...

No sólo que no modificó una coma al 21060, sino que caminó a paso firme por la senda neoliberal. Privatizó de forma directa un total de 60 entidades públicas. Entre las más importantes, la fábrica de cemento de Sucre, Fancesa, que quedó en manos del también mirista Samuel Doria Medina; el Ingenio Azucarero Guabirá, adquirido por los cañeros de Montero; y las PIL de todo el país, las principales vendidas al grupo peruano Gloria.

El histórico enclaustramiento marítimo boliviano encontró algo de brisa en el acuerdo que logró con el peruano Alberto Fujimori. La administración de Lima vio en la aspiración boliviana una oportunidad para otorgar actividad económica a la empobrecida región de Ilo. Cedió una franja de cinco kilómetros de territorio, sin soberanía, para que Bolivia construya infraestructura portuaria y hotelera en el lugar. Del proyecto no quedó ni la piedra fundamental.

El líder del MIR sorprendió en los foros internacionales al presentarse con un prendedor en forma de hoja de coca en la solapa: desarrolló la llamada diplomacia de la coca. Esta estrategia buscaba convencer al mundo de las virtudes curativas del arbusto andino. “Lo que queremos los bolivianos es superar esa suerte de arresto domiciliario que sufre la coca en los límites de nuestro país”, justificó el Mandatario. Pero mientras la alababa afuera, en el país continuaba aplicando mano dura contra los productores de coca.

ESOS BOLIVIANOS CON PLUMAS...

Aquel 16 de agosto de 1990 el país se enteró de que un grupo de 300 indígenas del oriente había partido desde Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz. Ellos trepaban a las alturas para reclamarle al Gobierno políticas para proteger su territorio de las motosierras depredadoras de madereros y caleros. Los habitantes de La Paz, que jamás habían visto a sus compatriotas de las selvas benianas, no podían salir de sus estereotipos: ¿tendrán plumas?

La Marcha por el Territorio y la Dignidad cosechó tanta solidaridad que el presidente Jaime Paz tuvo que salir a su encuentro. Admitió todas sus demandas: dio reconocimiento legal al TIPNIS, al territorio de los chimanes, al territorio sirionó y a un área en el Monte San Pablo. Fue entonces que nació la demanda de convocatoria a una Asamblea Constituyente. Miles de personas se apostaron en las calles paqueñas para recibir a los indígenas que habían caminado 34 días para hacer cumbre en los 3.600 metros de altura de La Paz. Los Noe, Fabricano y Tiquasú ya no serían nunca más desconocidos por el resto de los bolivianos.

500 MIL DESEOS

La mediocridad de la administración de Paz Zamora y la agresiva campaña movimientista lograron que el MNR abra de par en par las puertas de Palacio Quemado en las elecciones de 1993. La candidatura de Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) —uno de los autores del 21060— ganó por goleada. Miristas y adenistas impulsaron la candidatura de Hugo Banzer, con el Acuerdo Patriótico. El ex ministro de Víctor Paz obtuvo un contundente 35,57% de los sufragios. El militar retirado llegó apenas al 21,07%, lejos del porcentaje que sacó cuando fue solo, como ADN, en los comicios de 1989. Más le valía andar solo que...

Además de la contundente victoria gonista, estos comicios fueron marcados por la irrupción de dos nuevos líderes: Carlos Palenque (14,29%) y Max Fernández (13,77%). El primero tuvo en La Paz su fortaleza, pero

también su debilidad. Nunca pudo superar la cordillera andina... Y murió entre las montañas. El segundo, cansado de “aportar” desde la Cervecería a las candidaturas de otros, decidió pagar la suya. Quizá por ello no pudo separar sus intereses tributarios de su accionar político. El día en que falleció en un accidente aéreo en Uncía, Potosí, hirió de muerte a su emprendimiento partidario.

Sánchez de Lozada estaba a un senador de los dos tercios en la Cámara Alta y tenía el 40% de la Baja, pero necesitaba una aplanadora para terminar de convertir al país en un mercado completamente abierto. Se alió a la errática UCS, de Max Fernández, y al MBL, escisión del MIR, y comenzó su tarea.

Goni estaba consciente de que el empleo había sido la principal víctima de la aplicación del 21060. Por ello, en su Plan de Todos había ofrecido la creación de 500 mil empleos. Para ello, aseguraba, era imprescindible la “capitalización” de las empresas del Estado: Yacimientos Petrolíferos (YPFB), Empresa de Electricidad (ENDE), Empresa de Ferrocarriles (ENFE), Empresa de Telecomunicaciones (ENTEL) y el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB).

No, no se trataba de una privatización a secas. Las empresas “capitalizadoras” estaban obligadas a invertir un monto igual al valor en libros de las empresas que recibían. Eran socias al 50% con los ciudadanos bolivianos, representados por las AFP, pero ellas estaban a cargo del manejo de las compañías. Las ganancias para

el socio boliviano serían destinadas a pagar un bono de Bs 1.800 anuales a los mayores de 65 años, bautizado Bonosol. La más polémica de las capitalizaciones fue la de la estatal petrolera. La futura venta de gas a Brasil prometía un negocio redondo... ¿Por qué el Gobierno intentaba entregar semejante recurso a la voracidad del capital extranjero? Es indudable que la capitalización petrolera incrementó las reservas probadas y probables de gas natural, pero también es cierto que las arcas nacionales se quedaron con una pequeña parte —vía impuestos— de esa danza de millones.

Pero el paquete de reformas de Goni era más extenso. La Ley del INRA intentaba aclarar el siempre complejo tema de la propiedad de la tierra. Sin embargo, la norma aún sigue cultivando conflictos entre bolivianos. La Reforma Educativa puso en cuestión la entumecida educación boliviana y hasta generó condiciones para la innovación y la regionalización de contenidos. Mas no terminó de constituirse en el instrumento que movilice a la ciudadanía por lograr una mejor calidad. Tampoco pudo con la eterna resistencia de los sindicatos de maestros a cambiar incluso de color de tiza.

Una reforma que sí cambió el escenario político boliviano fue la descentralización municipal, denominada Participación Popular. El 20% de las recaudaciones fiscales del país debía ser repartido entre todos los municipios, según su número de habitantes. Por primera vez en la historia, los más alejados villorrios recibían dinero del

Estado. De pronto, las despreciadas alcaldías se convirtieron en atractivos espacios de poder, incubadoras de nuevos liderazgos. Fue Sonia Montañón quien dijo que los del Gobierno eran como aprendices de brujos, pues no sabían los espíritus que estaban liberando...

¿VOTOS QUE REDIMEN?

A meses de iniciada su gestión, un periodista preguntó a Goni sobre su promesa de los 500 mil empleos. Éste le respondió: “Hasta para tener una wawita hay que esperar nueve meses, pues”. Pero el test de embarazo dio negativo hasta pasados los cuatro años de su mandato. Y le pasó factura: en 1997, el MNR, con Juan Carlos Durán, obtuvo apenas el 18,20%

Presencia, 12 de julio de 1986

Paz y Banzer sostuvieron una “muy cordial reunión”

El presidente Paz Estenssoro y el general Hugo Banzer Suárez sostuvieron ayer una “muy cordial reunión” en la que trataron temas de interés nacional y puntos de convergencia sobre éstos.

La información fue proporcionada por el portavoz oficial del Gobierno, Herman Antelo. Consultado sobre si se arribó a un acuerdo, dijo: “Sólo fue un intercambio de ideas donde no se llegan a conclusiones. Se conversó sobre la situación del país”.

Acerca de la posibilidad de un co-gobierno MNR-ADN, dijo que es un tema que se discute mucho, pero no está en carpeta, y no es de “discusión inmediata”.

de los votos. Hugo Banzer consiguió una pírrica victoria, 22,26%, pero no necesitaba más para cumplir su sueño largamente acariciado y pacientemente esperado de constituirse en el único dictador latinoamericano indultado por la democracia.

Los sufragios de esos comicios estaban tan fragmentados que unirse únicamente al MIR resultaba insuficiente, el matrimonio estaba condenado a la promiscuidad: se subió al carro a Condepa y UCS. Los medios se encargaron de bautizar la nueva alianza: la Megacoalición. Pero no es nada fácil la convivencia cuando el plato es del mismo tamaño y son más los comensales. Además, se hicieron evidentes las disputas generacionales al interior de ADN. Sumado a ello la sombra de dictador que no se separaba del Presidente, los rumores sobre su estado de salud e incluso las dudas sobre si era él quien manejaba el país.

El gobierno de Hugo Banzer tuvo su principal éxito en la erradicación de cultivos de coca del trópico de Cochabamba. Fue la administración que más se acercó al objetivo “coca cero”. Las acciones de los organismos de represión fueron respondidas con medidas de presión por parte de los productores. El año 2000 se registró uno de los más largos y violentos bloqueos de la vía entre Cochabamba y Santa Cruz. El día en que las fuerzas combinadas llegaron a Villa Tunari, se encontraron cara a cara con el cocalero Evo Morales. Ante los comandantes militar y policial, el sindicalista ponía en cuestión el hecho de que los uniformados “repriman a su pueblo”. El coronel Vargas, de la Policía, respondía: “Evo, enténdé, pues, cuando seas presidente nosotros también vamos a obedecer tus órdenes”. El dirigente sólo respondió con una incrédula sonrisa...

Del ajuste a la privatización

Fernando Molina

Las medidas populistas y desesperadas para salvar al país de la debacle, sólo encontraron salida en la antípoda: el neoliberalismo. Lo que se conoció como el Consenso de Washington se tradujo en el decreto económico más polémico de la historia.

Hacia 1985, las salidas que no implicaran una ruptura con el “capitalismo de Estado” que regía el país (o “gradualistas”) se habían agotado. De modo que en las elecciones de este año el país viró hacia la derecha, hacia los candidatos Hugo Banzer (ADN) y Víctor Paz Estenssoro (MNR), quienes, cada uno por su lado, prometieron recuperar la confianza de la población en las instituciones económicas.

Ambos líderes pensaban más o menos lo mismo sobre lo que había que hacer y hasta empleaban a un mismo asesor externo: el economista estadounidense Jeffrey Sachs. Esta “comunidad de ideas” no sólo tenía

escala nacional, sino que provenía de una suerte de consenso internacional, formado al calor de la debacle de las economías planificadas. En América se llamaría Consenso de Washington.

Un grupo de economistas y políticos —que devendrían “neoliberales”, aunque en ese momento ellos mismos no tuvieran tan clara esta afiliación—dirigido por el entonces senador del MNR Gonzalo Sánchez de Lozada redactó en más o menos un mes el Decreto 21060, que el presidente Paz Estenssoro (apoyado por Banzer) aprobó en agosto de 1985. Este decreto estabilizó la economía y, al hacerlo mediante la reducción del Estado, sentó las bases de las transformaciones posteriores.

El Decreto 21060 atacó enérgicamente el déficit fiscal, aumentando los ingresos del fisco por venta de gaso-

lina, prohibiendo más contrataciones en las empresas del Estado, recuperando el control sobre las finanzas de éstas, que hasta entonces habían estado en manos de ejecutivos “secuestrados” por los respectivos sindicatos, reordenando su administración, prohibiendo que se prestaran dinero del BCB y abriendo la posibilidad de que sus supernumerarios fueran “relocalizados”, o sea despedidos con beneficios extras (posibilidad que convertiría en una dolorosa realidad menos de un año después, cuando colapsaron los precios de los minerales y alrededor de 20.000 empleados de Comibol perdieron sus fuentes de trabajo).

Clausurando de este modo la fuente de inflación, el decreto también quiso recuperar la confianza financiera con las siguientes medidas:

a) Permitió realizar todas las transacciones en dólares, lo que disminuyó el efecto que el debilitamiento del peso causaba sobre la inflación y puso en circulación las divisas que hasta entonces habían estado en manos del público.

b) Aprobó la flotación del tipo de cambio, lo que eliminó el negocio especulativo que hasta entonces había producido la diferencia entre el tipo de cambio “oficial” y “paralelo”. Desde ese momento se comenzó a fijar el precio de canje entre divisas sin interferencias políticas, de acuerdo a la demanda de dólares tal como los técnicos del BCB la captaban en una mesa de divisas o “bolsín”. Al mismo tiempo se inyectó una fuerte cantidad de dólares para evitar que la devaluación del peso continuara. A partir de

ahí, los exportadores pudieron vender los dólares a un precio justo, lo que los animó a seguir exportando y aumentó el stock de divisas del país (“reservas internacionales”), es decir, creó un círculo virtuoso.

Estas medidas, lanzadas con una parafernalia destinada a persuadir a la población de que se estaba aplicando un “electroshock” sobre el corazón desfalleciente de la economía, cambiaron las expectativas populares. Poco a poco, la idea de que el dólar mantendría un precio estable fue impregnando a todos y esto logró eliminar la necesidad que sentían los agentes económicos de aumentar los precios, como se ve en el cuadro 1.

Cuadro 1. Devaluación e inflación

Año	Pesos por dólar (diciembre del año considerado)	Índice de precios, promedio anual (%)
1984	23.381	1.281
1985	1.724.193	11.749
1986	1.952.903	276
1987	2,2*	14,5

*La reforma monetaria de este año canjeó 1.000.000 de pesos bolivianos por Bs 1.

Datos citados por Juan Cariaga (1997).

Paralelamente, el decreto permitió la importación libre de bienes, a fin de abaratar los alimentos y otros artículos protegidos hasta entonces. Fue el principio del fin (por los siguientes 20 años) de una política económica estatista cuyos primeros antecedentes se remontaban a los años 40.

El 21060 también marcó el inicio de dos oleadas de “reformas estructurales” destinadas a sustituir el ele-

fantástico y quebrado “Estado nacionalista revolucionario” (basado casi exclusivamente en las rentas de los recursos naturales nacionalizados, no en impuestos), que es la versión boliviana del Estado del bienestar. Estas reformas estructurales querían erigir, en su lugar, un Estado pequeño, institucionalizado, que recaudara impuestos y que no actuara directamente en la economía.

LAS REFORMAS DE PRIMERA GENERACIÓN

Décadas de dictaduras, la hiperinflación y el caos social de principios de los 80, todo esto había causado la virtual desaparición de los organismos económicos del Estado: el Banco Central, el servicio de impuestos y el sistema presupuestario. Las llamadas “reformas estructurales de primera generación”, realizadas en el último cuarto de los años 80, apuntaron, en el área económica, a restablecer estos imprescindibles servicios estatales.

Gracias a la dolorosa lección de la hiperinflación se pudo crear un Banco Central con la autonomía y la organización institucional necesarias para precautelar la estabilidad. Se le prohibió conceder créditos al sector público y se le dio un sistema de administración relativamente alejado de las disputas por el poder. Desde entonces Bolivia ha tenido una inflación inferior a dos dígitos, una de las más bajas de Sudamérica, y las reservas internacionales se han mantenido en excelentes niveles. (Los fundamentos del BCB, sin embargo, se cambiaron en los últimos años, aunque hasta ahora,

por la bonanza económica del país, sin consecuencias perceptibles).

Otro de los efectos catastróficos de la inflación fue la virtual desaparición de la recaudación tributaria (en 1982 apenas representaba el 1% del PIB). De ahí la importancia que tuvo la promulgación en 1986 de la reforma tributaria (Ley 843), que redujo las centenas de impuestos hasta entonces existentes (inclusive, por ejemplo, un impuesto a la gasolina para financiar la construcción de la sede del sindicato petrolero) a siete tributos universales, más simples de calcular y de cobrar.

Los resultados de la reforma fueron excelentes. Los ingresos tributarios subieron constantemente, hasta llegar a ser, en 2011, el 22% del PIB.

Sin embargo, la Ley 843 tenía una gran deficiencia. El reparto de 75% para el Tesoro y 25% para las regiones

Presencia, 27 de agosto de 1986

Se estudiará la explotación de litio en el salar de Uyuni

Técnicos nacionales y extranjeros, que se reunirán a partir de hoy en el congreso geológico boliviano, examinarán los estudios geológicos realizados durante los últimos años sobre el salar de Uyuni.

De acuerdo con estudios preliminares, se tiene establecido que en el salar de Uyuni se encuentra una de las reservas más grandes de litio en el mundo. Asimismo, se cuenta con reservas de cloruro de potasio, carbonato de sodio, boratos y otros compuestos utilizables en una diversidad de procesos industriales.

no se hacía sobre el total nacional, sino sobre lo recaudado en cada región. De ese modo, como al mismo tiempo esta ley establecía que las empresas tributarán allí donde hubieran declarado su residencia legal, las corporaciones y los municipios de las regiones más prósperas, en especial de La Paz, obtenían ingresos mucho mayores.

Por eso otra reforma fundamental, adoptada en la Ley de Participación Popular de 1994, es decir, con la oleada de reformas de “segunda generación”, fue cambiar la forma de distribución, que desde entonces se hace sobre el total nacional (con lo que no importa dónde se paga el impuesto). La parte de los municipios subió de un 10 a un 20% (gracias a la eliminación de las corporaciones de desarrollo, organismos “técnicos” que se encargaban de la sustitución de importaciones) y se comenzó a repartir en función de la cantidad de habitantes de cada uno de ellos.

Posteriormente otras leyes profundizarían aún más esta descentralización del reparto tributario.

Otra medida fundamental de esta

época fue la renegociación de la deuda externa, que los acreedores privados accedieron a revenderle al Estado al 11% del valor original. Ésta fue una buena operación para el Tesoro, pero sacó al país de los mercados financieros. Desde entonces sólo los organismos bilaterales y multilaterales de financiamiento volvieron a prestarle al Gobierno boliviano.

En suma, el mayor logro de esta época fue consolidar la estabilidad económica, que años después sería declarada por el presidente Evo Morales un “patrimonio nacional” que se debía conservar.

LAS REFORMAS DE SEGUNDA GENERACIÓN

Los años 80 se consideran la “década perdida” de América Latina por los bajos precios que en este período cotizaron las materias primas que el continente está especializado en producir.

A fines de los 80 y en el decenio siguiente las restricciones financieras se hicieron gravísimas y pusieron al país a merced de las iniciativas e incluso los caprichos del FMI, el Banco Mundial y los financiadores bilaterales.

Estos organismos y países, guiados por la moda privatista del momento, suspendieron todo apoyo financiero a la producción de índole estatal y concentraron sus préstamos en programas sociales. Con ello pusieron a todos los políticos de la época ante la necesidad de vender o, en su defecto, de cerrar las empresas que el Estado había ido reuniendo con el tiempo.

Presencia, 12 de julio de 1986

Bolsín del Banco Central cotizó dólar americano a 1.903.000 pesos

La cotización del dólar en el Bolsín del Banco Central registró ayer (11 de julio) un incremento en mil pesos en relación al día jueves, que fue de \$b 1.903.000. El dólar tuvo fluctuaciones con tendencia a la baja.

Además, la propia sociedad, luego de sufrir tan gravemente las consecuencias del exceso de gasto público, estaba más que dispuesta –hablando en términos generales– a deshacerse de las empresas que habían sido las principales responsables de este gasto.

Pese a ello, privatizar en Bolivia no fue fácil, dada la fuerte tradición estatista de la población boliviana, que considera las empresas fiscales como conquistas de la lucha popular.

Después del 21060, el segundo paso en este sentido fue la aprobación, durante el gobierno de Jaime Paz (1989-1993), de una ley de inversiones y un decreto de privatización que autorizaban al Gobierno a vender sus empresas más pequeñas, pero que no tocaban a las grandes compañías públicas.

Para ellas se requeriría de otra legislación, que fue provista por el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997), quien había encontrado una forma ingeniosa para persuadir a los bolivianos de la necesidad de privatizar. Esta idea era la “capitalización”, que fue presentada como un movimiento descentralizador mediante el cual el Estado entregaba la propiedad –que hasta entonces había monopolizado– a la gente.

En un segundo movimiento, el pueblo boliviano se asociaba con grandes inversionistas, pidiéndoles que pusieran dinero en las empresas en una cantidad equivalente a su valor, es decir que las multiplicaran por dos. La mitad de las empresas duplicadas, es decir, supuestamente, el patrimonio original, seguía en manos de los boli-

vianos y la otra mitad y la administración se entregaba a los inversionistas.

Así, sin perder nada de su propiedad, el país podía obtener todos los beneficios que se atribuía a la privatización: acceso a tecnología muy cara para el Estado, aumento del empleo, disminución de la corrupción, ingreso a los mercados mundiales, etc. Al mismo tiempo, se evitaban los problemas de la privatización pura, tales como despilfarro de los recursos obtenidos, el enriquecimiento ilícito de los encargados de vender, etc.

El 21 de marzo de 1994, el Gobierno promulgó la ley que lo autorizaba a transferir, gratuitamente, a todos los bolivianos mayores de edad hasta el 31 de diciembre de 1995, las acciones estatales de las empresas ENTEL, YPFB, ENFE, ENDE y LAB, principalmente. Pero no era una transferencia directa, como se había dicho al inicio. El Gobierno debía encontrar “mecanismos idóneos, transparentes y apropiados” para que los ciudadanos se beneficiaran “con la transferencia de dichas acciones a fondos de pensiones”, que serían administrados por empresas especializadas (AFP).

Adicionalmente, la ley de pensiones (1996) estableció que con los dividendos de las empresas capitalizadas y con la venta de las acciones de éstas, depositadas en los fondos de pensiones, fuera pagado un bono vitalicio a las personas mayores de 65 años. Este beneficio tendría el nombre de Bonosol y mostraría a la población los “resultados de la capitalización” antes de las siguientes elecciones generales

(1997), quedando así garantizados los réditos políticos del proceso.

Como se ve, la capitalización fue una forma de privatización, sólo que “diferida”. El plan era que las acciones de los bolivianos, administradas por las AFP, fueran vendidas por éstas conforme se necesitara dinero para pagar el Bonosol. (Las comprarían los

Partidos políticos gastaron más de **37 millones** de dólares en los 90 días de campaña electoral

empresarios nacionales y extranjeros, incluyendo los propios socios capitalizadores).

El procedimiento fue concebido con el propósito de facilitar la privatización, pues creaba la ilusión de que la propiedad se mantendría en manos públicas. Su complejidad y la poca o mala información en torno a él crearon una enorme confusión, que nunca se despejó del todo. Esto permitió “vender” la reforma, pero esta virtud fue también su talón de Aquiles.

El 50% de las acciones cuya privatización se había diferido se convirtieron, durante los siguientes diez años, en la manzana de la discordia de la política nacional. Los grupos estatistas se opusieron a venderlas para pagar el Bonosol. El gobierno

de Hugo Banzer (1997-2001) disminuyó el monto de este beneficio, de los iniciales 200 dólares, a 60, y cambió su nombre por el de Boliviada. De este modo protegió las acciones de la presión de venta a la que debían estar sometidas.

Por otra parte, las AFP no negociaron las acciones en la bolsa, como se suponía que debían hacer, sino que las conservaron, algo que les dio el rentable derecho de nombrar a una parte de los directores de las principales empresas del país.

Así, la “privatización diferida” se frenó y las acciones cayeron en una especie de “limbo” en el que ya no eran del todo estatales ni tampoco se habían vuelto del todo privadas. La tentación de devolverlas al Estado para que éste las usara de una u otra forma (con los beneficios grupales consiguientes) estuvo presente durante toda la década. Finalmente, triunfó la idea de emplear más de la mitad de las acciones en la “refundación de YPFB”, la empresa del petróleo que la capitalización disminuyera a su mínima expresión. La decisión fue adoptada en el referéndum realizado el 18 de julio de 2004.

Fuentes

Juan Cariaga (1997): *Estabilización y desarrollo*, Los Amigos del Libro/FCE, La Paz-México.

Fernando Molina (2004): *Pros y contras de la capitalización*, Pulso, La Paz.

Campo político, reformismo liberal y movimiento popular

Boris Miranda

El subperíodo más largo de la democracia se caracterizó por la crisis del movimiento obrero y la consolidación de una clase política. El municipalismo, un organismo electoral fiable y la institucionalidad judicial fueron algunos de los logros más importantes.

“Gobernaremos con plena autoridad, sin admitir la anarquía. Aplicaremos un conjunto de medidas coherentes y pragmáticas para detener la crisis económica entre las que se encuentra el tipo de cambio único y real”, dijo Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) en su discurso de apertura presidencial. Era el 6 de agosto de 1985.

“Si no se aplican de inmediato – sigue Paz– un conjunto de medidas pragmáticas, realistas y coherentes, que detengan el impacto de la crisis, corremos el inminente riesgo de llegar a la bancarrota”. El flamante Mandatario inició su gestión con un anticipo de lo que se venía.

El retorno del líder histórico de 1952 al Palacio de Gobierno significa-

ría una serie de procesos que se pueden resumir en el fin del ciclo del nacionalismo revolucionario en Bolivia, que él había empezado, la inauguración del periodo de reformas liberales, la consolidación de un nuevo campo político en democracia y la capitulación definitiva del movimiento obrero que protagonizó las más importantes luchas sociales de todo el siglo XX.

LA DERROTA DEL SIGLO

La incapacidad de los mineros de romper el cerco militar que puso el Gobierno en Calamarca selló su destino para siempre.

“La consigna de marchar hacia la Sede de Gobierno surgió al término de una asamblea realizada en el distrito minero de Siglo XX, cuyos trabajadores plantean la necesidad de iniciar acciones concretas en defensa

de sus vidas y la de sus familias. Esta iniciativa cobra fuerza con el transcurrir del tiempo y la agudización de las condiciones vitales del conjunto social minero”, rememoró el diario paceño Hoy en el balance de la marcha “Por la vida y la paz” publicado en su edición de anuario de 1986.

Aviones, tanquetas, tanques y carros de asalto impidieron que la movilización diera un paso más allá de Calamarca. Simón Reyes y Filemón Escóbar, los dos históricos dirigentes mineros que encabezaban la caminata, comunicaron a sus compañeros que la movilización había concluido. Era el 29 de agosto de 1986.

Hasta aquel día, los trabajadores de los socavones de Bolivia se habían ganado el reconocimiento de todo el movimiento obrero de Latinoamérica. La unidad granítica de los mineros, su capacidad de movilización y, fundamentalmente, la formación política de sus representantes, sean trotskistas, socialistas, comunistas o nacionalistas, eran las causas de aquella admiración.

No era casualidad que los centros mineros eran objetivos recurrentes durante los golpes militares y testigos de masacres como las de 1923, en Uncía; 1942, en Catavi; 1967, en Siglo XX o 1996, en Amayapampa y Capasirca, para citar algunos de los ejemplos más emblemáticos.

Cada ampliado del sector era una clase de teoría política revolucionaria. En los socavones se confrontaba a los textos trotskistas de la Cuarta Internacional con el *Qué Hacer* de Vladimir Lenin. El *Manifiesto Comunista* era un policopiado de circulación permanen-

te y la gran mayoría había leído *La historia me absolverá* de Fidel Castro.

Fueron los obreros de las minas los que se plantearon por primera vez la posibilidad de la toma del poder a través de la Tesis de Pulacayo de 1946. La máxima dirigencia de la Central Obrera Boliviana siempre recaía en algún minero y casi siempre se trataba de Juan Lechín Oquendo, quien dirigió las movilizaciones del sector que antecedieron a la Revolución Nacional de 1952.

Los decretos supremos 21060 y 21377 sellaban su destino: el desempleo y la migración.

La experiencia de las luchas acumuladas durante un siglo quedaría anulada gracias al nuevo régimen laboral y económico que se instauraría en Bolivia. El periodo neoliberal afectaría a la capacidad de movilización obrera porque la mayoría de sus sindicatos estaban destinados a desaparecer junto al cierre de las fábricas. Los mineros, aún en la incertidumbre, se verían dispersados por el país en muy poco tiempo. Además, el contexto internacional previo al fin de la guerra fría, soplaba en contra de las fuerzas de izquierda en todo el mundo.

Poco pudieron hacer las capas subalternas para resistir la oleada de reformas liberales que se comenzaron a implementar después de la marcha “Por la vida y la paz”. Al igual que en el resto de la Latinoamérica, la transformación del trabajo en un contexto capitalista, propinaría una derrota al movimiento obrero que duraría lustros.

Los mineros se quedaron a 60 kilómetros de La Paz, donde podrían haber

torcido la historia. La primera marcha del nuevo tiempo partiría cuatro años después de la derrota de Calamarca: indígenas desde tierras bajas plantearían las peregrinas ideas de autodeterminación, derechos colectivos de los pueblos y asamblea constituyente.

EL INTENTO POR MODERNIZAR BOLIVIA

La llegada de Jaime Paz Zamora (1989-1993) a la Presidencia de la República, tercero en la votación, denuncias de manipulación electoral y escándalos de corrupción que involucraron a la gestión de Paz Estenssoro dejarían en evidencia que la institucionalidad democrática boliviana de principios de la década del 90 era todavía muy precaria.

Presencia, 1 de mayo de 1989

Banzer, Sánchez de Lozada y Paz Zamora, en debate

La pugna por ganar el primer lugar en las elecciones del 7 de mayo mostró ayer posiciones irreductibles de los tres candidatos que intervinieron en la última sesión del Foro-Debate Elecciones 1989 organizado por la Asociación de Periodistas de La Paz.

Tanto el general Hugo Banzer de ADN, como Gonzalo Sánchez de Lozada del MNR y Jaime Paz Zamora del MIR-NM —que insisten que lograrán la primera mayoría en los comicios del próximo domingo— trataron de descalificar a sus contrarios ante la audiencia nacional de radio y televisión que siguió el debate.

Jaime Paz Zamora perdió los estribos un par de veces. La primera, molesto por

Es en ese contexto que la clase política emprende una serie de transformaciones para que la democracia boliviana sea confiable, inclusiva, transparente y amplia. Claro, siempre desde una perspectiva liberal-representativa.

La Corte Nacional Electoral fue uno de los productos mejor logrados de esa reingeniería estatal. Por años, el ente veedor de los procesos democráticos contó con una amplia confianza por parte de la población y sus autoridades eran reconocidas como “notables”. Sería esa entidad la que emprendería los primeros pasos hacia una democracia intercultural, plural y moderna a través de la implementación de referendos (2004, 2006 y 2008), la elección de autoridades originarias

la alusión que hizo Gonzalo Sánchez de Lozada en sentido de que había recibido ayuda para su campaña electoral de la Social Democracia y del presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez. La segunda, al ser interrogado por el periodista José Nogales sobre el caso de los narcovideos, sobre el que dijo que su partido no tuvo nada que ver.

Ante una pregunta formulada por el periodista Óscar Peña Franco, el candidato Sánchez de Lozada negó que el MNR fuera golpista, ya que dijo que su partido sólo participó en el golpe de agosto de 1971 del general Banzer para evitar la destrucción nacional.

(2009) y el levantamiento del padrón biométrico (2009).

Ya durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), una nueva serie de incorporaciones legislativas permitirían ampliar el horizonte democrático. Bolivia pasó de tener 24 municipios en 1994 a más de 300 en el fin del siglo gracias a la Ley de Participación Popular. El inicio del municipalismo, que fue combatido desde las áreas rurales bajo la consigna de “abajo la ley maldita”, llevó la administración de la democracia a las poblaciones. Claro que con todas las dificultades del inicio de cualquier proceso como la inexperiencia, corrupción e ineficiencia.

Presencia, 6 de mayo de 1989

Fraude electoral

El ministro del Interior, Eduardo Pérez Beltrán, instruyó a la Fiscalía y a la Policía Nacional investigar la denuncia de un partido político sobre un supuesto fraude electoral. Durante una conferencia de prensa, realizada anoche en su despacho, a tiempo de exhortar a la ciudadanía a contribuir al buen desarrollo del proceso electoral, dijo que de acuerdo con las primeras investigaciones, se trata de la sustracción de una papeleta electoral N° 3183, que corresponde al libro del mismo número y que pertenece al asiento electoral ubicado en la población de Moco Moco, provincia Camacho del departamento de La Paz. También se informó que el responsable o notario encargado de resguardar estos documentos es Yacif Fernández Rivero, militante de ADN.

A nivel judicial, se institucionalizó el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia. La elección de magistrados dejó de ser una atribución presidencial y pasó al Poder Legislativo. Serían las representaciones partidarias del Congreso las que elegirían a las máximas autoridades. Nuevamente, la modernización tropezó con vicios desde su primera implementación. El nuevo mecanismo dio pie al cuoteo político en las entidades judiciales.

CONSOLIDACIÓN DEL CAMPO POLÍTICO

El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Acción Democrática Nacionalista (ADN) y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) serían las tres principales fuerzas alrededor de las cuales se crearía una élite política que administraría el país, con aliados menores, entre 1985 y 2003.

Gracias al llamado Pacto por la Democracia, el histórico dirigente movimientista Víctor Paz logró garantizarse la gobernabilidad durante su cuarta presidencia. Ése fue el primer antecedente de la denominada “democracia pactada”, que después cuajaría alianzas de todos los colores y corrientes como el Acuerdo Patriótico (MIR, ADN), la Megacoalición (ADN, MIR, UCS, Condepa y Nueva Fuerza Republicana) o el Pacto por Bolivia (MNR, UCS, Movimiento Bolivia Libre y NFR).

Bolivia fue gobernada sin mayores sobresaltos a partir de estos ejes. Las experiencias populistas de Conciencia

de Patria, de Carlos Palenque, y Unión Cívica Solidaridad, de Max Fernández, fueron cooptadas por el sistema de partidos en alianza permanente y no fueron experiencias que lograron interpelar al modelo. El primero tuvo el mérito de llevar a una mujer de pollera a la Cámara de Diputados por primera vez. Remedios Loza obtuvo un curul legislativo en 1989.

Otra fuerza política, la Izquierda Unida, sirvió como la primera plataforma del movimiento cocalero. En

1995, los productores del trópico cochabambino llegarían a los nuevos concejos municipales creados por la Participación Popular. En 1997, el líder de esas federaciones, Evo Morales, ganaría su puesto en el Congreso.

15 años después de la aprobación del Decreto 21060, que marcaría el inicio de este periodo, las primeras señales de disconformidad se percibían apenas como movimientos subterráneos en sindicatos campesinos y comunidades indígenas.

De actores a ciudadanos

Abdel Padilla

Los protagonistas de esta etapa histórica son los partidos políticos; mediadores de una relación casi clientelar con la sociedad civil, también fueron impulsores de una institucionalidad que subsiste a pesar de los embates autoritarios.

Una de las instituciones vitales para entender la historia de la democracia boliviana contemporánea es el municipio. A través de la Participación Popular, esta reforma convierte a actores en ciudadanos. Pero es también éste el período del preludio del surgimiento de nuevos sujetos sociales que, en ciertos casos, tras la demanda cotidiana de inclusión, tejieron un velado proyecto de poder, catalizado luego en las “guerras” populares del siglo XXI.

DE LA MINA A LA COCA...

La aprobación e inmediata puesta en marcha del Decreto Supremo 21060, el 29 de agosto de 1985, a sólo

23 días de que Víctor Paz jurara por cuarta y última vez a la Presidencia del país, marcó un antes y un después en la relación entre el Estado y la sociedad civil, y en particular el movimiento obrero.

El único fin de la medida fue parar la hiperinflación, que ya había alcanzado los cinco dígitos, y aplicar medidas de shock para estabilizar la salud de un cuerpo enfermo, apelando a la metáfora de la inmortal frase de Paz Estenssoro: “Bolivia se nos muere”.

El decreto señalará el rumbo de la Nueva Política Económica (NPE), con ajustes estructurales de corte neoliberal que lograron estabilizar la economía, aunque a un precio social desmedido: un histórico retiro masivo —eufemísticamente llamado “relocalización”— de más de 23.000 trabajadores entre 1986 y 1990.

Garantías sociales como la inamovilidad laboral no sólo fueron puestas en cuestión sino hechas añicos. Las dirigencias sindicales, afectadas por la dimisión de Juan Lechín, pasaron de ser protagonistas de una era de cogestión y cogobierno a otra de oposición reactiva y cuasi-defensiva.

Antes de dejar el liderazgo de la Central Obrera, Lechín advirtió que lo que el Gobierno pretendía era liquidar a la Comibol. La respuesta del entonces ministro de Planeamiento de Paz, Gonzalo Sánchez de Lozada, fue taxativa: “(El Gobierno) no quiere liquidarla, ya está liquidada, la liquidaron... La intención del Gobierno es salvar a la Comibol, revivir a un muerto”.

Con esta “guerra” declarada, la minería estatal cerró un ciclo de luchas y conquistas sociales, frenadas en seco, en agosto de 1986, en la población de Calamarca, a 60 kilómetros de La Paz, cuando, en pleno estado de sitio, miles de mineros que demandaban la defensa de sus

fuentes laborales en la denominada Marcha por la Vida, optaron por retornar a sus hogares ante la imposibilidad de superar el cerco militar y la arremetida de una Nueva Política Económica, que soterraba inmisericordemente una era de poder sindical.

La mayoría del éxodo de relocalizados migró a las ciudades y en particular a una región que sería uno de los epicentros de las movilizaciones y conflictos sociales en las siguientes dos décadas, el Chapare cochabambino, donde se fundaron las filas de un actor social emergente clave en el tránsito de un siglo a otro: los cocaleros.

Aunque no existe coincidencia en las cifras sobre la cantidad de hectáreas de hojas de coca plantadas a mediados de la década del 80, se estima un promedio de 34.000, que ubicó al país entre los primeros productores mundiales.

Fue entre 1997 y 1999, en la gestión de Hugo Banzer, que se logró el nivel más alto de erradicación con más de 25.000 hectáreas. Según el informe Monitoreo de Cultivos de Coca y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, cuando Banzer asumió existían alrededor de 45.800 hectáreas y en 2000 se redujeron a 19.900. Actualmente, según la ONU y el Gobierno, existen 27.200 hectáreas cultivadas.

Pero el nivel de producción de hojas de coca y su erradicación no tiene sentido sin su directa incidencia en el narcotráfico. Y no fue sino hasta septiembre de 1986 que la sociedad boliviana, pero en particular la cruceña, se percató de ello con el asesinato del

Presencia, 31 de julio de 1986

Siete empresas postulan canales de TV en La Paz

Se han presentado siete solicitudes para la adjudicación de canales de televisión en la banda VHF, informó el subsecretario de Comunicaciones, Eugenio Von Boeck.

Dijo que de las siete propuestas, solamente se adjudicarán cinco teniendo en cuenta que tanto el canal estatal como el universitario están exentos de presentar propuestas porque tienen canales asignados.

científico Noel Kempff Mercado en una fábrica de cocaína conocida como Huanchaca.

A partir de ello se tensan las relaciones con Estados Unidos, que logra incidir de manera directa en las decisiones y definiciones internas en la lucha contra el narcotráfico, se crea el concepto y la práctica de desarrollo sostenible –que funcionó al principio bajo el eslogan mirista de “coca por desarrollo” o “coca no es cocaína”– y se aprueba, en el gestión de Paz Estenssoro, una de las leyes más duras en la lucha contra las drogas: la 1008.

Esta norma, como la definirá el antropólogo Xavier Albó, presume la culpabilidad antes que probarla y pone en el mismo rasero coca y cocaína. Con todo, se calcula que la economía de la coca a finales del siglo XX involucraba a 500 mil personas.

“LO QUE QUIERA, CASERITO...”

Otra de las consecuencias de la NPE en la vida laboral cotidiana fue la generalización del trabajo eventual e informal, creando espacios urbanos simbólicos y representativos de esta nueva manera de sobrevivir, como la tradicional feria 16 de Julio de la ciudad de El Alto o La Cancha, en Cochabamba, o Barrio Lindo, en Santa Cruz. Espacios donde es posible comprar desde una aguja usada hasta repuestos de avión. Todo se vende y todos tienen algo que vender, todo un paraíso de la informalidad...

Este fenómeno, muchas veces en conexión con el contrabando, dio lugar en la década del 90 a la emergencia



de una variante de la llamada “burguesía chola”, término acuñado por los sociólogos para definir el proceso de acumulación económica y cultural de los “mestizos blanqueados”, expresada en ciertos comerciantes mayoristas de electrodomésticos y computadoras.

A propósito de El Alto, la creación de esta urbe, el 6 de marzo de 1986, marca otro hito en la historia demográfica del país, que lo lleva a compartir hoy, junto con Santa Cruz de la Sierra, los primeros lugares en crecimiento poblacional.

Fue gracias al apoyo de los alteños, entre otros, que surgieron fenómenos populistas como Unidad Cívica Solidaridad (UCS), del empresario de origen humilde Max Fernández, y Conciencia de Patria (Condepa), de Carlos Palenque, ex folklorista y comunicador.

Aunque, en este último caso, el verdadero fenómeno social y comunicacional fue la cadena de radio y tele-

visión RTP y el programa *La Tribuna Libre*, a los que Palenque debe el haber ubicado a Condepa en los primeros lugares de preferencia electoral y el que su correligionaria Remedios Loza fuera la primera diputada de pollera electa y la primera mujer candidata a la Presidencia. La importancia de Palenque y el movimiento creado en torno a él es a tal grado sorprendente que, para muchos, no se entiende el MAS sin Condepa.

En diciembre 1987 se llevan a cabo las primeras elecciones municipales, que posicionan al municipio como el pilar del sistema democrático, y el 7 de mayo de 1989 las elecciones presidenciales, que entronan al candidato del MIR, Jaime Paz, tercero en la preferencia electoral, como el primer mandatario y como su aliado a su otrora “verdugo”: Banzer. La elección y su desenlace fue un argumento más para sellar el descrédito de los partidos políticos y preparar el terreno, años más allá, para el descontento social.

Durante la gestión de Paz Zamora se llevó a cabo el último Censo

Nacional de Población y Vivienda del siglo. Para 1992, Bolivia sumó 6,4 millones de habitantes, más del 60% menores de 25 años. Se confirmó la tendencia de un país urbano con la mirada al oriente, y aún con elevadas tasas de analfabetismo (20%) y mortalidad infantil (75 por mil nacidos vivos).

En septiembre de 1990, más de 800 indígenas del oriente caminaron por 34 días en la llamada Marcha por la Dignidad y el Territorio para que el Gobierno les conceda la propiedad y administración de sus territorios. Al final, dice Albó, lograron que se les reconozca cinco territorios indígenas o interétnicos, con 1,5 millones de hectáreas. Entonces su lucha fue contra los avasallamientos de madereros y ganaderos, hoy también resisten a los coccaleros.

“FÁBRICA” DE LÍDERES

El 6 de junio de 1993 se desarrollan nuevas elecciones presidenciales. Gana el candidato del MNR, Sánchez de Lozada con el 34% y el Congre-

ANF, 3 de mayo de 1989

Cédulas electorales extraviadas antes de la votación

Tres mil personas de la ciudad de La Paz tramitaron ayer ante la Corte Electoral del distrito copias de sus cédulas electorales, como emergencia ante la pérdida del documento durante los últimos meses. La sala plena de la Corte decidió que las personas que la extraviaron gestionen su reposición directamente y para ello

se utilizaron las copias legalizadas de los libros de inscripción de los notarios. Según José Luis Paredes, el trámite representa una pérdida de tiempo y mayores esfuerzos del personal que trabaja en esa institución, empero afirmó que es necesario que toda la población participe en el plebiscito.

so lo elige como primer mandatario, acompañado por Víctor Hugo Cárdenas, primer vicepresidente aymara del país.

Para esta nueva gestión, el MNR propone el Plan de Todos con el fin de consolidar la NPE de 1985 a través de un segundo paquete de políticas estructurales para conjugar economía de mercado con políticas sociales. Tres fueron los pilares de estos cambios: la capitalización, la Participación Popular y la Reforma Educativa.

Las tres medidas fueron resistidas en las calles, etiquetadas sin demora en los estribillos populares como las “leyes malditas”. Del trío, la única que quedó en pie fue la Participación Popular.

El objetivo de la norma fue redistribuir los ingresos del país, sobre la base de las secciones de provincia, territorializando desde entonces y a la fecha 339 municipios. Una medida revolucionaria que convirtió al municipio en el principal escenario de desarrollo y de práctica democrática, con un radical proceso de descentralización administrativa. Se financia con el 20% de una bolsa común de los impuestos nacionales, dinero que es entregado a los municipios de acuerdo a la cantidad de población de éstos, que además tienen la potestad de cobrar sus propios impuestos.

Si antes de la ley sólo 24 municipios recibían recursos, ahora son 339, con autonomía de gestión y competencias remozadas a través de la nueva Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías, aprobadas durante este gobierno. Es, para

muchos, una devolución de favores, ya que movimientos como el MAS y el propio Evo Morales son, de alguna manera, producto de la Participación Popular, que desde su creación y hasta hoy se ha convertido en una “fábrica” de líderes locales.

Lo positivo es “la multiplicación de actores que se convierten en ciudadanos y, por ello, responsables del futuro del Estado”, comentó en una entrevista al diario La Razón Carlos Hugo Molina, secretario de Participación Popular en el gobierno de Carlos Mesa.

Al igual que la capitalización, la Reforma Educativa fue dura y largamente resistida por el magisterio nacional, obligando al Ejecutivo a declarar el estado de sitio más prolongado desde 1982: seis meses.

Al final, en criterio del especialista en desarrollo social Manuel Contreras no logró convertirse en política pública porque “la ciudadanía la vio como una reforma resistida por el magisterio e impuesta por el Gobierno”.

A pesar de ello, logró introducir la educación intercultural y bilingüe, además de promover la participación de la comunidad en la educación, como recuerda el historiador Carlos Mesa.

En materia de salud se aprobaron el Seguro Materno Infantil –base de los futuros Seguro Básico y Seguro Universal–, el Seguro de Vejez y el Seguro de Muerte. Otras normas de carácter social son la Ley INRA, la Ley contra la Violencia Familiar y la propia reforma constitucional que modifica la edad de la ciudadanía a los 18 años y en el primer artículo de la CPE

presenta a Bolivia como “multiétnica y pluricultural”.

La muerte de 11 personas y 50 heridos en las poblaciones mineras de Amayapampa, Capacirca y Lllallagua, en las vísperas de la Navidad de 1996, luego de una violenta intervención, termina por desgastar al MNR y a Sánchez de Lozada, que, producto de las elecciones de 1997, debe pasar el mando a Hugo Banzer, que cumple su sueño de ser elegido en democracia.

De su gestión se destaca el Diálogo Nacional, con la participación mayoritaria de los distintos sectores de la sociedad civil y política; la elección de la primera defensora del Pueblo, Ana

María Romero; el terremoto de Aiquile, en Cochabamba; y las elecciones municipales de 1999, que realza a figuras nuevas, como René Joaquino, en Potosí, y remeza a otras, como Juan del Granado, en La Paz.

Pero ante todo la gestión de Banzer es el preámbulo de una década de “revancha” popular, con nuevos y viejos actores que, desde sus bases, piden cambios en su vida cotidiana y, desde sus dirigencias, presencia en la esfera del poder político. Las cornetas sonarán por igual en altiplano, valles y llanos, llamando a las “guerras sociales del siglo XXI”. A fines del siglo XX, la suerte del sistema político neoliberal parecía echada...

Presencia, 25 de febrero de 1991

Se define satélite Simón Bolívar

Hoy se definen en Bogotá los proyectos satelitales Simón Bolívar y Cóndor, en la reunión del Acuerdo Subregional andino, donde Bolivia propondrá que se concrete uno solo al finalizar esta década.

Fuentes

Mesa J, Gisbert T, Mesa D, (2001): *Historia de Bolivia*, Ed. Gisbert, La Paz-Bolivia.

Urquiola M, Contreras M, Querejazu P... (varios autores) (1999) *Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia contemporánea*. Harvard Club Bolivia, La Paz-Bolivia.

La Razón (2007): *25 años de democracia*. La Razón, La Paz-Bolivia.

Yo era el ministro de Planificación y el documento (proyecto de Decreto Supremo 21060) para combatir la inflación que había llegado a 24.000% fue un documento que lo elaboramos prácticamente en forma clandestina. Los periodistas querían saber qué íbamos a hacer. Lo curioso es que ese documento, que fue tan importante, lo elaboramos en tres semanas, ocultándonos de los periodistas. Y solamente se editaron tres ejemplares, uno para el doctor Víctor Paz Estenssoro, otro para mí, y otro para Goni, porque la mayor parte de las reuniones las hacíamos donde el Goni en Obrajes. Todavía no era muy conocido y la gente no sabía dónde vivía; vivía en un lugar muy adecuado, en una calle casi que da al río, al lado de la residencia alemana.

Pusimos el borrador en conocimiento del gabinete y el doctor Paz Estenssoro nos citó en Palacio de Gobierno a las siete de la mañana del 21 de agosto; nos reunimos dos días sin parar. Lo primero que el doctor Paz hizo es decidir que no haya ningún mensaje ni ninguna llamada telefónica, que todos íbamos a dormir y comer ahí. Yo era el relator y fue como “el parto de los montes”, porque fue un trabajo realmente muy duro que a medida que avanzábamos se hacía más complejo. Hay que recordar que el doctor Siles hizo tres intentos de luchar contra la hiperinflación, pero sus proyectos no funcionaban porque no tenía la fuerza para enfrentarse a Lechín.

Lechín era el todopoderoso, había sido el causante, con sus peticiones sindicales del aceleramiento de la inflación, que ya era una herencia de los gobiernos militares. Hay que recordar que es una de las razones por las que Banzer renuncia el año 78; la inflación era una cosa descontrolada.

Estuvimos cerrados ahí y se produjo la firma del documento, había gran expectativa, sería las siete de la mañana del 23 cuando se terminó de redactar. Eduardo Olmedo López, que era el secretario privado de Paz Estenssoro, fue un hombre muy decisivo para la redacción final del documento, lo mismo que Juan Careaga, que no era del MNR. Él era un hombre muy capacitado en la economía. El doctor Paz hizo una conferencia de prensa y el ambiente era tremendamente dramático y en esas circunstancias dijo esa frase:

El doctor Paz dijo la frase “Bolivia se nos muere” porque realmente era así



Guillermo
Bedregal

Nació en la ciudad de La Paz en 1936. Se graduó en Derecho en la Universidad de Salamanca. Doctor con el mérito Suma Cum Laude en Derecho en la Complutense de Madrid. También graduado en Economía en la Ruperto Carola de Heidelberg. Fue ministro de Planificación durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro, entre 1985 y 1989.

“Bolivia se nos muere”, porque realmente era así, porque de un día a otro el asunto de la inflación se desbancaba y llegamos al nivel de tener la inflación más alta de América Latina y la cuarta inflación más feroz de la historia del hombre. Una situación de bancarrota total del país.

El gobierno del MNR, desde su fundación, fue muy orientado hacia el fortalecimiento del Estado, y particularmente a nacionalizar las minas. La coyuntura que se estaba viviendo en 1985 era mucho más grave de lo que la gente creía; los bolivianos se acomodan a las circunstancias y este país sabe sufrir bastante, ése es un caso que hay que destacar. Algunos partidos de la izquierda marxista depusieron sus enconos contra el MNR ante

el dramatismo del “Bolivia se nos muere” y no tuvieron ninguna objeción en colaborar y aportar a una reforma de tan profundo contenido.

Una vez que se produce el relevo de los dirigentes del MNR, es la derecha empresarial la que toma el mando. Eso lo encara con un nuevo liderazgo moderno, diferente, que es el de Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que representa los intereses de la derecha. El 17 de octubre del 2003 es un acontecimiento que dialécticamente era imparable, por el hecho de que ya se había agotado el modelo “neoliberal”. Todo se tuvo que plantear en una coyuntura determinada, y Paz Estenssoro dijo eso, otra de las grandes frases, cuando le preguntaron los periodistas si el 21060 era un decreto para una coyuntura, y él respondió que “es un decreto que puede durar diez o veinte años”, toda una generación, entonces el sustituto del modelo –aceptemos el término neoliberal– es la vuelta nuevamente al Estado poderoso, patrón, todopoderoso.

Es tan fuerte este país, poderoso en lo que se refiere a sus ciudadanos, que se tolera todo tipo de cosas, pero cada vez con menos entusiasmo; en política hay mucho de simbólico, y el simbolismo ahora se ha perdido.

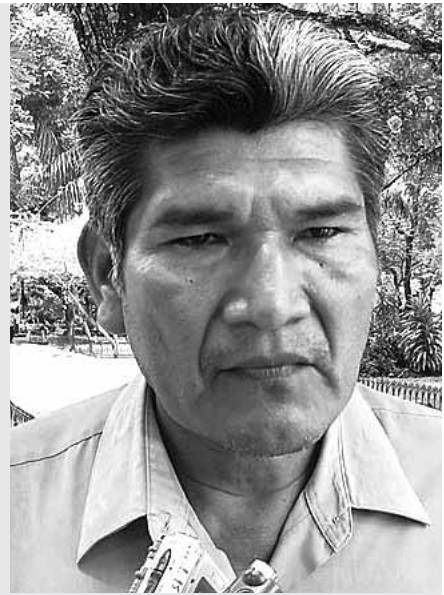
Fuimos acompañados por la fe y la esperanza de ser comprendidos por Bolivia y el mundo

La primera marcha indígena no se puede comparar con nada, ni imitar, fue un movimiento único, social y humano, con sus características propias de los pueblos indígenas. Humilde, sincera, transparente, de cara al país y al mundo. Poco usual en su tiempo, porque los pueblos indígenas jamás lo habían hecho así. Fueron demandas históricas, reivindicábamos nuestros derechos. Esos elementos también nos han ayudado a nosotros, fuimos acompañados por la fe y la esperanza de ser comprendidos por la sociedad boliviana y el mundo.

No faltaron mensajes para enfrentar y disminuir la importancia. Había comités cívicos como el del departamento del Beni que intentó negociar con la estructura organizada de los pueblos indígenas, la CIDOB. Y esta negociación supuestamente permitiría darle solución a la demanda que llevaba la marcha, pero esa negociación no fue adoptada por la marcha en sí. Rechazamos ese intento.

Como no podría haber faltado, una comisión del Gobierno trató de sentarnos en medio camino, antes de llegar a Puerto San Borja. Querían que nosotros escuchemos el primer mensaje de esa comisión del Gobierno, del Poder Ejecutivo. Sin aceptarles, pero tampoco negándonos tercamente, se invitó a la comisión que nos acompañe a marchar, y nos acompañó a pie siete kilómetros esa comisión del Poder Ejecutivo. Llegaron casi escaldados de tanto caminar.

Otra de las anécdotas más significativas sucedió cuando fuimos llevados por esa comisión a La Paz, los cuatro dirigentes que conducíamos la marcha. Sostuvimos reuniones con el Ejecutivo y en esa situación, cuando vimos que no prosperaba y nos daban vueltas e intentaban involucrarnos a nosotros, sin decirles nada, dejamos las negociaciones y toda la comisión retornó. Así nomás, calladitos.



Marcial Fabricano

Fue presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia por dos gestiones, de 1999 a 2001. En el año 1990 dirigió la Marcha por el Territorio y la Dignidad, desde los pueblos del oriente hasta La Paz, y en 1994 estuvo en otra marcha exigiendo la aprobación de la Ley INRA.

Escuchamos al Vicepresidente de la República de ese tiempo, Luis Ossio Sanjinés, decir que éramos libres de caminar por cualquier parte, porque éramos pueblos indígenas nómadas. Ahora esas situaciones que nos pasaron para nosotros no son más que eso, anécdotas.

Como decía, la primera marcha indígena fue un movimiento único, poco conocido e inusual en su forma de hacer una reivindicación, tan humilde pero sincera. Mereció todo el desprendimiento social y de solidaridad del pueblo boliviano, y del pueblo paceño en particular. Cuando llegamos a esa ciudad, esa situación no se la puede comparar con nada, porque no tenía nada que ver con el interés de algún determinado frente o partido político. Fue totalmente diferente, fue ahí que vimos y sentimos el espíritu solidario de la gente, que durante los 34 días de caminata fue entendiéndose, sincerándose con esa realidad con la que se fue llevando la bandera y las reivindicaciones al Estado boliviano. Eso legitimó la marcha.

Luis Rico, cantautor

Fui una tarde, me presté un carro, agarré mi guitarra y me fui para allá. Los guardias de la marcha no me conocían y me preguntan: “¿A quién busca?”. Los indígenas del Beni estaban tan aislados que no me conocían, yo me presenté humildemente y le dije que quería presentarme con los dirigentes de la marcha. Entonces llamaron a Marcial Fabricano, Ernesto Noe, y ellos vinieron a mi encuentro; les dije que quería cantarles canciones para darles ánimo para la parte más dramática. Es ahí donde les canté mis canciones; la gente aplaudió, me abrazó, hicimos amistad y nos despedimos, y en ese momento los dirigentes de la marcha me piden que les haga una canción para ellos.

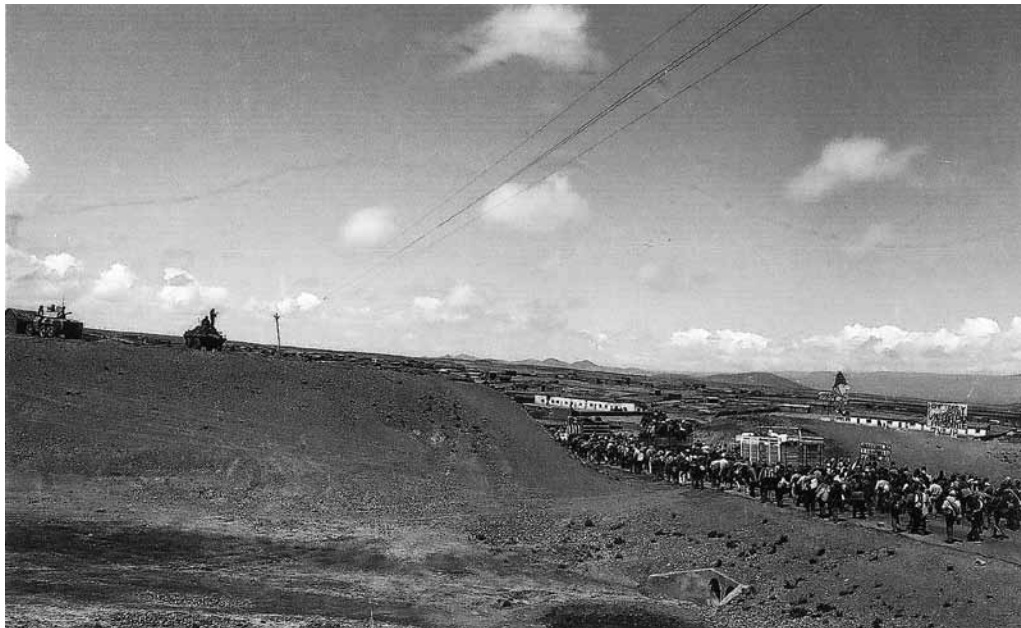
Recordando lo poco que conocía de la Amazonia, llegué a la casa y trabajé hasta las tres de la mañana, imprimí la letra de la canción que estaba basada en la música y el estribillo de ese cantautor argentino Víctor Heredia.

Al día siguiente hice una cantidad de panfletos de la canción y me fui a la llegada de los indígenas a partir de las 3:30 de la tarde en la catedral metropolitana. Entré a la iglesia, me presté una guitarra de uno de los marchistas y por primera vez canté en el momento de la comunión. Cuando salgo, la gente en la plaza empieza a aplaudirme. Radio Fides había instalado unos parlantes para que la gente que estaba en la plaza escuche la misa. Esta canción a partir de ese momento la aceptaron los indígenas.



NACE LA CIUDAD DE EL ALTO

A partir de modestos asentamientos en una meseta, migrantes de poblaciones andinas y de la ciudad de La Paz darían nacimiento a El Alto. Fue a principios de 1980.



LOS TANQUES CERRARON EL PASO

La Marcha por la Vida y la Paz no pudo romper el cerco militar de Calamarca. Los mineros quedaron a 60 kilómetros de La Paz y tuvieron que volver. Sucedió a finales de agosto de 1986.



JAIME PAZ ZAMORA, PRESIDENTE

Pese a ser el tercero en la votación, Jaime Paz Zamora asumió la Presidencia de la República durante la gestión 1989-1993. Se alió con Acción Democrática Nacionalista de Hugo Banzer Suárez.



EL EGTK

Felipe Quispe fue uno de los detenidos por alzamiento armado. Perteneció al Ejército Guerrillero Túpac Katari. Sucedió en 1992, bajo el gobierno de Jaime Paz Zamora.



EVO INGRESA A LA PLAZA MURILLO

Mientras sus compañeros lanzan hojas de coca, Evo Morales (detrás, izq.) se toma la cabeza. La marcha por la coca y la soberanía logró ingresar a la plaza Murillo. Fue a mediados de 1994.



CONDEPA ENTRA EN ESCENA

Conciencia de Patria, de Carlos Palenque, llevó a la primera mujer de pollera, Remedios Loza, al Congreso en 1989 y a principios de la década del 90 ya era la primera fuerza política en La Paz.



GONI - VÍCTOR HUGO

El Movimiento Nacionalista Revolucionario triunfó en los comicios de 1993 con el binomio compuesto por Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas.



LA CAPITALIZACIÓN

El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada llevó una reforma a las empresas estatales que se conoció como la capitalización. Así fue como empresas estratégicas pasaron a ser administradas por capitales foráneos.



VUELVE EL DICTADOR

Luis García Meza retornó al país gracias a un operativo conjunto entre las fuerzas del orden de Bolivia y Brasil. Sucedió a mediados de 1993. Desde entonces paga su condena de 30 años sin derecho a indulto.



VUELVE EL GENERAL

Después de quedar al margen durante cuatro elecciones consecutivas, Hugo Banzer logró retornar a la Presidencia de la República. La anterior vez fue en un gobierno de facto.

Capítulo

Años

2000-2005

**Turbulencias y
movilizaciones en
pro del cambio**

3

Una imagen sintetiza este nuevo momento: la irrupción de la otra Bolivia. La primera marcha indígena por Tierra, Dignidad y Territorio fue el preludeo de un proceso incontenible de demandas de participación –ya no únicamente de representación- de las grandes mayorías indígenas.

No obstante, a pesar de su contundencia, el llamado no fue escuchado. Tuvieron que vivirse dos guerras (la del agua y la del gas) para que la estructura del poder advirtiera esta nueva presencia.

Justamente cuando la democracia alcanzaba la mayoría de edad, en 2003, estuvo a punto de ser sacrificada. Pero, no podría entenderse su evolución, si no es partir de esta etapa turbulenta que configura el “proceso de cambio”.

Algo así como un proceso de cambio y dos “guerras”

Andrés Gómez Vela¹

La primera marcha indígena, reclamando dignidad, tierra y territorio (1990), es la punta de un ovillo que llegó a desentrañar la realidad de esa “otra” Bolivia que dormitaba en la exclusión. A partir de este acontecimiento, dos guerras (por el agua y por el gas) y la irrupción de otros actores políticos, se puede leer el advenimiento de un nuevo tiempo que llega a su concreción el año 2005, con la primera victoria del MAS.

Cuando los indígenas de las tierras bajas marcharon en 1990 desde Trinidad hasta La Paz, reclamando dignidad, tierra y territorio, y el dirigente indígena Ernesto Noe, en un discurso en la histórica plaza San Francisco, dijo que “nosotros también somos bolivianos, por eso el Estado debe incluirnos y para que nos incluya tiene que haber algo así como un proceso de cambio”, en realidad estaba denunciando al Estado excluyente y a sus administradores de entonces.

Cuando Felipe Quispe Huanca, *El Mallku*, fue detenido en 1992 y presentado por la Fiscalía como el jefe del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) ante los periodistas, entre ellos Amalia Pando, ésta le preguntó: ¿Por qué pones dinamitas a las torres de alta tensión, por qué tomas las armas? Y él contestó sin titubear: “Para que mi hija no sea tu empleada”; en realidad, estaba denunciando la exclusión social de millones de indígenas “predestinados” por una sociedad colonial a la servidumbre.

Cuando Víctor Hugo Cárdenas juró en 1993 como el primer vicepresidente indígena de la región, en alian-

¹ Periodista y abogado. Director ejecutivo nacional de Educación Radiofónica de Bolivia (ERBOL), docente de Periodismo de Opinión de la carrera de Comunicación de la UMSA. Autor de *MedioPoder*, *Derecho a la Información*; *No levantarás falsos testimonios*; *Los periodistas y su ley*.

za con el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) de Gonzalo Sánchez de Lozada, y habló en tres idiomas originarios (aymara, quechua y guaraní) en un espacio donde generalmente sólo se escuchaba el español, en realidad lo que estaba adelantando era la llegada de las personas portadoras de esas lenguas al mismo centro del primer poder del Estado colonial, pero para refundarlo.

Cuando Felipe Quispe, *El Mallku*, desafió en 2000 al general Hugo Banzer a pesar en una balanza sus cerebros, en realidad le estaba diciendo somos iguales como seres humanos. Y cuando le dijo que quería hablar con él de jefe a jefe y el entonces ministro de la Presidencia, Wálter Guiteras, le pidió respeto para el Presidente, Felipe contestó: “Yo soy presidente del Kollasuyo, por eso quiero hablar con el presidente de la República de Bolivia”, en realidad estaba diciendo que el Estado colonial ya no servía.

Y cuando este luchador aymara espetó, en septiembre de 2000, con lágrimas y la voz quebrada a todo el gabinete banzerista: “Aquí hay dos Bolivias: la de ustedes (en referencia a los ministros) que tienen agua, luz, comida y todo lo que necesitan para sus esposas e hijos; y la nuestra (los pueblos indígenas), que no tenemos nada”, en realidad estaba proponiendo la necesidad de la refundación de Bolivia.

No son simples hechos ni meras frases. Son los cimientos del proceso que hoy vive el país y es el mástil en el que flamea la autoestima indígena recuperada palmo a palmo en cada

lucha, en cada marcha, en cada represión.

El grupo gobernante no leyó bien los mensajes, no encadenó los hechos para hacer una buena interpretación. Quiso detener la historia con el derecho cuando los hechos estaban muy adelantados porque la base de la exclusión era el color de la piel, el origen étnico, la lengua, la vestimenta. La historia exigía hechos, “algo así como un proceso de cambio”.

LA “GUERRA DEL AGUA”

La acumulación de la energía histórica en contra del grupo gobernante explotó con la “guerra del agua”, que se produjo entre febrero y abril de 2000, en la ciudad de Cochabamba, donde se unieron campesinos, indígenas, clases medias, proletarios en contra del gobierno del presidente Hugo Banzer, quien había decidido privatizar el agua. Los enfrentamientos dejaron cientos de heridos y un muerto: Víctor Hugo Daza, un estudiante de 17 años al que le llegó posiblemente la bala de un francotirador filmado por una red de televisión.

El hecho se originó cuando el Gobierno banzerista, en alianza con dirigentes cívicos de la ciudad y el alcalde cochabambino de entonces, Manfred Reyes Villa, decidió entregar la administración del agua a la transnacional Bechtel, un consorcio constituido por capitales europeos, que se bautizó como Aguas del Tunari para echarse un barniz nacional. Ésta había decidido instalar medidores de agua para cobrar tarifas en aquellos lugares donde no había puesto ni siquiera una tube-

ría. Es decir, había decidido cobrar a la población por adelantado. La gente no entendía por qué tenía que pagar por el agua, incluso de lluvia, a una empresa que no había hecho ninguna inversión.

Ante este exceso nació la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, que aglutinó las demandas más allá del recurso vital. El principal dirigente de esta organización, Óscar Olivera, vaticinó los primeros días de febrero la participación de la población cochabambina y la derrota del Gobierno apátrida.

Este hecho marcó el principio del fin del modelo económico que se había establecido en 1985 con el Decreto Supremo 21060, soporte jurídico-ideológico del neoliberalismo parido por el Consenso de Washington y regentado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM); por supuesto, con la aquiescencia

del club de la partidocracia conformado por MNR, MIR, ADN, UCS.

Con este movimiento comenzó la agonía del Estado neoliberal, que se había desprendido de muchas de sus responsabilidades sociales respecto a la población más empobrecida y había asumido una opción por el capital transnacional.

La lucha visible fue por el elemento simbólico de la vida: el agua. Pero fue una movilización política, por tanto admonitoria. Además, por primera vez en la era democrática se había producido una alianza de clases, pregonada en la Revolución Nacional de 1952 por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Este fenómeno sociológico estaba mostrando que la mayoría de la población había optado por el cambio.

A la “guerra del agua” le siguieron otras movilizaciones, encabezadas por la Central Obrera Boliviana (COB),

La Patria, 11 de octubre de 2003

El Parlamento se olvidó de rendir homenaje a la democracia en su 21 aniversario

La crisis social, económica y política caracterizaron los 21 años de democracia (1982-2003), admitieron el viernes los partidos políticos de oposición y oficialismo.

Los congresistas coincidieron en que la dimisión de los gobiernos de facto y la instauración de un nuevo proceso de gobierno favoreció a una pequeña élite que se enriqueció en corto tiempo y empobreció más a las familias bolivianas. Como

no sucedió antes, el Parlamento Nacional, que representa el proceso democrático, se olvidó de rendirle homenaje en su día, ni siquiera un mensaje por la fecha.

El subjefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Antonio Peredo, a tiempo de acusar a los “protegidos de las dictaduras” de haber dañado la democracia, dijo que el pueblo hasta la fecha no ha recibido los beneficios de esa conquista.

la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que en septiembre de 2000 hizo un bloqueo de caminos que puso en jaque al gobierno de Hugo Banzer porque las demandas no eran meras reivindicaciones sociales, sino políticas.

Había pasado una década desde que había llegado la primera marcha indígena de los pueblos de las tierras bajas a la sede de Gobierno, exigiendo un proceso de cambio para ser incluidos como bolivianos en el Estado, y los frutos de ese sueño ya comenzaban a vislumbrarse.

Los Tiempos, 14 de julio de 2004

Editorial: Goni en España

La presencia del ex presidente prófugo en España, con motivo del Forum 2004 realizado en Barcelona, ha dado bastante que hablar. Su presencia ha sido calificada como “vergonzosa” por el simple hecho de que Sánchez de Lozada figura en la lista de presidentes puestos en fuga por una poblada cansada de políticos corruptos y acusados de una serie de crímenes de lesa humanidad.

Todo hace presumir que el ex presidente prófugo a raíz de la “intifada” aymara alteña sigue enceguecido por la soberbia, y sigue, en consecuencia, convencido de que ha sido víctima de un “golpe” financiado por Cuba y Venezuela. Una víctima, cuando en los hechos fue victimador de un país que se mostró indefenso ante el complot más siniestro de la historia boliviana, concebido y ejecutado para subastar sus mejores recursos naturales a favor de las transnacionales.

La “guerra del agua” fue tan contundente que -cuenta una fuente cercana a él- el general Banzer presentó su renuncia al gabinete, pero no fue aceptada. Sus colaboradores tenían la certeza de revertir la agonía. Fallaron. El cambio era inevitable. La muerte se llevó a Banzer antes del fin de su gestión (2001). Le sucedió el vicepresidente Jorge Quiroga Ramírez, quien no pudo hacer nada para evitar la avasallante crisis estructural.

CANDIDATOS INDÍGENAS

Las elecciones de 2002 fueron deprimentes para los políticos que habían convertido el gobierno en un pasanaku. El triunfo del MNR olía a derrota. Por primera vez en la historia -desde Constantino Lima, uno de los primeros candidatos indígenas en las elecciones de los 80- dos postulantes originarios tenían opciones serias de tomar el poder vía elecciones.

Los candidatos de los partidos tradicionales, Gonzalo Sánchez de Lozada y Manfred Reyes Villa, rondaban por separado entre el 15 y 20% del apoyo popular, pese a la maquinaria mediática que tenían. En cambio, los candidatos del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) y el Movimiento Al Socialismo- Instrumento Por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Felipe Quispe y Evo Morales, con pocos recursos y aparato, tenían cerca del 30% del electorado.

Estos datos no sólo reflejaban el descontento de la sociedad con la llamada partidocracia. También comenzaban a mostrar la recuperación de la autoestima de los pueblos indígenas,

expresando su confianza, a través del voto, en alguien que se parecía a cada uno de ellos.

Tras el acto eleccionario, el candidato presidencial del MAS se puso a centímetros de Palacio. El candidato del MNR, Sánchez de Lozada, ganó las elecciones con el 22,5% y el MAS quedó con el 20,9%. Por primera vez en la historia del país, un candidato indígena era presidencialiable; en ese entonces, el segundo tenía la opción constitucional de ser presidente en el Congreso si el primero no lograba el apoyo electoral del 50% más un voto.

Quispe pidió a Morales hacer alianzas en el Congreso y pelear la Presidencia. Morales prefirió postergar sus aspiraciones presidenciales para las elecciones siguientes. Y sucedió lo previsto, los partidos tradicionales se aliaron en torno a Sánchez de Lozada, ya sea por voluntad propia u obligación, como confesó Manfred Reyes Villa cuando dijo que apoyó a Goni por imposición de la embajada de Estados Unidos. Esa revelación explicó el cambio de postura de sus colegas políticos, quienes tras la campaña bajo la consigna de todos contra el MNR, terminaron aliándose para cerrar el paso al candidato indio.

Cuando Sánchez de Lozada asumió el mando tenía la fecha de caída marcada. No iba a pasar de dos años debido a que el Estado que él mismo había contribuido a articular ya no acogía a todos los bolivianos. Más aún después de los datos del censo de 2001, que habían establecido que de cada diez bolivianos, al menos seis

se autoidentificaban como indígenas. Y nació la plataforma discursiva: “si somos la mayoría, debemos gobernarlos y autodeterminarnos”.

La agonía de la partidocracia se agudizaba. La mayoría de la población no perdonaba la subasta del patrimonio nacional, vía capitalización, realizada durante la llamada época lúcida del neoliberalismo (1985-1997); tampoco que hayan convertido la política en negocio familiar y práctica corrupta de acumulación de fortuna y reproducción de poder en pocas manos. Lo malo había eclipsado medidas positivas como la participación popular y la descentralización, que abrieron las puertas de la administración del Estado a las mayorías.



A esas alturas, la revisión de la capitalización había descubierto la estafa y el poder de las transnacionales petroleras en Bolivia, las que de cada 100 dólares se llevaban más de 80. También se había descubierto que estas empresas habían tenido acceso a información privilegiada gracias a que algunos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) les habían facilitado datos para beneficiarse con empleos y comisiones millonarias.

Esta sumisión de la oligarquía boliviana a las petroleras, a los organismos financieros internacionales y a la embajada de Estados Unidos generó reacción en la dermis social, que luego se tradujo en indignación. Esta reacción hormonal, si vale el término, fue muy bien interpretada por intelectuales de izquierda, periodistas, activistas, movimientos sociales, cuando vislumbraron el advenimiento del nuevo tiempo sobre los hombros del nuevo sujeto histórico: el boliviano indígena originario campesino.

LA “GUERRA DEL GAS”

En este contexto estalló la “guerra del gas” en octubre de 2003. Surgió de una manera circunstancial, el lunes 8 de septiembre de 2003 en instalaciones de radio San Gabriel, ubicadas en El Alto, donde la Federación de Campesinos de La Paz declaró una huelga de hambre en demanda de la libertad de uno de sus dirigentes, Edwin Huampo, quien había sido encarcelado por haber participado en un acto de justicia comunitaria que concluyó con la muerte de dos presuntos ladrones de ganado, quienes habían sido linchados por pobladores de una

comunidad en la provincia Los Andes del departamento de La Paz.

La dirigencia, tras una marcha de campesinos en la sede de Gobierno, amplió sus demandas y pidió cumplimiento de los convenios de la Isla del Sol, firmados en 2002, los cuales exigían básicamente libertad para Huampo, abrogación de la Ley de Seguridad Ciudadana e indemnización a los familiares de los campesinos fallecidos y heridos en los diferentes conflictos sociales.

El problema se agravó cuando campesinos bloquearon la carretera La Paz-Sorata, adonde habían llegado un centenar de turistas extranjeros para la fiesta patronal de esa población turística. Las embajadas presionaron al Gobierno para liberar a sus connacionales. En ese intento se produjo la masacre de Warisata, el sábado 20 de septiembre de 2003. Aquel día, fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas, dirigidas por Carlos Sánchez Berzaín, tomaron el control de la carretera bloqueada. La acción de rescate terminó con seis muertos, entre ellos una niña, además de un militar asesinado. La violencia desatada en Warisata unió al movimiento campesino con la Federación de Juntas Vecinales de la ciudad de El Alto, que declaró paro indefinido y bloqueo de calles el 10 de octubre, justo el día que la democracia cumplía su mayoría de edad, 21 años. En ese momento surgió la consigna o el discurso sensible para aglutinar a todas las fuerzas sociales y políticas que buscaban el cambio: no a la venta de gas a Chile, nacionalización de los yacimientos gasíferos, Asamblea Constituyente y refundación del Estado.

El presidente que había sido uno de los artífices de la enajenación de YPFB, diez años después, era exigido a recuperar esos recursos naturales en beneficio de Bolivia. El presidente que había facilitado, diez años antes, la presencia de un indígena en la Vicepresidencia se negaba a abrir las puertas del poder de par en par para que entren los nuevos actores.

Entre el 10 y 17 de octubre, el Gobierno de la coalición, conformada por el MNR, MIR, NFR y UCS, protagonizó la mayor masacre de la era democrática, causó 67 muertos (según la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, y más de 80 según otras instituciones) y cerca de 300 heridos. La mayoría de las víctimas había salido a marchar y bloquear las calles frente a un Ejército movilizadado con artillería e infantería. Probablemente, los movilizadados no se dieron cuenta esos días de que lo que estaban haciendo iba a cambiar el destino del país.

El martes 14 de octubre, Mesa hizo una jugada de ajedrez político cuando declaró públicamente, tras percatarse de la gravedad de los hechos, que renunciaba al Gobierno pero no a la vicepresidencia. En otras palabras, rompía con el Gobierno, pero no con el pueblo. Esta posición fue letal para la caída de Goni, pues demostró el resquebrajamiento de la estructura interna del Gobierno.

El miércoles 15 de octubre, la embajada de Estados Unidos en Bolivia expresó su apoyo al “gobierno constitucional de Gonzalo Sánchez de Lozada”.

El viernes 17 de octubre, el vicepresidente del Gobierno del MNR, Carlos Mesa, juró como presidente en reemplazo de Sánchez de Lozada, quien huyó a Estados Unidos dejando a un país enlutado, pero con la esperanza de construir un nuevo Estado y una nueva sociedad.

Mesa asumió el mando con la llamada agenda de octubre: nacionalización del gas, Asamblea Constituyente y nuevo Estado. Sin embargo, su falta de decisión para inclinarse por los marginados y querer mantener equilibrios en un momento que daba para jugarse, le costó el mando. Fue asfixiado por los dos extremos: por un lado, la extrema derecha que

El Potosí, 18 de octubre de 2003

Goni y sus ministros escaparon a Miami

Luego de escuchar la aprobación de su renuncia por el Congreso Nacional y la posesión del nuevo Presidente de la República, el ex mandatario Gonzalo Sánchez de Lozada partió anoche rumbo a Estados Unidos en un vuelo comercial del Lloyd Aéreo Boliviano. El ex presidente, en medio de gran incertidumbre, llegó a las 19:10 al aeropuerto internacional Viru Viru y permaneció por cuatro horas en el salón Vip, a la espera del avión que lo trasladó hasta Miami cerca de las 22:45 de ayer. Viajó con su familia y tres de sus ex ministros.

Debido a la fuerte custodia policial en el aeropuerto, ningún medio tuvo acceso al preembarque, sino que únicamente los trascendidos daban cuenta de lo que ocurría dentro de la terminal aérea.

había sido desplazada del poder, y la extrema izquierda que exigía el nacimiento del nuevo Estado cuanto antes. Para peor, Mesa tenía Palacio, pero no el poder. Asumió el gobierno con el Congreso donde predominaban los diputados y senadores cuyos partidos habían sido expulsados por las masas movilizadas.

Pese a esta adversidad, en la gestión de Mesa se reformó la Constitución, en la que se incluyó la Asamblea Constituyente y el referéndum. No obstante, no pudo concluir el período que le restaba. El referéndum sobre el gas no fue suficiente; su gestión avan-

zaba a diez kilómetros por hora, la historia a 100.

Al final Mesa tuvo que renunciar a su mandato en julio de 2003, agobiado por las presiones; lo reemplazó el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien tuvo como misión solamente organizar las elecciones nacionales de diciembre de 2005.

Cuando el MAS ganó aquellas elecciones, en realidad lo que estaba ganando era el advenimiento de un nuevo tiempo, que comenzó a ser cronometrado desde 1990 con la primera marcha indígena, que exigía “algo así como un proceso de cambio”.

La crisis golpea las puertas

Fernando Molina

La economía de los 90 tuvo a la estabilidad como su emblema. No obstante, la sombra del déficit fiscal dio lugar a una serie de medidas que determinaron no sólo la situación económica, sino también la política.

Los 90 fueron un tiempo de estabilidad y crecimiento constante pero reducido. Las tasas de inflación y devaluación del período fueron bajas, lo que aumentó las reservas internacionales (que superaron los 1.000 millones de dólares en 1997). El producto creció en alrededor del 4% anual, una tasa que sólo mejoró en dos puntos en 1996, el año en que llegaron al país los 1.600 millones de dólares atraídos por la capitalización de las empresas estatales.

En este período, por primera vez desde el siglo XIX, el país no dependió completamente de los recursos no renovables (porque no los había o cotizaban poco en los mercados

internacionales) y cobraron importancia las exportaciones “no tradicionales” (que llegaron a igualar a las exportaciones de minerales y gas), así como el consumo interno.

Los especialistas de la época atribuían la lentitud del crecimiento a las restricciones de liquidez, dada la prohibición de que el Banco Central prestara dinero al Gobierno, la falta de financiamiento internacional privado como consecuencia de la moratoria de la deuda de la década anterior y el rescate de varios bancos durante la primera mitad del decenio del que hablamos, que dejó al Estado obligaciones por cientos de millones de dólares.

El objetivo principal de la política económica durante este período fue evitar el aumento de precios, así como una devaluación

súbita del boliviano, con el fin de mantener la confianza del público y crear condiciones atractivas para la inversión privada, considerada clave para resolver las restricciones financieras mencionadas. Esta política logró aumentar la inversión en los sectores más competitivos de la economía, pero sólo hizo una gran diferencia en el área petrolera, a la que entraron reputadas compañías internacionales que, hacia fines de la década, descubrieron importantes yacimientos de gas. Con ello, el equilibrio entre extracción y actividades “no tradicionales” se rompería de nuevo en los siguientes años.

Los bancos subieron sus tasas de interés por encima de las tasas internacionales y lograron repatriar una cantidad significativa de dinero, el cual prestaron a sus clientes a precios también altos, mayores a

los que éstos podían pagar en las condiciones económicas señaladas. Así se formó una “burbuja” bancaria (préstamos que se pagaban con más préstamos) que estallaría con la crisis que cerró el decenio.

Esta crisis fue provocada por el crack bursátil asiático de 1998, que golpeó los precios de las materias primas de las nuevas exportaciones bolivianas (soya, joyería, madera, etc.). Los inversionistas huyeron de los mercados emergentes, lo que obligó a Brasil a compensar la falta de capitales con una devaluación; ésta, a su vez, regó de productos brasileños el mercado boliviano, arruinando a los manufactureros nacionales.

Al mismo tiempo que el sector agropecuario veía caer sus ingresos por ventas en el extranjero, se produjo una seguidilla de desastres climáticos que terminó reventando la burbuja

La Razón, 3 de abril de 2002

Datos del censo de 2001

En los últimos 50 años, la población boliviana se ha multiplicado por cinco veces. El gran salto en términos absolutos se da con los últimos datos. De 1992 a 2001, la población subió en 1.853.533 personas.

En diez años la población creció en 1,8 millones: la población boliviana llegó en 1992 a 6.420.792 habitantes; y en 2001 muestra una población de 8.274.325 personas, cuyo incremento en el período intercensal -1992-2001- es de 1.883.533.

Este incremento se da en el área urbana, porque el 80% del incremento se presenta en el área urbana y solamente el 20% en el área rural.

Santa Cruz le saca una buena ventaja a La Paz: de 1950 a 2001 la población de Santa Cruz creció diez veces, la de La Paz sólo tres. Mientras La Paz aumentó de 1992 a 2001, 450 mil personas; Santa Cruz aumentó 650 mil.

“Es por eso que Azul Azul borró a Savia Andina y compite fuertemente con los Kjarkas”, dijo Carlos Toranzo.

bancaria: la mora de los préstamos aumentó tres veces en dos años: de 4,6% en 1998 a 12,1% en 2000.

El Gobierno de entonces, que presidía Hugo Banzer, escaldado por lo que había sucedido a principios de los 90, obligó a los bancos a asimilar estas pérdidas. Esto redujo el crédito y la liquidez del país de manera significativa: el flujo de dinero que iba de la banca al sector privado se tornó negativo, es decir, las instituciones financieras cobraron más de lo que prestaron.

El Banco Central quiso restablecer el crédito aumentando la liquidez de los bancos, pero no logró su propósito porque estos fondos no llegaron al público: los banqueros los invertían en los mercados del primer mundo, donde los intereses habían aumentado por la corrida de los inversionistas de los países emergentes. Como los principios económicos vigentes entonces impedían que el Estado los obligara a actuar de otra forma, el problema quedó sin solución.

Este ejemplo muestra que el respeto a los preceptos neoliberales de la época redujo el arsenal con que contaban las autoridades económicas para resolver la crisis.

El panorama se agravó en 2000 con la desvalorización bursátil de las empresas “punto.com”, que puso fin a un decenio de crecimiento económico casi ininterrumpido y llevó al mundo al borde de la recesión.

Con la crisis, el crecimiento del producto se hizo menor que el aumento de la población. Por esta ra-

zón, el PIB per cápita cayó de los 900 dólares en que estaba situado en 1998 a 858 dólares en 2003. Este año, además, el desempleo llegó a afectar a entre el 10% y el 12% de la población económicamente activa.

LA CRISIS DEL DÉFICIT

En los primeros dos tercios de la década, por el limitado crecimiento, los ingresos del Estado fueron consistentemente inferiores a sus gastos. En 1994-1995 se produjeron los déficits fiscales más pequeños, de menos del 2% del PIB, gracias al congelamiento pre-capitalización de los presupuestos

La Razón, 16 de octubre de 2003

Octubre de 2003. Los mercados abren, pero los precios suben hasta en 100%

La oferta de huevos va de 0,50 bolivianos por unidad a 1 boliviano. La carne escasea en el mercado Rodríguez, pero en el mercado Miraflores y en el Yungas mucha gente adquirió el producto a 22 y 30 bolivianos el kilo.

No hay precios fijos para los productos, pero ayer nadie se dio el lujo de buscar ofertas, porque en varios puestos se formaron colas para adquirir principalmente huevos y carne.

Las conservas y las galletas fueron los abarrotes opcionales más requeridos. Los precios de estos productos también subieron.

Los mercados permanecieron cerrados desde el lunes; el domingo la gente compró lo que pudo. Las vendedoras no garantizan nada para mañana.

de las empresas públicas. Pero no hubo superávit. Y desde 1997 el Estado sintió con agobio la obligación de pagar las jubilaciones que se había impuesto a sí mismo, como resultado de la reforma de pensiones que este año liberó de esta carga al nuevo fondo previsional, formado por primera vez por ahorros individuales.

Esta obligación fue creciendo hasta llegar a ser, en 2003, un 5% del PIB. Por esta razón los gastos estatales, que equivalían al 40% del producto interno antes de la capitalización, siguieron teniendo el mismo tamaño después de esta medida (lo que contribuyó significativamente a su fracaso).

Además, los ingresos también bajaron. Antes del gobierno de

Banzer ya se había creado el “régimen simplificado” de tributación y se subvencionaba el gas licuado; pero este Gobierno congeló el precio de la gasolina y el diésel (2000), lo que costó al Estado 100 millones de dólares por año hasta 2003, cuando el repunte de la economía encareció el subsidio aún más (en 2011 fue de alrededor de 500 millones). Además, como es lógico, la crisis disminuyó las recaudaciones impositivas en todos los órdenes.

En el peor momento, 2002 y 2003, el déficit llegó al 9% y al 8% del PIB, respectivamente. El 75% lo explicaban los gastos por pensiones y la subvención a los carburantes. Estas cifras explican concisamente las turbulencias políticas de estos años.

La responsabilidad de financiar estos huecos recayó en la deuda externa: 4.650 millones de dólares en 1998, 4.300 millones en 2002, como resultado de los programas de alivio HIPC, y el récord de 4.700 millones de dólares (55% del PIB) en 2003.

Por otra parte, la deuda interna (contraída por el Estado con los ciudadanos) creció de 1.055 millones de dólares, en 1997, a 2.170 millones, en 2002. Este aumento se debió especialmente a la compra obligatoria de bonos del Tesoro por las administradoras de pensiones, operación que se usó para recolectar los fondos necesarios para pagar las pensiones. De esta manera, los trabajadores activos siguieron financiando a los jubilados, aunque ya no directamente, como en el pasado, sino a través del aumento de la deuda interna.

La Razón, 7 de mayo de 2003

Uno de cada 10 bolivianos ya tiene un teléfono celular

Los clientes de la telefonía celular son cada año más. Un último informe del Instituto Nacional de Estadística y de la Superintendencia de Telecomunicaciones señala que hasta diciembre de 2002 uno de cada diez bolivianos ya tiene un celular.

El significativo crecimiento se explica en parte por la apertura del mercado, tres empresas en franca competencia (Telecel, ENTEL y Viva) y por las ofertas que cada una de ellas realiza. Sobre todo el sistema pre-pago que masificó el uso de este instrumento de comunicación. El servicio de la telefonía celular está a punto de dejar atrás, en número de usuarios, a la telefonía fija, en la que tres de cada diez bolivianos están registrados.

La deuda externa era concesional, es decir, estaba formada por préstamos con tasas de favor, concedidos por los organismos internacionales y los países amigos. Éstos, sin embargo, esperaban a cambio que se controlara del déficit fiscal, por lo que la política oficial del gobierno de Banzer y, luego de la renuncia de éste, del de Jorge Quiroga (2001-2002) fue la austeridad: mejorar la inversión pública sacando plata del gasto corriente, a fin de no incrementar el déficit.

Durante estos críticos años, el debate sobre el déficit dividió a los economistas en dos “partidos”: el “partido del gasto” planteó medidas keynesianas para reactivar la economía, sin importar si para ello el Estado debía endeudarse más o echar mano de las reservas internacionales (estos economistas estaban en la oposición, es decir, en la órbita del MNR, hasta 2002); el “partido del recorte” quiso mantener la deuda bajo control, como exigían los organismos internacionales. Por lo general, los economistas del recorte estaban vinculados al gobierno ADN-MIR.

El reparto de papeles, sin embargo, cambió luego de las elecciones de 2002. Si antes de ellas Gonzalo Sánchez de Lozada proponía “renegociar el déficit fiscal con el FMI, gastar más y aumentar la demanda de la economía”, ya en el gobierno acordó con este organismo una disminución del déficit esperado para 2003 a un 6% del PIB (en la práctica éste fue, como hemos dicho, de 8%).

Las reservas internacionales cayeron de los 1.066 millones de dólares de 1997 a los 854 millones de 2002. Esto se debió a que el crédito del Banco Central al sector público, que, en cumplimiento de la receta de estabilización, había sido negativo de 1985 a 1999, se reanudó a causa de la crisis. Por ejemplo, en 2002 ascendió a 150 millones de dólares. Ese mismo año, el Banco Central emitió dinero por 48 millones de dólares, así que comenzó a temerse por la aparición de “presiones inflacionarias”, que sin duda se hubieran manifestado en caso de que el déficit, y por tanto la necesidad de crédito interno, hubiera seguido aumentando. Pero no fue así: la crisis acabó como había comenzado, gracias al cambio de las condiciones internacionales, en este caso por el aumento de la cotización internacional de las materias primas.

EL FINAL DE LA CRISIS

La creciente demanda de materias primas, surgida como consecuencia de la renovada prosperidad mundial, mejoró sostenidamente, desde 2003, los términos de intercambio, es decir, la relación entre los precios de aquello que exporta Bolivia y los precios de los bienes que importa. Según la CEPAL, este año estos términos mejoraron en 5% (y continuaron haciéndolo más adelante).

En 2004, el crecimiento comenzó a ser superior al aumento de la población, pese a la caída de la inversión extranjera directa y la inversión privada nacional (que ya era muy pequeña) por los sucesos políticos del año anterior; y

pese a la caída de la inversión pública, todavía lastrada por el problema deficitario del que hablamos más arriba.

Este mismo año el crecimiento mundial fue mayor al 3%, gracias sobre todo al progreso de la economía de Estados Unidos. Latinoamérica reanudó su marcha ascendente (1,5% arriba). En Bolivia, las extraordinarias cosechas de soya, algodón y girasol, sumadas a los mejores precios de estos productos y de otros como el zinc y el oro, y a la duplicación de las exportaciones de textiles a EEUU, todo en conjunto generó un ingreso nacional de más de 1.500 millones de dólares.

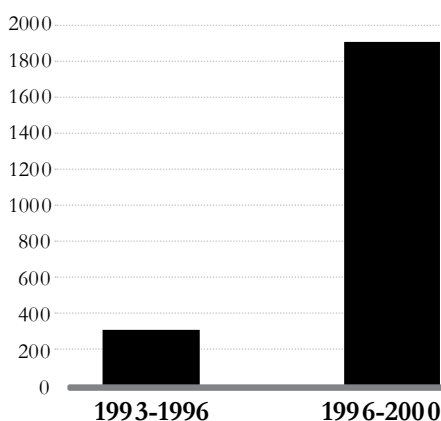
Las recaudaciones tributarias volvieron a adquirir un curso ascendente y disminuyeron la profundidad del hueco fiscal (el déficit cayó a 2,3% del PIB).

EL BOOM DEL GAS

Los años de crisis fueron también, paradójicamente, los de preparación del boom del gas. La capitalización de YPF y las facilidades a los inversionistas contenidas en la Ley de Hidrocarburos 1689, promulgada en 1996, produjeron, como se buscaba, un “shock” de inversiones. En apenas cuatro años éstas se sextuplicaron, como puede verse en el gráfico 1.

Acto seguido, el shock de inversión trajo un gran incremento de la producción. La escalada del gas y el petróleo a fines de los 90 se ve en el siguiente gráfico:

Gráfico 1. Inversiones en hidrocarburos después de la capitalización



Sin embargo, las condiciones establecidas para el reparto de la renta generada por este negocio, muy favorables a los inversionistas, pero poco inteligentes para aprovechar desde el Estado un probable éxito de éstos, impidieron que este crecimiento de la producción aliviara la situación fiscal. Por el contrario, impulsaron la formación de movimientos políticos “antisistémicos” que se lanzaron a la arena en pos de una nueva forma de repartición de la renta y, como vía hacia ella, de la nacionalización del gas.

Fuentes

Juan Antonio Morales (2005): *Las principales políticas del BC en el marco de la Ley 1670*, en BCB, *Historia monetaria contemporánea de Bolivia*, La Paz.

Luis Fernando Salinas, Xavier Lema y Lourdes Espinoza (2002): *La capitalización, cinco años después*, La Paz, Fundación Milenio.

Informe confidencial del período, La Paz, Muller y Asociados.

2000 – 2005 El tiempo de las sublevaciones

Boris Miranda

En el año 2000 el país inició una fase de inestabilidad política y social y fue testigo del ascenso de los grupos sociales contrarios a los partidos denominados “sistémicos” y a las políticas que en Bolivia se llamaron “neoliberales”.

El 9 de abril de 2000 significó la vuelta de las sublevaciones. Quiso la historia que el país se reencuentre con la rebelión exactamente 48 años después de la Revolución Nacional de 1952. Ese sábado, La Paz despertó sorprendida por la noticia de un amotinamiento policial que dejó a la plaza Murillo sin protección alguna. Era 9 de abril de 2000. Mientras los efectivos verde olivo exhibían su armamento atrincherados en sus inmuebles, colectivos civiles desafiaban el orden establecido marchando frente al Palacio del Gobierno con wiphalas y banderas con el rostro del Che Guevara. Exigían un aumento salarial y se habían amotinado.

Algunos aprovecharon la oportunidad para desinflar las llantas de los vehículos parqueados de los ministros. Otros entonaron el Himno Nacional con el puño izquierdo en alto. No faltaron los grafitis sobre el asfalto en repudio al gobierno de Hugo Banzer. Hojas de coca eran compartidas en mitad de la plaza entre jóvenes activistas y uniformados sublevados. Después se encendieron fogatas para que la noche o los gases lacrimógenos no sorprendan. Los símbolos de la rebelión, casi invisibles durante años, habían recuperado las calles.

Sin embargo, el desafío de los policías al Ejecutivo era lo de menos. En esas mismas horas, en Cochabamba, se vivía la primera batalla contra el orden hegemónico vigente. La “guerra del agua” fue la inauguración del ciclo de las sublevaciones con las que nació el milenio.

INESTABILIDAD

A finales de los años 90 empezó a ser cada vez más evidente el cambio en la correlación de fuerzas políticas. Los partidos que representaban posiciones liberales en lo económico y conservadoras en lo político empezaron a verse rebasados por los movimientos sociales y de partidos de izquierda que buscaban un cambio radical en la forma de conducir el Estado.

El país inició una fase de inestabilidad política y social y fue testigo del ascenso de los grupos sociales contrarios a los partidos denominados “sistémicos” y a las políticas que en Bolivia se llamaron “neoliberales”.

Decimos que la sociedad boliviana se polarizó al concluir el “consenso” respecto al neoliberalismo. Esa polarización se dio entre posiciones

ligadas a los movimientos sociales (demandas de nacionalización, de cambio de las políticas sobre los hidrocarburos, de crítica a los partidos denominados “sistémicos”, etc.) y a los grupos económicos y partidos de derecha (evitar ahuyentar a las inversiones, mantener al Estado fuera de las empresas productivas, respaldar al sistema de partidos).

Ese choque se produjo en las calles y carreteras (con saldos lamentables de muerte y represión) y tuvo su desenlace en los comicios de diciembre de 2005, cuando se produjo finalmente uno de los cambios políticos más grandes de la historia contemporánea boliviana.

Esa nueva conformación política tuvo también una nueva correlación de fuerzas regional. Ese fenómeno ya se había notado con claridad tras las

La Prensa, 25 de agosto de 2002

Sánchez y Eid reparten las pegas en el Poder Ejecutivo

Las pegas están en manos de Carlos Sánchez y Óscar Eid. Ambos dirigentes forman parte del equipo de coordinación nacional del MNR y el MIR y son quienes le dieron el visto bueno final a la lista de viceministros y directores generales. En los ministerios es un secreto a voces. Los “buscapegas” comentan que para asegurar un espacio en algún cargo jerárquico es imprescindible la firma de ambos dirigentes.

“¿Quién le ha dicho eso?”, preguntó el ministro de la Presidencia, Carlos Sánchez Berzaín, cuando La Prensa le consultó si era cierto que su firma tiene gran

peso al momento de distribuir los espacios en la administración pública. No fue posible hablar con Óscar Eid, quien apagó su teléfono celular y no respondió a los mensajes. Sin embargo, el movimientista admitió que él y Eid forman parte de la comisión de coordinación interpartidaria, que es la que da el visto bueno a las designaciones.

Aclaró que las nominaciones parten de cada uno de los ministerios, desde donde son enviados a la comisión de coordinación, que realizará el análisis correspondiente.

elecciones del año 2002: en los departamentos de lo que luego se llamó la “media luna” (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija) vencieron los partidos denominados tradicionales (MNR y MIR), mientras que en los de occidente del país venció el MAS. El eje regional, que en Bolivia se superpone al eje étnico, había dividido al país claramente en dos: unas regiones orientadas hacia posiciones políticas de cambio, encarnadas en Evo Morales, y otras hacia posiciones conservadoras, encarnadas entonces principalmente en la candidatura de Gonzalo Sánchez de Lozada.

La regionalización de la política se mantuvo en los años posteriores, pero con un matiz: el MAS amplió su poder en los departamentos andinos y penetró también en los de la “media luna”, mientras las posiciones conservadoras perdieron terreno en casi todo el país, excepto en las regiones urbanas de aquélla.

Al derrumbarse además el sistema de partidos vigente hasta los comicios de 2005, lo que sucedió es que la oposición ya no se centró en el Parlamento (excepto en intentar bloquear iniciativas legislativas en el Senado, que controlaba), sino en las regiones, especialmente en Santa Cruz. [Y es el Comité Cívico de ese departamento el que lideró esa oposición, oponiéndose a las acciones más importantes del gobierno del presidente Morales. Esa estrategia estuvo vigente hasta el 11 de septiembre de 2008, cuando se produjo la denominada masacre de

Porvenir, cuando murieron 11 campesinos supuestamente emboscados por fuerzas leales al ex prefecto de Pando Leopoldo Fernández y dos funcionarios de esa repartición. Una vez que el Gobierno detuvo a Fernández, se eliminó la “resistencia regional” y la gestión de Morales logró avanzar con menos obstáculos; esa nueva fase se inició con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado por parte del Parlamento].^{1[1]}

LA DEMOCRACIA DEL AGUA

“Un 9 de abril entramos a Semapa (Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado), derrotando a la Policía del gobierno de Banzer, después de velar a Víctor Hugo Daza. Apoyándonos en cientos de puntos de bloqueo en la zona urbana y en los valles, expulsamos de nuestro suelo, de manera contundente, a una de las más rapaces corporaciones transnacionales que existen. Echamos a andar en aquel año el camino de nuestra propia autodemocracia”, recuerda la activista y ex guerrillera del EGTK Raquel Gutiérrez en el libro *Nosotros somos la Coordinadora*, que varios de los denominados “guerreros del agua” escribieron hace cuatro años.

La plataforma civil que agrupó a fabriles, regantes, la Central Obrera Departamental y otros sectores había sido concebida como un primer intento de organización autogestionaria y horizontal. Es así que cuando Óscar

^{1 [1]} *Los canales en cuestión*, Peñaranda, Raúl, FES-Ildis, 2008.

Olivera y la primera línea de voceros (no dirigentes) fueron detenidos por la Policía, pudieron ser relevados de inmediato por otro grupo de activistas.

La muerte de Daza, de apenas 17 años, terminó de precipitar la movilización. Un medio de comunicación captó las imágenes de un militar vestido de civil que actuaba como francotirador. Aguas del Tunari, nombre que adquirió en Bolivia la conocida multinacional Bechtel, fue expulsada y la Ley de Aguas tuvo que ser modificada de manera integral. La administración Banzer, que llegó a dictar un infructuoso estado de sitio en esos días, no

pudo contener el descontento social que reflejaban las acciones de la Coordinadora del Agua y de la Vida.

Todavía bajo las medidas de excepción, el músico francés Manu Chao llegó al país y convirtió su concierto en un abierto desafío a las disposiciones tomadas por el Gobierno.

EL CERCO DE SEPTIEMBRE ROJO

Llegó el turno de los indígenas. La estrategia del “sembrado de piedras” de las bases del secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia

La Prensa, 13 de febrero de 2003

Saqueos en febrero de 2003

A las 16:30, mientras los medios de comunicación empezaban a consultar a los sectores sociales su parecer sobre el retroceso gubernamental, varios de éstos respondieron que ya no les interesaba el “impuestazo” sino la renuncia del Primer Mandatario. De esa forma, salieron a la calle grupos de gente del pueblo, especialmente conformados por jóvenes universitarios tanto de La Paz como de El Alto, e incluso personas con apariencia de oficinistas.

El primer ministerio blanco de la ira de la manifestación fue el de Trabajo, de donde prácticamente toda su documentación fue destruida por el fuego. Luego, a las cinco, el grupo avanzó hacia la Vicepresidencia, donde se resguardan importantes documentos originales de la historia de Bolivia. La Prensa constató que dentro de ambos inmuebles se desataron incendios

en cada piso y oficina, lo que contribuyó a hacer infernales las llamas desatadas e insoportable la respiración por el humo que se levantaba. Otro grupo de gente se dirigió al Ministerio de Desarrollo Sostenible. Allí forcejearon durante casi media hora las grandes puertas de metal que dan ingreso a esa dependencia. Finalmente lograron quebrar la resistencia del metal. Luego arrastraron a la calle dos automóviles para incendiarlos. El mobiliario y bienes tuvieron el mismo destino.

Aproximadamente a las seis de la tarde, el Tribunal Militar y el Viceministerio de Hacienda también fueron pasto del fuego. Para agravar ese panorama, dos automóviles fueron colocados en la puerta de cada una de esas dependencias y luego procedieron a incendiarlos. El humo nubló La Paz.

(CSUTCB), Felipe Quispe, *El Mallku*, había sido perfeccionada en los meses anteriores y septiembre sería el momento de revivir el cerco de Túpac Katari de 1781.

Con la ruta troncal cerrada por los coccaleros y todas las demás salidas de La Paz bloqueadas por las bases de *El Mallku*, a la sede de Gobierno sólo entraban aviones. El desabastecimiento de la ciudad ya era indisimulable.

“En Achacachi hemos destruido todos los poderes estatales, ya no había juez, ya no había Policía, no había Tránsito, no había [sub]prefecto, ya no había nada. Todo indio. Y lo administraban los dirigentes del lugar. El levantamiento de Achacachi es la toma del poder total. El policía trae ladrón; el Ejército, guerra y el subprefecto, corrupción”, afirmó Quispe en aquellos días. Después, frente a los ministros de Hugo Banzer, no dudo en negar a Bolivia y anunciar el retorno a los tiempos del Qullasuyo.

La retórica blanco-indio o q'ara-originario que manejaba *El Mallku* descolocaba a las autoridades gubernamentales al punto de que varios de ellos se salieron de sus cabales cuando el dirigente pidió hablar con Banzer “de presidente a presidente”. Quispe había militado en el indigenista Ejército Guerrillero Túpac Katari en la década anterior y apeló al discurso indigenista mucho antes que Evo Morales.

Achacachi y buena parte de la provincia Omasuyos se convertirían en la principal trinchera del movimiento indígena de tierras altas. A través de los bloqueos de camino, le arrebatarían al Estado programas de desarrollo y otros

beneficios como una dotación de tractores para los sindicatos agrarios.

El cerco de septiembre rojo y el posterior de junio del año siguiente apenas serían los ensayos generales del bloqueo que asfixiaría a Gonzalo Sánchez de Lozada unos años después.

LOS MOVIMIENTOS, A LAS URNAS

El Movimiento Indígena Pachakuti, con *El Mallku* como principal candidato, y el Movimiento Al Socialismo sorprendieron en el proceso electoral de 2002. El partido de Quispe fue invencible en el altiplano y llegó al 6% de los votos a escala nacional. Evo Morales superó la franja del 20% y por primera vez estuvo habilitado para disputar la Presidencia a Gonzalo Sánchez de Lozada en la votación congresal.

El 3 de agosto de ese año, en la sesión inaugural del Congreso, la mayoría de los parlamentarios elegiría a Goni como presidente. Sin embargo, por primera vez existía una cantidad significativa de parlamentarios (41 de 157) que provenían de organizaciones indígenas, sindicales o campesinas. Entre trajes originarios y cascos mineros, usando sus idiomas nativos, los nuevos parlamentarios, uno a uno, fueron haciendo uso de la palabra. Desafiantes anunciaban que el Poder Legislativo nunca más sería un espacio reservado para la clase política ciudadana.

El Mallku regaló coca a los representantes del Movimiento Nacionalista Revolucionario antes de amenazarlos. “Si no nos hacen caso, sacaré una piedra de debajo del poncho y

saldré a pelear con mi gente a las calles”, advirtió Quispe.

Los movimientistas y sus aliados miristas fueron los primeros testigos del advenimiento de la nueva forma de hacer política en el país. Lo que no se lograría en el Parlamento se obtendría fuera de él. “Venimos a este lugar a trabajar, queremos que lo que el pueblo pide se cumpla, sin pelear. Aunque si quieren, también eso vamos a pelear. Si no nos respetan, bloquearemos el Congreso”, amenazó el diputado qaqachaca Roberto Copa en aquella oportunidad. El flamante legislador habló en aymara, quechua y español.

Casi 28 horas después de esa maratónica sesión, Gonzalo Sánchez sería elegido presidente de la República. “Goni tendrá que pedirnos permiso hasta para ir al baño”, anticipó el parlamentario masista Félix Santos.

OCTUBRE

Las ollas comunes eran insuficientes para distribuir el almuerzo entre todos los vecinos movilizados en la ciudad de El Alto. Tampoco quedaba vinagre ni bicarbonato para combatir los efectos de los gases lacrimógenos. Sin embargo, la decisión tomada era radicalizar medidas hasta lograr la renuncia del Presidente.

En la víspera de ese lunes 13 de octubre, 20 personas murieron en el operativo militar que desplegó el

Gobierno para asegurar la provisión de gasolina a La Paz. Las cisternas y las tanquetas se abrieron paso desde Senkata gracias a las armas de fuego que rompieron los cercos humanos. Aquella acción fue conocida como el “convoy de la muerte”.

Un día después, la respuesta sería volar la planta de gasolina de Río Seco y masificar las movilizaciones. Desde Oruro y Potosí los mineros marchaban hacia la sede de Gobierno y los aymaras del altiplano dispusieron multiplicar los puntos de bloqueo. Ya no eran suficientes la anulación del proyecto Pacific LNG de exportación de gas boliviano a través de un puerto chileno o la convocatoria a la Asamblea Constituyente. El reclamo era la salida de Gonzalo Sánchez de Lozada de Palacio de Gobierno. Más de 40 personas ya habían muerto a esas alturas. 67 serían las bajas por el levantamiento de octubre, que terminó en la huida del Mandatario.

La noche del 17 de octubre, la plaza de San Francisco fue el escenario de la celebración popular. La Paz despidió como héroes a los mineros que retornaban a sus distritos en camiones. Al día siguiente, los alteños anunciarían el nacimiento de la agenda de octubre: nacionalización de los hidrocarburos y nueva Constitución Política del Estado. Si el mandato no se cumplía, volverían a las calles. Y así fue...

El inicio de un proceso sin retorno

Abdel Padilla

Si hay algo que caracterizó el primer lustro de la década del 2000 fue la saturación de hechos sociales con consecuencias políticas. La “guerra del agua” es el inicio del fin de una era de pactos políticos poco transparentes y prebendales.

De las “guerras” sociales que se vivieron en Bolivia en el siglo XXI, dos se libraron entre 2000 y 2005: la del agua y la del gas. Ambas hincan anclajes fundacionales de una nueva etapa en la relación entre Estado y sociedad civil, y marcan el inicio de una larga era conflictiva —sólo en ese lustro se produjeron, en promedio, entre 50 y 60 eventos conflictivos mensuales—, que no ha cesado hasta nuestros días, incluso con la asunción a la Presidencia de uno de los líderes de los otrora movilizadados: Evo Morales.

Iniciemos nuestro relato con la “guerra del agua”, que inauguró la década siendo un conflicto coyuntural,

de resistencia, aunque con consecuencias impensadamente mayores.

EL INICIO DEL FIN

La historia comenzó el 4 de septiembre de 1999, con la firma, en Cochabamba, de un contrato que a fuerza de ser aplaudido por las autoridades pasó en general desapercibido por la ciudadanía, aunque no para algunas voces críticas como las del Comité de Defensa del Agua, que sería la base de la histórica Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida, dirigida por Óscar Olivera.

A través de este acuerdo, el consorcio internacional Aguas del Tunari recibió la concesión del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado y de la realización del ansiado Proyecto Múltiple Misicuni, que acrecentó las expectativas de un pueblo

históricamente afectado por la provisión irregular de agua, y al que permanentemente se contentaba con esporádicas perforaciones de pozos.

El anuncio, en enero, de un posible incremento de las tarifas para sustentar el proyecto encendió los ánimos y la chispa se hizo fuego en abril...

El martes 4 de abril de 2000, la Coordinadora demandó la rescisión del contrato y para ello movilizó a regantes, fabriles, maestros y universitarios, entre otros, y a los que luego se sumaron los productores de coca del Chapare.



Ante la negativa gubernamental, en los siguientes cuatro días la protesta se propagó y dejó paralizada e incommunicada a la ciudad. Cuando parecía que la solución se asomaba en los previos de una reunión de alto nivel con la presencia, entre otros, del prefecto, el alcalde, la Iglesia y la Coordinadora, un contingente policial irrumpió en el lugar para detener y casi inmediatamente confinar a los dirigentes de esta última.

El sábado 8, Cochabamba amanece con la noticia del estado de sitio

y se inicia la jornada más violenta del conflicto. En una actitud oportunista, esa mañana estalla en La Paz un motín policial en el Grupo Especial de Seguridad (GES), a una cuadra del Palacio de Gobierno, con el pedido de incremento salarial del 50%.

En el valle, los heridos caen por decenas y la toma de edificios públicos se multiplica. En la tarde, Víctor Hugo Daza Argandoña, de 17 años, pierde la vida de manera instantánea al recibir un impacto de bala en la cabeza. Imágenes de televisión muestran, más tarde, la presencia de un francotirador entre los soldados.

El lunes 10, el Gobierno, debilitado —un día antes había aceptado incrementar el sueldo de los policías en el porcentaje demandado—, cede ante los movilizadores, y en la mañana los dirigentes de la Coordinadora anuncian en la plaza 14 de Septiembre el alejamiento de Aguas del Tunari de Cochabamba. Al poco tiempo, Banzer rompe con su aliado, el prefecto Manfred Reyes Villa.

Alcanzado el objetivo, se esbozó —durante y después del conflicto— un proyecto histórico de recuperación de los recursos naturales, aunque ello no haya formado parte de la propuesta discursiva inicial. El propio Olivera —que con la “guerra del agua” ganó reconocimiento internacional—, ante la constatación de que la administración estatal del agua había fracasado, declaró años más tarde al periódico *Los Tiempos* que “lo que falló fue el control social”.

Como fuere, el movimiento —entendido en el mundo académico como

una insurrección urbana antiprivatizadora— fue el inicio o desató una ola de reacciones sociales en cadena que impactó las costas del sistema político durante el próximo quinquenio.

DE “PRESIDENTE A PRESIDENTE”

El abril cochabambino no tuvo eco en otras ciudades, pero sí en el área rural paceña. Una protesta campesina en Achacachi, liderada por Felipe Quispe, *El Mallku* —otro líder del Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK) y desde 1998 secretario ejecutivo de la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB)—, fue reprimida, dejando decenas de heridos y tres víctimas mortales, entre ellas un capitán de ejército, ejecutado por la multitud indígena.

Sin embargo, aunque relacionados, ambos movimientos son independientes uno del otro, tanto en sus

orígenes como en sus demandas. En el caso campesino, sus pedidos eran concretos: más tractores para el trabajo en el agro, derogatoria de la Ley INRA, anulación del anteproyecto de la Ley de Aguas y la suspensión de la construcción de cuarteles en el Chapare.

Este último punto no es casual y explica, por un lado, la relación y posterior alianza entre Olivera, *El Mallku* y Evo Morales, y, por otro, el bloqueo nacional de caminos y cerco a La Paz de septiembre de 2000.

De los tres líderes sociales, se destaca claramente *El Mallku* por su discurso y la firmeza de su enunciación retórica, cuando, en el manifiesto de Achacachi de abril de 2001, le pide a Banzer hablar de “presidente a presidente”. “Creíamos que podíamos iniciar la toma del poder desde los ayllus”, dirá más tarde en declaraciones a La Razón.

También en 2001, estalla una ola de conflictos por la tenencia de la

La Razón, 16 de octubre de 2004

La dama de la poesía y la docencia falleció ayer

La próxima semana las cenizas de Blanca Wiethüchter serán esparcidas en el lago Titicaca. La escritora paceña murió anoche víctima del cáncer. Además de la poesía, dos eran las pasiones de la escritora Blanca Wiethüchter: la ciudad de La Paz, donde nació el año 1947, y la obra del escritor Jaime Saenz, su inseparable amigo y cómplice en las letras y la bohemia. Anoche, la autora de “Asistir al tiempo” y “La piedra que labra otra piedra” falleció a la edad de

57 años en su casa de Cochabamba, víctima del cáncer.

Wiethüchter, que temía al atardecer y que “habitaba un jardín de palabras que han dejado de nombrarme”, pidió antes de morir que su cuerpo sea incinerado y que sus cenizas sean esparcidas a lo largo del lago Titicaca.

La ceremonia, según anunció anoche la familia de la escritora, se realizará la próxima semana con la presencia de amistades y personalidades del ámbito cultural del país.

tierra y el fracaso de la Ley INRA, que reconoce la solicitud de Tierras Comunitarias de Origen, pero no las titula ni cumple con el proceso de saneamiento.

En resumen, a decir de Soto, en 2001 las protestas asumen forma de acción directa, pero sin que los hechos sociales se cristalicen en un proyecto político específico. Lo que sucederá recién entre 2005 y 2006. El nuevo sujeto social –impulsado, entre otros, por las ONG– es el campesino, mientras que el obrero aún siente el impacto de 15 años de neoliberalismo.

AFLOJAR LA CUERDA Y FIJAR LA MIRA

Por ser electoral, 2002 fue un año estrictamente político. De Quiroga a

La Prensa, 20 de febrero de 2002

En la calle Honda los cuerpos flotaban entre los témpanos

“Dios no va a querer que algo ocurra”, le insistía el dueño de la relojería Suiza a su hija. La joven, con el rostro gris por el frío y gimiendo con insistencia, le pedía a su padre que volviera a la tienda para rescatar su mercadería. “La vida es importante, dicen”, le replicaba angustiado. Minutos antes, el comerciante había sido desalojado de su tienda en la calle Mercado por un par de policías, en previsión de más derrumbes. Eran las cinco y media. Ya hace dos horas que la mayor parte de las personas que se encontraban en los edificios de la calle Honda habían sido evacuadas por la Policía y por un grupo de voluntarios que transitaban en el momento de la granizada, a eso de las tres de la tarde.

Sánchez de Lozada, cuando debió haber sido de Banzer a este último, pero la dramática muerte del general –en mayo– cortó la correa natural de esta sucesión. Pero ha de destacarse lo de “político” y “electoral” por la insospechada votación de Evo Morales y Felipe Quispe, que explica, por un lado, la alquimia imposible de la coalición gobernante MNR-MIR, pero adelante, por otro, a través de la significativa bancada de cocaleros e indígenas, lo que estaba por venir un año más tarde.

En consonancia con ello, tres fueron los temas sociales para considerar esos días: tierra, coca y gas. El primero, cruzado por la estructura propietaria del agro, que entre octubre de 2001 y noviembre de 2002 dejó 11 muertos: seis en Panantí y cuatro en Yapacaní, entre campesinos –la mayoría– y dueños o “señores” de la tierra.

“Coca cero”, la ingenua herencia que recibió Tuto Quiroga, fue la consigna que derivó en la muerte de dos soldados y un campesino como consecuencia de la decisión presidencial de cerrar, en enero de 2002, el mercado legal de la hoja de Sacaba. Esta acción explica, en parte, los 35 diputados del MAS en las elecciones de ese año.

Y finalmente gas porque, más allá del negocio –que es explicado en otro capítulo de este libro–, importa la repercusión social y de rechazo a algo que entonces parecía inminente: la exportación del hidrocarburo por puertos chilenos.

Éste es el prelude de lo que vendría y la razón por la que los primeros meses de Sánchez de Lozada fueron de pausa, de una tregua no pactada y

con aires de una paz engañosa. Unos y otros, coccaleros y campesinos, esperaban pacientemente, como quien afloja la cuerda del arco antes de fijar la mira.

Como aves de mal agüero, dos eventos climatológicos inéditos rompen la rutina: el 19 de febrero una tormenta de 40 minutos, en La Paz, se lleva 69 vidas; y en julio, 96 horas de nevada aíslan a toda una región norpotosina.

DE FEBRERO A OCTUBRE

Y la tregua concluyó. Le puso fin el propio gobierno del MNR en febrero de 2003 al decretar un impuesto a los salarios, el famoso “impuestazo” —cuyo fin era cubrir el déficit estatal—, que hizo que la clase media cierre filas en torno a los reclamos y marchas de protesta de los movimientos sociales. Como hicieran con Banzer —y luego con el propio Morales—, los policías del GES se amotinaron y las entidades públicas quedaron sin custodia y a expensas de los movilizados. Entre el 12 y 13 de febrero quemas de edificios y saqueos a privados obligaron al Gobierno a sacar a los militares, con un saldo previsible luego del intercambio armado con los policías amotinados: 31 muertos y un centenar de heridos.

Lo que vino a continuación no es una nueva tregua sino la sensación que causa una frase que desde entonces se convertiría en la preferida de los medios: tensa calma. Y fue *El Mallku* quien rompió una vez más el equilibrio, con un bloqueo campesino de caminos el 2 de septiembre. Éste fue violentamente interrumpido por una medida que desataría el enojo y

la indignación general: el asesinato de cinco personas, entre ellas una niña aymara de ocho años, en el intento de desbloquear la vía para el paso de un grupo de turistas por la población paceña de Warisata. Si bien el propio *Mallku* admitió después que fue él quien ordenó la “emboscada”, el choque fue desigual: armas del Ejército contra unos pocos y viejos máuser de 1952.

El resto de la historia es una secuencia de hechos que desde Warisata —y quizás desde febrero negro— sólo parecían tener una salida y un fin: el cambio del sistema político de poder, representado esos días por Sánchez de Lozada.

Al grito de “El Alto de pie, nunca de rodillas”, los alteños habían logrado frenar la aplicación de dos formularios de impuestos, el Maya y el Paya, que supuestamente simplificaban el registro de la compra de bienes inmuebles, y el dirigente vecinal de esa ciudad Roberto de la Cruz había iniciado el 2 de septiembre, en Caracollo, una marcha por la defensa del gas, ante la versión, luego confirmada, de que todo estaba preparado para la exportación del hidrocarburo a Estados Unidos a través de puertos chilenos.

Dirigentes vecinales, mineros de Huanuni y universitarios fueron los primeros en congregarse en El Alto el 9 de octubre para cerrar un cerco total a la ciudad de La Paz. Entre el sábado 11 y el lunes 13, más de 70 personas murieron en enfrentamientos con los militares, que intentaron restablecer el orden y desbloquear las vías. Ese día, el 13, el vicepre-

sidente Carlos Mesa se desmarca del Gobierno y cuatro días después, el 17, Sánchez de Lozada dejaba el país y salía a Estados Unidos.

El mismo día Mesa asumió como presidente, por una corta gestión: un año y dos meses. La medida más importante de su presidencia, producto de los sucesos del último lustro, fue la reforma constitucional que reconoce el referéndum y la Asamblea Constituyente. De hecho, llevó adelante el primer referéndum de gas por mar el 18 de julio de 2004, con lo que inaugura un nuevo tipo de participación ciudadana directa.

2004 y 2005 fueron años ya no de tregua sino de transición. El primero de ch'aquí, con el movimiento social recuperándose de la resaca de octubre de 2003, y el segundo marcado por un

concepto tan fuerte como el de Asamblea Constituyente: “autonomía”.

Ambos conceptos se tornarían en los pilares de la nueva agenda política y social nacional, y será el primer presidente indígena del país, Evo Morales, el responsable de llevarla adelante.

Fuentes:

Daroca Oller S. *La Guerra del Agua, protesta y acción social en Cochabamba*, tomado de http://idh.pnud.bo/usr_files/informes/nacional/INDH2002/documentos/guerragua2002.pdf

La Razón (2007): *25 años de democracia*. La Razón, La Paz-Bolivia.

La Razón (2010): *Bolivia: 1980-2010*, La Razón, La Paz-Bolivia.

Soto César (2001): *La Bolivia de movilizaciones populares. Panorama político del 2001*, documento elaborado para la Agencia de Cooperación al Desarrollo “Pan para el mundo”.

La Prensa, 10 de abril de 2002

Peruanos se apropian y tergiversan tinku y diablada

Un canal de cable peruano difundió la danza del tinku como propia, lo cual derivó en una protesta formal del alcalde potosino, René Joaquina, ante el Viceministerio de Cultura, que aún no reacciona ante el reclamo. Entretanto, peruanos en

París bailan la diablada mezclando ekekos, tobas y gorilas. En carta dirigida al viceministro Antonio Eguino, Joaquina solicita que se realicen gestiones ante las autoridades peruanas para aclarar que el “tinku es verdaderamente potosino”.

En una calle había una barricada de juguetes: había ositos de peluche, triciclos, autitos... fue hecha por los niños del barrio



El año 2000, el Gobierno comete un gravísimo error al lanzar la Ley 2029 y privatizar el agua. Afectaba de manera directa la cotidianidad de la gente. Lo que más aceleró la unidad de la gente fue la actitud de los gobernantes de absoluto menosprecio a la demanda de la gente. El Gobierno de Banzer ignoró y despreció. Este elemento fue catalizador rápido. Se vivió una práctica democrática directa, la asamblea, el cabildo multitudinario, la nominación de una vocería. No había dirigentes, una estructura horizontal, participativa y masiva, donde la gente no solamente deliberaba, sino que decidía y ejecutaba lo que se dictaba en la asamblea. Era un mandato desde abajo para los de arriba, y los de arriba sólo transmitían las decisiones, la gente se sentía feliz porque ejecutaba lo que ellos mismos habían decidido.

El 10 de abril hubo una asamblea de representantes, la gente ya había ocupado la plaza y les propusimos darle un plazo de 48 horas al Gobierno para que la empresa Bechtel se vaya y para que se cambie la ley. Nadie quería comunicar esa decisión al cabildo, todos tenían miedo. Salí empujado al balcón de los fabriles para comunicarles la propuesta, apenas empecé a hablar y la gente dijo: “¡No, ahora se va!”, y la gente empezó a irse hacia las oficinas de Aguas del Tunari. Los representantes tuvimos que salir corriendo del edificio fabril para dar alcance a la cabecera de la manifestación que había tomado la decisión de que se cambien las cosas, fue impresionante cómo la gente decidió en cada momento.

Cuando nos tomaron presos, a los portavoces de la Coordinadora y a un conjunto de representantes vecinales y campesinos,

Óscar Olivera

Trabajador metalúrgico, dirigente obrero de 1980 a 2010. Portavoz de la Coordinadora de Defensa del Agua y de la Vida el año 2000, en Cochabamba.

el 6 de abril en la Prefectura, estaban Filemón Escóbar, Gabriel Herbas y varios compañeros. La gente dijo: “bueno, apresaron a los portavoces, que son la primera línea, pero aquí hay una segunda línea y el conflicto sigue, no necesitamos que estén presentes ellos, el segundo nivel se hace cargo, y si los arrestan, hay un tercer nivel y cuarto nivel, esto va a continuar”. No afectó en lo más mínimo que nos tomen presos, la gente tomó las radios de manera pacífica, entró y tomó el micrófono. Ya no se escuchaban a los periodistas de Cochabamba, sino a la gente que empezó a hablar sobre el agua, esos días fueron un ejercicio democrático en todos los niveles.

Recuerdo que en una zona por el puente de Quillacollo, en una calle había una barricada de juguetes, había ositos de peluche, triciclos, monopatines, autitos, muñecas en toda la calle, hecha por los niños del barrio. Intentando pasar con otro dirigente nos reconocen de la televisión y nos dicen: “ustedes han dicho que el pueblo ha ordenado que nadie debe pasar por ninguna barricada y ustedes no pasan”, y no nos dejaron pasar. Eran niños que habían asumido su rol de ejercicio democrático.

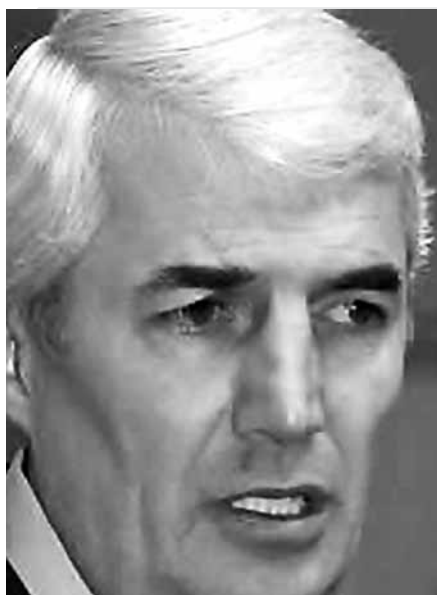
Recuerdo las peleas en el Congreso, obviamente las agresiones y también la participación de algunas ex autoridades, como la de un ex presidente de la Cámara de Diputados que ante su imposibilidad de seguir dirigiendo la sesión dijo: “Estoy opa”. Ésa es una cosa que quedó grabada porque el señor no tenía muchas luces tampoco, hay muchas cosas que se dan en el Congreso. Pero también recuerdo con mucho aprecio y cariño a grandes personalidades como don Benjamín Miguel Harb, que siempre nos daba línea, una actitud de ética a la Cámara o con don Guillermo Bedregal, un político por excelencia pero con una gran capacidad de oratoria, sobre todo de convencimiento. Creo que son personas que también se han destacado en el Congreso.

Los cambios que se vivieron desde 2000 son parte de la realidad boliviana, siempre andamos en una actitud pendular, de un extremo a otro; se habla de que el estatismo no ha funcionado y nos vamos al otro extremo, a un neoliberalismo secante.

Había debates interesantes desde mi posición. Recuerdo a Santos Ramírez, al propio Evo Morales, recuerdo al señor (Jorge) Alvarado. Recuerdo que debatíamos muy fuerte la Ley de Hidrocarburos, que al final el MAS no aprobó porque se tenía una concepción muy diferente de centralismo y de las autonomías. Pero más allá de ello, creo que fue una ley que avanzó un paso más en la recuperación de los recursos naturales y en la redistribución de la riqueza del país para 327 municipios, creo que ése fue un gran debate; hubo muchas disputas, muchas peleas. Santos Ramírez fue uno de los portavoces oficiales de la oposición en ese momento junto al señor (Guillermo) Aruquipa, y nosotros, obviamente, con el senador D’arlach y otras personalidades también aportamos posteriormente a la Ley de Hidrocarburos. Ayudamos en la ejecución y aplicación de este importante instrumento legal.

Generalmente un parlamentario opositor, pese a ser propositivo y constructivo, es opositor, por lo tanto no tiene la llegada a las instancias de mando del Poder Ejecutivo para realizar la

Andamos en una actitud pendular, se habla de que el estatismo no ha funcionado y nos vamos al otro extremo



Fernando
Rodríguez

Químico industrial.
Presidió el Comité Cívico de Chuquisaca.
Dirigente de Acción Democrática Nacionalista, partido con el que llegó a la Cámara de Diputados.
Después fue senador chuquisaqueño con Poder Democrático Social (Podemos).

gestión, que es una de las competencias que tienen los legisladores. En mi caso, he presentado muchos proyectos de ley al propio Evo Morales, pero obviamente muchas de esas leyes no tienen la suerte que las presentadas por “oficialistas”, sin importar que sean de menor calidad o de menor beneficio para la población. Existe una diferencia de ideas y matices entre ser opositor y oficialista, dependiendo de en qué gobierno se está y en qué oposición se está, también para ser equilibrado en el análisis.

La política está para servir a la gente, no para servirse de ella. En ese marco tenemos que aprender todos, los que pasamos por el Parlamento con luces y sombras, y los que

vienen hacia adelante, tenemos que entender que el Estado y los bienes del Estado y la riqueza del país no son propiedad de nadie. Es propiedad de todos en conjunto y de alguna manera tenemos que aprender en Bolivia a que la actitud pendular de un extremo a otro se vaya equilibrando, dando golpes de un lado y a otro y tratar de encontrar un centro democrático que trate de incluir a todos. Eso sería ideal. La actitud política de confrontación daña a las personas y no propone absolutamente nada.



LA GUERRA DEL AGUA

En abril de 2000, Cochabamba se rebeló contra la privatización del agua. El dirigente fabril Óscar Olivera fue uno de los líderes de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida.



EL MALLKU VUELVE A ESCENA

Después de salir libre, Felipe Quispe fue elegido secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y desde allí comandó los bloqueos de camino de principios de milenio.



FEBRERO NEGRO

El anuncio de un impuesto extraordinario al salario en febrero de 2003 precipitó una movilización en la que la gente incendió la Vicepresidencia y las sedes de los principales partidos políticos.



OCTUBRE EN EL ALTO

Los vecinos alteños decidieron bloquear el paso a las cisternas de gasolina y dejar sin combustible a La Paz. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada contestó con tanques.



OTRA VEZ SAN FRANCISCO

Como en los viejos tiempos, la plaza de San Francisco fue el lugar elegido por los paceños para hacer escuchar su voz de protesta. Un minero dirigía la concentración desde la sede de la Federación de Fabriles.



SALIERON LOS TANQUES

La administración de Gonzalo Sánchez de Lozada optó por militarizar las calles alteñas para frenar la rebelión. El esfuerzo de los militares fue en vano.



ARDE LA ALCALDÍA DE EL ALTO

Un inusual incremento en los impuestos municipales en la ciudad de El Alto provocó que la población se descargue contra el edificio de la Alcaldía. El incendio arrasó con todo.



CARLOS MESA, PRESIDENTE

Después de que el Congreso aceptó la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada, ese 17 de octubre de 2003, Carlos Mesa fue posesionado como presidente constitucional de la República.



LA AGENDA DE OCTUBRE

En su primer día como mandatario, Carlos Mesa visitó la ciudad de El Alto y escuchó el mandato: nacionalización de los hidrocarburos y Asamblea Constituyente. Era la agenda de octubre.



EL ÚLTIMO INTERINO

Después de la renuncia de Carlos Mesa y la declinación forzada de Hormando Vaca Díez y Mario Cossío, Eduardo Rodríguez Veltzé asumió la Presidencia con el mandato de llamar a elecciones generales.

Capítulo

Años

2006-2012

**Avances y
retrocesos de una
etapa de cambio**

4

El proceso constituyente y la aprobación de una nueva Carta Magna representan un momento fundacional para el Estado boliviano. Cambio es el resultado esperado, aunque poco se sabe de las rutas elegidas. La atomización de expectativas y esperanzas populares encuentra escape en ambos procesos; sin embargo, más temprano que tarde surgen nuevamente las interrogantes.

El conflicto vuelve con las pugnas por el usufructo de la explotación minera (Huanuni 2006; Colquiri- 2012); del respeto a la autodeterminación de los pueblos indígenas sobre sus territorios (2011. 2012) y la lucha por las autonomías, que se tradujo en un proceso de lucha interna por el poder, nunca presenciada.

Luces y sombras del proceso de cambio

Ilya Fortún¹

En enero de 2006, el proceso de cambio no sólo implicó la remoción de una élite política, también infundió aires de renovación a los ideales democráticos de una sociedad que confiaba en que con éste se alcanzarían muchas de sus expectativas postergadas. No obstante, precisamente por el tamaño de las expectativas generadas por el partido de gobierno, se germinaron grandes frustraciones.

Los tiempos que corren son particularmente complejos en relación al tema que motiva esta publicación. La democracia moderna, en los términos concebidos durante la última mitad de siglo en el mundo occidental, parece estar enfrentando ciertos límites, que si bien no están plenamente instalados en la agenda mediática, son motivo de reflexión y discusión, cuando no de querrela política. La crisis económica que afecta al primer mundo ha desnudado, sobre todo en ciertos países europeos, serios problemas relacionados a la representatividad y le-

gitimidad del modelo democrático, que amenazan con convertir un problema, que se pensaba era únicamente financiero, en una crisis sistémica de alcances insospechados.

A excepción de algunos países nórdicos, cuyo desarrollo político ha podido plasmarse en democracias maduras y sostenibles en virtud a modelos económicos fuertemente orientados a la reducción de desigualdades, en gran parte del mundo el correlato político y social de la crisis apunta a los suprapoderes corporativos, que en la realidad han demostrado pesar infinitamente más que el sistema formal de representación política y la voluntad de los electores.

¹ Ilya Fortún es comunicador social, analista político, consultor y empresario gastronómico. Escribe en periódicos nacionales hace más de una década. Es columnista de Página Siete.

A lo largo de esta crisis, el ciudadano europeo, en particular, ha ido hallando que los resortes tradicionales del sistema político no han podido dar respuestas adecuadas, ocasionando un brusco alejamiento entre Estado y ciudadanía, que en muchos casos ya presenta rasgos de quiebre sistémico. De allí se empezó a construir un discurso de demandas que, en estas latitudes, conocimos como “radicales”: exigencia de democracia real, frente a las deformaciones originadas por el desgaste de las formas de representación partidaria y sindical, y por el poder omnímodo de organismos multilaterales y organizaciones supranacionales. En términos sociales y políticos, en el occidente desarrollado se vive un proceso de agotamiento institucional parecido al que vivimos en el sur en las últimas décadas, en la medida en que los gérmenes de descomposición son similares.

Desde aquella dura experiencia de paulatina degradación de ciertos preceptos básicos de la democracia, seguramente se percibe con algo de interés las experimentaciones populares en curso en nuestra región, que desde ciertas miradas locales son calificadas peyorativamente como populismos. Venezuela, Brasil, Argentina y Ecuador, por citar algunos ejemplos, están embarcados en diversos ensayos cuyo denominador común pasa por el intento de mejorar la calidad democrática a partir de las insuficiencias del fallido modelo liberal.

Como ha ocurrido frecuentemente a lo largo de la historia, el caso boliviano ha sido particularmente intenso;

la profundidad del proceso responde evidentemente a una acumulación histórica de 30 años, o incluso más, en la que se sumaron anhelos y luchas colectivas que hacen a nuestra obsesión democrática, y que generaron condiciones excepcionalmente propicias en el año 2005, para un salto cualitativo de expectativas realmente históricas.

DE LAS LUCES CEGADORAS A LAS SOMBROS TENEBRAS

Justamente es el tamaño de las expectativas generadas por esto que el partido de gobierno ha bautizado como “proceso de cambio”, y que ha germinado dando lugar a frustraciones proporcionalmente iguales. La política real y la enfermedad del poder se han ocupado de demostrar que a los grandes sueños les corresponden igualmente grandes pesadillas.

La frescura que en aquellos momentos caracterizaba a los nuevos actores sociales, al igual que la calidad de sus demandas y la densidad de sus propuestas, permitía pensar que se había construido un escenario con las condiciones, sino ideales, suficientes para una transformación estructural del país, no solamente en lo político, sino también en lo económico y lo social. La larga maduración de los temas centrales, aglutinados en la denominada agenda de octubre, se gestó además con el concurso no exclusivo de quienes asumieron finalmente el poder; en justicia, el camino del proceso constituyente debe atribuírsele al conjunto de la población boliviana, que durante tres décadas cimentó, recogiendo lo

mejor de su acervo democrático, las bases del “proceso de cambio”.

Así se explica que las frustraciones, también acumuladas en los últimos siete años, no tengan que ver solamente con el desencanto de un gobierno, de un partido o de un líder, pero sí con la desilusión del malgasto de una oportunidad construida con el sacrificio de todos, que difícilmente se podrá repetir.

Y sin embargo, por muy sombríos que sean los tiempos actuales y la perspectiva de futuro, no se puede dejar de reconocer ciertas luces, que la feroz dinámica del proceso en alguna medida ha opacado. La participación y el apoyo electoral que recibió el Gobierno en sucesivas justas electorales es una de ellas; se tiende a desconocer la importancia de este hecho, relevante

en términos de valoración democrática, probablemente por el manto de dudas que en su momento sembró la oposición política en cuanto a la limpieza de las elecciones.

Siempre sostuve que la legitimidad de las masivas votaciones obtenidas por el presidente Morales y su partido está fuera de duda, y creo que éste es un fenómeno saludable y positivo para el sistema democrático. La contundencia de ese 54% obtenido en la primera elección fue ratificada en varias oportunidades, y tuvo un pico en las elecciones generales para el segundo mandato, con un 64% de apoyo que refleja la enorme magnitud del respaldo ciudadano y de la confianza depositada por una gran mayoría de la gente en el proyecto político del MAS. Los bajos índices

Los Tiempos, 22 de enero de 2006

Evo anuncia en Tiwanaku la nueva era

Las 12:30. Unas 70.000 personas han esperado durante toda la mañana, junto a las ruinas de Tiwanaku, soportando el frío, la lluvia torrencial y el granizo a 4.000 metros sobre el nivel del mar. De repente, aparece el sol en el aire y, casi como si se hubiesen puesto de acuerdo, emerge del interior de Akapana (la pirámide-monte) un grupo de siluetas blancas entre las que se distingue la de Juan Evo Morales Ayma.

Se oyen un pututu, la música con instrumentos andinos, cohetes, aplausos y los gritos de toda la multitud. “¡Qhallalla, Evo!, ¡qhallalla el nuevo Pachakuti! Gri-

tos de una multitud de indígenas vestidos con sus trajes multicolores originarios le recuerdan al dios andino “que vuelca la tierra” y al mayor de los incas, que llevó ese nombre.

Vestido con el unku rojo (una especie de poncho) y el chuku de jinetas rojas y amarillas (como lo habrían hecho los sacerdotes precolombinos por última vez hace más de 500 años), Evo saluda al tata Inti desde la cumbre de Akapana y le pide fuerzas y permiso para gobernar el país, tras haber ganado las elecciones del 18 de diciembre pasado con el 53,74 % de los votos.

de abstencionismo, por un lado, y la significativa adhesión, tanto en ámbitos rurales como urbanos, merecen atención especial dados los antecedentes de un electorado disperso y altamente volátil. Incluso, después del natural desgaste del ejercicio de gobierno, el régimen goza de una popularidad y de una intención de voto que cualquier partido tradicional hubiera envidiado en sus mejores momentos.

“Felicitó a Evo Morales Ayma y Álvaro García Linera por este resultado electoral, trabajaron mucho. Saludo a todos los candidatos, es cierto que en campaña exacerbamos los ánimos, pero todos se merecen el respeto”.

Jorge Tuto Quiroga, 18 de diciembre de 2005

Más allá de las prácticas prebendales, de la intensiva propaganda política y del carácter populista de la gestión, el apoyo sostenido que ha conseguido el Gobierno debe ser valorado en su justa dimensión. Después de todo, millones de bolivianos se han sentido identificados con la figura del Presidente, con el discurso oficial y con la política gubernamental en general; y con seguridad, una parte importante del electorado lo sigue haciendo.

Otra de las luces, opacada por el momento, pero que seguramente volverá a brillar, es la nueva Constitución Política del Estado. El nuevo texto constitucional, difícilmente consensuado en la etapa final de su trata-

miento por todas las fuerzas políticas, es, mal que mal, el soporte concreto en el que se han plasmado gran parte de las ideas fuerza del proceso político que vivimos.

Pese a las intenciones de una facción del régimen de imponer un texto que a la postre iba a adolecer de una peligrosa ilegitimidad, finalmente se hicieron los esfuerzos políticos necesarios que derivaron en un resultado, que si bien no satisfizo las expectativas de todos, se tradujo en un acuerdo histórico que marcará nuestro futuro por largo tiempo.

Si bien la nueva Carta Magna por el momento todavía es un papel que no ha logrado trascender lo meramente enunciativo, su contenido expresa mejor nuestra complejidad como país y los desafíos que nos hemos planteado en la concepción de un nuevo modelo de nación. La construcción jurídica que supone este proceso, hoy se expresa en un maremágnum de leyes y normas ininteligibles para el ciudadano, que en la práctica no alcanza para percibir cambios concretos.

Aun asumiendo que la prioridad del régimen no estuviera orientada a consolidar seriamente los nuevos preceptos constitucionales, el producto de la Asamblea Constituyente no deja de ser un plano de diseño referencial indispensable que perdurará en el tiempo, allende las coyunturas políticas.

El advenimiento y el recambio de nuevas élites políticas, económicas, sociales y culturales podría ser también considerado como uno de los frutos

tangibles y positivos del “proceso de cambio”. Es cierto. A partir del derrumbe del *ancien régime*, y de la mano del nuevo y potente aparato de poder, se ha evidenciado el surgimiento fáctico de élites remozadas que le imprimen un nuevo ritmo al país. Se trata además de unas élites más diversas y representativas, que distan mucho del perfil aristocrático y excluyente de los desplazados. Está por verse, sin embargo, si este nuevo proceso de empoderamientos no está reeditando los vicios de acumulación de privilegios corporativos que se criticaron tanto en el pasado; lamentablemente, ya se ven señales preocupantes que siembran dudas en cuanto a la calidad de éste. El recambio es bueno, pero no garantiza automáticamente que lo nuevo vaya a ser mejor que lo viejo.

SOMBRAS CON TINTES DE TRAICIÓN

La tesis de los intentos revolucionarios, inicialmente encarnados por el pueblo, y luego traicionados por la dirigencia política encaramada al poder, es evidentemente lugar común, tanto en la historia universal como en la de nuestro país. El caso del “proceso de cambio” masista no es la excepción, a ojos tanto de analistas políticos como de un importante contingente disidente de importantes figuras, que en su momento constituyeron la base intelectual e ideológica del régimen.

Desde esa mirada crítica, el Gobierno ha sufrido un extravío político a partir de 2010, que lo ha alejado drásticamente de sus postulados ini-

ciales y de su razón de ser histórica. Durante el primer período, las contradicciones internas no se expresaron con claridad, en la medida en que la confrontación con los resabios de la derecha opositora y con los poderes regionales ocuparon plenamente la escena política, aplazando el decantamiento de las distintas corrientes internas.

La existencia de un enemigo claramente identificado, la intensa pugna para su derrota definitiva y la labor de desmontaje de la institucionalidad vigente hasta ese momento le dieron suficiente cohesión interna a la fórmula Gobierno-partido-movimientos sociales, que mostró una imagen de gran consistencia y eficiencia en el manejo político. La primera gestión de gobierno, marcada por la confrontación y por el quiebre del empate catastrófico, transcurrió íntegramente en aquello, minimizando la atención sobre los ámbitos de gestión y de definición programática.

Fueron las elecciones generales y municipales del año 2010 las que marcaron un notorio giro en el talante y el accionar del Gobierno, dando inicio a una sucesión de desaciertos y a un endurecimiento de posiciones que se viene acumulando hasta el presente con resultados sumamente preocupantes, que incluso han puesto en el tapete de la duda su condición democrática.

Resultaría difícil enumerar la colección de errores y torpezas que han desfigurado al Gobierno en este tiempo; sin embargo, el conflicto del TIPNIS es el que sintetiza descarnadamente en la práctica, las rupturas,

contradicciones y abdicaciones del Gobierno del cambio, con el proceso de reformas democráticas e institucionales.

UN BALANCE DESALENTADOR

Luego de siete años de un discurso zigzagueante y errático, correspondiéndonos en esta mirada a los 30 años de ruta democrática, sobre la consistencia entre la formalidad de las reformas democráticas y los resultados obtenidos. El “proceso de cambio” generó la expectativa y la posibilidad de una mejor democracia a partir de la inclusión, del respeto a diversas formas de organización, representación y participación, de una nueva construcción institucional basada en el estado de derecho y, finalmente, del anhelo de una gestión pública que responda a las necesidades de la ciudadanía.

En el papel tenemos una democracia más rica y completa, representativa, partidaria, pero también directa, que reconoce referendos, revocatorios, desmonopolización partidaria e iniciativas legislativas, y una democracia indígena, que también reconoce usos y costumbres comunitarias. En la práctica, el proyecto político ha instrumentalizado todas las formas democráticas (las viejas y las nuevas) para acumular y reproducir poder, desdibujándolas y devaluándolas de una manera que confirma la persistencia de la misma crisis de Estado que dio lugar a las reformas.

Teóricamente, también tenemos más democracia en virtud al reconocimiento de las autonomías departamentales, municipales, indígenas y regionales; y esta ampliación democrática hacia los niveles autonómicos, debería haber servido para mejorar

La Razón, 19 de diciembre de 2005

El MAS obtiene amplia mayoría

Los resultados preliminares de principales cadenas televisivas sobre las elecciones nacionales, desarrolladas ayer en todo el país, dan hasta el momento una amplia victoria a Evo Morales Ayma del Movimiento Al Socialismo (MAS), convirtiéndolo en el virtual presidente de los bolivianos; sin embargo, los datos oficiales serán conocidos recién mañana.

La justa electoral fue calificada como histórica para el país, ya que se tuvieron dos acontecimientos en un mismo día. El

líder masista alcanzó un triunfo que no tuvo ningún otro candidato en las últimas elecciones. Morales Ayma sostuvo que ya no es un problema gobernar con el 50% más uno, sino que se trata de mandar en Bolivia obedeciendo la voluntad del pueblo.

El líder de la agrupación política Poder Democrático Social (Podemos), Jorge Quiroga Ramírez, reconoció su derrota y felicitó al candidato del MAS, Evo Morales, por su triunfo en las elecciones registradas ayer.

la gestión pública. No obstante, la realidad nos muestra que el proceso autonómico no ha avanzado prácticamente nada debido, por un lado, a la vocación centralista del Gobierno y, por otro, a la incapacidad de los gobiernos departamentales, tanto oficialistas como opositores. Lejos de buscar implementar realmente el régimen autonómico, el Gobierno ha preferido el camino de la cooptación del poder regional, en unos casos por las buenas y en otros por las malas, con resultados que al parecer han contentado y satisfecho los intereses de todos.

Si bien la discusión acerca de la naturaleza y la legitimidad del estado de derecho puede resultar compleja e incluso algo maniquea, el progresivo deterioro experimentado en el respeto a libertades y derechos se ha convertido en un tema de honda preocupación. Se suponía que el nuevo marco constitucional y legislativo debía garantizar, especialmente, la observancia de éstos; lamentablemente, otra vez la angurria de copamiento absoluto del poder y el talante prorroguista del régimen dan señales de un rumbo autoritario. Las libertades políticas se han venido recortando veladamente a través del uso político de la justicia y la libertad de expresión también se encuentra amenazada desde distintos flancos.

El esquema de formas alternativas de presentación política tampoco ha dado los resultados esperados.

Las organizaciones sociales, llamadas a un proceso de institucionalización autónoma para cumplir funciones de fiscalización y control ciudadano, han sido subsumidas en su mayoría al aparato político oficial, a través de la prebenda y el loteamiento de espacios de poder. Los partidos políticos y las fuerzas regionales tampoco han conseguido superar el desafío de reinventarse con proyección de futuro, reforzando así la consolidación hegemónica del MAS.

Las reformas también intentaron propiciar el reconocimiento de cuotas de participación indígena en el nuevo diseño estatal, en la perspectiva de reparar las consuetudinarias prácticas de segregación y exclusión. La importancia de estas iniciativas es capital en un país de raigambre tan intensamente racista, y su aplicación ha funcionado relativamente bien. Pero toda esta concepción indígena enfrenta la amenaza del uso discursivo indiscriminado que se hace de él desde el poder, con la intención de teñir todo el arco de discusión con el color de lo indio y lo originario, lo que podría devenir, a la postre, en su banalización.

Aun así, la dignidad de las mayorías a partir de la identificación étnica con el Presidente y con los nuevos rostros del poder ha experimentado un cambio significativo que dará que hablar durante décadas.

La vuelta del estatismo

Fernando Molina

El giro de la economía durante el proceso de cambio no resolvió, sin embargo, la dependencia de las materias primas. Un momento favorable en los precios internacionales de minerales e hidrocarburos disimula los rezagos económicos.

Entre 1996 y 2005 estuvo en vigencia un régimen que aceptaba que las compañías internacionales concesionarias fueran dueñas de la producción de hidrocarburos y que pudieran disponer de ella a cambio del pago de determinadas regalías e impuestos. Así lo definían la Ley de Hidrocarburos 1689 de 1996 y el Decreto 24806, aprobado en las postrimerías del primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, el cual regulaba el modelo de los contratos entre el Estado y las petroleras.

Este régimen contrastaba con la legislación anterior, la cual establecía que los concesionarios de hidrocarburos entregaran al Estado toda su pro-

ducción a cambio de una retribución por sus gastos de extracción y por utilidades (contratos de operación). Este tipo de procedimiento era posible porque en ese entonces YPFB tenía el monopolio de la refinación de petróleo, de la exportación de gas y porque poseía todos los ductos.

Con la capitalización de YPFB y la privatización de las refinerías en los años 90, las condiciones cambiaron: las petroleras pagaban las regalías en dinero y, una vez cumplido este requisito, disponían de los hidrocarburos como creían conveniente. La libertad de acción de las compañías no era, por supuesto, absoluta. Pero en la práctica el Estado tenía muchas dificultades para limitar su autonomía, justamente porque había dejado de manejar directamente los hidrocarburos.

COMIENZA LA NACIONALIZACIÓN

Como primer capítulo de la nacionalización del petróleo a la que nos llevaron las tumultuosas corrientes de la política nacional, el 31 de enero de 2004 el presidente Carlos Mesa (2003-2005) abrogó el Decreto 24806. Luego de esto, el MAS de Evo Morales, entonces en la oposición, exigió la anulación de todos los contratos. El Gobierno le respondió que esto no era posible, que los contratos eran “ley entre partes”. De esta polémica surgió la pregunta número dos del referéndum petrolero que Mesa convocó el 18 de julio de 2004, pregunta que negoció con el MAS: “¿Está usted de acuerdo con la recuperación de la propiedad de todos los hidrocarburos en boca de pozo para el Estado boliviano?”.

Aunque el gobierno de Mesa insistió en que esta pregunta se refería exclusivamente al régimen de propiedad que se construiría después del referéndum y no afectaría a los contratos ya firmados, a lo largo de la campaña por el “sí” tuvo que variar de posición, debido a las presiones sociales y a la lógica de la propia pregunta. Comenzó a hablar de “renegociar” los contratos vigentes y de que las petroleras tendrían que “migrar” de un régimen a otro, lo quisieran o no. La pregunta dos —que alrededor del 80% de la población respondió “sí”— despertó el “fantasma de la nacionalización”.

Después del referéndum, el Gobierno presentó un proyecto de nueva ley de hidrocarburos que obligaba a las petroleras a cambiar de contratos

por mandato de la ley, en plazo de 180 días, con lo que se consumaría la nacionalización de los hidrocarburos ya extraídos o “en boca de pozo”. Las empresas debían aceptar contratos de “producción compartida”, es decir, de operación, como los de antes de la Ley 1689.

LA NUEVA LEY DE HIDROCARBUROS (3058)

En abril de 2005 el Congreso aprobó la nueva Ley de Hidrocarburos, que establece lo ya dicho: la producción de hidrocarburos deja de pertenecer a las empresas, como hasta entonces, y es del Estado. Sin embargo, éste debe retribuir el trabajo técnico de aquéllas y reconocerles las inversiones realizadas.

Durante el debate de esta ley el meollo fue determinar cuánto debía tocarle a cada uno. Para el gobierno de Mesa debía ser 18% de regalías (la alícuota vigente desde 1996) y, además, un “impuesto directo a los hidrocarburos (IDH)” variable por tipo de hidrocarburo, tipo de campo, precio y volumen, que sería deducible del impuesto a las utilidades, y que podría llegar, en los campos más grandes y en 15 años, a completar la recaudación necesaria para llegar al 50% de la producción como participación estatal por la que votó la población en el ya mencionado referéndum. Para el MAS debía ser directamente el 50%, con un impuesto a los hidrocarburos de 32%, invariable, eliminando la distinción entre campos y entre tipos de hidrocarburos. Ésta fue la posición que finalmente se impuso.

1 DE MAYO DE 2006: LA NACIONALIZACIÓN

Sobre la base de la ley descrita, el recién electo presidente Evo Morales, pocos meses después de asumir el poder, consumó la nacionalización del gas mediante un decreto que se llamó Héroes del Chaco. Previamente, el Ejército tomó los campos petroleros, las instalaciones de refinación y transporte e incluso las estaciones de servicio. Se orquestó un bochinche mediático que tuvo grandes beneficios políticos para el oficialismo. Inicialmente, Evo Morales se había opuesto a la nacionalización y había apostado por el aumento de impuestos. Luego, se pronunció a favor de ella, pero “sin expropiaciones”. Finalmente, alentado por los resultados electorales de 2005, llevó a cabo una nacionalización más radical de la que prometió, pues sí incluyó expropiaciones.

El decreto concedió a YPF, “en ejercicio pleno de la propiedad de todos los hidrocarburos producidos en el país”, su comercialización y la definición de “las condiciones, volúmenes y precios tanto para el mercado interno como para la exportación y la industrialización”. Este artículo convierte a las empresas petroleras, incluso a las que se asocian con YPF en el futuro, en “operadoras” pagadas por una remuneración. Esto, sumado a la forma en que se impuso el nuevo orden petrolero, con militares y gritos, produjo una caída importante de las inversiones en exploración, que se arrastra hasta el presente.

En todo caso, la firmeza del Gobierno logró que las empresas, que en

los años anteriores habían prometido dar una batalla sin cuartel en caso de que se disminuyeran sus derechos, arriaran silenciosa y casi avergonzadamente sus banderas. Todas aceptaron la nacionalización, ninguna se marchó del país, todas volvieron a firmar contratos según las nuevas condiciones que les impusieron.

El modus operandi petrolero es ahora el siguiente: la producción se divide en tres partes: el 50% es retenido por el Estado en calidad de regalías e impuestos. De la mitad restante, una parte se devuelve a las empresas privadas para compensar sus inversiones, los gastos de operación en los que in-

El Diario, 14 de febrero de 2006

Vicepresidencia redujo su presupuesto a Bs 6 millones

La Vicepresidencia de la República ingresó al plan de austeridad que viene implantando el Gobierno, con un recorte presupuestario drástico que elimina una serie de partidas y gastos que tenía esa repartición estatal. El anuncio lo realizó el vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, quien expresó que esta reducción de los recursos para su despacho alcanza a más del 70% y que antes de este proceso se contaba con un presupuesto de 17 millones de bolivianos y que ahora éste se redujo a seis millones de bolivianos. Dijo que es importante destacar que esta disminución comenzó por su salario y que éste se redujo al 50%, tal como se determinó en el Poder Ejecutivo, es decir que ello forma parte de la política de austeridad que se realiza en la presente gestión gubernamental.

curran y los impuestos a las ventas que paguen. La otra parte, que está constituida por las utilidades, se divide entre YPFB y la empresa en cuestión, de acuerdo con una fórmula que tiende a premiar a esta última si produce mayores volúmenes, y en cambio la castiga si éstos no crecen.

Los nuevos contratos mejoran el *government take* (la participación gubernamental) a más o menos el 65% de la producción, aunque con una tendencia decreciente, conforme se producen más inversiones que redistribuir.

Las recaudaciones fiscales por hidrocarburos, que en 2002 y 2003 habían sido de 300 y pico millones por año, subieron primero a alrededor de 500 millones por año y después a 1.200 millones por año. Sin embargo, hay que aclarar que, por el aumento de los precios, los valores de exportación de uno y otro tiempo son muy distintos.

En el último lustro, por el boom de los precios, las exportaciones de gas, minerales y otros productos han llegado hasta a 7.000 millones de dólares anuales, cambiando la dimensión de la economía nacional, que pasó de un PIB de 8.000 millones de dólares en 2005 a otro de 25.000 millones en 2012.

El baño de liquidez puso las reservas internacionales en alrededor de la mitad del PIB, un nivel nunca antes visto. El crédito bancario pasó de 2.300 millones en 2005 a casi 9.000 millones de dólares en 2012, gracias a lo cual se ha dado un crecimiento de la construcción de alrededor del 30% anual. Para la gente, el resultado de estos cambios ha sido un aumento del consumo interno, que se ha converti-

do en el principal componente del crecimiento del producto (más o menos 5%), y ha disminuido la pobreza extrema del 40% en que estaba en 2002 a 32% en 2010.

LAS RAZONES DEL “GASOLINAZO”

El punto más débil de la estructura petrolera que se levantó sobre la Ley 1689 era el precio de los carburantes en el mercado interno. Este precio debía tener como referencia los valores internacionales del petróleo, para evitar que las empresas privadas prefirieran exportar a vender dentro del país, pero los bolivianos no podían darse el lujo de pagar tales precios en un período alcista como el que se abrió con el siglo XXI.

La solución que se dio en el año 2000 y se ha prolongado hasta el presente, con diferentes modalidades, fue la subvención estatal. De 2004 a 2012 el precio del barril de petróleo en el mercado interno se fijó en 27 dólares. En 2012 se elevó a 36 dólares el barril, con el propósito de alentar a las petroleras a explorar nuevos yacimientos, pero sin cambiar los precios al público. Estos topes no causaron pérdidas directas a las compañías, porque el costo de producción de un barril es de alrededor de 15 dólares, pero tampoco las animaron a mantener la producción, que bajó de alrededor de 10.000 barriles diarios a la mitad. La inversión en exploración prácticamente se detuvo: se pasó de perforar alrededor de 25 pozos al año a uno o dos.

Al mismo tiempo, el boom económico multiplicó el parque automotor hasta el millón de automóviles.

Resultado: cada año el país tiene que importar gasolinas por alrededor de 500 millones de dólares. El 75% de estos millones se pierde porque el Estado compra a precios internacionales lo que dentro del país debe vender a precios subvencionados. Además, se calcula que entre un 10 y un 15% de la demanda interna es causada por los contrabandistas que aprovechan la diferencia de precios para vender gasolinas y gas licuado de petróleo en las zonas fronterizas de los países vecinos.

El “gasolinazo” que el Gobierno falló en aprobar a fines de 2010 fue un intento radical de resolver estos problemas. Buscó la nivelación de los precios de los carburantes a las condiciones de mercado, lo que implicaba un alza de entre el 50 y el 80% de las gasolinas. Esto hubiera eliminado las pérdidas estatales por subvención y el contrabando, y al mismo tiempo, ya que hubiera posibilitado la liberación del precio interno, habría creado los incentivos para que las petroleras transnacionales llegaran en auxilio de la raquítica empresa estatal en la búsqueda de más petróleo.

Actualmente, luego del fracaso del “gasolinazo”, el Gobierno quiere fomentar la exploración prometiendo a las petroleras que devolverá la inversión realizada para cada hallazgo petrolero, pero las condiciones globales de la industria en Bolivia son demasiado pro-Estado como para que este incentivo tenga los efectos esperados.

De modo que la perspectiva parece ser que la situación actual de desabastecimiento de “líquidos” continúe y que se subsane con importaciones onerosas, mientras los ingresos por gas aguanten.

LA RECUPERACIÓN DE LAS EMPRESAS CAPITALIZADAS

El decreto de nacionalización del gas inició la recuperación para el Estado de las empresas capitalizadas y la nacionalización de otras consideradas estratégicas para la reinstalación del sistema económico estatista en el que el país volvió a poner sus esperanzas.

El decreto dispone lo que luego se aplicaría a todas las empresas capitalizadas: primero “transfiere en

La Razón, 2 de julio de 2006

Editorial: La agenda económica quedó rezagada por 7 procesos electorales

Hoy será la quinta vez en cinco años que los bolivianos asisten a las urnas; pero, en ese mismo tiempo, con el de este domingo ya se desarrollaron siete tipos de procesos electorales en el país. Como

consecuencia de semejante actividad política, la agenda económica ha sido desplazada y no ha gozado de la debida atención de los gobiernos de turno ni de la sociedad.

propiedad a YPF, a título gratuito, las acciones de los ciudadanos bolivianos que formaban parte del Fondo de Capitalización Colectiva en las empresas petroleras capitalizadas Chaco, Andina y Transredes”. Luego nacionaliza “las acciones necesarias para que YPF controle como mínimo el 50% más uno” en las empresas mencionadas, y en las privatizadas Petrobras Bolivia Refinación y Compañía Logística de Hidrocarburos de Bolivia.

El Fondo de Capitalización Colectiva era un fideicomiso destinado al pago del Bonosol para las personas mayores de 65 años (ya hemos hablado de ello en este libro). Apropiándose de él, el Estado obtuvo entre el 47,2 y el 49,9% del patrimonio de las empresas petroleras, pero también de telecomunicaciones, generación eléctrica y ferrocarriles. Pero esto no le daba la administración de éstas. Para conseguirla –excepto en ferrocarriles– obligó a los dueños privados a darles la cantidad necesaria para que la mayoría quedara en manos públicas. La única transnacio-

nal que aceptó este trato fue Repsol, que actualmente es socia minoritaria del Estado en la petrolera Chaco. Todas las demás prefirieron vender o entregar (en busca de una compensación en los tribunales) el total de las acciones que controlaban. Esto encareció el traspaso a un precio mayor que el pensado inicialmente por el Gobierno. El cuadro 1 muestra las transacciones que se hicieron y los litigios que se tiene con las empresas afectadas por la nacionalización.

Con este proceso, el Estado pasó de producir el 7% del PIB, como hacía en 2005, a producir el 20% en 2011.

Las utilidades de las empresas continúan financiando parte de la renta de vejez, en la que se gasta aproximadamente 250 millones de dólares al año. El antiguo Bonosol ahora se llama Renta Dignidad, que se paga desde los 60 años y conserva el mismo monto (Bs 1.800) para los jubilados, pero subió a Bs 2.400 para los que no reciben pensiones. Además de este bono, se han creado otros que se reparten en efectivo a la gente de la renta hidrocarbúfera del país.

Los Tiempos, 2 de mayo de 2006

Tercera nacionalización petrolera en 70 años

El presidente boliviano, Evo Morales, aprobó ayer por decreto la tercera nacionalización de los hidrocarburos de los últimos 70 años. Las Fuerzas Armadas to-

maron los campos de hidrocarburos para evitar eventuales “sabotajes”, pues la norma 28701 afecta a una docena de petroleras extranjeras que operan en el país.

Cuadro 1. Panorama de la nacionalización

Empresa nacionalizada	Costo probable	Estado del proceso
Chaco, Andina, Transredes	317	Negociado
Refinerías	112	Negociado
Chaco (50%)	170	Negociado
CLHB	20	En negociación
Corani, Valle Hermoso, Guaracachi	270	En negociación
ENTEL	100	Negociado
Fancesa	80	En negociación
Air BP	10	En negociación
Transportadora de Electricidad	70	En negociación
Total	1.147	

Fuente: Ferruffino (2011) y Zaratti (2010)

Fuentes

Rubén Ferruffino (2011): *Nacionalización y creación de nuevas empresas estatales en Bolivia*, en *Capitalismos en Bolivia*, La Paz, Fundación Pazos Kanki.

Fernando Molina (2006): *Un laberinto circular. Privatización y nacionalización del gas boliviano*, inédito.

Página Siete (2011): *La industria petrolera después del gasolinazo*, en editorial del 6 de enero.

Francesco Zaratti (2010): *La descapitalización: cómo se hizo, cuánto costó*, en *El costo de la capitalización*, La Paz, Columnistas.net.

2006-2012, vaivenes de un régimen poderoso

Con sobresaltos, el oficialismo derrotó a la clase política que controló al país durante los anteriores 20 años. A partir de ese momento comenzó una etapa más compleja: las disputas entre el Gobierno y algunos protagonistas del proceso de cambio.

Faltaban menos de 90 minutos para saltar de 2010 a 2011 y Evo Morales seguía en Palacio de Gobierno, a poco de dar un mensaje a todo el país. Era el fin del “gasolinazo”.

Fue la primera vez que el Presidente retrocedió de forma tan radical. El 26 de diciembre del año pasado, el Gobierno había subido el precio de los combustibles hasta en un 83% y cinco días después suprimió la medida.

La oleada de sectores sociales que manifestaron su disconformidad, las gestiones de intelectuales y otros actores cercanos al oficialismo y el rechazo de algunos ministros a la medida, fecundada en el gabinete económico, derrotaron al Decreto Supremo 748.

Las bases del MAS y algunos de los protagonistas del régimen actual convencieron a Morales de claudicar.

Lo que no pudo hacer la oposición en cinco años de administración masista, sí se logró desde las entrañas mismas del proceso de cambio.

En todo este tiempo, el Presidente y su equipo anularon a todos los que se pusieron al frente. Morales jubiló a una generación de políticos, cambió la lógica de partidos y reconfiguró la forma de hacer política en Bolivia. La derrota del “gasolinazo” inauguró una nueva etapa en la historia del gobierno del Movimiento Al Socialismo.

Pero esa “anulación” de los sectores opositores no fue nada sencilla. Por el contrario, fue extremadamente compleja. La amplia victoria electoral de Evo Morales en diciembre de 2005, cuando logró el inédito, hasta

entonces, 54% de votos, no hizo que la primera fase de su gobierno tuviera estabilidad. Ni mucho menos.

Como dijimos en un capítulo anterior de este libro, al derrumbarse el sistema de partidos vigente hasta los comicios de 2005, lo que sucedió es que la oposición ya no se centró en el Parlamento, excepto en intentar bloquear en el Senado, que dominaba, la mayoría de iniciativas legislativas, sino en las regiones, especialmente en Santa Cruz. Fue el Comité Cívico de ese departamento el que lideró esa oposición, oponiéndose a las acciones más importantes del gobierno del presidente Morales. La otra estrategia opositora fue sabotear la Asamblea Constituyente, con el objetivo de retrasar (y ojalá posponer indefinidamente) la aprobación del nuevo texto constitucional.

ASAMBLEA, CAMPO DE LUCHA

La Asamblea fue, decimos, uno de esos campos de lucha. Pasó sus siete

primeros meses de trabajo en debatir el Reglamento de Debates. Desde la inauguración de las sesiones, el oficialismo había intentado que los artículos de la nueva CPE se aprobaran con la mitad más uno de los votos, a pesar de que la Constitución vigente entonces y la Ley de Convocatoria a la Asamblea, que aprobó la bancada oficialista un año antes, preveían el sistema de los dos tercios.

El entrampamiento de la Asamblea, que era estrategia de la oposición, persistió después del primer año, al cumplirse el plazo original para que sea terminado el trabajo. Un difícil acuerdo congresal realizado a principios de julio de 2007 permitió ampliar las sesiones de la Asamblea hasta el 15 de diciembre.

Pero el tema de la capitalidad plena para Sucre, impuesto por la oposición encabezada por Santa Cruz, logró el objetivo buscado por ésta: paralizar la Asamblea. Sus promotores sabían que La Paz y el Gobierno no iban a permitir que tal idea se apruebe.

Gente, 2 de abril de 2006

Ocho de cada 10 bolivianos aprueban gestión de Evo

Al cabo de su primer mes de gobierno, Evo Morales obtuvo el 79% de respaldo de la población, cinco puntos más que cuando asumió el mando el 22 de enero. Su popularidad es tan alta que la mayoría de la gente no duda que hará realidad la Asamblea Constituyente y el referéndum autonómico. Algunos piensan que el Presidente puede ganar el Premio Nobel de la Paz.

Según una investigación de la encuestadora Apoyo, Opinión y Mercado realizada en febrero, el 79% la población de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz aprueba la gestión del Primer Mandatario. El vicepresidente Álvaro García Linera obtiene un respaldo del 71%, según la encuesta a 1.011 personas de entre 18 y 70 años de edad.

El fracaso de la Asamblea, es decir que no se apruebe la nueva Constitución, hubiera sido la mayor derrota del oficialismo... y el mayor éxito opositor. Finalmente, decenas de manifestantes opositores cercaron la Asamblea para impedir que los delegados pudieran sesionar. La Asamblea estaba a punto de naufragar.

Fue cuando el MAS decidió trasladar las sesiones al cuartel denominado La Glorieta; la convocatoria fue calificada por la oposición como ilegal debido a que no había sido realizada de manera pública y por la prensa, como establecía el reglamento de debates. La inminencia de la aprobación “en grande” del proyecto en ese cuartel generó una ola de indignación en Sucre. Miles de manifestantes salieron a las calles y produjeron destrozos y saqueos. En enfrentamientos con las fuerzas policiales y militares tres personas resultaron muertas, en confusas circunstancias, en la zona llamada La Calancha. Canales de TV mostraron escenas del ministro Alfredo Rada dirigiendo los operativos armados. El oficialismo negó que las muertes hayan sido producidas por disparos de fuerzas policiales o militares.

Tras la aprobación en La Glorieta, el plan del oficialismo se completó con la convocatoria a la sesión para aprobar la CPE en su fase de detalle. La Asamblea aprobó debatir los artículos en detalle en Oruro. Tres días antes del plazo legal para el cierre de la Asamblea, los asambleístas reunidos en Oruro realizaron una larga sesión y aprobaron el proyecto de CPE en sus estados de detalle y revisión. Lo

hicieron con el mínimo de votos (dos tercios) requerido por el reglamento de debates. Había sido una experiencia extenuante para el oficialismo y la aprobación polémica de la Constitución implicaba una victoria pírrica para el Gobierno.

VOTO AUTONÓMICO

Inmediatamente después, la oposición activó otra parte de su estrategia, la rebelión regional. Las cortes electorales de los cuatro departamentos más opositores al Gobierno decidieron organizar referendos autonómicos, pese a la opinión contraria de la Sala Plena de la Corte Nacional Electoral. Nunca había sucedido una situación de rebelión como ésta de parte de las cortes departamentales.

La Sala Plena de la CNE puso tres condiciones para que se pudiera cumplir con la legalidad de los procesos de las consultas: que cuenten con una ley del Congreso, que se tengan los presupuestos mínimos para organizar estos procesos y que se establezcan plazos razonables.

Desoyendo a la CNE, el 31 de enero, el prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, convocó a referéndum departamental de facto para el 4 de mayo. Lo hizo con el respaldo de 103 mil firmas validadas por una comisión especial de la Corte Departamental Electoral de Santa Cruz. La opción “sí” a la aprobación del estatuto autonómico venció con el 86% de los votos. El 1 de junio, los departamentos de Pando y Beni también acudieron a las urnas. En ambos, la opción “sí” ganó con holgura. Finalmente, el 22

de junio, fueron los tarijeños los que aprobaron su estatuto autonómico. Era uno de los momentos de mayor debilidad del Ejecutivo. Estaba, realmente, contra las cuerdas.

En mayo de 2008, Podemos lo sacó de esa incómoda situación al aprobar el referéndum revocatorio, pensando seguramente que podría sacar a Morales del poder mediante las urnas. Estaba muy equivocado. La ley fijó para el 10 de agosto el plebiscito.

El referéndum del 10 de agosto cambió sustancialmente la correlación de fuerzas en el país. La amplia victoria de la opción “sí” en el plebiscito fortaleció la gestión del presidente Evo Morales al mismo tiempo que debilitó la de los prefectos opositores de la “media luna”. El Presidente logró el 67,4% de los votos.

AUMENTO DE LA VIOLENCIA

A medida que se acercaba la fecha del referéndum se multiplicaban las expresiones de violencia contra las autoridades. Algunos de los incidentes fueron los siguientes: el 24 de mayo, manifestantes le impidieron al Presidente llegar al estadio Patria, de Sucre, donde se organizaba una manifestación oficialista. Ese mismo día, el ministro Juan Ramón Quintana no pudo aterrizar en Ríberalta y San Borja; el 29 de mayo, los mototaxistas de Ríberalta rechazaron la llegada del Presidente; el 12 de junio, Morales no pudo entregar en Santa Cruz la segunda fase de una importante obra; el 14 de junio no pudo aterrizar en Villamontes y tuvo que trasladar el evento a un re-

cinto militar en Sanandita. También se le impidió el arribo a Cobija; el 5 de agosto, los manifestantes lograron evitar la llegada de los presidentes de Venezuela y Argentina, invitados a una cumbre en Tarija en el marco de la campaña electoral gubernamental.

Después del referéndum, la oposición se sintió muy amenazada. Primero convocó un paro de actividades en los cinco departamentos opositores para el 20 de agosto, con la demanda de recuperar el IDH. Luego, los civiles y prefectos opositores convocaron para el 1 de septiembre el bloqueo de caminos y toma de instalaciones petroleras, que debía comenzar en Villamontes. Después, el bloqueo de carreteras sería realizado de manera escalonada y comprendería todo el Chaco: los municipios de Villamontes, Gutiérrez, Lagunillas, Camiri, Caraparí y otros que se encuentran en los márgenes de la carretera.

Pero la violencia se salió definitivamente de control el 9 de septiembre, en Santa Cruz, cuando, frente a las cámaras de TV, miembros de la Unión Juvenil Cruceñista y de la Federación Universitaria Local saquearon varias instituciones públicas, entre ellas el Servicio Nacional de Impuestos, INRA, ENTEL, Migración y Canal 7. Ambos grupos de jóvenes, cuyas instituciones integran orgánicamente el Comité Cívico de Santa Cruz, chocaron durante varias horas con el personal policial y militar que resguardaba esas instituciones. Finalmente, lograron vencer a los uniformados, a varios de los cuales golpearon y humillaron.

Al día siguiente, las acciones de

violencia continuaron en Santa Cruz contra la Aduana, la Superintendencia Forestal, la Terminal Bimodal, cuatro reparticiones del Seduca, una unidad del Ministerio de Trabajo y el Multicentro de ENTEL. La forma de actuar fue la misma: miembros de la FUL y la UJC, cubiertos con barbijos del mismo tipo, incendiaron, quemaron y destruyeron las entidades. Además, los mismos grupos intentaron, en dos ocasiones, asaltar el Plan Tres Mil, pero sus acciones fueron respondidas por los vecinos, que lograron repeler los ataques.

En Tarija y otras ciudades también se registraron acciones de violencia por parte de jóvenes autonomistas. En la zona San Antonio, en las cercanías de Villamontes, se hizo explotar un gasoducto. El hecho afectó temporalmente la exportación de gas a Brasil y causó un incendio de proporciones. El Gobierno acusó a los líderes cívicos del Chaco por el hecho, pero éstos señalaron que había sido un “auto-atentado” del oficialismo.

Estos hechos de violencia descontrolada fueron interpretados por el Gobierno como el inicio del “golpe cívico-prefectural” destinado a derrocarlo.

Pero lo peor estaba todavía por ocurrir. El 11 de septiembre, un puente ubicado a siete kilómetros de Porvenir, por donde un millar de campesinos que marchaban hacia Cobija, en el departamento de Pando, en contra de las políticas del prefecto de ese departamento, fue el escenario de la muerte de 11 campesinos y normalistas, además de dos autoridades prefecturales.

Según el oficialismo, los campesinos fueron emboscados, puesto que de un lado el personal de la Prefectura cavó una zanja de tres metros de profundidad para impedirles el paso, y por la retaguardia aparecieron hombres armados que abrieron fuego.

El Gobierno y la oposición se acusaron mutuamente de haber promovido la muerte de los campesinos. El 3 de diciembre de 2008, la comisión de expertos de Unasur que investigó los hechos emitió un documento en el que ratificó la versión del Gobierno, en sentido de que se había tratado de “una masacre”.

El prefecto de Pando y viejo dirigente político de esa región,

Gente, 4 de julio de 2006

Mujeres tienen 34% en la Asamblea

La Asamblea que se instalará en Sucre el 6 de agosto tendrá un perfil varonil. Según datos de Equipos Mori, sólo 87 mujeres acudirán a la cita en la capital, en tanto que 168 varones irán al encuentro.

Estas cifras, expresadas en porcentajes, revelan que el 65% estará formado por hombres, mientras que el 34,1% de los constituyentes serán mujeres. Para la elección de los asambleístas, la Corte Nacional Electoral determinó que los partidos postulasen equitativamente a varones y mujeres. En las elecciones del 2 de julio las ánforas recibieron un mayor número de votos femeninos. Sólo en Santa Cruz, Pando y Beni hubo un mayor número de electores varones, mientras que en los otros seis departamentos predominaron electores de sexo femenino.

Leopoldo Fernández, fue detenido por personal policial el martes 16 de septiembre y trasladado a La Paz en calidad de confinado, junto a una veintena de dirigentes cívicos y prefecturales. Su detención demostraba con nitidez la enorme debilidad de la oposición cívico-prefectural al Gobierno. Un mes antes hubiera sido impensable detener a un prefecto de la “media luna”. La oposición calificó de ilegal la detención de Fernández, aduciendo que era beneficiario del denominado “caso de corte” y que para su juzgamiento se requería primero del voto de dos tercios del Congreso. El Gobierno desoyó esos argumentos.

Una vez que el Gobierno detuvo a Fernández, se eliminó la “resistencia regional” y la gestión de Morales logró avanzar con menos obstáculos; esa nueva fase se inició con la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado por parte del Parlamento.

“GASOLINAZO” Y TIPNIS

Y es aquí que volvemos al principio de este artículo, al decreto que autorizaba el “gasolinazo” en diciembre de 2010. Éste era el reflejo de la alta confianza en sí mismo que tenía el Ejecutivo entonces. Su victoria sobre los partidos de derecha y los líderes regionales había cumplido ya dos años y tres meses, y el Gobierno se sentía invencible. ¡Y subió los precios de los carburantes hasta en 83%! Fue una muestra colosal de arrogancia y distancia con la realidad.

Tras la oleada de protestas, el Presidente retrocedió. Pero el momento marcó la fractura con ciertos movimientos sociales, que ya no apoyaban más al régimen. El otro sector díscolo fueron los indígenas de tierras bajas unidos alrededor de la CIDOB. En junio de 2011, sólo seis meses después del fallido “gasolinazo”, éstos empezaron a organizar una marcha contra la construcción del camino a través del TIPNIS. En agosto se inició la marcha. El 25 de septiembre, casi tres años exactos después de los sucesos de Porvenir, un contingente policial reprimió brutalmente a los indígenas en la localidad de Chaparina y los obligó a subirse a buses para ser llevados a sus lugares de origen. Fue la segunda muestra, en poco tiempo, de la arrogancia y soberbia gubernamentales.

Los marchistas llegaron en octubre siguiente a La Paz y fueron recibidos apoteósicamente por los habitantes paceños. Desde octubre de 2008, era el momento de menor popularidad del Ejecutivo. Pero un año después, cuando se escriben estas líneas, en octubre de 2012, el oficialismo había recuperado la iniciativa política, subido en las encuestas y se orientaba a terminar de la mejor manera posible (con la segunda reelección en mente) su gestión gubernamental.

(El primer inciso de este texto es de Boris Miranda. El resto es un resumen de algunos capítulos del libro *Crónica del Proceso Constituyente*, de Raúl Peñaranda, FES-Ildis y FBDM, La Paz, 2009).

Mayor inclusión, pero también más confrontación

Abdel Padilla Vargas

A finales de 2005 se pensaba que la crisis política y social expresada en las calles daría, al menos, una larga tregua. No fue así. Entre 2006 y 2012, el país vivió eventos conflictivos tan intensos como los que inauguraron el siglo XXI.

Gobernar sin partidos, pero al mismo tiempo admitir que sin el Congreso “el riesgo es el naufragio total”, es una probada contradicción, que en el caso del ex presidente Carlos Mesa fue su avatar y su sello.

El martes 7 de junio de 2005, luego de 35 meses de permanecer en el Gobierno —15 como Vicepresidente y 20 como Primer Mandatario—, el periodista e historiador renuncia agobiado por una dura crisis política y social, con un Congreso sumido en una guerra por el control del poder, y con movimientos sociales y cívicos en pugna por imponer su propia agenda. Es ingenuo creer que no existía una

estrecha relación entre lo hecho en el Parlamento y las protestas en las calles.

Aunque alejarse de los partidos y acercarse a la gente hizo de Mesa uno de los presidentes más populares (71% a mitad de su mandato), fue también una muestra de debilidad, que acabó por “partir” al país en dos visiones aparentemente confrontadas, apuntaladas en sendas demandas: autonomías y Asamblea Constituyente.

La primera, gestada por los grupos cívicos del oriente del país, en particular el cruceño, y que se traducía en el pedido de un referéndum autonómico y que movilizó y contagió del espíritu “anticentralista” de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, bloque conocido como la “media luna”. Un evento determinante e histórico fue el cabildo cruceño del 28 de enero, una de las mayores

concentraciones ciudadanas y cívicas de esta región, y que daría pie a la llamada agenda de enero.

La segunda, la Asamblea Constituyente, fue el punto central de la agenda de octubre de 2003, por lo tanto un mandato ineludible para el presidente Mesa, quien de alguna manera fue políticamente parido por este proceso.

Su gobierno vivió una especie de combinación de las dos “guerras” sociales anteriores, la del agua y la del gas, expresadas, aunque en menor magnitud, en el pedido de los alteños de la conclusión del contrato con la subsidiaria de la transnacional francesa Suez, Aguas del Illimani, lo que finalmente se produjo; y la demanda de la nacionalización de los recursos naturales, en especial hidrocarburos, de lo que, en parte, se encargará luego Evo Morales.

Con Mesa y luego Eduardo Rodríguez, quien sucederá al primero con el único fin de llevar adelante un nuevo proceso electoral, se cerró un ciclo para dar inicio a otro histórico: el de la asunción del primer presidente indígena del país y de la primera elección de prefectos, inicio del proceso autonómico.

DOS BOLIVIAS, DOS AGENDAS

“Quiero decirles a los aymaras, quechuas, guaraníes y chiriguano que por primera vez vamos a ser presidente...”, fueron las palabras de Evo Morales en el Chapare cochabambino al enterarse, el mismo día de las elecciones, 18 de diciembre de 2005, que la votación por el MAS ya había supe-

rado el 50% de la preferencia nacional. Los resultados finales le dieron el 53,7% de los votos.

Palacio Quemado abrió las puertas al primer presidente indígena del país, y con él la promesa de una era de mayor inclusión para una sociedad heterogénea, pluricultural y desigual.

Entre las primeras medidas de Morales, en consonancia con la agenda de octubre de 2003, destacan la nacionalización de los hidrocarburos, el 1 de mayo de 2006, y la instalación de la Asamblea Constituyente, previo referéndum para la elección de sus miembros el 2 de julio de ese año.

Ese mismo día se llevó a cabo, simultáneamente, el referéndum autonómico, con lo que Morales arqueaba el brazo también ante la agenda de enero, aunque con una previa y clara campaña a favor del “No” a las autonomías, posición que finalmente se impuso en cinco de los nueve departamentos. En el resto, los de la “media luna”, el triunfo del “Sí” derivó en una larga pugna aún no del todo resuelta entre oriente y occidente.

El tufo político contaminó a la sociedad y exacerbó los ánimos regionalistas y discriminatorios basados en una consigna política más que en una convicción cívica, como se demostró años más tarde cuando el propio Gobierno y los departamentos en los que ganó el “No” se subieron al carro autonómico, pero también se hizo evidente durante la crisis edil cruceña de mediados de 2012, cuando el “león” autonómico volvió a adormecerse.

Durante su primer año, el gobier-

no de Morales aprobó el bono Juncito Pinto, con el fin de disminuir la deserción escolar, calculada entonces en 5,3%, es decir que por cada 100 niños que asistían a la escuela cinco la abandonaban. El bono equivale a 200 bolivianos y se cancela a inicios de gestión a todos los estudiantes de primero a octavo de primaria, para la compra de material escolar. Según datos oficiales, desde entonces la deserción bajó a menos de 2% y la cantidad de beneficiarios subió de poco más de un millón de niños, en 2006, a cerca de dos millones, hoy.

En la misma línea, en 2009 el Gobierno lanzó el bono Juana Azurduy para incidir en la disminución de los niveles de mortalidad materna e infantil, con la entrega de 1.820 bolivianos durante 33 meses, distribuidos a partir del primer control prenatal hasta los dos

primeros años del niño. A la fecha, según el Ministerio de Salud, se han beneficiado 700 mil niños y 500 mil mujeres, y el porcentaje de parto institucional, el que se atiende en servicios de salud, se ha incrementado en cerca del 30%.

BOLIVIANOS VS BOLIVIANOS

De manera simplista, la sociedad a inicios de 2007 respecto a su posición en el campo político se dividía en ser o no ser autonomista. Ambos, Gobierno y oposición cívico-regional, estaban cada vez más dispuestos a poner toda la carne al asador y producto de ello se rasgó una vieja herida entre La Paz y Sucre: la capitalidad.

La demanda ingresó a la agenda de la Asamblea Constituyente y derivó en enfrentamientos de sus representantes. Sucre conformó un Comité

La Razón, 1 de febrero de 2006

El desastre conmueve y la ayuda de cuatro países empieza a llegar

“Es como para llorar”, con esa frase el presidente Evo Morales trató de describir el efecto que causaron las lluvias en varias poblaciones de Santa Cruz, donde llegó ayer para escuchar las quejas de la gente y anunciar el arribo de la ayuda internacional. La cooperación no se dejó esperar. Estados Unidos decidió enviar donativos por un valor de medio millón de dólares. Japón aporta con 90.000 dólares. Mientras que Cuba envía seis toneladas de medicamentos y 148 médicos. Venezuela en-

vía vituallas de un valor no cuantificado. Ayer, los comunarios de San Julián, Fortín Libertad y otros lugares se arremolinaron en torno al Presidente en cuanto éste bajó del helicóptero; entre gritos y lágrimas la gente le pidió carpas para acogerse con sus familias y alimentos. “Desde ayer mis hijos no comen nada”, le dijo una mujer, en medio de sollozos, lo que provocó en el Mandatario angustia y se encargó personalmente de buscar soluciones a algunas demandas de la gente.

Interinstitucional y La Paz un Comité de Emergencia. “Bolivia unida, Sucre capital”, gritaban los primeros en un cabildo multitudinario; “la sede no se mueve”, respondían los paceños, en julio, en el llamado cabildo de los dos millones.

La mejor muestra de que un pedido cívico legítimo se politizó al extremo es que el bloque autonomista –Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija– apoyó manifiestamente la demanda sucrense; y el Gobierno hizo lo propio con la defensa paceña.

Entre el 23 y el 24 de noviembre, luego de que la Asamblea excluyera del debate la demanda de capitalidad, el enfrentamiento entre asambleístas

pasó a las calles: tres personas murieron y alrededor de 300 resultaron heridas.

Al final, el oficialismo aprueba en grande el texto constitucional, el 24 de noviembre, y en detalle dos semanas después.

Bajo el mismo cobijo de la polarización, lo que comenzó como un enfrentamiento político entre el prefecto cochabambino, Manfred Reyes Villa, y el presidente Morales deriva, el 11 de enero de 2007, en un conflicto civil sin precedentes que pone frente a frente a ciudadanos contra campesinos, a cívicos contra cocaleros, a norteños contra sureños. El resultado es igual de trágico que en Sucre: tres muertos, dos campesinos y un universitario.

Los análisis posteriores coinciden en que el 11 de enero se puso en cuestión el concepto “kochala” como un espacio de encuentro mestizo.

Al acabar la gestión, se aprueba la Renta Dignidad, en reemplazo del Bonosol del MNR, con una pensión vitalicia para mayores de 60 años: Bs 2.400 para no asalariados y Bs 1.200 para jubilados. La medida fue resistida por prefecturas, municipios y universidades debido a que causaba recortes presupuestarios en sus arcas. Al final sólo las primeras fueron afectadas.

Comienza, por otro lado, una suerte de fuego cruzado contra los medios y periodistas, que se tornaría en una tendencia regular hasta hoy, con agresiones de parte de organizaciones sociales y roces con el Presidente, para quien los medios son su “verdadera oposición”. La relación fue de mal en peor y derivó hacia nuestros días en el

Los Tiempos, 5 de marzo de 2006

El Smithsonian honra a Jorge Ruiz

En este año 2006 el Instituto Smithsonian de Washington, que celebra su bicentenario, otorgará al cineasta Jorge Ruiz una medalla de las que acuñó expresamente para conmemorar el bicentenario de su fundación por obra de James Smithson. También la institución aprovechará este año para proyectar dos filmes de Jorge Ruiz. La distinción del Smithsonian a Jorge Ruiz no es propiamente cinematográfica, aunque se haya aprovechado de dos de sus filmes para incluirlos en una selección hispanoamericana. Como esa institución aclaró en una circular, el mérito de Ruiz es ante todo antropológico, por haber filmado escenas en Bolivia, Perú y Ecuador, que plasman y conservan imágenes etnográficas diversas, como su filme sobre los urus del año 1951.

inicio de procesos penales contra tres medios, cuya definición aún es incierta.

INDÍGENAS VS INDÍGENAS

Dos eventos de repercusión internacional en los siguientes dos años cambian el curso de la polarización política: por un lado, la matanza de Porvenir, calificada por algunos como la “guerra por la tierra”, y, por otro, la muerte del boliviano-húngaro Eduardo Rózsa.

La primera se produce luego de una marcha campesina en Pando que se dirigía a la capital, Cobija, ante el rumor de que las tierras que les distribuyó el Gobierno serían revertidas por la Prefectura al mando de Leopoldo Fernández. Al menos 20 personas murieron entre el 11 y el 12 de septiembre, y pocos días después Fernández fue recluido en el penal de San Pedro; y con ello la oposición cívico-regional quedó mermada.

El segundo evento se trata de una acción del Gobierno para desbaratar un supuesto grupo subversivo armado, que habría llegado al país para la “defensa de Santa Cruz” y del que Rózsa era su líder. La presentación pública del caso acabó por inclinar la balanza de la polarización a favor del Gobierno y puso en evidencia algunos excesos cometidos por los grupos de choque del bloque cívico de oposición: como la humillación a un grupo de indígenas, a quienes se obligó a arrodillarse con el torso desnudo en Sucre, el 24 de mayo de 2008; o la toma de instituciones públicas en Santa Cruz de la Sierra, en septiembre del mismo año.

El 25 de enero de 2009, mediante consulta popular, se aprueba la nueva Constitución Política del Estado, con más del 60% de los votos. El Estado y la sociedad civil inician un nuevo pacto social, dejando la República y dando paso a un Estado Plurinacional, descentralizado con autonomías.

Bajo este marco, el 4 de abril de 2010 los bolivianos asisten a las elecciones de alcaldes y gobernadores, en las que se redibuja una nueva correlación de fuerzas, con presencia masista en dos tercios de los 339 municipios del país.

Ese año se aprueba la Ley Marco de Autonomías, que marca el inicio de un proceso que no acaba de consolidarse, pero que ha servido para fijar al municipio como base de la construcción democrática ciudadana.

Y es aquí, con la oposición política prácticamente derrotada, que se inicia una nueva relación entre movilizaciones sociales y Gobierno, con más fricciones que encuentros y que ponen en tela de juicio la propia identidad popular e indígena del MAS.

La lista es larga como compleja y se caracteriza, como afirma el conflictólogo César Rojas, por ser “multivectorial”. Caranavi: dos muertos por la demanda de una planta de cítricos. Uncía: comunarios linchan y torturan a cuatro policías. Potosí: bloqueo y paro cívico por demandas regionales. Varios municipios: protestas por suspensión de alcaldes opositores. Medios y periodistas: por la aprobación de la Ley contra el Racismo y la defensa de la libertad de expresión.

Entre todos ellos destacan tres eventos relativamente recientes que han logrado no sólo cuestionar las políticas del Gobierno, sino incluso hacerlo retroceder:

El primero es el intento por eliminar la subvención a los carburantes o “gasolinazo” (diciembre de 2010), medida que fue retirada luego de seis días de una movilización con alcance nacional, en especial liderada por los transportistas.

El segundo es la VIII marcha indígena (octubre de 2011), que llegó desde el norte amazónico en rechazo de una carretera que el Gobierno pretendía construir, sin previa consulta, por el medio del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS), y fue recibida en la ciudad de La Paz apoteósicamente, a pesar de la violenta represión policial y que puso en cuestión la condición de defensa de la Madre Tierra del gobierno de Morales.

La Prensa, 22 de abril de 2006

Casa de la Moneda vuelve a acuñar tras 53 años

Tras 53 años de pausa en la producción regular de metálicos, la Casa de Moneda de Potosí volvió esta semana a acuñar monedas de plata, níquel y cobre, según un boletín difundido por Unión Latina.

Las piezas están a disposición de turistas nacionales y extranjeros a 400, 40 y 30 bolivianos, respectivamente. Para la acuñación de las nuevas monedas, la dirección del museo impulsó la rehabilitación de una sección de las maquinarias que hasta 1953 producían la totalidad del dinero metálico de uso regular en el país.

Actualmente, el MAS prepara un proceso de posconsulta, alentado por una contramarcha indígena, auspiciada –según los medios de comunicación– por el propio Gobierno. Contra esta ley de consulta se lanzó la IX marcha indígena (junio de 2012), pero sin los mismos efectos de la octava. La estrategia fue: marcha contra marcha, indígena contra indígena.

El tercer evento es un paro médico de 42 días (mayo de 2012) que obligó al Gobierno a dejar momentáneamente sin efecto un decreto que amplía la carga laboral de los galenos y los trabajadores en salud de seis a ocho horas.

Cierra esta tensa relación el conflicto minero en Colquiri por una veta estañífera, que enfrenta, otra vez, como sucediera el 2006 en Huanuni, a mineros asalariados contra cooperativistas, como el propio Gobierno ha admitido: a hermanos contra hermanos. El problema está latente y tiene como saldo la muerte de un joven minero asalariado y que poco antes fue cooperativista.

Esta vez no sólo es mineros contra mineros ni bolivianos contra bolivianos, sino también hermanos contra hermanos.

Fuentes:

Anuario 2011 de Página Siete

Anuarios 2005-2011 La Razón y La Prensa

Anuarios 2005-2009 del semanario Pulso

La Razón (2007): *25 años de democracia*. La Razón, La Paz-Bolivia.

La Razón (2010): *Bolivia: 1980-2010*, La Razón, La Paz-Bolivia.

La gente reacciona silenciosa y militantemente frente a la declaración del embajador de Estados Unidos



Lo primero que me viene a la mente de lo que sucedió entre diciembre de 2005 y enero de 2006 es la posesión de Evo en Tiwanaku. El 21 de enero de 2006 me impresionó la participación indígena en un acto evidentemente suyo, el ejercicio de poder para los aymaras y los quechuas, en el momento en el que Evo dice: “Hermanos indígenas, ahora somos presidentes”, en plural.

El gabinete tiene como premisa la responsabilidad, el esfuerzo, el trabajo llevado hasta niveles casi extremos en algunos casos, es un equipo bastante solidario, muy ameno. Hay respeto con lo que cada uno de los ministros y ministras está haciendo, y nos han tocado muchos casos muy difíciles. Suele ser un gabinete con poco sentido del humor, pero no deja de ser un gabinete agradable. El gabinete y la gestión de gobierno han cambiado mucho, las percepciones que se tenían el año 2008, momentos muy críticos en los que realmente podías percibir cierto temor, cierta angustia, impotencia y yo siento que ahora ha cambiado a un ambiente de más optimismo, hay una transformación entre una y otra etapa.

La imagen que tengo de la democracia de los 80 es una democracia muy desesperada, muy angustiosa también, penosa, el esfuerzo que todos veíamos. Teníamos que estar a las cuatro de la mañana en la fila de la panadería. Hay una segunda etapa de los 90 en la que el poder como tal se empieza a alejar del ciudadano, de la participación. Es el costo de cambiar a un modelo de mercado y la derrota del movimiento minero en el contexto de

Pablo Groux

Nació en La Paz el 29 de junio de 1968. Politólogo de profesión. Actualmente ministro de Culturas. Fue embajador de Bolivia ante la Unesco.

la relocalización. Siento que es una distancia muy evidente entre la clase política y la sociedad. Todos apreciábamos a los caudillos, ex líderes del momento tomando decisiones por el pueblo y el pueblo queda un poco impotente de querer resolver aquello porque había sido derrotado en la Marcha por la Vida. Esto se revierte cuando el pueblo es protagonista. Nadie va a olvidar que el mejor ejemplo que tenemos es la apropiación del sistema democrático por el pueblo. Ocurre, en mi opinión, el año 2002, cuando la gente reacciona silenciosa y militantemente frente a la declaración del embajador de Estados Unidos. Creo que esos tres cuadros son los que matizan estos 30 años de democracia; el primero una desesperación e impotencia, el segundo una sumisión hacia una clase política y el tercero un verdadero acto de rebeldía ciudadana en democracia, en su recinto electoral, en definitiva diciéndole al embajador Rocha de entonces: “no se meta, esto es nuestro”.

Los pueblos indígenas empezamos a movilizarnos cuando se firma la construcción de la carretera el 6 de abril de 2011. Tuvimos contacto con CEJIS, las comunidades y con la CIDOB; después del primer contacto se convoca a comisión nacional y se hace la demanda, luego sucede un encuentro con los corregidores y es ahí cuando se decide el lugar y fecha de partida. Después se cambia la fecha de salida para el 15 de agosto de Trinidad. Originalmente tenía que partir de Caranavi, pero con la comisión nacional se decide hacer un homenaje a la primera marcha indígena de 1990 y es por eso que se cambia de fecha y lugar de partida, fue así como luego procedió la octava marcha.

Nosotros nos dimos cuenta de que el Gobierno estaba en nuestra contra desde que aprueban la construcción de la carretera con contrato y con todo sin llegar a hacer o no la consulta en las comunidades. Sin tomar en cuenta si existían o no, pero sobre todo si querían la carretera. Ellos fueron los que buscaron el problema, no fuimos nosotros.

Lo que nosotros simplemente hicimos fue defender el territorio y defender nuestros derechos como pueblos indígenas y que se asuman los derechos de diferentes pueblos como los del Conamaq, que nos han acompañado en todo el proceso de la marcha. Vimos irregularidades de parte del Gobierno, porque jamás pudimos observar un estudio del proyecto de la construcción de la carretera y mucho menos un estudio de ficha ambiental. Eso es lo que nos preocupó y conmovió, el no saber qué responsabilidad teníamos como pueblo y dueños del territorio.

De parte del Gobierno no hubo ningún tipo de acercamiento previo a la marcha, en el encuentro de corregidores cuando se decide el inicio de la marcha. Siempre se invitó al Gobierno para que pueda entrar en diálogo con los dueños del territorio, con el CEJIS y con la CIDOB, pero nunca hubo voluntad. En la última comisión nacional se invitó al Gobierno que baje a Trinidad, que era donde nos reuníamos todas las regionales; existió una invitación formal en la que yo también firmé. Pero el Presidente nunca llegó a presentarse.

Nos dimos cuenta de que el Gobierno estaba en nuestra contra desde que aprueban la construcción de la carretera



Emiliano Noza
Corregidor de
la Subcentral
Sécure del parque
nacional TIPNIS.
Participó en la
VIII marcha
indígena de tierras
bajas en contra
de la carretera
Villa Tunari-San
Ignacio de Moxos.

El 24 de septiembre estábamos con la desesperación de estar acampando a la orilla de la carretera sin nada, sin agua para bañarse, consumir, cocinar. En las carpitas, en medio del solazo, sin sombra, sin árboles, en campo abierto, la gente con su desesperación rompe la barrera de la Policía acompañada con el canciller (David) Choquehuanca.

Al día siguiente, nadie esperó lo que iba a suceder. El día 25 nos tomaron desprevenidos, algunos descansando, otros distraídos, bañándose, otros buscando leña para poder hacer su cena. Ha sido una sorpresa cuando nos dimos cuenta de que cada minuto llegaban más y más policías, y nos pusimos a pensar “algo está por suceder”. Cuando de repente ingresaron a la parcela para poder reprimir a los marchistas; yo estaba ahí adelante. Primero me agarran, me maltratan, patean, tumban, me pisan el cuello y me amarran las manos. Mi esposa me defiende y le tiran un empujón y una patada encima, eso nunca lo esperamos nosotros. A las cinco de la tarde, toda Bolivia se enteró de lo que estaba sucediendo. Sin embargo el propio Presidente decía que no sabía qué era lo que estaba pasando, pero ¿por qué había orden del Transporte Aéreo Militar en Rurrenabaque para recogerlos a las 6:30 de la mañana con rumbo desconocido? Eso lo vivimos en carne propia el 25 de septiembre.



EVO LLEGA AL PALACIO

Logró la primera magistratura del Estado con el 53,7% de los votos. Fue posesionado como Presidente de la República el 22 de enero de 2006.



UNA NUEVA NACIONALIZACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS

A través de un decreto supremo, el 1 de enero de 2006, Evo Morales nacionalizó los hidrocarburos. Los centros de distribución fueron tomados por las Fuerzas Armadas.



EL CABILDO DEL MILLÓN

A finales de 2006, Santa Cruz impulsó su agenda autonómica a través del cabildo del millón. Rubén Costas y Branko Marinkovic anunciaron la creación de los estatutos cruceños.



EL CABILDO DE LOS DOS MILLONES

Como respuesta a la demanda sucreña del retorno de los poderes, a mediados de 2007, alrededor de dos millones de paceños se concentraron para decir “la sede no se mueve”.



EL REFERÉNDUM AUTONÓMICO

El 4 de mayo de 2008, la población crucialmente aprobó sus estatutos autonómicos en unos cuestionados referendos. Beni, Pando y Tarija siguieron sus pasos.



LA MARCHA POR LA CONSTITUCIÓN

En octubre de 2008, los movimientos sociales decidieron dar el último empujón para poner en vigencia la nueva Constitución. Cercaron al Congreso y lograron su objetivo.



EL GASOLINAZO

Un día después de Navidad, el Gobierno decretó un alza del precio de los carburantes de hasta un 83%. Las protestas obligaron a Evo Morales a retroceder en la medida cinco días después.



LA CÉLULA DE RÓZSA

El 16 de abril de 2009 fue desbaratada la banda de Eduardo Rózsa Flores. Las circunstancias todavía no fueron esclarecidas, pero los acusan de separatismo y terrorismo.



EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2011

Chaparina fue el escenario de la represión policial a indígenas de la que nadie quiere hacerse responsable. Policías amordazaron y maniataron a los marchistas que defendían el TIPNIS.



LA ÚLTIMA MUERTE DE UN MINERO

Un cartucho de dinamita apagaría la vida de Héctor Choque, minero asalariado que defendía la FSTMB. Sucedió el 18 de septiembre de 2012.

Capítulo

Diversas miradas sobre tres décadas históricas

5

Leer el país es también leer sus procesos: el de la descentralización, la evolución de la participación política de la mujer, la relación entre medios y democracia y otros tantos que son también parte de esta construcción democrática que no ha estado exenta de paradojas.

En 30 años, Bolivia ha ido construyendo un discurso que la dibuja, que la proyecta y que deja ver la íntima relación entre los procesos sociales y la edificación de una institucionalidad democrática.

Democracia callejera

La conflictividad boliviana en 30 años de democracia

César Rojas Ríos

La democracia boliviana se hizo, casi deshizo y rehizo a partir de la conflictividad. La relación entre ambas es íntima y sustantiva. Parfraseando a Hegel en su *Filosofía de la historia* diríamos que cuando contemplamos el pasado, la historia, lo primero que vemos es sólo conflictos. También cuando miramos el presente. ¿Presentará igual panorama el futuro?

La democracia se “hizo” con la memorable huelga de hambre de 1977, cuando un grupo de valerosas mujeres mineras declaró una huelga de hambre indefinida que, en el curso de los días, se transformó en un movimiento de masas que puso fin a la dictadura de Banzer. Una sociedad triste como la boliviana produjo en ésa y otras jornadas memorables la dramática insurgencia de la democracia.

Pero la democracia casi se “deshizo” en octubre de 2003, a 21 años de haberse instaurado, cuando la conflictividad que venía de levantada desde la “guerra del agua” se canalizó en contra de Sánchez de Lozada; pero a unas cuantas cuadras de la plaza Murillo, en su mayor acumulación de fuerzas desde los tiempos de la UDP, no tomó un Palacio Quemado desguarnecido, sino que dio paso a la sucesión constitucional. A paso seguido con Carlos Mesa surge la esperanza de una paz relativa, pero a poco de transitar cunde el desborde popular y las oscuras ambiciones, y en esos meses aciagos de mayo y junio de 2003, la proliferación de antagonismos profundos casi hace saltar por los aires al país. Era el insomnio de las coyunturas y la hora de las tempestades sociales. Cinco años después, septiembre-octubre de 2008,

Conflictólogo y director del CDC.

resultaron siendo igualmente para el gobierno del MAS una temporada en el infierno, pues fue el mes en el que se produjo el “golpe cívico-prefectural”. En ese momento todo parecía indicar que la polarización desembocaría en un choque de locomotoras. No fue así, aunque la gente estuvo instalada en el síndrome del abismo.

Y la democracia se “rehízo” en el ciclo de conflictividad de 2000 a 2009, pues éste permitió que la democracia representativa –deslegitimada y oligarquizada, simulada y deficitaria– pudiera permanecer en pie, así como prolongarse en el tiempo como la forma pacífica de elegir y sustituir a los gobernantes, pero además complementarse con mecanismos propios de la democracia participativa; y debido a la inclusión indígena implementada por el gobierno del MAS, concebirse como una democracia ampliada que busca su clímax en “la fiesta de los colores”, pero también al esforzarse por acabar con la “depravación de la desigualdad” va construyendo la democracia como materialidad (Zavaleta, 1983: 34 y 35). Los bolivianos conquistaron a sangre y dolor una democracia formal que los hizo ciudadanos de derechos, pero avanzan con furor y urgencia hacia una democracia real que los convierta en ciudadanos de hecho.

La historia de Bolivia ya no es el duelo entre el Ejército y la clase obrera, el balance de victorias y derrotas que se sucedieron a partir de 1940, sino la dialéctica de las urnas y las calles, de las imposiciones y las negociaciones que se suceden a partir de 1982.

No es lo óptimo, pero mirada la historia de desencuentros, muchos de ellos cruentos entre los bolivianos, se trata de un avance notable.

CONFLICTIVIDAD Y GOBERNABILIDAD

La insurgencia de la democracia resultó dramática, porque los militares con cinco golpes de Estado pretenden anular la victoria de la UDP en tres elecciones y doblegar su creciente respaldo popular, que alcanzó en las elecciones de junio de 1980 un indiscutible triunfo con 38,7% de los votos. García Meza, debido a la eficiencia con la que ejecutó el golpe y la derrota total del sector institucionalizado, pretende continuar el banzerato. Se trata del pavor a la izquierda y retornará nuevamente varios años después para pretender otra vez cerrarle el paso al MAS (porque en este caso, o la democracia era “huayraleva”, es decir señorial, o no era). La razón: que hagan en los hechos lo que Marx proclamó en el *Manifiesto comunista*.

Pero si el Gobierno chileno de la Unidad Popular resultó siendo una “revolución que no fue”, también en Bolivia lo acabó siendo la de la Unidad Democrática y Popular. No sólo porque el Parlamento le fue adverso, sino también porque una inflación que se hizo notoria en la presidencia de Lydia Gueiler, y llevada a la escala nunca vista de la hiperinflación, generaron una escalada en la conflictividad también inaudita: el Gobierno tuvo que afrontar nueve huelgas generales convocadas por la COB y un paro empresarial, además de bloqueos campesinos, sa-

botajes de empleados públicos, protestas regionales e intentos de golpe que incluyeron el secuestro del propio Presidente de la República (Laserna, 1985: 9).

Aquí encontramos un patrón del comportamiento popular: *los sectores sociales que “invirtieron” en la etapa dictatorial o neoliberal, resistiendo, movilizándose y sacrificándose, cuando se instaura “su” gobierno, pasan a “cobrarle” la factura sin pausa ni límite.* A esto llamaremos la impronta de la urgencia; tanto los dirigentes como las bases populares, urgidos por necesidades largamente postergadas y expectativas intensamente añoradas, se desplazan de los objetivos políticos a las demandas económicas, pero sin una contraparte de responsabilidad. En el caso de la UDP resultó siendo trágico, pues Siles Zuazo renunció a un año de su mandato y adelantó las elecciones, dando paso a la derecha. Pero también está sucediendo lo propio en el gobierno del MAS: la conflictividad social se duplicó respecto a la UDP y también se intensificó su repertorio táctico, aunque sin densidad política para generar una crisis de gobernabilidad.

¿Por qué no se replica la misma situación hoy? *Tanto en el gobierno de Siles Zuazo como de Sánchez de Lozada, encontramos un descenso sistémico, es decir, los subsistemas económico, político, institucional y social empezaron a sumar simultáneamente múltiples disfuncionalidades y rendimientos deficitarios -si bien con un carácter distinto en cada gobierno-, propiciando la renuncia anticipada de uno como la caída estrepitosa del otro, y amenazan la perdurabilidad de cualquier gobierno.*

En el caso de Siles Zuazo, en la esfera económica se tuvieron progresivas devaluaciones, infructuoso control de precios, caída de los salarios, especulación, ocultamiento y agio por doquier, pérdida de control sobre cualquiera de los indicadores económicos, pasando por la desdolarización hasta llegar a la hiperinflación. No le faltó nada a este desquiciamiento de la economía, inclusive se llegó a cortar el agua y la luz al Palacio de Gobierno y

“

La historia de Bolivia ya no es el duelo entre el Ejército y la clase obrera, el balance de victorias y derrotas que se sucedieron a partir de 1940, sino la dialéctica de las urnas y las calles, de las imposiciones y las negociaciones que se suceden a partir de 1982”

la residencia presidencial (Mesa et.al., 1999: 697 - 699). Mientras en la esfera política, la oposición cerró filas de manera implacable en el Parlamento contra cualquier salida razonable a la crisis y la COB pasó a la ofensiva a través del asedio permanente. En cuanto a la esfera social, daba el aspecto de un erial.

Lo propio sucedió en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada: todo empezó a ir de mal en peor. Si en su primera elección ganó con un 30,4%, en la segunda lo hizo con un 22,4% y un 70% de desfavorabilidad. La economía era inestable —el modelo neoliberal

no respondió a las expectativas ciudadanas, generando mayores niveles de desempleo y concentración de la riqueza, y presentando un crecimiento negativo del -0,20 según el Banco Mundial—, había progresiva deslegitimación social —patrimonialismo, prebendalismo, nepotismo y corrupción—, erosión de la “democracia pactada” —conformación de coaliciones de gobierno a partir del “cuoteo” de las reparticiones estatales— y, paralelamente, un ascenso sostenido de los movimientos sociales desde la “guerra del agua”.

Para cerrar con dos datos póstumos: en las elecciones posteriores al derrumbe de la UDP, el MNRI, esta vez en solitario, obtuvo un 4,77%; mientras en 2005 el MNR, posterior a su caída, obtuvo el porcentaje más bajo de su historia partidaria: 6,47%. Todo estaba dicho para ambos partidos desde el momento en que los gobernantes terminaron asumiendo un perfil antipopular y los gobernados una actitud antigubernamental, al presentarse un serio desbalance entre los rendimientos gubernamentales y las expectativas sociales. El choque de esas dos fuerzas contrapuestas sólo podía producir un resultado: “presidencias fallidas”.

¿Qué sucede con el gobierno del MAS? Si hacemos caso a la Fundación UNIR, de enero a octubre de 2011 se habría registrado en Bolivia la mayor acumulación de conflictos desde 2005: 1.241 conflictos. Respecto del año 2010, 458 eventos adicionales. Y si promediamos número de conflictos por mes, el pasado año habríamos tenido 124 conflictos. Y

en el primer trimestre de este 2012 se habrían contabilizado un promedio de 100 conflictos mensuales. También es evidente que desde el año 2005, el Gobierno acumuló una serie de desatinos y desacumuló socialmente; sin embargo, su respaldo electoral se encuentra en el orden del 40% y nada menos que en su séptimo año de gobierno. La razón: el país hoy se encuentra viviendo en un contexto de hibridez sistémica, pues tenemos tanto crecimiento económico como legitimidad gubernamental, si bien los déficits se encuentran en la esfera institucional. En síntesis: el Gobierno tiene profundas raíces sociales, los vendavales conflictivos pueden azotar a diestra y siniestra, pero el árbol permanece incólume.

INCURSIÓN DE LA DEMOCRACIA DE ALTA TENSIÓN

La democracia surge en Bolivia como un proceso de alta tensión: uno, el gobierno de la UDP metaboliza la ingente cantidad de 1.825 conflictos en tres años de gobierno a un promedio de 54 conflictos distintos por mes (datos Ceres); dos, tiene instalado en la arena política un “conflicto agonístico” que no se resuelve en la construcción o consolidación hegemónica por parte del Gobierno, por tanto la inestabilidad resultó crónica, la crisis de gobernabilidad permanente y la caída del presidente Siles Zuazo siempre estuvo a la puerta de todas las coyunturas, así como se dibujó en el horizonte de sus tres años de gobierno la muerte prematura de la naciente democracia;

tres, la UDP mostró una incapacidad inocultable de revertir su ineficacia y deslegitimación, tampoco tuvo autoridad ni liderazgo ante la población, además careció de capacidad de reposicionamiento estratégico frente a la oposición política y sindical; y cuatro, los motores tanto de esos conflictos sociales como del conflicto político se encontraban en una sociedad extremada en sus condiciones materiales (desigualdad) y distancias sociales (discriminación) que condicionaron una política extremista (maximalista y adversativa), pero también en el agotamiento del modelo de capitalismo de estado del 52 (Puente, 2011: 149).

La democracia de alta tensión estuvo en el inicio de la democracia, pero también se volvió a levantar 17 años después, en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada, en el sucesorio de Carlos Mesa y prosiguió con el de Evo Morales en su primer ciclo. ¿Cómo sucedió? La historia empieza en parte en el gobierno de Banzer: ADN alcanzó en las elecciones post-UDP el primer lugar con el 28,57%, inclusive triunfó en los distritos mineros, antiguos bastiones de sus más acérrimos enemigos (Puente, 2011: 157). Pero en las elecciones de 1997 consiguió un mermado 22,3% y el MNR ocupó el segundo lugar con el 18,2%. El “envejecimiento hegemónico” del neoliberalismo empezó a producirse y la “guerra del agua” marcó el punto de

inflexión.

Se trata de un conflicto-evento que en su dinámica contenciosa, pero sobre todo debido a la gestión gubernamental desacertada del gobierno de Banzer, se transformó en un conflicto-proceso: ancla su malestar en una tensión estructural, se enmarca en una ideología y está montada en una ola histórica emergente, movilizadoras de un contraproyecto social. O sea, se trata de la semilla de un árbol futuro que hará historia. Y efectivamente así fue: hizo fracasar en el trayecto el sexto estado de sitio a pesar de ser el más violento de todos: seis muertos, 50 heridos y 22 personas entre detenidas y confinadas, y dejó firmemente instalada una agenda ideológica-política que se fortaleció emplazada por otros conflictos emblemáticos,¹ logrando alterar definitivamente el balance de poder entre Estado/sociedad, para acabar siendo implementada en el gobierno de Evo Morales.

Le toca continuar la saga al segundo gobierno de Sánchez de Lozada. En febrero de 2003, en el centro del poder político, la plaza Murillo, policías y militares se enfrentaron violentamente debido al amotinamiento de la fuerza verde olivo. La confrontación entre Estado/sociedad empieza a descomponer al propio Estado. Esto produce un vacío de poder que será rellenado por dos días consecutivos por una turba que se desparrama por

1 Antes de cerrar este ciclo, digamos algo sobre otro conflicto emblemático en medio de una constelación de conflictos-evento: en septiembre de 2000 se produce el embate indígena, la aparición de la intrahistoria, es decir, la irrupción candente de lo más profundo, interno y de los olvidados de la historia. Los indígenas se hicieron presentes como realidad problemática de la voz estentórea de Felipe Quispe, *El Mallku*.

la ciudad de La Paz, saqueando y dejando instalado su mensaje de fuego: las sedes de los partidos tradicionales que gobernaron el país; la Cervecería Nacional, empresa símbolo de la evasión impositiva; y la Vicepresidencia y su espuria lucha contra la corrupción, acabaron por arder. El saldo fueron 33 muertos y 70 heridos.

La pradera estaba seca y hacía falta una cerilla para incendiarla. El mes de septiembre de 2003 arrancó con la protesta de los alteños al plan Maya-Paya, presentado por el entonces alcalde José Luis Paredes; luego, a mediados



Lo que vino entre 1985 y antes de 2000 podríamos caracterizarla como una democracia callejera, porque si bien la conflictividad descende, los conflictos siguen presentes en las calles”

del mismo mes, se iniciaron bloqueos indígenas en la zona del lago Titicaca. El Gobierno organizó un operativo militar para desbloquear el acceso al pueblo de Sorata. Lejos de atemorizar la medida represiva, despertó a la alemana, indígena y empobrecida ciudad de El Alto y a su poderosa Federación de Juntas de Vecinos (Fejuve), aunque lo que acabó por movilizarla y llevarla a cerrar todos los accesos viales a La Paz fue la decisión de exportar el gas boliviano por puertos chilenos a la costa oeste de Estados Unidos, México y al propio Chile.

El 9 de octubre la situación se tor-

nó violenta en El Alto, debido al despliegue militar que ocasionó la muerte de más de medio centenar de personas y centenares de heridos de bala. Esto produjo un sentimiento de agravio colectivo que irradió el conflicto a todo el altiplano (Oruro y Potosí) y al valle (Cochabamba y al área rural y luego a la ciudad de Sucre), mientras los departamentos de tierras bajas, nucleados alrededor del Comité Cívico de Santa Cruz, no se plegaron a las movilizaciones, más bien respaldaron al Gobierno y repelieron las movilizaciones indígenas y populares que buscaron tomar la plaza central, para al final del conflicto arriar las banderas de la autonomía.

La propagación del conflicto y la represión dura de las fuerzas de seguridad, después de que un convoy militar intentó atravesar el bloqueo en El Alto, ocasionando varios muertos y centenares de heridos, generaron fisuras cada vez más profundas en la frágil coalición gobernante. La indignada clase media también se sumó al conflicto a través de marchas y huelgas de hambre en La Paz y otras ciudades. En ese ínterin, la demanda inicial de “no a la exportación del gas por Chile” se transformó en el estentóreo “¡fuera Goni!” que cundió como un reguero de pólvora. La Paz se convirtió en una urbe tomada por las masas movilizadas y El Alto era un aluvión de fuego. El Congreso Nacional, reunido en calidad de obligada emergencia, consagró como presidente de la República al hasta entonces vicepresidente Mesa. La primera “presidencia fallida” se había consumado. Luego el improvisado

gobierno de Carlos Mesa quiso hacer historia y no pudo, pretendió gestionar la cuota elevadísima de 1.042 conflictos durante sus 20 meses de gobierno y tampoco pudo. También la suya acabó siendo una “presidencia fallida”.

La saga de la democracia de alta tensión no acaba aquí, sino que continuará durante el primer ciclo de conflictividad del Gobierno de Evo Morales. El primer conflicto que asomó con fiereza al tablero nacional fue el de la “capitalidad plena”, dejando maltrato el proceso constituyente y una fisura desgarradora entre gobierno/sucreses. Tuvo su antecedente en el conflicto del 11 de enero de 2007 en Cochabamba, donde la disputa por el poder regional tomó todos los tintes de un enfrentamiento violento entre clases sociales-razas, ante la ausencia del Estado y en una ciudad sitiada y sin ley (Cfr. Zegada, 2007). Pero el punto más alto en este proceso lo marcó el golpe cívico-prefectural, cuando la “media luna” consumó un desafío abierto al gobierno de Evo Morales; pero será en el Porvenir donde las fuerzas del cambio terminaron por imponerse sobre las fuerzas conservadoras (Miranda, 2012).

¿Cómo se podrían leer todos y cada uno de estos acontecimientos? Volvemos al principio: en el país no se resolvió, ni en el ciclo corto de la UDP ni en el más extendido del neoliberalismo, la situación de una sociedad extremada –la enfermedad– que produce una política extremista –el síntoma–, que acabó instalando en el escenario nacional un “conflicto agónico”, en el que los adversarios se

comportan desde la lógica schmittiana amigo/enemigo. Dramático. Pero el síntoma perverso del antagonismo radical volverá a resurgir una y otra vez, y cuantas veces sea necesario, mientras Bolivia no transforme su estructura social, convirtiendo a los pobres en una clase media mayoritaria que modere la política.

En este sentido, el gobierno de Evo Morales presenta después de la Revolución de 1952 una novedad radical en la historia de Bolivia, pues si en el segundo gobierno de Sánchez de Lozada contábamos con cinco millones de pobres y dos millones y medio de clase media, hoy la cifra de pobres disminuyó en un millón de personas (PNUD), y la clase media se compone de 3, 5 millones personas y los pobres de cuatro millones. La cifra por primera vez casi está pareja y la clásica pirámide social se transforma en un pentágono. La monolítica realidad se conmueve: el país del futuro se anuncia como una “sociedad de clase media nivelada”. La esperanza está y esta vez la realidad la acompaña en cortejo promisorio.

CAMBIOS SUSTANTIVOS EN UNA TENSA CALMA

Lo que vino entre 1985 y antes de 2000 podríamos caracterizarla como una democracia callejera, porque si bien la conflictividad descende, los conflictos siguen presentes en las calles: en 15 años y tres períodos consecutivos de gobierno (Paz Estenssoro, Paz Zamora y Sánchez de Lozada) se presentaron 2.779 conflictos. Una relativa estabilidad. Los motivos parecen

ser tres y de distinto orden: primero, el modelo neoliberal y la democracia pactada, respecto al período de la UDP, empieza a demostrar una hibridación sistémica;² segundo, también es cierto que se implementaron cinco estados de sitio para sofocar el desorden social; y tercero, la profunda decepción sufrida con el fracaso de la UDP generaron la desaparición fáctica de la izquierda así como la impotencia sindical, huérfana de un modelo alternativo al neoliberal (Cfr. Puente, 2011).

El conflicto-proceso de este ciclo lo representó la Marcha por la Vida, porque significó la derrota de la clase obrera y el “fin de una era de poder sindical”. La hegemonía del neoliberalismo estaba asentada. La amarga sensación de impotencia en la izquierda generó inclusive tres brotes marginales de lucha armada: el grupo Zárate Willka, la Comisión Néstor Paz Zamora (CNPZ) y el Ejército Guerrillero Túpac Katari (EGTK). Aquí encontramos un patrón de corte histórico: no es el pacto democrático, sino la derrota—sea de las fuerzas populares por el MNR, sea de las fuerzas conservadoras por el MAS— la que abre un ciclo de relativa estabilidad hegemónica en el país. Aunque debajo de esa calma se estaba fraguando un cambio trascendental y de vasto alcance: la monofonía obrera, campeante desde los prolegómenos de la Revolución de 1952 hasta precisamente la Marcha

por la vida en agosto de 1986, iría a dar paso a una polifonía protestaria que se convirtió a partir de 2000 en un coro ensordecedor: no sólo obreros, sino informales, cívicos, empresarios, alteños, coccaleros, transportistas, cooperativistas, gremiales, regantes, maestros, médicos, funcionarios públicos, jubilados, universitarios, sin tierra, sin techo, inclusive policías. La conflictividad devenía polifónica, polimorfa y policlasista. Aunque la voz protagonista llegaría a ser la indígena-originaria-campesina debido a un entramado de marchas, congresos, pactos, organizaciones, liderazgos, ideología, demandas estratégicas, manifiestos y politización. El camino que habían recorrido era arduo y sinuoso, de ser en su momento la fuerza de asiento del bloque dominante con el pacto militar-campesino, hasta lograr con el gobierno del MAS sentarse en la misma silla presidencial. El advenimiento indígena se produjo porque una masa indiferenciada y fragmentada acabó politizándose y liberándose de su complejo colonial.

Zavaleta Mercado escribió en *Las masas en noviembre*: “Lo que califica como democrático o no a un proyecto, como lo hemos dicho antes, es la opinión o recepción de los proletarios. Esto es una ley en Bolivia: donde no hay consenso obrero, no hay legitimación” (1985: 43). La ley se ha roto y tampoco los indígenas están pudien-

2 Existen indicadores de distinto orden que suben: la hiperinflación está derrotada, la moneda se estabiliza y la economía empieza a crecer, aunque los indicadores sociales duros, como la (extrema) pobreza, la desigualdad y la exclusión, permanecen deficitarios.

do sostener ni podrán hacerlo la vieja centralidad obrera. Dos razones de gran sencillez: una, debido a la movilidad social ascendente, la superposición entre clase y raza se empieza a desacoplar, permitiendo a los indígenas desparramarse a lo largo y ancho de toda la pirámide social, de donde la clase, el estatus y la posición social tendrán más preeminencia que la identidad. Lo indígena dará paso a los indígenas. La diversidad se impondrá sobre la unicidad. Y otra, la polifonía protestaría nos recuerda cada día el peso de la pluralidad de voces y sectores. La lucha de clases, la lucha de razas, las luchas regionales, dan paso a las luchas sociales. La diversidad predomina sobre la unicidad. Conjurado el mito de la axialidad obrera por la realidad compleja y complejizadora, sólo queda el reconocimiento de la diversidad que da paso a la sana convivencia.

¿Entonces qué? La democracia y sus equilibrios, la democracia y sus acuerdos, la democracia y el pluralismo, pues sólo ella como una síntesis connotada de la sociedad puede habérsela con la diversidad. *La democracia dejó de ser una opción, porque pasó a ser nuestro destino.* Y éste es el mejor homenaje que le puede hacer nuestra realidad compleja y en movimiento a la democracia en sus 30 años de vida.

Fuentes

- Dunkerley, James
2003 *Rebelión en las venas*. La Paz: Plural.
- Laserna, Roberto et.al.
1985 *La insurrección de la democracia*, en: *Crisis, democracia y conflicto social. La acción colectiva en Bolivia: 1982-1985*. Cochabamba: Ceres.
- Mesa, Carlos, Mesa, José de y Gisbert, Teresa
1999 *Historia de Bolivia*. La Paz: Editorial Gisbert.
- Miranda, Boris
2012 *La mañana después de la guerra*. La Paz: El Cuervo.
- Puente Calvo, Rafael
2011 *Recuperando la memoria. Una historia crítica de Bolivia (I,II)*. La Paz: Plural.
- Zavaleta Mercado, René
1983 *Las masas en noviembre*. La Paz: Librería Editorial Juventud.
- Zegada, María Teresa
2007 *11 de enero: ¿Cochabamba a la deriva?*. Cochabamba: Centro Cuarto Intermedio.

Ideas e instituciones de la democracia boliviana

Moira Zuazo¹

Las ideas son cárceles de larga duración, decía Braudel; pensando localmente añadiríamos que las ideas de un pueblo son las que dan vida, potencian o hacen obsoletas las instituciones.

La pregunta general con la que quiero dialogar en este ensayo es: ¿Cómo se articulan democracia y des-centralización en Bolivia?, responder a esta pregunta me remite a la cuestión de las fuentes de la democracia boliviana. Esta cuestión la pensaré desde dos perspectivas, la de las ideas colectivas compartidas y la perspectiva de las instituciones políticas con las que funciona la democracia real en el tiempo.

Pensar en democracia nos remite a la cuestión de la inclusión social: ¿Quiénes forman parte del pueblo o

demos? La cuestión de la inclusión/exclusión, el adentro y el afuera, nos lleva al quiebre histórico más importante de la sociedad boliviana, que es el quiebre conquista/colonia como el origen.

1825. ¿Bolivia?: Temor a la des-integración, autoritarismo y anhelo de democracia.

Dos elementos marcan el imaginario social del proceso de fundación de la República de Bolivia, por un lado el hecho de la factualidad de un territorio disgregado entre montañas, habitado por población criolla en unos pocos centros urbanos, bastante autónomos entre sí y en medio de un entorno rural marcado por la diversidad de pueblos indígenas con diversidad de lenguas, habitando el conjunto del territorio. En medio de esta diversidad

Moira Zuazo es doctora en Ciencias Sociales, profesora del CIDES UMSA y coordinadora de descentralización de la Fundación Ebert.

e inaccesibilidad no es casual que los gritos libertarios de Charcas y La Paz fueran distantes en el tiempo y en sus agendas, como tampoco que la rebelión e insubordinación del ámbito rural conformara “republiquetas”: espacios rebeldes autónomos.

El segundo es la idea prevalente en el imaginario indígena de la fundación de la República como continuidad de la Colonia; la República que nace refleja la imagen del 10% que constituía la población urbana boliviana y es ajena al 90% de la población rural. La continuidad entre Colonia y nuevo orden republicano permite explicar por qué se mantiene como un elemento recurrente la presencia política indígena bajo la forma rebelión, y explica también que la relación primordial de los indígenas con el nuevo orden republicano sea de subordinación, no pertenencia. Lo que antecede contribuye a explicar la necesidad y relativa legitimidad de un orden autoritario como la forma recurrente de ejercicio del poder en las primeras décadas.

Después del desastre de la guerra del Pacífico, se instituye la democracia censitaria con elecciones no verificables y con limitado pluralismo político. Después de 20 años de ejercicio de esta democracia del 10%, Bolivia llegó a la “guerra federal” como una sociedad dividida y allí fundó “el miedo al federalismo”, y aun 100 años después de aquel 1899, en Bolivia se conjura incluso la palabra “federalismo”, que es en realidad una transmutación del miedo a la sublevación del mundo indígena.

Los indígenas participaron en la “guerra federal”, volcando la balanza a favor de los paceños. Al triunfo paceño en la guerra, paradójicamente prosiguió el cierre de filas de la élite criolla boliviana, unida en torno a la barbarización de los indígenas por su actuación en la “guerra”, actuación que no fue otra cosa que el reaccionar del siervo al sometimiento de siglos.

La historia de Bolivia del siglo XIX y principios del XX fue la de un Estado débil, enfrascado en una carrera por construir modernidad liberal (Rodríguez 2012) con mirada esquizofrénica del país real. En medio de una sociedad dividida entre blancos e indios, el sueño letrado era la construcción de una sociedad que comparte el prejuicio de la igualdad; es decir, el sueño era democracia representativa.

En este escenario, el presidencialismo se erige como la respuesta institucional frente a la necesidad de “preservación de la unidad”, ello junto a un municipio urbano que contaba con un importante caudal de legitimidad para el mundo criollo (Rodríguez), lo cual contribuye a explicar por qué la autonomía municipal se convierte en un blanco de ataque el momento de la Revolución de 1952.

Revolución de 1952: Centralismo y democracia aparente

La Revolución de 1952 es el primer intento de construcción de Estado-nación en Bolivia. Esta construcción tomó como modelo al Estado centralista, como forma institucional para conjurar el persistente miedo a la desintegración.

Las ideas hegemónicas que sirven de pilares a la construcción estatal del 52 son la idea de nación como nación homogénea, y la idea de revolución. La idea de nación del nacionalismo revolucionario NR (Mayorga 1985) parte del supuesto de la invisibilización de la diversidad étnica y lingüística de la sociedad real como condición para el desarrollo de la idea y el sentimiento de pertenencia, y parte también de la diferenciación de “lo nacional popular”, el demos, el adentro, frente a la “antinación”, los ricos y la oligarquía.

La forma rebelión indígena era la configuración de la presencia de lo indígena, propia del momento colonial y de la fundación de la República. En el nuevo contexto de 1952, que es de apropiación y construcción de pertenencia, la rebelión transmuta en revolución, por este camino el 52 marca las creencias y valores de la cultura política boliviana hacia adelante. Para lo campesino y popular, el ser parte sólo es aceptable si se piensa al Estado como revolucionario.

Durante el período del Estado nacional-revolucionario (1952 - 1964), a pesar del ataque a las instituciones y de la persecución política, se llevaron a cabo tres procesos electorales que fueron cuestionados por la ausencia de transparencia para el procesamiento de resultados y por la ausencia de pluralismo político como contexto necesario. La presencia de elecciones nos muestra sin embargo una apropiación de la idea de democracia que se expresa en el reconocimiento de las elecciones como fuente de legitimidad.

El presidencialismo ahora exacerbado junto a un Parlamento débil es la forma institucional de ejercicio del poder que pervive respecto al período previo, lo nuevo es la presencia de las masas en la política con la forma cogobierno obrero campesino como el momento de mayor influencia y de mayor fluidez del poder.

Para 1952 la sociedad boliviana ya había transitado un importante proceso de migración rural - urbana que a este momento nos va a mostrar una correlación de dos tercios



La asunción de la identidad campesina y de la forma organizativa obrera ‘sindicato’ significa la puesta en cuestión de una institución nuclear de la tradición indígena de tierras altas, cual es la democracia directa”

de población rural frente a un tercio de población urbana. Este hecho demográfico trae consigo un proceso cultural de ampliación y profundización del mestizaje. A partir del 52 el mestizaje se convierte en el mecanismo legítimo de ascenso y movilidad social.

Para la mayoría de la población boliviana que vive en áreas rurales, la identidad emergente como identidad positiva y hegemónica, es la identidad campesina que se despliega políticamente en la organización de sindicatos campesinos.

La asunción de la identidad campesina y de la forma organizativa obrera “sindicato” significa la puesta en cuestión de una institución nuclear de la tradición indígena de tierras altas, cual es la democracia directa. Sobre la base del principio categórico de igualdad, que plantea que todos los miembros de la comunidad son esencialmente iguales en capacidad para participar del gobierno de la comunidad (Dahl 2008), las comunidades



El cambio más importante es el reconocimiento de las naciones indígenas en tanto sujetos colectivos con derechos políticos que se traduce institucionalmente, por un lado, en la presencia de siete diputados indígenas en la Asamblea Legislativa Plurinacional y, por otro lado, en el desarrollo de autonomías indígenas”

indígenas presentan la institución: carácter rotativo de las autoridades, opuesto al principio de la elección popular como base de la representación. Considero que esta tensión no resuelta contribuye aún hoy a la mirada de la sociedad boliviana de la representación y del Parlamento.

Como un proceso paralelo y subterráneo vamos a ver que durante todo el período de la Revolución del 52 y también hacia adelante perviven las identidades indígenas mucho más en tierras bajas, donde la Revolución del 52 tuvo menos alcance e influencia, y mucho

menos en los valles y tierras altas, donde el sindicato campesino arrasa.

Como parte del discurso estatal emerge el elogio del mestizaje contraponiendo la previa identidad mestiza vergonzante republicana. Este hecho discursivo esta acompañado por un proceso de aceleración de la migración rural-urbana, lo cual nos está mostrando que la hegemonía de la idea de modernidad unida a la urbanidad está presente y se expande. A su vez con la migración a las ciudades hay un fortalecimiento creciente del proceso de mestizaje cultural.

Mestizaje cultural no es equivalente a superación del prejuicio de la desigualdad como moneda principal del intercambio social, sino que en la misma medida que el mestizaje cultural y la vida urbana se expanden en la población, se reafirma una estructura de ideas de discriminación que opera en cascada (Zuazo y Quiroga 2011), que socava la propagación de la idea de igualdad como prejuicio popular.

Esta discriminación de múltiples jerarquías cambió el rol del mestizo en el sistema social; lo mestizo, en lugar de cumplir un rol cohesionador, terminó sembrando desconfianza generalizada.

1982-2000. Democracia representativa: pluralismo político y retorno de la descentralización

El retorno a la democracia en 1982 como una demanda de las masas es el elemento que marcará el carácter del período, pues está hablando de la democracia convertida en un anhelo de masas, lo cual hará posible la real

vigencia del voto universal y la verificabilidad de las elecciones.

Durante este período los partidos políticos asumen un rol, por un lado, protagónico y, por otro lado, gratuito. Protagónico porque por primera vez en la historia de Bolivia los partidos pasan a ser los actores centrales en el ámbito de la definición de la titularidad del poder, y gratuito porque la recuperación de la democracia no fue un producto de la lucha de los partidos representando a la sociedad, sino producto de la lucha de la sociedad organizada y expresada fundamentalmente en la COB.

La COB como síntesis de la sociedad empujó a la instauración de una democracia irrestricta y en sus decisiones y accionar fue seguida por la mayoría de los partidos de izquierda en el país. (Lazarte 1987)

En el nuevo rol de ocupar el centro del escenario público, por primera vez en la historia republicana los partidos políticos despliegan un sistema de interrelación competitivo basado en un pluralismo político ahora no cuestionado (Romero).

La Ley de Participación Popular de 1994 fue una forma de descentralización radical a través de la creación de municipios en el área rural y la descentralización de importantes recursos a éstos. A través de esta reforma y de la creación de circunscripciones uninominales, la democracia boliviana generó las fuentes de legitimación que le permitirán superar una crisis de Estado, sin llegar a romper su débil institucionalidad (2000 - 2005); sin embargo, la municipalización significó también un desafío para los viejos partidos, que

acabó con el colapso del viejo sistema competitivo.

Durante el período democrático que vivió Bolivia entre 1982 y 2000, más allá de algunos atisbos de construcción institucional exitosa que no fueron valorados por lo popular, casi sonaba como un viejo recuerdo la consigna “revolución” de los años 50, sin embargo ello no significó la instalación de una cultura de valoración de la institucionalidad ni la emergencia de una mirada amigable con el pasado y sus actores, que es la forma de presencia popular de este valor social.

Este momento de construcción de democracia representativa de masas en Bolivia es también el tiempo del viraje de la correlación rural-urbana. En el censo de 2001, Bolivia pasa a tener una correlación de dos tercios de población urbana y un tercio de población rural. Este proceso migratorio rural-urbano de los 50 años previos dejó profundas heridas que se van a expresar en las identidades de lo popular boliviano urbano contemporáneo.

Estado plurinacional: algarabía de la diversidad y descentralización radical

El Estado Plurinacional que se consagra en la nueva Constitución Política del Estado de 2009 inicia su proceso en la crisis estatal de 2000 y aglutina a la totalidad de la población rural y a la mayoría de la población urbana bajo la consigna “revolución democrática”. Lo que vemos es que el paradigma de los años 50 –“revolución”– revive ahora acompañado

de un adjetivo: “democrática”, y entre ambos dan forma y cohesionan al sujeto popular que acompaña en la protesta callejera y vota en las urnas a favor del “proceso de cambio”.

Si sometemos el matrimonio discursivo –revolución democrática– a la lupa de la historia, veremos que está articulando dos conceptos de tradiciones opuestas: por un lado, “lo revolucionario” con raíces en el estatus –indio igual a siervo– que comparten Colonia y naciente República y, por otro lado, “lo democrático representativo”, tradición presente en la élite desde el origen republicano, pero ausente de lo popular hasta más de siglo y medio después. La primera huella de “lo democrático representativo” en el sujeto popular será, como decía René Zavaleta, la participación en elecciones del primer partido katarista, hablando de las elecciones de retorno a la democracia (Zavaleta 1983), pero la presencia de lo democrático como parte de la cultura política popular se despliega en este momento y trae sus propias cargas.

La segunda idea hegemónica que marca la ruta del cambio es la autonomía como demanda de acercamiento del poder al ámbito departamental, que se expresa en los resultados electorales del referéndum por las autonomías de 2009 y que permite la implementación de autonomías departamentales en todo el país. Acá constatamos que las ideas son cárceles que es posible abrir. Bolivia, que veía en el federalismo un fantasma, es hoy el espacio de la fiesta de la diversidad.

Una tercera idea hegemónica es “lo plurinacional” como apellido del Estado. Lo plurinacional del Estado se presenta en la Constitución de 2009 como algarabía de la diversidad, en la medida en que convierte en principios rectores o matrices la diversidad política, étnica, cultural, lingüística y económica. Esta fiesta discursiva de la diversidad encuentra pocos anclajes en la realidad.

El cambio más importante es el reconocimiento de las naciones indígenas en tanto sujetos colectivos con derechos políticos que se traduce institucionalmente, por un lado, en la presencia de siete diputados indígenas en la Asamblea legislativa Plurinacional y, por otro lado, en el desarrollo de autonomías indígenas, cinco de las cuales están hoy discutiendo sus “contratos sociales”, documentos que nos mostrarán la conversión en derecho positivo de las instituciones de democracia directa vivas que se practican en contextos sociales de comunidad de vista, con autoridades rotativas enfrentadas al desafío de mantenimiento de formas básicas de igualdad económico social, en un contexto general de país que promueve fuertemente la diferenciación, siendo éste el mayor de sus retos.

El demos: ¿Identidad boliviana en disputa o en movimiento?

Cuando observamos datos de encuestas (Seligson 2005 y 2006) constatamos que hay una identidad boliviana mayoritaria que alcanza a un promedio de 87% de la población. Si pensamos este dato junto al hecho de que es

en el presente cuando el Estado boliviano reafirma y festeja su diversidad, llegaríamos a la conclusión de que estamos ante una contradicción, sin embargo tratando de ir más allá del dato y recurriendo para ello a otras fuentes, incluidas las artísticas, veremos que en realidad desde la creación de la República la mayor parte de los bolivianos ha compartido la idea de pertenecer a la “nación boliviana”; sin embargo, la concepción de pertenencia ha sido el objeto de la disputa, la concepción del *demos* ha sido distinta para los diferentes grupos sociales y en los diferentes momentos históricos.

La concepción de la élite de principios de la República estaba marcada por su creencia en la desigualdad entre blancos e indios como el carácter central de la sociedad boliviana. La creencia en una sociedad “blanca” versus una sociedad de “indios” estuvo en la base de su concepción de sociedad.

Por su parte, para los indígenas la concepción de “los blancos” en parte se sintetiza en el retrato que nos presenta el baile “la diablada”: hombres blancos y altos que a saltos asociales ocupan el espacio y constituyen la encarnación de la maldad.

En medio de ambas polaridades, los mestizos a lo largo de la historia republicana son la encarnación del barroco, expresan la amplia diversidad que los constituye y la marca que comparten es la contradicción. El mestizo es el ser que en algunos momentos conoce la discriminación como “víctima” y en otros momentos ejerce la discriminación como mecanismo para afirmar su lugar en la escalera social.

Marcar la frontera con quienes considera “inferiores” es la forma de reproducir la razón de ser de su propia “superioridad”.

Fuentes

- Dahl, Robert. 2008: *La democracia y sus críticos*. Ed. Paidós, México.
- Hegel, Friedrich. 2009: *Fenomenología del espíritu*. Ed. Pre-textos Trad. Manuel Jiménez Redondo Valencia.
- Lazarte, Jorge. 1987: *Cogestión y participación: Ideología y política del movimiento obrero*. En Mayorga, René (Comp) *Democracia a la deriva*. Ed. Clacso Ceres, La Paz.
- Mayorga, Fernando 1985: *El discurso del nacionalismo revolucionario*. Centro de Información y Documentación para el Desarrollo Regional, Cochabamba.
- Rodríguez, Gustavo. 1995: *Estado y municipio en Bolivia*. Ed. Secretaría Nacional de Participación Popular, La Paz.
- Rodríguez, Gustavo. 2012: *Las antinomias del nacionalismo revolucionario. Documento para el debate*. En Zuazo, Faguet y Bonifaz. *Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia*. Ed. FES, La Paz.
- Romero, Salvador. 2012: *El sistema de partidos en Bolivia. 1952 –2012*. En Zuazo, Faguet y Bonifaz: *Descentralización y democratización en Bolivia. La historia del Estado débil, la sociedad rebelde y el anhelo de democracia*. Ed. FES, La Paz.

- Seligson, Mitchell, Moreno, Daniel y Schwarz, Vivian. 2005: *Auditoría de la democracia*. Informe Bolivia 2004. Ed. LAPOP. UCB, La Paz.
- Seligson, Mitchell y otros. 2006: *Auditoría de la democracia. Informe Bolivia 2006*. Ed. LAPOP Ciudadanía.
- Zavaleta, René. 1983: *Las masas en noviembre*. En *Bolivia hoy*. Ed. Siglo XXI, México.
- Canetti, Elías. 1983: *Masa y poder*. Ed. Alianza, Madrid.
- Zuazo, Moira y Quiroga, Cecilia. (Coords.). 2011: *Lo que unos no quieren recordar es lo que otros no pueden olvidar. Asamblea Constituyente, descolonización e interculturalidad*. Ed. FES, La Paz.

Recorridos y sentidos de la interculturalidad en Bolivia

María Soledad Quiroga¹

En estas páginas se intentará hacer un esbozo del recorrido y sentido que la interculturalidad ha tenido en Bolivia en los últimos 30 años, es decir desde la recuperación de la democracia.

Este punto de partida no obedece solamente a la necesidad de conmemorar un hito en la historia reciente del país, sino también al hecho de que tanto la vigencia del sistema democrático en este período como sus crisis, crearon un campo fértil para el desarrollo de la interculturalidad –entendida como propuesta o proyecto transformador–, puesto que hicieron posible el desarrollo de movimientos sociales fuertemente críticos de la falta de correspondencia entre la estructura del Estado y sus políticas y la diver-

sidad de matrices culturales existentes en el país y secularmente excluidas².

Como plantea el título, se trata de recorridos y sentidos en plural, ya que el trayecto de la interculturalidad no es lineal; por el contrario, el curso que ha seguido esta propuesta es sinuoso, con avances y retrocesos, nudos problemáticos, líneas de fuga y nuevos desarrollos.

INTERCULTURALIDAD Y LUCHAS INDÍGENAS

En los orígenes del planteamiento intercultural en Bolivia se encuentran las luchas indígenas por el reconocimiento de los derechos de las naciones y pueblos originarios. En la primera mitad del siglo XX, estas luchas fueron gestando un sujeto indígena contestatario y aislado que no pudo irradiar sus ideas a otros sectores sociales; el indigenismo imperante en América Lati-

¹ Gerente del Área de Información, Investigación y Análisis de la Fundación UNIR Bolivia.

² Tapia, 2007.

na —y que en algunos momentos fue asumido por el Estado boliviano— no tenía un carácter transformador. La Revolución del 52 se propuso la construcción de una nación, el desarrollo de una identidad nacional fuertemente cohesionada a través de un proyecto de mestizaje y de la campesinización de la población indígena, organizada bajo la forma sindicato; más afines al indigenismo que a las posiciones indígenas críticas, estas políticas aplicaron un freno al movimiento indígena; el pacto militar-campesino de los años 70 —una suerte de tutelaje de la población indígena— actuó en el mismo sentido.

A fines de los años 70 surgió el katarismo, movimiento indianista que actualizó las luchas indígenas de larga data, recuperando los postulados de Fausto Reinaga; en la siguiente década el katarismo fue creciendo y fortaleciéndose y se bifurcó en dos ramas: una indianista que defendía la autodeterminación de las naciones indias y la necesidad de reconstituir las formas organizativas ancestrales, y otra katarista que creía en la articulación de las reivindicaciones culturales y clasistas y la construcción de un nuevo Estado nacional a partir de la realidad plural del país. Cada una de estas tendencias dio lugar a la conformación de un partido político, el Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA) y el Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTK). En 1979, bajo el influjo de la COB y del MRTK se creó la Confederación Sindical Única de Trabajadores

Campesinos de Bolivia (CSUTCB), como organización de tipo sindical que, con el tiempo, se extendió a todo el país. Como señala Esteban Ticóna³, indianismo y katarismo son frutos no previstos de las conquistas del 52 —educación y participación política del campesinado— y de su carácter inconcluso que generó frustración e hizo resurgir la memoria larga de enfrentamiento con el Estado.

A diferencia de los indígenas andinos, los de tierras bajas no habían logrado mayor desarrollo organizativo y político, el Estado los había definido como “selvícolas” y colocado en una condición de inferioridad respecto a los pueblos indígenas de tierras altas. Recién en 1990 surgieron en el escenario nacional con un perfil político propio a partir de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, que logró que el Estado reconozca legalmente sus territorios y que el país asuma su significación social y política.

La “cuestión indígena” que la revolución nacional intentó resolver a través del proyecto de mestizaje permaneció abierta en el país. En la década del 80 el movimiento obrero entró en declinación; las políticas cuyos emblemas fueron el DS 21060 y la “relocalización” minera le quebraron el espinazo, con lo que se crearon condiciones para el fortalecimiento del movimiento indígena, que introdujo un enfoque étnico-cultural en las luchas políticas y que fue ganando terreno progresivamente. Con la crisis estatal y del sistema político del

³ Ticóna, 2003.

año 2000, los movimientos sociales —y el movimiento indígena— pasaron de la reivindicación de derechos específicos que no siempre suponían un cuestionamiento del Estado (tierra, educación, salud, participación) a la interpelación abierta del Estado y a la lucha por el poder político. Se fortalecieron las organizaciones sociales de base indígena (federaciones de productores de coca del Chapare, CSUTCB, CIDOB) y surgieron organizaciones políticas de matriz indígena, como el MIP y otras más permeadas por lo sindical, como el MAS.

Del reconocimiento inocuo de la diferencia a la interculturalidad transformadora

Las políticas multiculturalistas de los años 90 desarrollaron acciones de inclusión social a través de un conjunto de normas y políticas: la CPE reconoció el carácter multiétnico y pluricultural del país, se reconocieron territorios indígenas, la Ley INRA estableció Tierras Comunitarias de Origen y reconoció personalidad jurídica a las organizaciones territoriales de base, la participación popular democratizó la gestión pública y fortaleció a los municipios, la reforma educativa desarrolló una educación intercultural bilingüe y se aprobó una Estrategia Nacional de Diversidad Biológica que considera la gestión de la biodiversidad a partir de las prácticas de las culturas originarias. Pero la inclusión era sólo una cara de la moneda, la otra era la reducción del rol del Estado, la

liberalización de la economía y la alternancia en el poder de un sistema de partidos que representaba únicamente el proyecto económico de la clase dominante, excluyendo a los distintos pueblos y sectores sociales, lo que dio lugar a una intensa conflictividad social que movilizó a grandes sectores de la población en rechazo de esas políticas y demandando la realización de una Asamblea Constituyente.

Aunque el multiculturalismo constituye un avance en un sentido democratizador, no modifica el sistema de dominación y, consecuentemente, deja intacta la “cuestión indígena”. Como señala Luis Tapia, acepta la diversidad en la medida en que no afecta la preeminencia del particularismo de los sectores hegemónicos presentado como universalismo y es un buen sustituto del nacionalismo revolucionario, ya que tiene un aire progresista y democrático.⁴ Puede decirse que las políticas multiculturalistas hicieron un reconocimiento inocuo de la diferencia indígena en tanto no se plantearon el tema del poder, no se propusieron desmontar su estructura para construir una sociedad y un Estado distintos; en todo caso su efecto fue limar la radicalidad del movimiento indígena.

La crisis estatal y del sistema político puso de manifiesto las limitaciones del multiculturalismo y la existencia de una vigorosa demanda social de cambio; las organizaciones y movimientos sociales que reemplazaron a los partidos como protagonistas

4 Tapia, 2002.

políticos fueron asumiendo de manera creciente un carácter étnico cultural en su accionar político. En ese escenario, el tema de la interculturalidad, como proceso y proyecto político, social y ético⁵, fue cobrando fuerza y ganando espacio en la agenda pública.

Sin embargo, es necesario señalar que bajo el denominativo de interculturalidad se encuentran proyectos enteramente distintos que pueden plantearse del siguiente modo:

“

A diferencia de los indígenas andinos, los de tierras bajas no habían logrado mayor desarrollo organizativo y político; el Estado los había definido como ‘selvícolas’ y colocado en una condición de inferioridad respecto a los pueblos indígenas de tierras altas”

Uno conservador en que la interculturalidad se reduce al diálogo entre diferentes sin alterar las estructuras de dominación. Esta propuesta deviene de la concepción liberal y del discurso de lo “pluri-multi”, enfatiza las actitudes de tolerancia y respeto hacia el otro, desconociendo el rol del conflicto y del poder en la constitución de relaciones entre diferentes. Aunque representa un avance respecto al asimilacionismo y al discurso del mestizaje, no se propone una transformación de las relaciones de poder y

deja inalterada la situación de pobreza y exclusión de las poblaciones indígenas y de otros sectores, aunque quizá algo atenuada. Por ello esta interculturalidad funcional es un multiculturalismo mimetizado y sus límites son los que se señalaron en relación a éste.

Un proyecto de interculturalidad que la concibe como articulación equitativa entre diferentes a partir del desmontaje de la matriz colonial, de la remoción de las estructuras y prácticas sociales que la perpetúan. Dentro de esta línea de interculturalidad como proyecto transformador se pueden identificar dos variantes a partir de diferencias que revisten no poca importancia: por una parte la interculturalidad que plantea la existencia de una contradicción fundamental entre indígenas y no indígenas, que sólo podría resolverse mediante la hegemonía de las naciones y pueblos indígenas que constituyen la mayoría de la población, lo que podría conducir a la indianización de la sociedad, como plantean algunos estudiosos. Por otra parte, la interculturalidad como articulación equitativa de diferentes visiones y prácticas sociales, económicas, políticas y culturales sin un centro hegemónico, evitando que uno de ellos se convierta en central, se erija en centro dominante y ocupe el punto de universalidad.

En los últimos años, la interculturalidad ha ido perfilándose de manera cada vez más nítida como “eje central de un proyecto histórico alternativo”⁶

5 Walsh, 2008.

6 Walsh, 2008.

al que adscriben, no sin conflictos y tensiones, el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad.

EL VÍNCULO ENTRE INTERCULTURALIDAD Y EDUCACIÓN

La demanda de una escuela propia como instrumento de resistencia y preservación de la identidad indígena ha ocupado un lugar central en las luchas indígenas del siglo XX y en el nuevo siglo. Como es bien conocido, ya a principios de los años 30 se fundó la escuela ayllu en Warisata, que recuperaba las visiones y prácticas indígenas en los procesos educativos, incluyendo el uso de lengua originaria, a contrapelo de las políticas estatales que buscaban la castellanización de la población.

Como parte del proyecto nacional, la Revolución del 52 hizo una reforma de la educación, orientándola a la formación de una conciencia nacional; estableció una educación urbana y otra rural dirigida a “dignificar al campesino haciendo de él un eficaz productor y consumidor”⁷, y desarrolló una amplia acción alfabetizadora en lengua nativa como vehículo de transición al castellano.

Es recién a partir de los años 70 que el Estado, en coordinación con organismos internacionales, inició proyectos de educación bilingüe (en aymara y quechua con enseñanza del castellano como segunda lengua) y una vez recuperada la democracia se formuló el Plan Nacional de Acción

Educativa que por primera vez planteó la educación intercultural bilingüe (EIB) con el objetivo de revalorizar las culturas indígenas mayoritarias, respondiendo al pluralismo cultural y lingüístico del país y ese mismo año se dispuso la enseñanza de las lenguas aymara, quechua y otras nativas.

La defensa de las lenguas y culturas originarias, como parte central de las luchas indígenas –en 1983 la CSUTCB planteó una propuesta de EIB y demandó la oficialización de las lenguas nativas–, siguió avanzando a partir de los esfuerzos de las organizaciones indígenas; el más notable es el de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que desarrolló un trabajo educativo exitoso –partiendo de su propia realidad e introduciendo su lengua y cultura en la escuela– articulado a las luchas por tierra y territorio, uso racional de los recursos naturales para la producción y salud mediante la compatibilización de la medicina tradicional y occidental.

De una reivindicación propiamente indígena, la EIB se convirtió en una demanda de distintos sectores sociales. En 1989 la COB elaboró la Propuesta Educativa Popular, que incluía la EIB con la finalidad de revalorar y desarrollar las lenguas y culturas nativas y fortalecer la identidad nacional, eliminando las concepciones educativas coloniales; la Iglesia Católica y varias ONG desarrollaron proyectos de educación bilingüe en áreas rurales; partidos políticos de la izquierda incorporaron la EIB en sus programas

7 Código de la Educación Boliviana, 1955.

de gobierno: IU planteó la articulación del carácter multinacional y pluricultural de la sociedad boliviana con los intereses de las clases populares y culturas regionales, y el MRTKL rechazó la educación bilingüe como estrategia de tránsito hacia la castellanización y reivindicó la necesidad de desarrollar la interculturalidad⁸.

La reforma educativa de los años 90 estableció como uno de sus aspectos centrales la EIB, desarrollada bajo las modalidades monolingüe (en lengua castellana con aprendizaje de alguna lengua originaria) y bilingüe (en lengua originaria como primera lengua y en castellano como segunda lengua) en escuelas rurales; creó Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO) de carácter transterritorial (aymara, quechua, guaraní y amazónico multiétnico, entre 2004 y 2006 se sumaron los CEPO guarayo, chiquitano, mojeño y yuracaré) para participar en la formulación y ejecución de las políticas educativas, especialmente en interculturalidad y bilingüismo. La labor de los CEPO contribuyó de manera decisiva a conocer mejor la situación educativa y lingüística de los pueblos indígenas.

En 2004, una vez cancelado el programa de reforma educativa, se desarrolló un proceso participativo⁹ para formular nuevas políticas y estrategias

educativas con el aporte de los distintos sectores vinculados, incluidas las organizaciones indígenas. Durante ese proceso se conformó el Bloque Educativo Indígena¹⁰ con participación de la CSUTCB, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FMCBS), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonia (CIDOB), la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO), y se elaboró una propuesta educativa¹¹ que posteriormente sirvió como base para la definición del tema en la CPE y en la Ley Siñani-Pérez.

El Pacto de Unidad, integrado por las organizaciones campesinas e indígenas, la Confederación de Colonizadores de Bolivia y el Movimiento Sin Tierra, planteó en la Constituyente un conjunto de propuestas orientadas a asegurar el reconocimiento de los derechos indígenas en los distintos ámbitos. Propuso una educación intracultural e intercultural –entendiéndola como instrumento de cohesión–, pluricultural y plurilingüe a partir del reconocimiento de la preexistencia de los pueblos indígenas, e incluyó el reconocimiento del derecho a la educación desde el propio sujeto, de los

8 Martínez, 1996.

9 Se constituyó el Consejo Nacional de Educación (CONED) y concejos departamentales de educación, con participación de todas las instituciones y organizaciones vinculadas con la educación y se realizó una serie de talleres y congresos, como parte del Congreso Nacional de Educación.

10 El Bloque Educativo Indígena se constituyó durante el proceso organizado por el CONED entre 2004 y 2005; inicialmente las organizaciones indígenas formaban parte del Bloque Educativo Popular, pero el surgimiento de divergencias al interior de éste debido a que parte de sus integrantes –especialmente los sindicatos de maestros urbanos– no aceptaba las propuestas indígenas, determinó la conformación del Bloque Educativo Indígena.

11 Por una educación indígena originaria. Hacia la autodeterminación ideológica, política, territorial y sociocultural.

derechos individuales y colectivos a la educación y la descentralización de la gestión institucional y curricular. Si bien varias de estas cuestiones pueden encontrarse ya en los planteamientos anteriores, es evidente que el elemento nuevo es su articulación a las demandas de refundación del Estado.

DE LA INTERCULTURALIDAD A LA PLURINACIONALIDAD

Entre las demandas indígenas de educación intercultural bilingüe y la propuesta presentada por el Pacto de Unidad a la Asamblea Constituyente existe una significativa distancia, la transitada desde una posición reivindicacionista del derecho a la educación en la lengua y cultura propias hasta el cuestionamiento a los fundamentos del Estado y la demanda de refundación, en cuyo marco se plantea una educación descolonizadora. Esa distancia corresponde al trayecto recorrido por las organizaciones indígenas del país y por otras organizaciones y sectores sociales que, con la crisis sociopolítica de 2000, se fueron radicalizando y adquiriendo una posición cada vez más crítica que retomó y asumió la idea de autogobierno indígena. Así la propuesta de interculturalidad se convirtió en una demanda de construcción de un Estado plurinacional y de recuperación de soberanía sobre los recursos naturales, no sólo indígena, sino de un conjunto de sectores sociales, campesinos, obreros y

sectores medios, que se fueron adhiriendo de manera cada vez más clara. En este punto es conveniente señalar que la nación boliviana se forjó desde lo popular —obreros, muchos ex campesinos, y sectores medios— y a través del capitalismo de Estado, y que en la etapa neoliberal la burguesía adquirió centralidad y desmontó lo nacional popular y el capitalismo de estado.¹² Esto contribuye a explicar la adhesión de esos otros sectores sociales, tradicionalmente afincados en lo nacional popular, a la causa indígena.



En los últimos años, la interculturalidad ha ido perfilándose de manera cada vez más nítida, como ‘eje central de un proyecto histórico alternativo’ al que se adscriben, no sin conflictos y tensiones, el movimiento indígena y otros sectores de la sociedad”

La CPE aprobada en 2009, más allá del proceso de negociación del que fue fruto, recoge lo central de la propuesta del Pacto de Unidad. Probablemente uno de los elementos fundamentales sea la creación del sujeto Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos (NPIOC), que reúne en una sola entidad a sectores con historia, intereses y racionalidades distintas: los pueblos indígenas de tierras

12 Tapia, 2007.

altas y bajas que conservan una lógica comunal, cuyas luchas se dan en torno al territorio y una parte de los cuales busca la reconstitución de sus territorios y formas organizativas propias, y los campesinos sindicalizados que defienden la propiedad individual de la tierra y que tienen una tradición organizativa y de relacionamiento con el Estado muy diferente.

Estos sectores distintos, que son los que conformaron el Pacto de Unidad y actuaron de manera mancomunada en coyunturas muy particulares —la de crisis estatal y del sistema político que permitió la agregación de las demandas sociales contra el neoliberalismo y la de planteamiento de propuestas para el diseño de un nuevo Estado—, eran ahora definidos constitucionalmente, lo que significa a largo plazo, como un sujeto. Si bien la articulación de estos sectores en una entidad podría entenderse como un avance en términos de construcción de interculturalidad —interacción equitativa entre diferentes—, con el tiempo se fue evidenciando que los intereses divergentes y la preeminencia de unos sectores sobre los otros hacía inviable su funcionamiento en esos términos.

La consideración de NPIOC como el núcleo del nuevo Estado plurinacional —la nación boliviana está conformada por los bolivianos y bolivianas, NPIOC y comunidades interculturales y afrodescendientes (art. 3) y la asunción de principios ético morales de algunos pueblos indígenas, pero no de los otros sectores que conforman esa nación boliviana (art. 8)— pone en duda su carácter intercul-

tural establecido en el artículo 1; esto se puede ejemplificar en el reconocimiento, entre los derechos familiares, de que las uniones libres o de hecho entre un hombre y una mujer producen los mismos efectos que el matrimonio civil, excluyendo los derechos de las personas de opción sexual distinta. Además es necesario preguntarse por qué NPIOC, comunidades interculturales y afrodescendientes son considerados como distintos de los bolivianos y quiénes son éstos.

Por otra parte, el denominativo de comunidades interculturales para los campesinos andinos que migraron a tierras bajas y que están organizados en la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB), antes Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), es polémico ya que su práctica socioeconómica y política muestra que el desarrollo de actividades en una realidad distinta a la de origen no necesariamente convierte al migrante en un ser intercultural, en algunos casos se encuentra subordinado a la lógica imperante en su nuevo lugar de residencia y en otros es él quien impone su lógica a los habitantes originarios.

La existencia de contradicciones en el texto constitucional debilita el sentido de la interculturalidad y plurinacionalidad proclamadas en el artículo 1, como la definición de “nación boliviana” cuando se establece que el Estado es plurinacional. Asimismo, la consideración de la inclusión como un valor que sustenta al Estado (art. 8) contradice lo planteado en el art. 9: constituir una sociedad justa y ar-

moniosa cimentada en la descolonización; la descolonización supone la construcción de un nuevo tipo de Estado, no la inclusión de los excluidos en una estructura que se sustenta precisamente en su subordinación.

La Constitución introduce el pluralismo en distintos ámbitos: el sistema de gobierno (democrático participativo, representativo y comunitario) de la “República de Bolivia” (sic), la educación (intracultural, intercultural y plurilingüe), el sistema de salud (intracultural e intercultural, incluyendo la medicina tradicional de NPIOC), judicial (jurisdicción ordinaria y de NPIOC), representación política (organizaciones de NPIOC, agrupaciones ciudadanas y partidos políticos), régimen autonómico (autonomías departamental, regional, municipal e indígena originaria campesina, aunque la distribución de competencias entre estos niveles autonómicos revela la permanencia del centralismo) y modelo económico (comunitario, estatal, privado y social cooperativo), con una inconsistencia: el establecimiento de una participación activa de las economías pública y comunitaria en el aparato productivo (art. 313-6) deja de lado la privada. Todo esto implica un esfuerzo de articulación de derechos individuales y colectivos que no está exento de las dificultades propias de la construcción de interculturalidad en la que el conflicto y el poder son parte consustancial de las relaciones entre diferentes; resolver estas dificultades

de manera democrática, y no a partir de un nuevo monopolio de poder, permitiría avanzar en la construcción de interculturalidad.

En cuanto a la afinidad o divergencia existente entre el concepto de interculturalidad y el de plurinacionalidad establecidos por la Constitución —si bien no es claro el sentido que ésta da a la interculturalidad porque no presenta un concepto preciso, se la puede asumir en la acepción de proyecto transformador del Estado y la sociedad explicado líneas arriba—, esta última implica el reconocimiento de distintas naciones con sus propios ámbitos territoriales, normas, etc. en el seno del país, poniendo en vigencia derechos largamente denegados; sin embargo, este reconocimiento entraña el riesgo de quedar en el ámbito de la coexistencia de colectivos inconexos entre sí o, peor, del mantenimiento o creación de situaciones de subordinación y explotación de unos grupos por otros, así como de discriminación, porque tanto las construcciones nacionales como las plurinacionales han producido formas de monopolio político y estructura de clases¹³. Por ello resulta crucial la incorporación efectiva de la interculturalidad como posibilidad de articulación equitativa entre esas naciones, pueblos y sectores sociales puesto que ésta implica, necesariamente, el desmontaje del sistema de dominación y exclusión.

Finalmente es necesario considerar la relación existente entre los

13 Tapia, 2007.

preceptos constitucionales respecto a interculturalidad y plurinacionalidad y las políticas públicas, recordando que la historia boliviana muestra que existe la tendencia a resolver los problemas mediante la aprobación de normas legales, aunque hay renuencia a cumplir las leyes¹⁴. Si bien la nueva CPE y la llegada del MAS al Gobierno permitieron avanzar en la superación de la falta de correspondencia entre la matriz cultural de la sociedad y del grupo gobernante, la efectiva participación de los distintos pueblos indígenas y otros sectores populares en la dirección del Estado y el cierre de la brecha entre institucionalidad estatal y matrices sociopolíticas existentes en el país¹⁵ parecen ser asuntos pendientes, como lo muestra la direccionalidad de las políticas. Dos temas pueden ayudar a visualizar la relación entre CPE y políticas: el conflicto del TIPNIS y la situación en que se encuentra el proceso autonómico; en el primer caso el incumplimiento de lo dispuesto por la Constitución –y por tratados internacionales– en relación a la autodeterminación indígena y a la consulta previa atenta contra el carácter intercultural y plurinacional del Estado y coloca a las organizaciones indígenas en una condición de marginación; en el segundo caso, la excesiva lentitud con la que avanza el proceso autonómico –los distintos niveles autonómicos que, como se dijo, cuentan con com-

petencias bastante recortadas, aún no son una realidad cierta– y el mantenimiento de una clara centralización de la gestión pública muestran que la articulación plural no es una realidad. Así la interculturalidad y la plurinacionalidad aún son tareas pendientes que parecen haber quedado relegadas al texto constitucional, pero que están vivas en las organizaciones indígenas y en otros sectores de la sociedad boliviana que las imaginaron y se propusieron construir las.

Fuentes

- Código de la Educación Boliviana*, 1955.
- Martínez, J. L., 1996. *Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia*.
- Tapia, L., 2002. *La condición multisocietal. Multiculturalidad, pluralismo, modernidad*. CIDES-UMSA / Muela del Diablo.
- Tapia, L., 2007. *Una reflexión sobre la idea de Estado plurinacional* en OSAL CLACSO, año VIII, N° 22.
- Ticona, A. E., 2003. *Pueblos indígenas y Estado boliviano. La larga historia de conflictos*, Universidad Cordillera de La Paz, Gaceta de Antropología, N° 19.
- Walsh, C., 2008. *Interculturalidad y plurinacionalidad: Elementos para el debate constituyente*. Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.

14 De acuerdo con el Latinobarómetro 2011, Bolivia ocupa el penúltimo lugar de la región en cumplimiento de leyes.

15 Tapia, 2007.

La conquista del Parlamento (1982 – 2012)

Eduardo Leño Román¹

La democracia es incompleta si más de la mitad de la población es excluida de la representación política por razones de género. En 30 años de democracia, debemos celebrar la real inclusión de mujeres en el Parlamento. Aunque participaron activamente en la conquista de la democracia, realmente fueron objeto de un prolongado ninguneo y discriminación; esto generó una democracia electoral socialmente injusta y un Estado endeble e inestable.

El presente artículo describe el proceso de inclusión de mujeres en el Órgano Legislativo en el vigente proceso democrático; para este efecto identificamos tres momentos importantes: ausencia de una ley de cuotas (1982-1993), una ley de cuotas engañosa (1997-2005) y una ley de cuotas equitativa (2006-2012).

AUSENCIA DE UNA LEY DE CUOTAS (1982-1993)

La transición a la vigente democracia implicó tres elecciones transitorias: la de 1978, 1979 y 1980. El general Banzer, luego de siete años de gobierno, mediante decreto supremo anunció elecciones generales para el 9 de julio de 1978. Para implementar estos comicios se dispuso la vigencia de la Ley Electoral de 1966. Producto de un indecoroso fraude electoral alentado desde el Gobierno a favor del general Juan Pereda Asbún, las elecciones de 1978 se anularon. El escandaloso fraude se manifestó en el hecho de que el número de votos emitidos (1.989.711) resultó ser mayor al número de electores inscritos (1.922.556). Esto impactó negativamente en la sociedad e inmediatamente un golpe de Estado, encabezado por el general Pereda Asbún, intentó frenar el descontento. Pero, en

¹ Sociólogo y conflictólogo. Jefe del área de ciudadanía de CDC.

noviembre de aquel mismo año, Juan Pereda fue desplazado del Gobierno por el general David Padilla, quien convocó a nuevas elecciones generales para julio de 1979. En las elecciones de 1979, las mujeres no accedieron al Senado, únicamente ingresaron al Parlamento dos diputadas mujeres (del MNR-A). En el proceso electoral de 1980 sólo una diputada mujer (de la UDP) accedió a la Cámara Baja.

En los momentos de transición a la democracia (1978, 1979 y 1980),

“

Aunque participaron activamente en la conquista de la democracia, realmente fueron objeto de un prolongado ninguneo y discriminación, esto generó una democracia electoral socialmente injusta y un Estado endeble e inestable”

cuando en Bolivia se pugnaba por desligarse de los gobiernos militares, los principales temas incluidos en la agenda política giraron básicamente en torno a reivindicaciones como mayor libertad, la solicitud de amnistía política para los exilados políticos y sindicales, el reclamo de derechos políticos y la exigencia de elecciones libres. Durante este periodo de gobiernos militares “...todos los partidos políticos fueron proscritos; los responsables sindicales reemplazados por ‘coordinadores’ ofi-

cialmente nombrados; se institucionalizó un servicio civil obligatorio para todos los ciudadanos mayores de edad, quienes, así, debían ocupar los cargos para los que eran directamente designados; se prohibieron las huelgas y las manifestaciones. Toda transgresión a estas disposiciones sería sancionada por la ley marcial. Finalmente, bajo esta forma, las Fuerzas Armadas se autofacultan para gobernar al país hasta 1980”². Esta política también afectó a la sociedad civil organizada, “excepto el empresariado, ningún sector organizado fue descuidado por la represión (mineros, obreros, campesinos, empleados, estudiantes, periodistas...); ciertamente, la mayoría de los partidos políticos fue perseguido y muchos de sus líderes obligados al exilio o a la clandestinidad; las iglesias también fueron tocadas, principalmente la católica, cuya ala progresista fue particularmente atacada”. (Ibidem). En este complicado contexto, la demanda de pensar en una mayor representación política de las mujeres no sólo no tenía cabida, sino que resultaba inconcebible; esto explica en cierto modo la presencia disminuida de representación femenina en el Congreso.

Inaugurando el proceso democrático, Hernán Siles Zuazo, junto a la Unidad Democrática y Popular (UDP), asumió el gobierno en octubre de 1982. La orientación principal de las distintas gestiones de gobierno (1985, 1989 y 1993) en el ámbito político estaba dirigida a iniciar el proceso

2 Lavaud, Jean-Pierre. *La dictadura minada*. La Paz, IFEA-CESU-PLURAL, 2003, p 56

de institucionalización del sistema político, haciendo del mecanismo electoral un sustituto de la forma pretoriana de acceder al gobierno. Es a partir de este período que se inicia la denominada “democracia pactada”, que no solamente era un mecanismo para la elección de presidente y vicepresidente, sino que se transformó en un mecanismo para la conformación de coaliciones de gobierno, muy utilizado por los partidos políticos para profundizar la democracia³.

La participación de las mujeres en los movimientos sociales, entre fines de los 70 y principios de los 80, posibilitó la caída de las dictaduras y aceleró la transición a la democracia. No obstante esto, en los procesos electorales que siguieron a la apertura democrática (1985, 1989 y 1993), las mujeres no fueron promovidas a lugares de liderazgo y su representación política tampoco se vio incrementada.

La representación femenina en la Cámara de Senadores fue nula en 1985 y sólo cinco mujeres lograron arribar a la Cámara de Diputados. En las elecciones de 1989, aunque se incrementó la presencia de mujeres en el Senado, la concurrencia femenina alcanzó únicamente a dos representantes; y en Diputados se observa un pequeño crecimiento, las mujeres consiguieron diez curu-

les. En el proceso electoral de 1993, las mujeres consiguieron un representante en la Cámara Alta mientras que en la Cámara Baja alcanzaron 12 diputaciones.

LEY DE CUOTAS ENGAÑOSA (1997-2005)

Desde principios de la década del 90, el movimiento feminista en Bolivia se movilizó para demandar la introducción del tema de equidad de género; es así que el año 1997 se promulgó la Ley 1779 o Ley de Cuotas⁴. La incorporación de las cuotas a favor de las féminas fue un logro obtenido por el movimiento de mujeres que se alcanzó mediante un prolongado trabajo que ha implicado muchas negociaciones, demasiadas acciones de sensibilización e incontables diálogos con los jefes de las organizaciones políticas.

A pesar de la vigencia de la Ley de Cuotas, ésta no influyó significativamente en la composición del Parlamento según género. En las elecciones de 1997 y 2005 se advierte una escasa representación política de mujeres en la Cámara de Senadores: sólo el 3,70% (una senadora en cada proceso electoral) y el 13,33% (cuatro senadoras) en el proceso electoral de 2002. En la Cámara Baja la representación de las mujeres alcanzó a 8,46% (11 diputadas) en 1997 y llegó

3 La “democracia pactada” se ha estructurado sobre la base de tres partidos políticos fundamentales: MNR, ADN y MIR; adicionalmente se sumaron, a una u otra coalición, otros cuatro partidos: UCS, Condepa, MBL y NFR.

4 La Ley de Cuotas se conoce también como ley de acción positiva y se basa en el reconocimiento de la presencia de formas históricas de discriminación y en la voluntad para superarlas. Estas leyes son parte de un esfuerzo para hacer que la igualdad deje de ser un aspecto meramente formal y se traduzca en la práctica, puesto que no es suficiente la conquista formal de un derecho para que éste se realice y, por consiguiente, son necesarias intervenciones que reparen la desigualdad.

a 18,46% (24 diputadas) en los procesos electorales de 2002 y 2005.

Con la aplicación de la Ley de Cuotas se ha permitido un modesto incremento en la representación femenina; sin embargo, la trampa de aquel mecanismo de discriminación positiva consistía en asegurar la candidatura de mujeres pero no su efectiva elección. En las postulaciones para el Senado las mujeres eran inscritas como tercera o cuarta en la nómina de candidatos, esto les restaba

“

Con la aplicación de la Ley de Cuotas se ha permitido un modesto incremento en la representación femenina; sin embargo, la trampa de aquel mecanismo de discriminación positiva consistía en asegurar la candidatura de mujeres pero no su efectiva elección”

toda posibilidad de ser elegidas, sólo como segunda postulante de un partido con probabilidades de ganar en un departamento se podía asegurar el acceso al Parlamento. En la Cámara de Diputados, para la elección de diputados plurinominales, normalmente las mujeres eran las últimas en las listas o planchas presentadas; el reglamento no exigía ningún tipo de alternancia en las circunscripciones uninominales. Con esta restringida Ley de Cuotas no se podía asegurar una representación equitativa de mujeres en el Parlamento.

LEY DE CUOTAS EQUITATIVA (2006-2012)

El desarrollo de la Asamblea Constituyente (2006 – 2007) se convirtió en un espacio propicio para que el movimiento feminista organizado de Bolivia consiga incluir en el nuevo texto constitucional una nueva Ley de Cuotas más ecuánime con las mujeres. La Articulación de Mujeres por la Equidad y la Igualdad (Amupei) se ha constituido en un pilar fundamental en la lucha por la reivindicación de equidad de género en la renovada Constitución Política del Estado.

La nueva Carta Magna establece la equidad de hombres y mujeres en la representación política. La aplicación de este principio se reflejó en la Ley de Régimen Electoral Transitorio (Ley N° 4021), promulgada el 14 de abril de 2009 y que ha regido los procesos electorales de diciembre de 2009 y abril de 2010. Esta normativa establece que las listas de candidatos de senadores y diputados debe estar conformada por un candidato titular varón seguido de una candidata titular mujer, similar proporcionalidad debe respetarse entre los postulantes suplentes; en el caso de los diputados uninominales, la alternancia debe expresarse entre los titulares y suplentes.

En el proceso electoral de 2009, en la Cámara de Senadores las mujeres alcanzaron una representación del 44,44% (16) y los hombres 55,56% (20); sin duda, un porcentaje significativo sobre todo si se considera que la población femenina en

Bolivia, conforme el censo de 2001, representa el 50,26%.

En la Cámara de Diputados el avance y presencia de las mujeres ha sido importante entre los diputados plurinominales; en este ámbito el género femenino logró una representación del 45,28% (24) y los hombres el 54,72% (29). Este progreso en la presencia de mujeres en el Parlamento no fue muy revelador entre los diputados uninominales, aquí sólo consiguieron una representación del 7,14% (5). En este caso, las organizaciones políticas aplicaron la alternancia en el sentido de que postularon muchos candidatos titulares varones y en las suplencias inscribieron a las mujeres. Finalmente, en las circunscripciones indígenas, la representación política de las mujeres fue nula, ninguna mujer indígena fue elegida como diputada.

Sin duda, se ha conseguido la presencia de un número importante de mujeres en el Parlamento, pero más importante es que en la actualidad dos mujeres presiden ambas cámaras. En el siguiente cuadro se sintetiza la trayectoria de la representación política femenina en la historia democrática de nuestro país:

En la tabla se advierte que la evolución de la representación de las mujeres en la Cámara de Senadores ha sido demasiado lenta y mezquina, sólo en el último proceso electoral se observa una importante presencia femenina en el Senado. Similar progresión se presentó con la participación de mujeres en la Cámara de Diputados. Aún resta avanzar más en la equidad de género respecto de la representación política en las circunscripciones uninominales.

CONCLUSIONES

A lo largo de los 30 años de nuestra historia democrática, considerando la representación política de las mujeres, se ha podido reconocer algunas situaciones importantes. Después de la recuperación democrática no había ninguna ley de cuotas y la representación femenina fue insignificante. En la década de los 90 vinieron los moderados avances en la equidad de género con la aprobación de una Ley de Cuotas tramposa que garantizaba la postulación de las mujeres como candidatas al Parlamento, pero no aseguraba la representación política del género femenino en esta instancia política. Finalmente, con una nueva Constitución

1979 y 1980				1985, 1989 y 1993				1997, 2002 y 2005				2009			
Sen		Dip		Sen		Dip		Sen		Dip		Sen		Dip	
H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
54	0	244	3	78	3	243	27	75	6	331	59	20	16	101	29

Elaboración propia basada en datos del *Atlas Electoral de Bolivia*, Corte Nacional Electoral, 2010

Política del Estado, se logró dar un paso más en la equidad de género con la aprobación de una renovada Ley de Cuotas que asegura una importante representación política de mujeres en el Parlamento.

Así, cabe destacar que la representación política de las mujeres en espacios de toma de decisiones, a lo largo del tiempo, ha ido desde la exclusión casi absoluta hacia la conquista y apropiación de la Asamblea Legislativa Plurinacional —antes Parlamento o Poder Legislativo—, a pesar de estar en una situación de desventaja en relación a

los hombres, quienes pasan más tiempo fuera del hogar. Esto significa que las mujeres se van alejando progresivamente de las tareas hogareñas consideradas tradicionalmente como actividades exclusivas o propias de las mujeres, para incursionar decididamente al escenario político. Es más, actualmente las direcciones de las dos cámaras legislativas están ocupadas por mujeres, quienes aparecen continuamente ante los medios de comunicación declarando y justificando las determinaciones tomadas en nombre de todas las bolivianas y los bolivianos también.

Pueblos aymaras, quechuas y urus en 30 años de democracia

Esteban Ticona Alejo¹

La Revolución del 9 de abril de 1952 posibilitó una mayor presencia del indio en la política nacional. Aunque en los primeros 12 años de la Revolución del 52, éstos fueron subordinados al Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) bajo el denominativo de “diputados campesinos”.

El movimiento indianista y katarista inició el cuestionamiento al carácter inconcluso de la Revolución del 52, además de instituir la autonomía organizativa y fundar la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1979, encabezada por Jenaro Flores Santos (Rivera, 1984; Hurtado, 1986 y Ticona, 2000). A partir de esta experiencia, el movimiento indígena y campesino reivindicó la nueva ciuda-

danía y la identidad plena como pueblos e inauguró con ella una especie de matriz político ideológico anticolonial contemporáneo, plenamente vigentes en el actual escenario político nacional denominado “proceso de cambio”.

La experiencia de los primeros diputados indianistas, como Constantino Lima y Luciano Tapia del Movimiento Indio Túpac Katari (MITKA) (Tapia, 1995), o la presencia de los kataristas Víctor Hugo Cárdenas y Wálter Reinaga, del Movimiento Revolucionario Túpac Katari (MRTKL), abrieron la participación real indígena en la política nacional en la etapa denominada “proceso democrático”, iniciada en los años 80. En esta misma década son nombrados los primeros ministros indígenas, como Zenón Barrientos, Mauricio Mamani y Simón Yampara (Hurtado, 1986).

¹ Es aymara-boliviano. Es sociólogo y antropólogo. Autor de varios libros sobre movimientos indígenas y campesinos. Es docente en la UMSA.

En tiempos neoliberales: la búsqueda del “instrumento político”

Después de la fundación de la CSUTCB en 1979, se han vivido diversas situaciones de crisis interna por una serie de factores. Pero ello no impidió seguir avanzando en la propuesta política, articulada con el discurso político de la identidad indígena y campesina. Una importante ocasión para esto fue el año 1992, que llevó a repensar el tema de “los 500 años” de invasión y colonización española, y la resistencia y vigencia de los pueblos ancestrales. En todo ello cupo la CSUTCB, la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB) y otras organizaciones de base con una acción protagónica. Una de las intenciones entonces más soñadas fue la de crear “un instrumento político”: la Asamblea de Nacionalidades, propugnada desde el I congreso extraordinario realizado en Potosí en 1988, debatida en varios encuentros y comités conjuntos de la CSUTCB y CIDOB y en otras varias instancias.

La idea central era la reconstitución formal de los ayllus y comunidades a través de sus autoridades originarias y del pueblo, y la creación de una instancia superior de todas ellas a nivel nacional. Se preveía incluso que esta última podía llegar a sustituir a las actuales organizaciones indígenas y sindicales, según el caso. Por este camino, los varios promotores de la idea esperaban dotarse de un espacio político de deliberación, decisión y ejecución como pueblos ancestrales del país. El 12 de octubre de 1992 se vivieron masivas movilizaciones, llenas de fuerza simbólica, y un doloroso fracaso en la

instauración de la Asamblea de Nacionalidades. Queda también evidente, el proceso inconcluso de la construcción del “instrumento político” (Villca, 1992 y 1995; Ticona, 1996).

Nuevos actores en escena: el movimiento cocalero

El argumento del Gobierno de Estados Unidos siempre ha sido preservar la “seguridad nacional” de los Estados involucrados en la problemática de la producción de la droga y los circuitos del tráfico ilícito. Éste fue el eje fundamental de su estrategia frente a Bolivia y toda la región andina: una “guerra contra las drogas”. Desde 1985 se han producido continuas operaciones militares conjuntas en territorio boliviano, llegando incluso a forzar un tratamiento militar en los centros de producción de la hoja de coca.

En medio de la movilización quechua y aymara, ha ido creciendo la importancia del sector productor de la hoja de coca dentro de los pueblos originarios y campesinos. A través de la Federación Especial de Trabajadores del Trópico, han desarrollado su propia identidad y han ido ampliando poco a poco su capacidad de influencia y liderazgo en el conjunto de la organización indígena y campesina del país. La lucha de los productores de la hoja de coca ha permitido denunciar casos de implicación en el narcotráfico de agentes y de autoridades policiales, casos de prevaricato en los estratos judiciales, violación permanente a los derechos humanos, etc. Lograr que ese foco de corrupción llegara a ser conciencia en la opinión

pública, supuso años de denuncias y un clima de tensión y violencia.

La marcha de los cocaleros del Chapare “por la dignidad y la defensa de la soberanía nacional”, en agosto y septiembre de 1994, hasta la ciudad de La Paz, inició otra etapa de capacidad de movilización del sector. Los medios de comunicación llevaron a nombrar al dirigente cocalero Evo Morales, apresado al principio de la marcha, como “el hombre del año”. En 1995, ante la violencia generalizada por parte de los organismos de la lucha contra el narcotráfico del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas, las mujeres (esposas, hijas y hermanas) de los cocaleros del Chapare realizaron otra larga marcha o caminata hasta la ciudad de La Paz, exigiendo justicia y el respeto a los derechos humanos de los productores de la hoja de coca. A esto se suma el éxito del movimiento cocalero en las elecciones municipales de diciembre de 1995, cuando lograron mediante la Asamblea de la Soberanía de los Pueblos (ASP) la elección de 47 concejales, que les ha permitido sustentar mejor su discurso, especialmente en la provincia Carrasco de Cochabamba.

Todos estos éxitos han hecho que las bases indígenas y campesinas de otras regiones del país tengan más

aproximación y simpatía hacia el movimiento cocalero. Porque, sencillamente, las bases aymaras y quechuas encontraron en el movimiento cocalero una alternativa a sus reivindicaciones postergadas. Estos antecedentes hacen que no sea ninguna sorpresa el triunfo categórico de los cocaleros en el VII congreso de la CSUTCB. Este ascenso no sólo les permite ser representantes y

“

Una de las intenciones entonces más soñadas fue la de crear “un instrumento político”: la Asamblea de Nacionalidades, propugnada desde el I Congreso Extraordinario realizado en Potosí en 1988”

portavoces de los pueblos originarios y campesinos del país, sino también manejar la propuesta política denominada “instrumento político” (Ticona, 1996).

Los movimientos sociales indígena campesinos y el quiebre del modelo neoliberal²

El modelo neoliberal excluyente, después de varios años de intentar cuajarse, colapsó, sobre todo a partir de las masivas movilizaciones sociales iniciadas en abril de 2000 en la llama-

² El gobierno de Víctor Paz Estensoro, mediante el Decreto N° 21060 de 1985, inauguró la etapa neoliberal en la vida política del país. El Estado boliviano se retiró de su rol de dueño de los recursos naturales y las empresas más importantes, como las minas y los hidrocarburos, fueron vendidas a manos privadas y los sindicatos combativos, como fue el caso de los trabajadores mineros, fueron replegados mediante la política de la “relocalización” o la recesión laboral. En la primera gestión del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Víctor Hugo Cárdenas (1993-1997), siguiendo los grandes lineamientos de sus antecesores, a partir de otros cambios legales, como la reforma de la Constitución Política del Estado, la Reforma Educativa y la Ley de Participación Popular (o ley de municipalización), todas de 1994, y la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, más conocida como la Ley INRA de 1996, abrieron nuevas sendas para la cristalización de las políticas neoliberales.

da “guerra del agua” en Cochabamba, contra una empresa multinacional del agua que pretendía privatizarla. El gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y Carlos Mesa (2002-2003) se ejerció en un ambiente de fuertes cuestionamientos a las políticas neoliberales y baja legitimidad al quehacer de la política tradicional³. La primera crisis política se presentó en febrero de 2003, con el amotinamiento de las tropas de la Policía acantonadas cerca del Palacio de Gobierno (plaza Murillo), en contra de un decreto que fijaba nuevos impuestos a la ciudadanía, que derivó en el enfrentamiento armado inusual con el Ejército y el saldo lamentable de cerca de 40 muertos entre policías, militares y civiles. Indudablemente, la denominada “guerra del gas” de 2003 y la consiguiente masacre de cerca de 70 personas y casi 500 heridos, a raíz de la represión a bala por parte del Ejército, principalmente a indígenas urbanos y rurales en la ciudad de El Alto y algunas provincias de La Paz, iniciaron el quiebre político más importante de la etapa neoliberal.

Aparece el creciente protagonismo de los movimientos sociales, indígenas y campesinos, tanto andinos como de la Amazonia, el oriente y el Chaco, y todos ellos con una agenda no sólo de reivindicación indígena-campesina, sino también de clase social y de defensa de los recursos naturales como el gas, el agua y la tierra-territorio. En

este escenario de quiebre de las políticas neoliberales y la consiguiente crisis de la política tradicional se realiza el ascenso vertiginoso de la llamada Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), creada por las seis federaciones de productores de la hoja de coca del Chapare cochabambino en 1995 y más tarde denominada Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por el aymara Evo Morales Ayma.

Un salto importante en el ascenso nacional del movimiento cocalero ocurrió en 2002 como reacción a los intentos tanto de las élites políticas tradicionales como de la embajada de Estados Unidos de frenarlo a toda costa, lo cual más bien lo catapultó a segunda fuerza política nacional en las disputadas elecciones de julio de dicho año. Finalmente, Carlos Mesa, sucesor de Sánchez de Lozada, cercado desde tantos frentes, se sintió incapaz de gobernar y renunció a la Presidencia en junio de 2005.

El gobierno de Evo Morales y los movimientos sociales

Llegadas las anunciadas elecciones del 4 diciembre de 2005, se tuvo por primera vez un claro vencedor por mayoría absoluta: Evo Morales y el MAS, que lograron el 54% de los votos válidos y una mayoría semejante en Diputados, pero sólo un 44% en el Senado (por tener un mismo cupo de tres por departamento). Se mostró así el deseo mayoritario por un cambio real. Sin

³ En las elecciones generales de 2002 participaron 11 partidos políticos. El Movimiento Nacionalista Revolucionario obtuvo el primer lugar con el 22,46% de los votos, en segundo lugar se ubicó el Movimiento Al Socialismo de Evo Morales con el 20,96%, en tercer lugar la Nueva Fuerza Republicana con el 20,91%, el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria con el 16,32% y el Movimiento Indígena Pachakuti de Felipe Quispe con el 6,09%, como los más significativos.

embargo, en las elecciones simultáneas de prefectos, sólo tres de los nueve electos fueron del MAS (Oruro, Potosí y Chuquisaca), mostrando el peso que a este nivel tienen los liderazgos departamentales con diversas tendencias, tanto en la Amazonia, el oriente y el Chaco como en espacios fuertes del MAS, como Cochabamba y la ciudad de La Paz.

Lo que más llamó la atención fue la asunción de un indígena aymara —Evo Morales— a la Presidencia del país, y con ese amplio margen de votos. Con ello se inicia un acceso mayor de indígenas y campesinos a cargos fundamentales del Estado, aunque las estructuras aún siguen coloniales. El nuevo Gobierno ha dado una alta prioridad a la convocatoria a la Asamblea Constituyente, cuyos miembros fueron elegidos el 2 de julio de 2006, con resultados bastante equiparables a los de diciembre de 2005. Los nuevos gobernantes han dado alta prioridad a su relacionamiento con los movimientos sociales de los diversos sectores, pero sobre todo con los indígenas, campesinos y populares urbanos. Esto es lo que subyace en la caracterización del MAS como un Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos y en otras instancias como el Estado Mayor del Pueblo.

El intento de refundar Bolivia: la Asamblea Constituyente

El antecedente más importante para llegar a demandar una Asamblea Constituyente fue la marcha indígena de los pueblos de la Amazonia,

el oriente, el Chaco y los pueblos andinos, en mayo de 2002, titulada Por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos Naturales. Ésta fue la primera movilización indígena directamente orientada a conseguir la convocatoria para una Asamblea Constituyente. Sus principales protagonistas eran los del llamado Bloque Oriente y formado por indígenas



Las bases aymaras y quechuas encontraron en el movimiento cocalero una alternativa a sus reivindicaciones postergadas. Estos antecedentes hacen que no sea ninguna sorpresa el triunfo categórico de los cocaleiros en el VII congreso de la CSUTCB”

amazónicos, orientales, chaqueños, colonizadores andinos y otros campesinos no indígenas, a los que durante esa marcha se unió el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) de la región andina.

El primer acto del nuevo gobierno de Evo Morales y el nuevo Parlamento instalado el 22 de enero de 2006 fue convocar a ambos eventos para una misma fecha. Después de largos y enconados debates entre partes, el tenor de la doble convocatoria fue promulgado el 6 de marzo del citado año. Ambos temas fueron llevados a las urnas en julio de 2006, con un nuevo triunfo del MAS, que mostraba de nuevo la gran fuerza de la región

andina sobre la llamada “media luna” de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija.

En la elección de constituyentes del 2 de julio de 2006, el MAS consiguió un 51% del voto, por mayoría absoluta en todos los departamentos andinos más –por primera vez– la primera mayoría en Santa Cruz y en todo Tarija, y 137 (o 54%) de los 255 curules de la Asamblea Constituyente. Pero no lograron los dos tercios que le habrían dado pleno control de la Asamblea. La Constituyente se inauguró el 6 de agosto de 2006 en medio de un extraordinario desfile ciudadano, en el que se resaltó el gran conglomerado de aproximadamente 36 pueblos indígenas y campesinos de toda Bolivia.

La propuesta del Estado plurinacional

El colonialismo había iniciado un régimen racializado y con una sociedad impuesta sobre la otra: la “república” de españoles y la “república” de indios, con una obvia y humillante colonialidad de la segunda a la primera (Quijano 1992). Pero también un cierto reconocimiento de la segunda, a través de un implícito contrato de “respeto” a sus territorios a cambio de tributo y mita (Platt 1982).

Con la Revolución de 1952 comenzaron a resquebrajarse algunas formas de colonialidad. El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) apostó por el camino liberal de la uni-

formización del Estado y la sociedad mestiza, transformando retóricamente al indio en campesino, reconociéndole la propiedad privada de una parcela, el derecho a la educación y el voto universal. Fueron importantes avances, pero la tarea quedó inconclusa y el colonialismo interno continuó. La consecuencia lógica de todo el discurso precedente es la propuesta de que Bolivia debería re-fundarse como un Estado plurinacional e intercultural. Esta formulación apareció por primera vez en un documento de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en 1983, como un planteamiento central de la tesis política de su II congreso⁴. Pero propuestas más recientes, como la Asamblea de Nacionalidades, siguen apuntando a lo mismo.

En el fondo, se trata de plantear una re-fundación del país que a la vez articule las distintas civilizaciones indígenas y sociales, sin negarlas y con un sentido de equidad. Siendo que éste no es el único planteamiento, lo consideramos el de mayor envergadura y viabilidad. A pesar de las dificultades encontradas por la Asamblea Constituyente, ésta sesionó a lo largo de 18 meses y aprobó la nueva Constitución Política del Estado. Por primera vez en la historia de Bolivia, todos los sectores sociales fueron partícipes de discutir y diseñar el nuevo modelo de Estado y sociedad para Bolivia.

⁴ “Queremos... la construcción de una sociedad plurinacional que, manteniendo la unidad de un Estado, combine y desarrolle la diversidad de las naciones aymara, quechua, tupi-guarani, ayoreode y todas las que la integran... (Un) Estado Plurinacional y Pluricultural que agrupe a las naciones aymara, quechua... respetando sus diferencias” (CSUTCB 1983).

CONCLUSIONES

Sin lugar a dudas, en el intento de mirar la “democracia boliviana” desde los pueblos indígenas andinos, existen etapas y avances muy importantes. El actual “proceso de cambio” es parte de esa dinámica. Pero a la vez visibilizamos la reaparición de posiciones recolonizadoras, expuestas en las contradicciones internas del actual Gobierno, pero también en las acciones de algunos movimientos sociales indígenas, sobre todo en la región andina. Lo más importante es que el movimiento indígena y campesino en las últimas tres décadas ha aportado decisoriamente en la construcción de una forma de democracia intercultural que no está ni mucho menos consolidada. El Estado plurinacional aún es la idea y la apuesta para cimentar una sociedad intercultural desde abajo.

Fuentes

- CSUTCB. 1983. Tesis política y estatutos. CSUTCB. La Paz.
- Hurtado, Javier. 1986. *El Katarismo*. La Paz: HISBOL.
- Platt, Tristán. 1982. *Estado boliviano y ayllu andino*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Rivera, Silvia. 1984/2003. Prefacio a *Oprimidos pero no vencidos. Luchas del campesinado aymara y quechua 1900-1980*. Yachaywasi-Aruwiyiri: La Paz.
- Reinaga, Fausto. 1970 (2001). *La Revolución india*. La Paz: Pib.
- República de Bolivia. Asamblea Constituyente de Bolivia. 2007. *Nueva Constitución Política del Estado*. Aprobada en detalle. Oruro, 9 de diciembre de 2007. La Paz.
- Quijano, Aníbal. 1992. *Colonialidad y modernidad-racionalidad*. En *Los Conquistados. 1492 y la población indígena de las Américas*. Heraclio Bonilla, compilador. Santa Fe de Bogotá: Tercer mundo editores/ FLACSO Ecuador/ Libri Mundi. Pgs. 437-447.
- Ticona Alejo, Esteban. 1996. *CSUTCB: Trayectoria y desafíos*. La Paz: Cedoin.
- Tapia, Luciano (Lusiki Qhispi Mamani). 1995. *Ukhamawa jakavisaxa. Así es nuestra vida. Autobiografía de un aymara*. La Paz: hisbol.
- Ticona Alejo, Esteban. 2000. *Organización y liderazgo aymara. La experiencia indígena en la política boliviana. 1979-1996*. La Paz: Universidad de la Cordillera-Agruco.
- Villca, Juan de la Cruz. 1992. *Propuesta para la discusión en las bases*. En Convocatoria 1a. Asamblea de Naciones Originarias y del Pueblo. La Paz: CSUTCB.
- Villca, Juan de la Cruz. 1995. *La marcha nacional campesino-cocalera en el relato de Juandela*. CSUTCB. Oruro.

Pueblos indígenas de tierras bajas en 30 años de democracia

Elba Flores Gonzales¹

Hemos transitado 30 años de la democracia en Bolivia, entre períodos de avances y crisis profundas que la han puesto en peligro, pero también a partir de la democracia se han logrado cambios profundos en el país. La democracia no radica sólo en el ejercicio político de los derechos a elegir y ser elegido, es más amplia, tiene que ver con otras dimensiones, económicas, políticas, sociales y culturales; con el reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, que desde que emergieron se ha constituido en un sujeto político-social que ha aportado profundamente al proceso democrático.

EMERGENCIA SOCIAL DEL MOVIMIENTO INDÍGENA A NIVEL NACIONAL

Después de dos décadas de exclusión y marginación del Estado-nación, entre las décadas del 70 y 80, y con el restablecimiento de la democracia, irrumpe en el escenario nacional un nuevo actor social. Los pueblos indígenas de tierras bajas demandaban un mayor reconocimiento de la diversidad étnica, en un contexto internacional favorable de sensibilización sobre los derechos humanos, la discusión sobre el medio ambiente y la protección de los bosques que abre un discurso ambiental-étnico.

Una de las primeras estrategias fue buscar la “unidad de los pueblos indígenas en la diversidad”. El año 1979 se realizan los primeros encuentros entre pueblos indígenas para compartir su problemática, hasta que el año 1982 los pueblos indígenas de Santa Cruz deciden conformar una organización inter-étnica. Posteriormente se constituye la

¹ Investigadora social, con experiencia en derechos indígenas, del Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (CEJIS).

Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB)² en el año 1989, como ente matriz de los pueblos indígenas del Chaco, Amazonia y oriente de Bolivia.

Irrumpe en el escenario nacional con la primera Marcha por el Territorio y la Dignidad el año de 1990, la misma que redimensionó el carácter político de la problemática indígena. El movimiento indígena como actor social no sólo exigía el respeto a su identidad, demandaba también el reconocimiento al territorio y su territorialidad, el ejercicio de la autonomía, participar en todos los ámbitos políticos, económicos, sociales con voz propia; en otras palabras, su propuesta subversiva estaba dirigida a transformar el Estado, a que la democracia se abra a incluir nuevos criterios desde la identidad. La movilización logra que el Estado reconozca formalmente dentro del marco jurídico cuatro territorios indígenas mediante decretos supremos³ y se comience a repensar la cuestión indígena.

El Estado de Bolivia fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio 169⁴ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas en 1991. En ese marco se da la reforma constitucional de 1994, que fue un avance sustancial pero limitado a la vez; reconoció el carácter multiétnico y

pluricultural del Estado boliviano dando paso a las identidades, pero en el fondo no trastocó la estructura y patrones de comportamiento en la sociedad. La CPE reconocía y garantizaba el derecho a los territorios que habitan los pueblos indígenas, pero en calidad de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), es decir como propiedad colectiva privada, no en toda la dimensión política que implicaba el ejercicio del autogobierno.

Se promulgan nuevas leyes: Ley Forestal N° 1700, la Ley N° 1551 de Participación Popular, Ley de Descentralización, Ley de Municipalidades, Ley de Reforma Educativa, Ley SNRA N° 1715 basada en la CPE reformada, normas que contienen algunos avances que se consigue arrancar a gobiernos neoliberales.

La Ley de Participación Popular reconoce la personería jurídica de las comunidades indígenas y organizaciones en los municipios. Sin embargo, con una concepción colonialista, la ley exigía la creación de nuevas estructuras como la Organización Territorial de Base (OTB)⁵, por encima de las organizaciones indígenas, desconociendo las formas propias de gobierno dentro de las comunidades indígenas.

La Ley de Municipalidades reconfiguró el territorio nacional estableciendo la municipalización del país

2 Desde sus inicios, la CIDOB dirigió su lucha étnica hacia la reivindicación de sus territorios con un alto contenido étnico y político, el mismo que constituye el símbolo material sobre el cual construyen su conocimiento y es el fundamento de su sentimiento de pertenencia e identidad étnica, pero sobre todo constituye su visión y proyecto de vida como pueblo.

3 Fueron reconocidos los territorios indígenas Parque Nacional Isiboro Sécore (TIPNIS) DS N° 23108, Territorio Indígena Multiétnico (TIM) DS N° 22611, Territorio Indígena Chimán-Tsimane DS N° 22611 y Territorio Indígena Sirionó (TIS) DS N° 22609.

4 Ley N° 1257

5 La nueva figura de OTB a veces se sobreponía al presidente de la comunidad, relegando la estructura y jerarquía de las comunidades, en otros casos estaba claro que la OTB era una autoridad más de la comunidad.

como sistema de gobierno local. Los pueblos indígenas lograron el reconocimiento de los distritos indígenas, pero dentro del ámbito de los límites municipales que no correspondía a veces con la demanda de las TCO que sobrepasaban sus límites.

Los pueblos indígenas participan por primera vez en las elecciones de 1995, bajo la representación de un partido político nacional, lo que obligaba a realizar alianzas y pactos políticos con partidos de derecha como MNR, MIR, ADN y MBL. El resultado de esta experiencia democrática fue la escasa presencia de alcaldes (as)⁶ y concejales (as) titulares en minoría, suplentes en su mayoría y agentes cantonales en varios gobiernos municipales.

En este período la lucha del movimiento indígena por sus derechos es más de carácter sectorial, actúa como sujeto jurídico de derechos, porque exigía el reconocimiento de sus derechos en un sistema jurídico nacional.

DEL PODER EN CONSTRUCCIÓN Y LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA RE-FUNDAR BOLIVIA

-Movimiento indígena y transformaciones estructurales

A partir del año 2002, las orga-

nizaciones indígena-campesinas de tierras bajas percibían que el proceso agrario se había agotado, que el sistema político estaba en crisis y era urgente romper el monopolio partidario y traspasar hacia una democracia más representativa, y la única forma de cambiar la situación era generando un proceso de transformación estructural. Ante esta lectura conjunta, la estrategia del movimiento indígena liderado por la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC) y otras organizaciones indígena-campesinas⁷ fue articular alianzas a nivel regional con otros sectores excluidos en torno a demandas comunes, es así que se consolida el Bloque Oriente⁸ y se realiza la Marcha por la Soberanía Popular, el Territorio y los Recursos naturales⁹ en torno a una plataforma jurídico-política que planteaba: La realización inmediata de convocatoria a una Asamblea Constituyente, Tierra-Territorio para indígenas y campesinos y el archivo de la Ley de Apoyo al Desarrollo Sostenible.

En un segundo momento histórico, el movimiento indígena pasa de ser un actor meramente jurídico para constituirse en un actor sociopolítico, en el sujeto constituyente; sus acciones traspasan la atención de demandas

6 Alcalde indígena en el municipio de Gutiérrez, Jaime Aireyu Guarani, en alianza con el MNR; Alfonso Arembay, municipio de Ascensión de Guarayos, alianza con el MIR. Las autoridades municipales, si bien eran indígenas, respondían más a los partidos de derecha, lo que no permitía avanzar en el ejercicio real de la democracia representativa y la construcción de la autonomía indígena.

7 La CPESC, encabezada por la líder indígena guaraní Marisol Solano y algunas regionales como Cirabo y la APG estaban alejadas de la CIDOB porque había sido cooptada por los gobiernos y no tenía un posicionamiento claro con respecto a la problemática agraria; al contrario, se había aliado con la CAO.

8 Integran el Bloque Oriente: CEPSC, Cirabo, APG, FSTC-SC, FSTC-VD, FSTC-P, MST.

9 La marcha y la propuesta de Asamblea Constituyente fue duramente criticada calificándola de absurda, inconstitucional por el Gobierno y partidos tradicionales. Asimismo, algunos sectores como los cocaleros no se sumaron a la misa porque estaban en plena campaña política.

estrictamente sectoriales y adquieren una dimensión de carácter nacional, al plantear transformaciones estructurales como la Asamblea Constituyente para refundar Bolivia y generar un nuevo pacto social, debido a que se había agotado el modelo de Estado monocultural. Los movimientos sociales se apropian y articulan en torno a esta propuesta de Asamblea Constituyente y la incorporan en la agenda de octubre. La movilización también sirvió de escenario propicio para generar un primer encuentro y alianza con indígenas de tierras altas del Conamaq.

Ese mismo año se realizan las elecciones presidenciales¹⁰, con resultados sorprendentes que configuran un nuevo escenario político. El MAS, presidido por Evo Morales, logra ubicarse segundo (20,9%); el MNR, ganador de las elecciones, consigue apenas 22,5%; los partidos tradicionales fueron los grandes perdedores producto del descontento social contra la política neoliberal y el sistema de partidos. La CPESC y la CPEMB participan de las elecciones en alianza con el MAS, logrando un diputado nacional: el chiquitano José Bailaba.

-El proceso de construcción de los movimientos sociales apropiado desde el Estado.

En el país se vivían múltiples movilizaciones sociales protagonizadas por diversos actores sociales indígena-

campesinos y urbanos desde inicios de 2000, evidenciando la profunda crisis estructural y el desgaste del modelo económico neoliberal. Recordemos la “guerra del agua”, febrero negro, la “guerra del gas”, liderada por El Alto que condujo a la renuncia y fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada y al posicionamiento de la agenda de octubre, que contenía tres demandas: referéndum por la nacionalización del gas, convocatoria a la Asamblea Constituyente y tierra-territorio ligado a los recursos naturales.

Estos movimientos sociales que confluyen a partir del cuestionamiento al sistema político y al modelo neoliberal dan paso al proceso de cambio; toda esta acumulación de fuerza política y social fue capitalizada por el MAS, que tuvo la capacidad de construir alianzas con diversos sectores sociales urbanos-rurales.

El movimiento indígena, que se constituyó en un primer momento en el impulsor del proceso de cambio en calidad de aliado estratégico, fue desplazado de la toma de decisiones políticas, más aún cuando el Pacto de Unidad se desarticuló quedando el movimiento social sin dirección.

-Proceso constituyente: Del Estado monocultural al Estado plurinacional

Una vez posicionada la demanda de Asamblea Constituyente, las organizaciones indígena-campesinas

10 El MNR 22, 5%, MAS 20,9% y la NFR 20,9%. Se destaca también la participación del Movimiento Indígena Pachakuti (MIP), liderado por Felipe Quispe y que tenía como bastión Achacachi en la provincia Omasuyos de La Paz.

plantean la necesidad de consolidarla, por esta razón el 10 de septiembre del año 2004, reunidas todas las organizaciones nacionales del país en Santa Cruz de la Sierra, definen conformar el Pacto de Unidad¹¹, con el fin de trabajar una propuesta de consenso para la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente: soberana, fundacional, participativa, incluyente y autónoma, que se rompa la visión colonial y la exclusión de las mayorías.

Las organizaciones indígena-campesinas elaboran participativamente una propuesta de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y plantean las circunscripciones especiales indígenas para garantizar su participación política bajo dos sistemas: a) por voto universal b) por usos y costumbres, contando con la adhesión de sectores urbanos. La propuesta finalmente no fue considerada con el argumento de que se había constituido un gobierno indígena.

El mandato de los movimientos sociales de convocar a la Asamblea Constituyente, el referéndum vinculante por la temática del gas y de dotarle al país de una nueva Ley de Hidrocarburos, fue postergada y más bien se convocaron elecciones generales y elección de prefectos para diciembre de 2005. El resultado de los comicios dio como ganador absoluto a Evo Morales del MAS con un 53,7%.

En este día histórico para el país y el movimiento indígena, Morales asume su mandato con la agenda de octubre.

Respondiendo al mandato, el gobierno del MAS promulga la Ley de Convocatoria a la Asamblea Constituyente y el Referéndum por Autonomías, producto de un pacto político gestado en el Parlamento nacional. De acuerdo con lo establecido en la ley de convocatoria, se realizaron las elecciones de constituyentes y simultáneamente el referéndum vinculante



El movimiento indígena como actor social no sólo exigía el respeto a su identidad, demandaba también el reconocimiento al territorio y su territorialidad, el ejercicio de la autonomía, participar en todos los ámbitos políticos, económicos y sociales con voz propia; en otras palabras, su propuesta subversiva estaba dirigida a transformar el

por las autonomías departamentales el 1 de julio de 2006. El MAS logró obtener un 50,7% de los constituyentes, asimismo la articulación indígena-campesina y la alianza con el MAS permitieron contar con cuatro constituyentes indígenas: Nélda Faldín y José Bailaba, chiquitanos; Miguel

11 Suscribieron el Pacto de Unidad: Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC), Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), Coordinadora de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni (CPEMB), el Bloque de Organizaciones Campesinas e Indígenas del Norte Amazónico de Bolivia (BOCINB), Confederación Sindical de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB), Federación Nacional de Mujeres Campesinas de Bolivia Bartolina Sisa (FNMCB-BS), Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Movimiento Sin Tierra (MST), Central de Trabajadores Asalariados del Campo (CDTAC).

Peña, mojeño-trinitario, y Avilio Vaca, guaraní.

Mientras tanto, el trabajo del Pacto de Unidad se abocó a la construcción de una propuesta única, la que fue entregada cuando se instala la Asamblea Constituyente en la ciudad de Sucre el 5 de agosto de 2006, como un aporte de las organizaciones sociales al proceso democrático y al debate constituyente. El PU y especialmente las organizaciones indígenas, como CIDOB, CPESC, APG, CPBEM, acompañaron todo el proceso de la Asamblea Constituyente participando en las comisiones a través de un equipo técnico y una delegación de líderes indígenas en los encuentros, asambleas y audiencias públicas.

La dinámica del proceso pre-constituyente y constituyente permitió ampliar y consolidar las alianzas en torno a una propuesta y agenda común entre sectores rural-urbanos a nivel nacional; organizaciones sociales con demandas e intereses comunes, pero con visiones y experiencias de lucha diversas, se articularon en el Pacto de Unidad y en las tierras bajas en el Bloque Oriente. Esta unidad organizativa ha permitido construir propuestas normativas conjuntas y ha sido determinante para garantizar que sus demandas sean incorporadas en el nuevo texto constitucional.

-Defensores de la democracia desde el bastión de los grupos de poder

La polarización entre dos fuerzas que se disputaban la hegemonía, el MAS que impulsaba el proceso constituyente como la concreción del pro-

yecto de cambio y los grupos de poder conservadores que se oponían al cambio generaron un clima de violencia que recrudeció cuando los grupos de poder del oriente, en respuesta a la agenda de octubre, plantearon la autonomía departamental y visibilizaron su propuesta a través del Comité Cívico pro Santa Cruz como su interlocutor válido. Este período fue de una alta tensión y polarización entre las regiones de oriente y occidente de Bolivia, la confrontación regional se caracterizó por utilizar consignas como la identidad cruceña, acciones y discursos con tintes racistas que ahondaron la diferencia.

En diferentes regiones de las tierras bajas acontecía una serie de hechos de violencia en contra de la humanidad de dirigentes indígenas, azotes en vía pública, enfrentamientos, quema de oficinas indígenas en San Javier, ante la ausencia de Estado en la región. Estos actos de intolerancia y racismo en contra de las organizaciones indígenas y campesinas eran, según los grupos conservadores, un escarmiento para quienes se habían atrevido a disputar a los grupos de poder las tierras, los recursos naturales y el poder político (Suárez: 2008). Esta situación ha permitido a las organizaciones indígenas ampliar las alianzas con sectores sociales urbanos y posicionarlos como los referentes políticos, defensores del proceso de cambio y la democracia en la región.

-Avanzando en la construcción del Estado plurinacional

Los pueblos indígenas que apostaron por la construcción del Estado

plurinacional ahora hacen realidad sus derechos conquistados con la implementación de la CPE; se pone en vigencia la democracia comunitaria, la consulta y la autonomía indígena.

El 6 de diciembre de 2009 fue un día histórico y memorable para la democracia en Bolivia; en este proceso democrático, cinco asambleístas indígenas fueron elegidos mediante sufragio individual y por mayoría simple en las circunscripciones especiales, y tres asambleístas en las circunscripciones plurinominales y uninominales que fueron en alianza con el MAS pero elegidos orgánicamente y avalados por la CIDOB. Por mandato de su organización matriz han constituido la “bancada indígena”, la que representa el tránsito de un sector social reivindicativo a un nuevo actor político de peso en la correlación de fuerzas parlamentaria (CIDOB, 2009).

El 4 de abril de 2010 se eligieron alcaldes(as) y concejales (as), gobernadores y asambleístas departamentales en todo el país, enmarcados en la Constitución y en la Ley Transitoria Electoral N° 4021. Se da la designación y elección directa por normas y procedimientos propios de 23 asambleístas departamentales indígena originario campesinos como parte de la conformación de los gobiernos autónomos departamentales. Con esto se dio inicio a un sistema democrático de representación plural, a la emergente institucionalidad del Estado plurinacional autónomo.

Por otro lado, la Ley 4021 establecía que mediante referéndum los pueblos indígena originario campesinos

podrían convertir sus unidades administrativas municipales en autonomías indígenas, entonces el 6 de diciembre 11 de los 12 municipios optaron por la conversión a autonomía indígena. En el caso de las tierras bajas, el municipio de Charagua, zona histórica de dominio de grupos de poder, logró el “Sí” a la autonomía indígena, proceso impulsado por el pueblo guaraní.

En el marco de la CPE y tomando como base la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, convertida en Ley N° 3760, declaración que fue ratificada el 12 de abril de 2008 en el país, el territorio de Lomerío definió apostar por la autonomía de base territorial, demanda histórica de los pueblos indígenas que permite la distribución del poder, la reconstitución territorial y la continuidad histórica del territorio.

La CPE reconoce este derecho en el Art. 30 numeral 15. Señala que los pueblos indígenas tienen derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. Igualmente, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas obliga a los Estados a realizar la consulta prevista en el Convenio 169 de la OIT.

Aunque este derecho fue reconocido en el plano jurídico nacional en la primera gestión de gobierno del MAS, la propuesta trabajada por las organizaciones indígena-campesinas fue incorporada en la Ley de Hidrocarburos en un título especial, además ampliada en el Reglamento de Monitorio Socio-

ambiental, el Procedimiento de Consulta y Participación sobre Actividades Hidrocarburíferas a las empresas petroleras, normas que han aplicado especialmente en el territorio guaraní, donde operan empresas petroleras.

Hay un avance sustancial en términos legales y declarativos, pero una limitación en términos de su aplicación. Es obligación del Estado garantizar que la consulta se realice de buena fe, y actuar en el marco del derecho y el respeto a los pueblos indígenas. En el TIPNIS, el discurso del Gobierno de

“

El movimiento indígena, que se constituyó en un primer momento en el impulsor del proceso de cambio en calidad de aliado estratégico, fue desplazado de la toma de decisiones políticas, más aún cuando el Pacto de Unidad se desarticuló y el movimiento social quedó sin dirección”

construir sí o sí la carretera, la postura dura y soberbia, la consulta a destiempo, la forma y los mecanismos que está implementado para aplicar este derecho, desde todo punto de vista rompen la esencia de la consulta que debería ser un acto democrático antes que convertirse en conflicto innecesario.

A MANERA DE CONCLUSIÓN

El movimiento indígena pasa de ser un actor meramente jurídico para constituirse en un actor socio-político, en el sujeto constituyente referente del movimiento social que posiciona y pone en la agenda nacional la demanda de Asamblea Constituyente. Tuvo la capacidad de cohesionar al movimiento social en torno a una demanda de carácter nacional, de propiciar articulaciones con sectores sociales que antes eran vistos como antagónicos por su posicionamiento ideológico, sus diferencias regionales y culturales.

Se reconoce su capacidad propositiva, en todo el proceso sus acciones de movilización estuvieron acompañadas de propuestas construidas participativamente, las que fueron incorporadas en la reforma de la CPE y en la legislación nacional. Con esta experiencia siguen en la línea de construir propuestas jurídicas que aporten al desarrollo legislativo iniciado en el país.

Los pueblos indígenas que apuestan por la construcción de la arquitectura del Estado plurinacional, ejerciendo sus derechos democráticos, encontraron que “su” Gobierno reproduce los discursos y prácticas del modelo monocultural, lo que hace incierto el proceso de cambio.

El agro boliviano en tiempos de la democracia y el neoliberalismo

Gonzalo Colque¹

A inicios de 2006, después de ganar las elecciones con 53,7%, el Movimiento Al Socialismo (MAS) tomó el poder declarándose antineoliberal, anticapitalista y prometió una nueva política de Estado bajo el denominativo de “proceso de cambio”.

Los sectores populares votaron por el MAS precisamente porque estaban cansados de las consecuencias del cuestionado modelo económico y político. Sin embargo, con los años el discurso de tono revolucionario fue perdiendo fuerza y dejando al descubierto que, en la práctica, el nuevo Gobierno promueve una economía capitalista basada en el extractivismo de los recursos naturales. La variante es que ahora el Estado tiene ma-

yor coparticipación en la repartición de los ingresos generados por las industrias extractivas, principalmente en el sector hidrocarburífero.

La política gubernamental de libre mercado capitalista está expandiéndose con consecuencias inmediatas hacia el sector agrario y rural. Los agroindustriales –la élite cruceña que en la era democrática se destacó por oponerse a la redistribución de la tierra– no sólo aprueban la política económica del Gobierno, sino que también lograron diversas ventajas concretas que les permite conservar y consolidar el capitalismo agrario cruceño².

El capitalismo agrario también tiene entre sus partidarios a los medianos e incluso a pequeños agricultores que se benefician de los rebalses de la econo-

1 Economista con especialidad en desarrollo rural. Director de Fundación Tierra.

2 Para citar algunos, hasta 2005 el saneamiento de tierras no sobrepasó el 10% de la meta programada (Fundación Tierra, 2010), el impuesto a la tierra fue relativizado (véase más adelante), la Constitución Política del Estado (CPE) de 2009 no aplica el mandato del referéndum dirimitorio de limitar las grandes propiedades por debajo de 5.000 hectáreas, véanse art. 398 y 399 (CPE, 2009).

mía agraria extractivista. Son los medianos y pequeños empresarios cruceños de la soya, caña de azúcar, girasol, maíz, arroz y el sector pecuario. En otro contexto geográfico, aunque en la misma lógica del agronegocio, están los colonizadores dedicados a la producción y comercialización de la hoja de coca. El crecimiento económico de estos enclaves rurales tiene un efecto inmediato en el pedido creciente por la ampliación de la frontera agrícola a costa del bosque, la Amazonia y los territorios indígenas.

Esta economía agraria dinámica tiene su contracara: son los pequeños productores de las tierras altas que no producen commodities para el mercado mundial ni se dedican al cultivo de la hoja de coca. Se estima que en esta situación están, al menos, dos terceras partes de la población rural boliviana, que fueron excluidos del mercado interno de alimentos como los principales proveedores (Urioste, et. al, 2007).

El propósito de este breve texto es repasar esta cuestión agraria en el marco de los 30 años de la democracia boliviana. Como veremos, es una historia de políticas de tierras conducida ciertamente por gobiernos democráticos pero, en los hechos, también neoliberales. Revisaremos las condiciones en que renació la reforma agraria cuando se recuperaron las libertades políticas y de libre expresión, el proceso que siguió y su estado actual.

LOS AÑOS 80: CLAROSCUROS

La dictadura militar y en especial el gobierno de Hugo Banzer (1971-1978) distribuyeron miles de hectáreas de tierra

en el oriente boliviano por medios fraudulentos, en forma gratuita y principalmente como moneda de pago por acuerdos políticos. El argumento esgrimido fue que la Ley de Reforma Agraria de 1953 permitía entregar en dotación hasta 50.000 hectáreas de tierra a toda persona interesada en convertirse en empresaria. Quienes se beneficiaron tomaron el control y concentraron tierras, pero no necesariamente con fines productivos, sino para especular en el naciente y prometedor mercado de tierras del oriente.

La llegada de la democracia en 1982 generó nuevas expectativas entre los pequeños productores andinos por acceder a nuevas tierras. De esta época, destaca la propuesta de la Ley Agraria Fundamental de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), liderada por Jenaro Flores Santos. El proyecto fue recibido en acto público por el presidente Hernán Siles Zuazo pero su adopción legal no prosperó, a pesar de que Siles había firmado un decreto (DS 20374) de incorporación de los postulados de la CSUTCB. Los dirigidos por Flores plantearon que existía una estructura dual de latifundio y minifundio que estaba ocasionando la explotación capitalista de este sector social. Bajo ese argumento plantearon que la tierra sea de propiedad de quien la “trabaja personalmente” y se conformen unidades de trabajos asociados y colectivos. Desde entonces, y hasta hoy, la CSUTCB no pudo formular una tesis de igual o mayor relevancia (CEJIS, 2001).

El posterior gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1985-1989) aprobó

la llamada Nueva Política Económica (NPE) dando inicio al ciclo neoliberal, según las medidas de “ajuste estructural” diseñadas para países en vías de desarrollo por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM). El Gobierno se preocupó por ajustar la inflación, el desequilibrio fiscal, establecer las bases del libre mercado y privatizar la economía y las empresas estatales. El FMI y el BM condicionaron sus préstamos a estas medidas. En ese contexto, las demandas de distribución equitativa de la tierra fueron apartadas del núcleo de la agenda estatal, aunque no fueron anuladas del todo ante las crecientes denuncias de corrupción. Paz Estenssoro encargó un estudio de reestructuración del Consejo Nacional de Reforma Agraria (CNRA) y el Instituto Nacional de Colonización (INC).

Durante los años 80, el agro cruceño logró desplazar del mercado de alimentos a los pequeños campesinos andinos como los proveedores mayoritarios. Por ejemplo, el año 1950 Cochabamba (producción campesina) tenía alrededor de 230 mil hectáreas censadas como tierras de cultivos, mientras Santa Cruz sólo 96.000. Pero para el año 1984, Santa Cruz registró 5,5 millones de hectáreas, mientras que Cochabamba prácticamente mantenía la misma cifra (Censo Agropecuario, 1950; Censo Agropecuario 1984).

Los 80 definen el modelo del agro cruceño, orientado al mercado internacional, centrado en la producción de la soya y la llegada intensiva de capitales transnacionales, principalmente desde Brasil.

1990-1995: RETORNO AL DEBATE AGRARIO

1990 es el año de la Marcha por la Dignidad y el Territorio, la primera protagonizada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (CIDOB), cuya principal demanda fue el reconocimiento jurídico de sus territorios y derechos colectivos. Esta movilización condujo al gobierno de Paz Zamora a aprobar el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) y a reconocer, por decreto, los territorios de los pueblos sirionó,



La dictadura militar y en especial el gobierno de Hugo Banzer (1971-1978) distribuyeron miles de hectáreas de tierra en el oriente boliviano por medios fraudulentos, en forma gratuita y principalmente como moneda de pago por acuerdos políticos”

moxeños t’simanes, yuracaré, movimas y otros (Coca Suárez 2009).

Esta movilización por tierras junto a la intervención del CNRA y del INC eran señales de crisis agraria. Las denuncias de corrupción en la distribución de tierras hechas por la CSUTCB y el caso denominado “Bolibras” –una dotación ilegal de una propiedad latifundiaria, denunciada por el parlamentario Miguel Urioste– obligaron al Gobierno a paralizar todo trámite agrario e iniciar la elaboración de una nueva ley de tierras (Hernaíz y Pacheco, 2000).

El debate de nueva de ley tierras se extendió hasta mediados de 1996. Los empresarios del oriente se opusieron y también los campesinos andinos por considerar que era una medida del neoliberalismo. El proceso no estuvo libre de la presencia del FMI y del BM, organismos que otorgaron asistencia financiera y técnica (Ibid). Estaba en juego el enfoque estratégico que tendría la reforma agraria. Si estaría dirigida por el Estado o sería una medida conducida por las reglas del libre mercado, si habría obligatoriedad en la revisión del derecho propietario o sería una adscripción voluntaria, si sería conducida por el Gobierno central o por los gobiernos departamentales, como pretendía Santa Cruz³.

Cuando se aprobó la Ley N° 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), ésta fue rechazada por igual, tanto por los capitalistas agrarios del oriente como por la CSUTCB. Mientras los primeros señalaban que era una ley de confiscación de sus propiedades, los pequeños productores la calificaron de ley neoliberal que no había incorporado sus demandas y convocaron a la resistencia del proceso de titulación de tierras.

1996-2005: LA AMPLIACIÓN DEL CAPITALISMO AGRARIO CRUCEÑO

La Ley INRA de 1996 ordenaba una revisión jurídica y técnica de todas las propiedades y entrega de títulos de propiedad a todo aquel que demost

se haber obtenido la tierra por medios lícitos y que cumplía la Función Económica Social (FES). La ley otorgó un plazo de diez años, período en el que el Estado debía recuperar las propiedades latifundiarías e ilegales para distribuir las y entregarlas a campesinos con escasa tierra o sin tierra.

Pasado los diez años, el proceso no concluyó. Apenas se había alcanzado el 10% de la meta y la mayoría eran Tierras Comunitarias de Origen (TCO) en tierras bajas. Por diez años, las grandes propiedades ganaderas y agrícolas esquivaron con éxito el proceso agrario utilizando su poder económico frente al poder político disminuido de Sánchez de Lozada, Quiroga y Banzer. La élite cruceña también se benefició con mejores precios internacionales de la soya, tecnología agroindustrial e inversiones provenientes de Brasil y Argentina. Una reciente investigación señala que “a partir de 1990 se da un salto en la superficie cultivada del departamento de Santa Cruz, pasando de 413.320 hectáreas a 1.821.631 en el año 2007. El cultivo de la soya y otras oleaginosas bordea el millón de hectáreas y las 800 mil hectáreas restantes se destinan a la caña de azúcar, algodón, trigo, arroz, maíz y otros cultivos alimenticios” (Urioste, 2011).

El capitalismo cruceño aglutinado en la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) logró varias conquistas del Gobierno central⁴. Banzer (1997-2001) congeló los precios de los

³ De hecho, las discusiones sobre reformas agrarias vía Estado o mercado se producen en distintos países en el contexto de las medidas del “ajuste estructural” (Borras, 2007).

carburantes, medida que desde entonces obligó a los distintos gobiernos a importar diésel de Argentina y Venezuela a precio internacional. En 2010, el Gobierno del MAS estimó que la subvención al diésel por ese año costó 300 millones de dólares americanos.

Otra medida contrarrestada fue el impuesto a la tierra. Banzer aceptó que la base imponible se calcule según autoavalúo del propietario y no según el precio de mercado de la tierra. Adicionalmente, Sánchez de Lozada (2002-2003) redujo la alícuota del impuesto ante la queja de los agroindustriales de que los desastres naturales los estaban llevando a la quiebra. En consecuencia, las recaudaciones tributarias son marginales, están a cargo de los gobiernos municipales que, además, están obligados a reinvertir el 75% a favor del propio sector agroempresarial en forma de servicios y promoción económica (Morales, 2011).

Una última apuesta cruceña por eliminar el papel del Gobierno central en la reforma agraria fue el pedido de la autonomía departamental. En 2004, el Comité pro Santa Cruz lideró masivas movilizaciones, concentraciones y “cabildos” para promover el referéndum autonómico con carácter vinculante para la Asamblea Constituyente de 2006. La principal demanda consistía en retener la mayor parte de los ingresos tributarios para los propios cruceños y transferir al gobierno departamental todos los derechos de

control, regulación y uso de la tierra y recursos naturales (Plata, 2008).

2006-2012: los contrasentidos durante el “proceso de cambio”

En 2006, Evo Morales señaló: “Esas tierras que sólo sirven para acaparar y para negociar, eso vamos a revertir al Estado para redistribuir la tierra a la gente que no tiene tierra”. (Bolpress, 2006). Bajo esta premisa,



Los 80 definen el modelo del agro cruceño, orientado al mercado internacional, centrado en la producción de la soya y la llegada intensiva de capitales transnacionales, principalmente desde Brasil”

en noviembre de 2006 el Gobierno promulgó la Ley modificatoria N° 3545 de “reconducción comunitaria de la reforma agraria”, enfocada a la titulación comunitaria y la dotación colectiva de las tierras del Estado. Se argumentó que fue para evitar la mercantilización de la tierra y “desmontar el neoliberalismo y el colonialismo vigente desde hace 500 años en Bolivia”. (MAS-IPSP, 2006)

Durante el período 2006-2010 se produjo una masiva titulación de las TCO, alcanzando 20,7 millones de hectáreas, aunque, al mismo tiempo, estaban estancadas las demás medi-

4 La CAO representa a cerca de 70.000 empresarios de 16 organizaciones sectoriales. El 70% es considerado pequeño productor, 24% medianos y el restante 6% como los grandes productores (Valdivia, 2010).

das como la reversión y expropiación de los latifundios y de las tierras ilegales, la distribución a favor de minifundistas y la titulación de pequeñas propiedades. En 2011, el conflicto del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS) frenó el reconocimiento de más TCO y el Gobierno vulneró los derechos indígenas reconocidos. Con este retroceso quedó en evidencia que la reforma agraria no había avanzado sustancialmente como para modificar la estructura dual vigente.

Por tanto, el capitalismo agrario cruceño se afianzó aún más. Además, los últimos dos años, los agroindustriales lograron introducir en la agenda gubernamental la demanda de paralización de la FES; en otras palabras, están logrando que el Estado renuncie a tener control alguno sobre el “mercado negro” de las tierras del agronegocio⁵. Esta propuesta goza del respaldo político del más alto nivel, desde los movimientos sociales aliados al Gobierno, que la adoptaron como una más de sus demandas, hasta el propio Presidente, que justificó públicamente el pedido cruceño durante su último informe a la nación⁶.

CONCLUSIONES

La reforma agraria que resurgió en el marco de los últimos 30 años de democracia boliviana fue impulsada por sectores que se oponen a

los latifundios de las tierras bajas que tuvo un origen ilícito en el periodo de los gobiernos dictatoriales. La presión pública obligó a los gobiernos neoliberales de los años 90 a preparar un marco legal que –aunque no estuvo libre de las influencias de las políticas de “ajuste estructural”– otorgó el papel clave al Estado antes que al mercado para conducir la redistribución de tierras.

Los gobiernos antecesores a Evo Morales mantuvieron con bajo perfil la implementación de la reforma agraria, especialmente en sus componentes sensibles como la reversión de tierras de especulación y el control de latifundios. La política neoliberal obstaculizó la implementación de la norma al igual que las relaciones de poder entre los gobiernos democráticos y el poder agroempresarial económicamente influyente. La lejanía entre los diferentes gobiernos democráticos y los campesinos e indígenas demandantes de tierras también dificultó el proceso agrario.

A partir de 2006, el Gobierno actual retomó el problema de la tierra logrando importantes avances en la consolidación de territorios indígenas y llegando incluso a confrontar al capitalismo agrario. Sin embargo, desde el año 2010 la política gubernamental se hundió en un mar de contradicciones, incerti-

⁵ *Mercado negro*, en este texto el término es utilizado para describir la compra y venta clandestina e ilegal de tierras sin títulos de propiedad ni verificación de la FES, vulnerando los derechos de control y regulación agraria del Estado boliviano.

⁶ Discurso del Presidente de fecha 22/01/2012, en el que anunció “paralizar la verificación de la Función Económica Social (FES) por cinco años”.

dumbres y pragmatismos aún complejos de entender. Éste es un escenario donde la política neoliberal sigue jugando un rol decisivo, tanto por ser parte del capitalismo global como porque el gobierno del MAS es promotor del extractivismo de los recursos naturales. Su proyecto político no es complejo: el Gobierno al captar la mayor proporción posible de los ingresos de la industria extractiva, acumula poder económico y, bajo control político, lo transfiere a sectores populares para capitalizar poder político.

En estas circunstancias, el mercado negro de tierras sigue desempeñando un papel decisivo y creciente para definir cómo se accede a la tierra, quiénes la controlan y quiénes son los excluidos.

Fuentes

Bolivia

- 2006 Constitución Política del Estado
- 1984 Decreto Supremo 20374
- 1950 Censo Agropecuario
- 1984 Censo Agropecuario
- 1996 Ley 1715 del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)
- 2006 Ley modificatoria N° 3545 de reconducción comunitaria de la reforma agraria

Bolpress

- 2006 Discurso del presidente Evo Morales en el Congreso, septiembre de 2012. <http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2006012301>.

Borras, Saturnino M; et al.

- 2007 *Agrarian reform and rural development: historical overview and current issues*, en Akram-Lodhi, A. Haaron; et al (eds). Land, poverty and livelihoods in an era of globalization. USA: Routledge

CEJIS

- 2003 Revista “artículo primero”, separata N° 12. Santa Cruz: CEJIS.

Coca Suárez, Paúl Antonio.

- 2009 *Conmemorando sus 29 años: La Marcha Indígena por la Constituyente y Autonomías*, en Periódico Pukara, Año 3, N° 45. 15 de septiembre al 14 de octubre de 2009.

Fundación Tierra

- 2011 *Reconfigurando territorios: reforma agraria, control territorial y gobiernos indígenas en Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra.

Henáiz, Irene y Pacheco, Diego

- 2000 *La Ley INRA en el espejo de la historia: dos siglos de reformas agrarias en Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra

MAS-IPSP

- 2006 2006-2010 Programa de gobierno: Bolivia país líder. La Paz.

Plata, Wilfredo

- 2008 *El discurso autonomista de las élites de Santa Cruz*, en Soruco, Ximena; et al. *Los barones del oriente: el poder en Santa Cruz ayer y hoy*. La Paz: Fundación Tierra.

Morales, Miguel

- 2011 *Bases para el nuevo impuesto a la propiedad agraria en Bolivia*, en

- Morales, Miguel; et al. (eds)
Hablemos de tierras: minifundio, gestión territorial, bosques e impuesto agrario en Bolivia. La Paz: Plural editores.
- Urioste, Miguel; et al.
2007 *Los nietos de la reforma agraria: tierra y comunidad en el altiplano de Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra.
- 2011 *Concentración y extranjerización de la tierra en Bolivia*. La Paz: Fundación Tierra.
- Valdivia, Gabriela
2010 *Agrarian capitalism and struggles over hegemony in the Bolivian lowlands*. Latin American perspectives, Sage

Una mirada a la institucionalidad democrática

Renata Hoffmann¹

Desde los antiguos griegos hasta el presente se dan las más diversas definiciones de democracia. Las respuestas dependen de la época, del lugar y también de la ideología. No podría ser diferente cuando nos referimos a institucionalidad democrática. De manera general, podemos afirmar que este concepto se refiere al conjunto de instituciones políticas que organizan al Estado y a la sociedad, además de las reglas y normas que definen un determinado orden social.

Viendo el tema de forma más concreta, emergen las diferencias conceptuales e ideológicas. Desde una tradición más liberal, la principal función de las instituciones democráticas sería poner frenos al poder

que se ejerce desde el Estado para garantizar la libertad de los ciudadanos. Esta concepción es criticada por aquellas corrientes ideológicas que cuestionan la universalidad de estos principios y de los valores liberales, porque ponen el énfasis en las reglas y normas particulares de cada pueblo y cultura. En concreto y en el debate actual, es un enfoque que prioriza a los derechos colectivos que rigen en las culturas indígenas y campesinas, sobre los derechos individuales que provienen de una tradición occidental que no puede desligarse de su pasado colonial.

La complejidad del debate no sólo resulta de las diferencias ideológicas y políticas. También se debe al difícil proceso de institucionalización, que debe equilibrar y armonizar entre normas sedimentadas en el tiempo y las

¹ Socióloga

innovaciones que produce cualquier dinámica social.

Estas diferencias y precisiones tienen un gran peso a la hora de evaluar la fortaleza o debilidad de las instituciones políticas, ya que encierran una valoración de la calidad de la democracia que siempre se hace desde alguna posición ideológica determinada.

Sin desconocer toda esta complejidad, nos abocaremos a una revisión breve del proceso vivido por aquellas instituciones políticas que son reconocidas por todas las fuerzas políticas del país como parte imprescindible de cualquier proceso democrático. Desde este enfoque, miremos, entonces, cómo ha sido el desempeño de algunas de las principales instituciones públicas y, por otro lado, el proceso de institucionalización de la participación social.

EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES POLÍTICAS DEL ESTADO

A lo largo de los últimos 30 años se realizaron siete elecciones nacionales de presidentes y representantes ante el Congreso (sin contar la elección de 1980 que llevó a la UDP al poder), diez elecciones municipales (desde 1995 en 327 municipios y ya no únicamente en las capitales), varias elecciones departamentales, una elección de representantes ante la Asamblea Constituyente, varios referendos y revocatorios de mandato, además de una elección última de autoridades judiciales.

Esta maratón de elecciones daría una primera imagen de un nivel de institucionalidad muy elevado, que

es esencial para la democracia. Sin embargo, cuando consideramos a las elecciones como un medio para designar autoridades representativas y lograr una estabilidad política basada en la legitimidad que otorga el voto, esta primera mirada se relativiza. Aparece una serie de debilidades, desde las instituciones del Estado y también desde la misma sociedad. Existe una inestabilidad política tan importante, en los municipios como en los departamentos e incluso en el nivel nacional, pese a que las autoridades han sido elegidas, que no se puede ocultar que la institucionalidad democrática en Bolivia aún es frágil. La falta de respeto a los períodos de los mandatos de las autoridades electas es un ejemplo de esta fragilidad que proviene tanto desde instancias del Estado y partidos políticos como de organizaciones sociales.

Las razones son múltiples y van desde la falta de respeto a la pluralidad política, pasan por el prebendalismo de organizaciones políticas y sociales, y terminan en una práctica política que valora la ritualidad de las elecciones, pero no necesariamente sus resultados.

Esta debilidad institucional se origina y también se expresa en la debilidad de los partidos políticos. Las tres décadas de democracia ininterrumpida poco o nada fortalecieron a un sistema de partidos que, al menos en la teoría clásica, debería ser la base de una democracia representativa. Más allá de las diferencias ideológicas entre los principales partidos, casi todos ellos comparten un carácter caudillista y efímero. Ejemplos de ello abundan:

Acción Democrática Nacionalista (ADN), que nace y muere con su fundador Hugo Banzer; Conciencia de Patria (Condepa), que corre la misma suerte con Carlos Palenque; Unión Cívica Solidaridad (UCS), que comparte el mismo destino con Max Fernández.

Comparativamente, fue más institucional la vida del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), que a lo largo de más de 50 años sobrevivió a sus principales fundadores y líderes, aunque su importancia actualmente sea poca. Otro sobreviviente puede considerarse al MIR, que nació en la resistencia a la dictadura de los años 70 en todas sus vertientes actuales, después de haberse fragmentado en varias corrientes y partidos.

El más exitoso de los partidos políticos de los últimos años es el Movimiento Al Socialismo, aunque se autodefina como un instrumento de los movimientos sociales y no como un partido clásico. Con los movimientos de los cocaleros, que en la defensa de su coca se volvieron experimentados luchadores “antiimperialistas; con los sindicatos agrarios del occidente, que se convencieron de la necesidad de dejar de ser meras organizaciones sociales para entrar en la lucha política con organizaciones propias; y con algunos ex dirigentes de partidos de izquierda, que abandonaron el vanguardismo obrero para volverse militantes indígenas, se fue creando un poderoso movimiento político que hizo temblar e incluso colapsar al anterior sistema de los partidos políticos tradicionales.

En las elecciones nacionales de 1997, el MAS entra al Parlamento y

en las siguientes elecciones de 2002 se vuelve la segunda fuerza política del país. La crisis económica y política de los siguientes años seguía fortaleciendo a este partido, dándole un rol determinante en la caída del presidente Sánchez de Lozada y de su sucesor Carlos Mesa.

Las elecciones presidenciales de diciembre 2005 le dieron al MAS un inédito 54% de los votos y con ello la posibilidad de gobernar con una holgada mayoría que ninguno de sus antecesores desde la reconquista de la demo-



Existe una inestabilidad política tan importante, en los municipios como en los departamentos e incluso en el nivel nacional, pese a que las autoridades han sido elegidas, que no se puede ocultar que la institucionalidad democrática en Bolivia aún es frágil”

cracia había tenido. Con esta mayoría y una nueva Constitución Política del Estado se llega finalmente a las elecciones presidenciales de diciembre de 2009, que consolidaron al MAS como fuerza hegemónica, con el 64% de los votos y dos tercios del Congreso.

El auge y la hegemonía del MAS pone fin a la larga crisis del sistema de los partidos llamados tradicionales, pero también debilita a la democracia porque la deja sin pesos y contrapesos que permitan evitar una excesiva concentración del poder en el Ejecutivo.

La actual relación de fuerzas expresa democráticamente la voluntad de la mayoría ciudadana, pero al mismo tiempo muestra también que aún estamos lejos de una democracia multipartidaria que mantenga vivo el debate ideológico y la posibilidad de elegir entre distintas visiones y propuestas de país.

En este proceso de sombras y luces tiene un lugar destacado la Corte Nacional Electoral, respectivamente el Órgano Electoral Plurinacional, como se llama desde el año 2010. Esta institución que se reconoce en la nueva Constitución Política del Estado como uno de los poderes del Estado, pasó a lo largo de los años 90 por una profunda crisis institucional. Sus máximas autoridades se volvieron tristemente célebres como “la banda de los cuatro”, a raíz de las manipulaciones electorales que produjeron, con una consecuente pérdida de legitimidad no sólo de la Corte Electoral, sino también de las propias elecciones. Esta crisis se supera en 1999, con la designación de personalidades reconocidas del país, independientes frente al Estado y a los partidos políticos.

La confiabilidad y el prestigio que este golpe de timón devolvió al poder electoral significaron un gran paso adelante en la construcción de institucionalidad democrática que hasta la fecha no desapareció, pese al cambio de autoridades y los problemas que no faltaron en los distintos procesos electorales de los últimos años. Pero aun así sería hasta ingenuo creer que estos avances se hayan institucionalizado tanto que sean definitivos e irreversi-

bles. También en este caso no está ausente el riesgo de que el Poder Ejecutivo refuerce su control sobre el poder electoral, quitándole de esta manera la independencia que demanda la ley y también la ciudadanía.

La institucionalización de los mecanismos de participación social

Bolivia es un país rico en experiencias de organización y participación social, especialmente en las áreas rurales. La persistencia de ciertas tradiciones indígenas, al igual que la poca presencia del Estado son factores que contribuyeron a la vigencia e importancia de estas organizaciones rurales.

Este hecho obtuvo un reconocimiento fundamental en los años 90, durante el primer gobierno de Sánchez Lozada. Además de una serie de ajustes económicos, como la “capitalización” de las empresas del Estado, se puso en marcha un amplio programa de reformas que tendían a la modernización del Estado. La pieza estelar de este proceso fue la Ley de Participación Popular (1994) que, curiosamente, apostaba precisamente por estas organizaciones tradicionales para impulsar una descentralización del Estado por vía de la creación de 327 municipios en todo el país.

La particularidad de este proceso no fue solamente la magnitud de la canalización de recursos públicos a favor de los gobiernos municipales, que con un 20% de los ingresos del Tesoro General de la Nación estaba muy por encima de lo que se hacía en otros países. Igualmente novedoso y significativo fue el diseño de un modelo de

participación social de gran alcance en la definición de las inversiones locales y en el control sobre éstas. La misma Ley de Participación Popular definió a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB) como representantes de la participación social, además de los comités de vigilancia compuestos por éstas. Detrás de este denominativo de OTB se entendía al conjunto de organizaciones sociales que según región y tradición tienen peso y representatividad: sindicatos campesinos y ayllus en el mundo andino; capitanías o centrales en las comunidades indígenas de tierras bajas; juntas vecinales en las ciudades y pueblos más grandes.

La experiencia en las áreas rurales fue muy distinta a la que se tuvo en las ciudades. En el campo fue mucho más importante y exitosa porque las organizaciones sociales mantenían vigencia y legitimidad, lo cual les permitió absorber y ejercer las nuevas funciones y derechos que la Ley de Participación les asignaba.

En las ciudades fue un proceso más accidentado y menos exitoso, principalmente porque las juntas vecinales no tenían la representatividad necesaria para ello. Mientras que las organizaciones campesinas e indígenas se fortalecieron y empoderaron con este proceso, adquiriendo cada vez más peso en las elecciones municipales y en el ejercicio de cargos públicos, las juntas vecinales se entramparon cada vez más en peleas políticas y prácticas clientelares, hacia arriba (frente a las autoridades municipales) como hacia abajo (en la relación con sus “bases”).

Aun con estas diferencias y difi-

cultades es indudable que la Participación Popular fue un paso hacia adelante extraordinario, en comparación a las posibilidades de participación que existían en el país anteriormente e incluso en comparación con lo que se realizó en otros países en vías de descentralización y transición democrática. Gracias al amplio reconocimiento que la Participación Popular logró en muy pocos años, no pudo ser revertida por el gobierno de Hugo Banzer (1997-2001).

La Participación Popular como

“

La actual relación de fuerzas expresa democráticamente la voluntad de la mayoría ciudadana, pero al mismo tiempo muestra también que aún estamos lejos de una democracia multipartidaria que mantenga vivo el debate ideológico y la posibilidad de elegir entre distintas visiones y propuestas de país”

parte de la institucionalidad democrática del país no ha desaparecido a lo largo de los 16 años de vigencia, pero sí ha sufrido transformaciones e incluso una pérdida relativa de importancia. Ya no es tan atractiva como fue a un inicio en el campo. Pero al mismo tiempo se debe también al hecho de que las organizaciones sociales se han politizado paulatinamente con la emergencia del “instrumento político” y el peso creciente del MAS. Los anteriores conceptos del cargo como

“servicio a la comunidad” se transformaron con esta politización. La falta de una cultura política de respeto a la diversidad y a las minorías, y la prevalencia de principios corporativos al interior de las organizaciones, inevitablemente llevaron a una conflictividad cada vez mayor en los municipios, los departamentos e incluso en el nivel nacional.

Puede verse como una paradoja que el proceso de empoderamiento por vía de la Participación Popular haya sido un factor clave para el surgimiento y la posterior hegemonía del MAS, pero que al mismo tiempo haya dado lugar a una reconcentración del poder en el Gobierno central que restringe las opciones de participación social. La situación se complica más aún con la política del MAS de “gobernar con las organizaciones sociales”. Puede ser el inicio de otra paradoja: que la politización de las organizaciones sociales termine en su debilitamiento y desprestigio, ya que sus dirigentes se vuelven cada vez más funcionales (e incluso funcionarios) del poder estatal central.

Esta politización de organizaciones sociales del campo no es tan nueva como a primera vista parece. Ha sido parte del esquema político del partido que encabezó la Revolución Nacional, e incluso ha funcionado con el pacto militar-campesino de la dictadura de Barrientos en los

años 60. Pero también las organizaciones sociales urbanas, agrupadas en torno a la Central Obrera Boliviana (COB), vivieron un proceso similar de politización al reemplazar a los partidos en la lucha contra las dictaduras y por la democracia; aunque posteriormente no tuvieron la capacidad de adecuarse a las normas y condiciones de la democracia, siendo protagonistas de la crisis política durante el gobierno de la UDP (1982 – 1985). No se trata de hacer simples analogías, pero las lecciones de la historia deben ser tomadas en cuenta (“para que las tragedias de la historia no se repitan como comedias”, como decía Karl Marx).

Esta reflexión no pretende desmerecer o subestimar la importancia de la participación ciudadana. Es parte imprescindible de un proceso de democratización que va más allá de un mero ejercicio del voto, más aún en un país como el nuestro, en el cual es débil la representatividad de los partidos políticos e incluso de las principales instituciones políticas. El desafío es por tanto que se encuentre un equilibrio adecuado entre formas de democracia representativa y de democracia directa, y que ambas formas sean complementarias e institucionalizadas para evitar que se imponga el poder del más fuerte en lugar del consenso democrático entre los distintos sectores y visiones.

Cultura ciudadana a los 30 años de la recuperación democrática

Marlene Choque Aldana¹

Los 30 años de la democracia en Bolivia son una ocasión propicia para examinar lo que “estamos siendo” desde que el doctor Hernán Siles asumió la presidencia, en octubre de 1982. Es una oportunidad para hacer memoria. Ya que no tiene la limitación diacrónica de la historia —para la cual las cosas se “suceden” una después de otra—, la memoria permite revivir simultáneamente hechos correspondientes a varios momentos diferentes.

Podemos evocar el absurdo de los golpes de Estado y la sentencia contra García Meza, la Marcha por la Vida y la “guerra del estaño”, los octubres negros, la “guerra del agua” y el 11 de enero, el 11 de septiembre y el 22 de enero; lugares como Huanchaca, Villa Tunari, Pananti, Maragua, Charina, Amayapampa o la calle Ab-

dón Saavedra; la marcha indígena de 1990, los cabildos autonomistas; apellidos como Lechín, Flores, Barrios de Chungara, Picachuri, Vildoso, Banzer, Sánchez de Lozada, Palenque o Mesa; la hiperinflación y la nacionalización de los hidrocarburos; la imagen del doctor Siles anunciando su huelga de hambre, Evo Morales promulgando la Constitución o Víctor Paz afirmando: “Bolivia se nos muere”.

Pero es inevitable mirar también “en orden”; el ángel de la historia continúa arrastrado hacia adelante por las fuerzas del progreso (algunos preferirían: las fuerzas del proceso). Así debemos reconocer a quienes aportaron en ese momento e hicieron el camino que los bolivianos estamos caminando. Continuamos sus pasos. Desde esta perspectiva, una de las constataciones inconfutables de octubre es que los 30 años son un logro de los bolivianos

¹ Investigadora de ciudadanía, socióloga y comunicadora

(durante el gobierno de Hernán Siles se connotaba la precariedad de la democracia con la expresión “coyuntura democrática”). Contra los pronósticos, nos fuimos acostumbrando a la normalidad de los procesos electorales y los gobiernos civiles, al debate parlamentario y mediático, elementos que constituyen logros en sí mismos.

Pese a que no se disipó completamente el estigma de la inestabilidad política que nuestra agitada política nos granjeó, estamos en el período más largo de gobiernos elegidos de nuestra historia. Entre 1982 y 2012 tuvimos la



Contra los pronósticos, nos fuimos acostumbrando a la normalidad de los procesos electorales y los gobiernos civiles, al debate parlamentario y mediático, elementos que constituyen logros en sí mismos”

misma cantidad de cambios de gobierno que en el período denso de la transición, entre 1978 y 1982. Varios factores confluyeron en este logro. No los examinaremos exhaustivamente. No tomaremos en cuenta la explicación racional-estratégica, para la cual, en el fondo, la democracia habría sido y sería conveniente —frente a otras opciones “disponibles”— para los eventuales actores estratégicos, ni apelaremos a factores estructurales de la política (o de la eco-

nomía). Las instituciones (la estructura de la política) cambiaron en estos 30 años. Probablemente no garantizan una adecuada distribución del poder considerando nuestras diversidades y falta de equidad, pero fueron exitosas las veces que estuvimos en aporías (o “al borde del abismo”), ya que siempre permitieron encontrar salidas reconocidas como constitucionales, y aun las organizaciones políticas, deslegitimadas, cumplieron las “exigencias mínimas” para no afectar irreversiblemente la democracia. Más allá de las estrategias y las instituciones, es necesario examinar la cultura política. La llamada cultura ciudadana es también reconocida como un factor insoslayable de la estabilidad y consolidación de las democracias. Nos ocuparemos brevemente de ella. Es pertinente hacer un rodeo por uno de los rasgos fundamentales de la democracia.

LA CULTURA CIUDADANA Y LA PARTICIPACIÓN EN DOS POLÍTICAS

Una de las características de la democracia es su necesidad de cambio. No podemos tener una definición “eterna” de democracia porque podría usarse para justificar regímenes no democráticos. Más allá del principio de soberanía popular (subordinado en muchos regímenes al principio liberal de vigencia de los derechos individuales) o algunos adjetivos *ad hoc*, no es posible clausurar o fijar el significado de la democracia.²

² Suelen reconocerse ciertos valores y mecanismos como eminentemente democráticos: igualdad, participación, pluralidad, tolerancia, interculturalidad, transparencia, legitimidad, accountability, capacidad de respuesta gubernamental, competencia justa, autorreflexión, representación.

Durante estos 30 años, los cambios afectaron la estructura del Estado (la Ley Orgánica de Municipalidades restableció en 1985 la autonomía municipal; la Ley de Participación Popular municipalizó el país; la Constitución actual estableció cuatro niveles autonómicos), la relación entre los representantes y los electores (desde 1997 hay diputaciones de circunscripción uninominal), las organizaciones políticas (desde 2004 los partidos no gozan del “monopolio” de la gestión política), las cuotas de género (hay paridad y alternancia en todas las circunscripciones), el carácter representativo de la democracia (hay democracia directa, participativa y comunitaria). Pasamos de los problemas asociados con la democracia pactada (la exclusión práctica de los “otros” o su incorporación solamente simbólica, la conversión de “la política que importa” en feudo de los políticos) a una opción todavía en construcción, que debería ser capaz de superar las exclusiones (de las mujeres, las regiones o los pueblos indígenas). La democracia intercultural postulada en las leyes electorales actuales aspira precisamente a armonizar la diversidad de prácticas (reconocidas o no como democráticas) de la diversidad de comunidades políticas en el país.³

Esta característica se enlaza con la idea de cultura ciudadana. La cultura ciudadana (usaremos también la

expresión cultura cívica, más común en otros idiomas) se asocia con la prevalencia de predisposiciones y condiciones democráticas para la participación política (actitudes, opiniones, valores, orientaciones), que aportaría a la consolidación de la democracia si su relación con actitudes o valores no democráticos es estable y está “domesticada” por la democracia. En otras palabras, la democracia convive con valores no democráticos y cualquier consideración de la “cultura ciudadana” debe considerar la posible existencia de “cultura no ciudadana”.

La cultura cívica es clave en las valoraciones externas que se hacen de nuestra democracia. Por ejemplo, el último informe de la Economist Intelligence Unit da a Bolivia un puntaje de 5,84 sobre 10 en su *Democracy Index*, lo cual define su clasificación como régimen híbrido y no como democracia. El factor al que se debe ese bajo puntaje es la cultura política (3,75).⁴

No es pertinente suscribir estas apreciaciones sin examinar algunos factores básicos de la política boliviana desde otros puntos de vista. Varios autores reconocen que en Bolivia la política se da en dos vertientes que se pueden desbordar mutuamente: la política institucional y la llamada “política en las calles”. Así, nos referiremos a dos formas de la par-

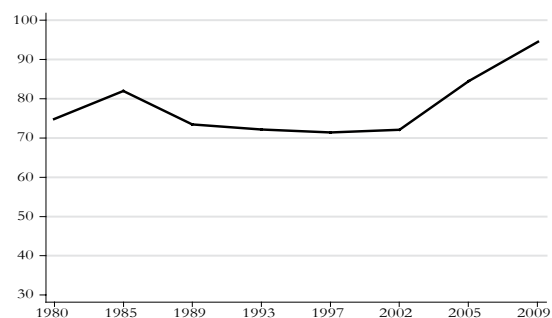
3 Un punto clave en la conceptualización de la democracia intercultural es admitir que no existe un solo criterio de la democracia y que, además, es posible que también se articulen prácticas no democráticas. Más allá, ninguna democracia está libre de injusticias o exclusiones; la democracia no deja de ser una forma de gobierno imperfecta como otras (es “la peor a excepción de todas las demás”, según el aforismo de Winston Churchill). A diferencia de esas otras, la democracia aspira a procesar las injusticias y superarlas; es reflexiva en el sentido en que se reevalúa y se modifica constantemente.

4 Otros índices evalúan a Bolivia de diferente manera. El Proyecto Polity IV (2010) califica el régimen boliviano como democrático, con un puntaje de 7 sobre 10. FreedomHouse afirma que Bolivia es “parcialmente libre”. El Puntaje Unificado de Democracia, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (que combina datos de Polity IV, FreedomHouse y el grupo de autores conocido como PACL, entre otros) presenta información de Bolivia desde 1946; en 1982 la media era 0,51; en 2008, 0,56 sobre 10.

ticipación política: la participación electoral y la participación en protestas. La participación política suele ser definida como las acciones que emprenden los ciudadanos para influir en la toma de decisiones en el Gobierno, en el diseño de las políticas o en la selección de los encargados de hacer las políticas.⁵ Junto al voto y las protestas, otras formas de participación son el cabildeo y el involucramiento en las campañas de las organizaciones políticas,⁶ que no examinaremos en este texto.

La participación electoral revela el apego de la ciudadanía a la institucionalidad. Expresa simultáneamente la voluntad de los electores y también su apoyo a las reglas del juego. Más allá del carácter obligatorio del voto, Bolivia tiene uno de los electorados más participativos del continente. Tal como se observa en el gráfico 1 (que considera elecciones generales), desde las elecciones de 1980 el porcentaje de votantes fue muy elevado.

Gráfico 1. Participación en elecciones generales (1980-2009)



Elaboración propia con base en datos del OEP.

El aumento de la participación en 2005 es posterior a la implementación del padrón electoral depurado. En todo caso, el respaldo ciudadano es indudable. Tras ocho procesos, es significativo el hecho de que el probable desencanto con los políticos no se haya traducido en un desencanto con la democracia.

En relación con la política institucional, se admite en general que la confianza de los ciudadanos en las instituciones (su legitimidad) contribuye a la estabilidad de la democracia (las cadenas causales no siempre se explicitan pero es posible afirmar que mientras más confianza hay en las instituciones, más saludable será la democracia). Las encuestas que se realizan desde 1998 en el marco del Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública en América Latina, LAPOP,⁷ muestran que los partidos políticos son las instituciones que menos confianza despiertan en la ciudadanía. Adicionalmente, se observan también disminuciones en los valores de varias instituciones los años de crisis política (2000, 2004) y aumentos notables a partir de 2006, coincidentes con una probable apertura y expectativa favorable frente al proceso liderado por el presidente Evo Morales. Las disminuciones entre 2010 y 2012 son también importantes. Otra disminución en general

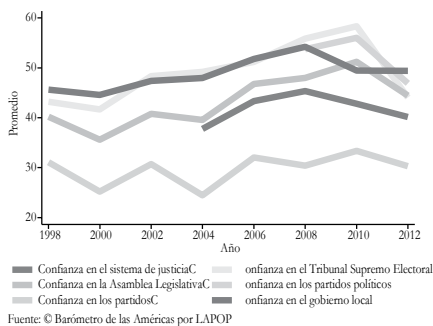
5 Samuel P. Huntington y J.M. Nelson, *No Easy Choice*, Cambridge, Ma., Harvard University Press, 1976, p. 3. Sidney Verba, K.L. Schlozman y H.E. Brady, *Voice and Equality*, Cambridge, Ma., Harvard University Press, 1995, p. 38.

6 Cf. W.L. Miller, *Political participation and voting behaviour*, en M. Hawkesworth y P. Kogan (comps.), *Encyclopedia of Government and Politics*, Londres, Routledge, 2002.

7 En Bolivia LAPOP está a cargo de Ciudadanía, Comunidad de Estudios Sociales y Acción Pública.

se observa en la satisfacción con la democracia y en el apoyo a la democracia. De hecho, Bolivia es el país latinoamericano en el que más cayó el apoyo a la democracia entre estos dos años (8,5%, superado solamente por el 9,9% de Honduras).

Gráfico 2. Confianza en las instituciones (1998-2012)



También disminuyó en el último período la tolerancia política. Las encuestas revelaron que Bolivia era uno de los países latinoamericanos con menor tolerancia (el respeto de los derechos de quienes piensan diferente de uno). Aunque en 2012 no está entre los tres países menos tolerantes, como en los años anteriores, su puntaje de 44,4 sobre 100 en índice de tolerancia

dista del 72,6 de los Estados Unidos y no está lejos del 36,6 de Honduras.⁸

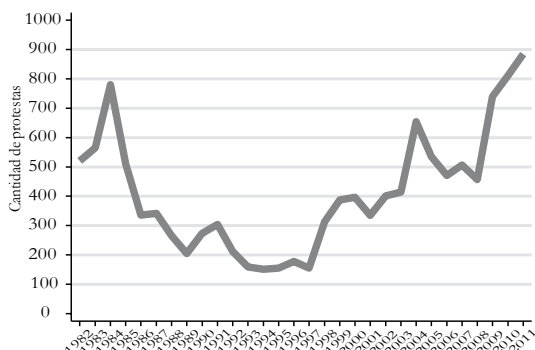
Pensando en la “otra” política, solemos afirmar que constituimos la sociedad más movilizadora del continente. Los bolivianos somos los que más participamos en protestas. A excepción de 2010 (año de inauguración del Estado Plurinacional y de la clausura de la profunda polarización política que enmarcó el proceso constituyente), las encuestas de LAPOP encuentran que la proporción de ciudadanos participantes en protestas es la mayor de América Latina (17,7% en 2012, más que el 11,4% de 2010 y menos que el 29,3% de 2008).

Si se cuantifican las protestas (sin considerar sus diferentes magnitudes) a lo largo de los 30 años, se observa que el período de la democracia pactada, especialmente el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, fue el lapso con menos agitación de todo el período democrático. Los viejos sujetos sociales (los obreros y campesinos, los que lucharon por la democracia) habían perdido vigencia; los nuevos (los que se crearon con la democratización)⁹ todavía no se habían fortalecido.

8 Cf. Vivian Schwarz-Blum, *Legitimidad política y tolerancia en Bolivia*, en D. Moreno (comp.), *Cultura política de la democracia en Bolivia y en las Américas*, 2012. *Hacia la igualdad de oportunidades*, Cochabamba, LAPOP-Ciudadanía. La tolerancia alta o baja y el apoyo al sistema alto o bajo se usan para armar una tipología que comprende: democracia estable, estabilidad autoritaria, democracia inestable y democracia en riesgo.

9 Desde 1982 se fundaron varias organizaciones: la CIDOB, nacida como Central Indígena del Oriente Boliviano, en 1982; la Asamblea del Pueblo Guaraní, APG, en 1987; La Central de Pueblos Indígenas del Beni, CPIB, en 1989; la Central Indígena de la Región Amazónica de Bolivia, CIRABO, en 1991; el Comité de Coordinación de las Federaciones de Cocaceros, en 1992; el Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz, Cofecay, y la Central de Pueblos Étnicos de Santa Cruz, CPESC, en 1994; el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, Conamaq, en 1997.

Gráfico 3. Cantidad de protestas (1982-2011)



Fuente: Base de datos de Conflictos sociales en Bolivia.

Desde la marcha de los mineros, de 1986, y las autocrucifixiones de principios de 1990, las protestas se hicieron más sacrificadas y “llamativas” (enterrarse, “tapiarse”, coserse los labios, escribir mensajes con sangre) y se difundieron por todos los sectores sociales. Los movimientos sociales de la actualidad son una criatura de la democracia y de la posibilidad de organización que brinda la democracia, así como de la incapacidad de la democracia pactada para reconocer sujetos y procesar demandas. También son progenitores del proceso actual y de la revitalización del principio de soberanía popular.

PALABRAS FINALES

No es posible profundizar el examen de la cultura ciudadana o las dos políticas en la brevedad forzosa de este texto. Sin embargo, es pertinente reafirmar ciertas constataciones. Las tres décadas son un triunfo del pueblo boliviano (que no es el mismo pueblo de 1982), el apoyo electoral a la democracia no disminuyó y eso atenúa los riesgos de una democracia excluyente. Seguimos siendo una sociedad participativa, lo cual plantea exigencias para cualquier gobierno y entraña el reverso de una posible manipulación (populista o no) de las movilizaciones sociales.

Pero esto no garantiza la estabilidad, crecimiento o democratización de la democracia: valores como la tolerancia todavía no son parte del núcleo de la política. Por otra parte, en los últimos años disminuyó el apoyo de los bolivianos a la democracia como régimen. En fin, los 30 años no son un punto de llegada. Son un punto en el camino para reafirmar el compromiso colectivo de seguir profundizando la democracia y continuar construyendo una sociedad más incluyente.

De la crisis de la política a la crisis de los medios

Isabel Mercado¹

Hace más de 50 años se pensaba y se discutía sobre el poder de los medios. Para muchos representaban un cuarto poder o un poder complementario a los tres tradicionales del Estado liberal, con una función definida en lo factual. Particularmente, prefiero ver a los medios como un contrapoder, como el peso específico —al otro lado de la balanza— que posibilita un equilibrio en la sociedad; el equilibrio de la democracia, el que hace posible la convivencia y las libertades. Esto quiere decir que es impensable una democracia, plena y libre, sin medios que ejerciten la libertad de expresión como una condición esencial del ser humano. Y en este contexto, los medios actúan, con sus excesos, aciertos y roles en la sociedad, como una respuesta a los excesos, aciertos y roles de los poderes formales.

De ahí que las consideraciones maniqueístas en este campo parecen innecesarias: los medios son parte de la democracia y representan a la sociedad de la que emergen y para la cual actúan. El que actúen bien o mal es cuestión de enfoques, de visiones subjetivas que más tienen que ver con lo que se desea que con lo que se tiene. Los medios son lo que son y en democracia es mejor con ellos, así como son, que sin ellos o con ellos amordazados, autocensurados o manipulados.

Evaluar su tránsito en estos 30 años de democracia es mucho y también muy poco. Transitamos por una democracia en construcción —siempre está en construcción— con contradicciones, debilidades, avances y desafíos de los que no están ajenos los medios. ¿Cómo se puede valorar o evaluar el papel desempeñado por los medios de comunicación en Bolivia en el período

¹ Periodista. Columnista de Página Siete. Comunicadora del Programa de Apoyo a la Democracia Municipal (PADEM).

democrático más significativo de su vida republicana?

La respuesta a esta interrogante, como en cualquier diagnóstico de comunicación política, no es única ni irrefutable. Lo que sí resulta indiscutible es que los medios de comunicación han tenido mucho que ver en el devenir del proceso democrático boliviano, tanto como escenario del debate público, cuanto como protagonistas y actores de éste. Que no se dude: vivimos tiempos de democracia mediática.

Una afirmación como ésta puede caer en el terreno de lo obvio si, como considera Giovanni Sartori, medios y política son dos caras de una misma moneda². Por ello, analizar la función de los medios de comunicación en la democracia boliviana implica otros desafíos: o aceptamos que tenemos los medios de comunicación —y lo que ellos producen— que merecemos, como consecuencia natural de un proceso de acumulación de aciertos y desaciertos de la propia democracia boliviana; o, por el contrario, los condenamos como entidades extrañas a nuestra sociedad y les endilgamos la responsabilidad de la confrontación y la ingobernabilidad.

USO Y/O ABUSO DE LOS MEDIOS EN DEMOCRACIA

En *MediaMorfosis: comunicación política*

*e in/gobernabilidad en democracia*³, José Luis Exeni sostiene que o somos mediófilos o somos mediófobos. Es decir, o leemos la realidad (y la historia reciente) desde la lógica de la tiranía de los medios de comunicación sobre la política o lo hacemos desde una visión que resalta las bondades de esta relación.

La historia boliviana del periodismo es rica en ejemplos y experiencias de cuánto influyeron los medios de comunicación, especialmente la radio y la prensa, en la lucha contra la opresión de las dictaduras y la conquista de la democracia. Desde el rol desempeñado heroicamente por las radios mineras hasta la militancia de los medios impresos en su defensa, los medios de comunicación tuvieron una posición de compromiso democrático determinante.

Desde una lectura mediófila, a este papel protagónico de los medios en lo político le siguió —acompañando además al boom de la Sociedad de la Información y el *homo videns*⁴— el surgimiento de la televisión privada que reconfiguró el escenario mediático nacional e incrementó la pluralidad de medios y, por tanto, las posibilidades de acceso a la información de amplios sectores de la población.

A pesar de las restricciones normativas vigentes desde el inicio de la década de los 60, a inicios de los años

2 Sartori, Giovanni *Videopolítica: Medios, información y democracia de sondeo*. Fondo de Cultura Económica de España, S.L. México. 2003. Pag. 83.

3 Exeni, José Luis *MediaMorfosis: Comunicación política e in/gobernabilidad en democracia*. Ediciones Fado, Plural Editores. La Paz, Bolivia. 2005. Pag. 24.

4 En 1997, el politólogo italiano Giovanni Sartori levantó polémica al presentar una cruda visión de lo que llamo *videopaideia* (la formación de niños mediante la televisión), en su obra *Homo Videns. La sociedad teledirigida*. Según ésta, los medios electrónicos de comunicación, en especial la televisión, han generado una suerte de mutación genética en el hombre; la visión del mundo, de la política y la democracia se ha empobrecido por la subinformación y la desinformación que proporciona la televisión.

80 surgieron varias estaciones de televisión privadas y con esto se ampliaron las posibilidades de las audiencias que estaban sujetas a una única opción —la estatal/gubernamental— en cuanto a televisión. Este fenómeno de diversificación de la oferta mediática dio lugar a la aparición de una multiplicidad de posiciones políticas desde los medios, que pusieron a prueba la tan mentada libertad de expresión. Cabe recordar en este acápite el intento de clausura que sufrió Radio y Televisión Popular (RTP) durante el último gobierno de Paz Estenssoro y los resultados nefastos de este accionar a partir del rotundo rechazo popular, lo que sentó el precedente de que los gobiernos no pueden ni deben limitar el funcionamiento de los medios.

En resumen, si de uso se trata, esta mirada se inclina a apreciar el hecho que, a través de los medios de comunicación, se hiciera posible no sólo la reinstauración de la democracia, sino la llegada de la “modernidad” expresada a través de múltiples opciones de elección de medios y la democratización de su uso y acceso.

Veamos el otro lado de la moneda. La óptica mediófoba advierte que, una vez reconquistada la democracia, los medios perdieron la brújula del compromiso social y, con la llegada de la televisión comercial, se subieron al carro de la defensa de los intereses de los grupos empresariales.

A finales de los 80, los medios se multiplicaron notablemente con

relación a los años precedentes a la recuperación de la democracia. El surgimiento de numerosas estaciones de televisión respondió, como es de suponer, a una lógica empresarial y de mercado. Claro está que, subyacente a este propósito, también están los intereses empresariales que no pocas veces se situaron en las cercanías del poder para usufructuar y pactar con él.

En este contexto y de acuerdo con las numerosas coyunturas que enfrentó el proceso democrático, el país presenció una pugna permanente entre el



La óptica mediófoba advierte que, una vez reconquistada la democracia, los medios perdieron la brújula del compromiso social y, con la llegada de la televisión comercial, se subieron al carro de la defensa de los intereses de los grupos empresariales”.

poder mediático y el poder político. Esta disputa, que ignoró casi por completo a las poblaciones ubicadas fuera del radio de acción de los medios, dejó también innumerables dudas acerca de la calidad y veracidad de la información difundida.

Sartori asegura que “la democracia no requiere de sabios ni de un público cultivado, sino de gente suficientemente informada, de gente que tenga

5 Sartori, Giovanni *Videopolítica: Medios, información y democracia de sondeo*. Fondo de Cultura Económica de España, S.L. México. 2003. Pag. 44.

alguna idea de lo que está sucediendo²⁵, y en este plano los medios de comunicación en Bolivia cumplieron un papel importante: informaron, pero también desinformaron y subinformaron; dieron lugar a una pluralidad de opciones, pero no cuidaron aspectos primordiales de su accionar como lo es el entender que la información es un bien público.

Al participar los medios en el proceso de informar, intervienen también en la formación de la opinión pública y para que ésta, como dice Sartori, sea la entidad encargada de difundir la opinión de la gente sobre los asuntos referentes a la administración del Estado, el interés público, el bien común y los temas colectivos, debe existir una actitud democrática comprometida con la ciudadanía y este rol no ha sido enteramente satisfecho desde los medios.

En estos años de democracia queda claro que el país ganó en la pluralidad —si ésta se juzga por la cantidad de medios— y en la libertad con la que éstos funcionaron. No obstante, los medios operaron junto a un conjunto de limitaciones y falencias —intencionales y circunstanciales— que minaron su desempeño y contaminaron su credibilidad.

PEQUEÑOS Y GRANDES MOMENTOS DEL PERIODISMO

En octubre de 1982, cuando el país recobró la democracia, en medio de la algarabía, pocos estaban conscientes de que en el país agonizaba una etapa histórica, no sólo en el plano económico y político, sino también

en el cultural. La era de la globalización comenzaba.

Entre 1984 y 1985 comenzaron a irrumpir los primeros medios privados de televisión. Poco importó la norma que estipulaba el monopolio de la televisión para el Estado. Apareció Illimani de Comunicaciones, con Raúl Garáfulic a la cabeza, y Telesistema Boliviano, con Carlos Cardona. Casi un año después, Víctor Paz Estenssoro dictó el famoso Decreto 21060, que terminó de sepultar una época que creía en la economía, política e información dirigidas desde el Estado. Así comenzó la historia del liberalismo democrático y de sus medios de comunicación: es el reinado de la aldea global de Mac Luhan.

Al parecer, esta nueva realidad tampoco fue del todo comprendida o aceptada por el gobierno de Paz Estenssoro. El intento de cierre del RTP, los excesos de este medio y la resolución del problema ya dieron, en ese momento, la pauta de lo que vendría.

En poco tiempo, los canales de televisión se reproducen y con ellos, las estaciones de radio. Es entonces que el libre mercado actúa. La pugna por la información se hace cada vez más furibunda. Los periódicos se acomodan a la nueva coyuntura y ya no sólo compiten entre ellos, sino también con la televisión que les gana la primicia. Pero donde la competencia se convierte en una lucha sin cuartel es en la pantalla chica: los noticieros se convierten en verdaderos antropófagos, devoran noticias, gente, dignidades, políticos, gobernantes, verdades y mentiras. Nada los detiene.

La primera Marcha por el Territorio y la Dignidad, en 1990, es motivo de grandes despliegues. Cada medio quiere demostrar a su audiencia sus capacidades y seducir con titulares de primera mano. Los más poderosos cubren la caminata en su totalidad.

Mientras tanto, los medios comienzan a explorar nuevos actores políticos y Evo Morales aparece como una alternativa noticiosa cautivante, especialmente por su actitud irreverente frente al poder.

Sobreviene el juicio a los magistrados de la Corte Suprema. El proceso contra Edgar Oblitas se convierte en un show mediático, lo mismo que sería, más tarde, el caso de los narcovínculos. A los *mass media* bolivianos no les importa si los políticos los usan o si son ellos los que utilizan a los políticos; en el vértigo sólo parece interesante la primicia y el espectáculo para armar noticieros atractivos, vendedores y capaces de captar audiencias. Fue en esos años que el llamado “tiburón de los medios”, Raúl Garáfulic Gutiérrez, sostuvo que para ser empresario de medios se precisa de ambición para ser el “primero en los ratings.”

En 1993 llegó la capitalización y la privatización de las empresas públicas. A pesar de que el gobierno de Sánchez de Lozada era poderoso, Garáfulic se le puso al frente. La enemistad entre el entonces Presidente y el empresario mediático no fue un secreto. ¿Por qué se enfrentaron? Tal vez porque el gobernante no toleraba la crítica o porque, según algunos, el empresario deseaba comprar ENTEL y otras empresas que el Estado quería privatizar.

Cuatro años después, Carlos Palenque, figura de los medios de esos tiempos, gurú de la televisión popular y propietario de RTP, murió de un infarto. Fue un hombre que supo seducir a las multitudes con un discurso persuasivo, que captaba las demandas, ansiedades y necesidades de los marginados; para algunos politólogos, fue quien contuvo la bomba de tiempo que ya significaba El Alto. Llegó a disputar la Presidencia con buenas posibilidades, aunque se decía que no podría remontar la Cordillera Oriental.

Poco antes de su muerte, su esposa, Mónica Medina, venció en las elecciones municipales paceñas y con ella llegaron los tiempos de hombres y mujeres que surgieron de los medios y dieron el brinco al otro lado de la vereda para insertarse en el mundo de la política. Cristina Corrales, Rodolfo Gálvez y Lupe Andrade, en una primera etapa; Carlos Mesa y María Renée Duchén más tarde, y recientemente Iván Canelas y Ninoska Lazarte, entre otros.

En el gobierno de Hugo Banzer, los medios prueban su capacidad y se enfrentan de manera clara y directa con el poder. El escándalo que protagonizaron Wálter Guiteras, entonces ministro de la Presidencia, y Garáfulic dejó claro que el poder político poco podía hacer ya frente a un medio.

Casi paralelamente surge la crisis del año 2000 en Argentina y los medios tienen mucho que ver en el tema. ¿Qué responsabilidad tienen en la caída de De la Rúa? Es un tema controversial, aunque, en todo caso, se observa nítidamente la irreverencia de

los medios y la falta de autoridad y crisis moral de los gobiernos democráticos en la América Latina de entonces.

Por aquellos años explotó en Cochabamba la “guerra del agua”. Al margen de las diversas implicaciones políticas de este acontecimiento, sin duda fue una advertencia de la gente que se había cansado de ser ignorada por los gobernantes que había elegido.

En las elecciones de 2002, el marketing político demostró lo que la comunicación puede hacer para que un candidato gane: así venció Sánchez de

“

En octubre de 1982, cuando el país recobró la democracia, en medio de la algarabía, pocos estaban conscientes de que en el país agonizaba una etapa histórica, no sólo en el plano económico y político, sino también en el cultural. La era de la globalización comenzaba”

Lozada, a la fuerza y con una poco ética estrategia comunicacional.

En esa contienda, los medios hicieron lo que durante casi todo el período democrático habían evitado u ocultado: tomaron partido. PAT se inclinó por Sánchez de Lozada y Mesa, mientras que la Red Uno lo hizo por Reyes Villa y Kuljis. En la historia del periodismo contemporáneo en Bolivia, este tipo de situaciones sólo se había dado cuando La Razón, conducida por Jorge Canelas, decidió apoyar abiertamente la candidatura de

Ronald MacLean a la Alcaldía paceña en las elecciones municipales de 1991. Como respuesta a esa decisión, varios periodistas de ese medio renunciaron. No hubo una respuesta similar en el caso de las elecciones de 2002.

En febrero de 2003, una “guerra” entre policías y militares librada en plena plaza Murillo fue transmitida en vivo por los canales de televisión que, siete meses después, relataron con detalle la crisis de octubre y la renuncia de Sánchez de Lozada. Junto a este episodio se registraron las primeras agresiones a medios y periodistas en democracia. Queda la duda si estas reacciones fueron espontáneas o respondieron a directivas de organizaciones sociales reacias a la crítica o bien que trataron de ocultar su identidad frente a las cámaras inquisidoras y reveladoras de los canales de televisión.

En junio de 2005 se derrumbó también el gobierno de Carlos Mesa. ¿Cómo actuaron los medios? Quizá ésta es la única vez en la historia del periodismo boliviano en la que un par de canales de televisión jugaron, abiertamente, un rol antidemocrático, casi subversivo. Unitel y varios medios con sede en Santa Cruz exaltaron los ánimos, promovieron la violencia y dividieron al país.

A partir de enero de 2006 la historia es diferente. El surgimiento de otra élite gobernante, que pugna por el poder y que se resiste a la fiscalización de los medios, ha reconfigurado el tablero.

Son tiempos en los que se redefine la estructura de los medios estatales, que habían intentado tímidamente

avanzar hacia lo público durante el gobierno de Carlos Mesa. Con el nuevo esquema se opta, sin miramientos, por un uso gubernamental del canal estatal, la agencia de noticias ABI y la red Patria Nueva, que además del alcance de la ex radio estatal Illimani, se alía con otras estaciones y entrega equipos de transmisión a organizaciones sociales (las llamadas radios originarias) para amplificar su alcance.

Es también en este período que se produce la venta de los medios del Grupo Prisa en Bolivia. La muerte del dueño del imperio mediático español, Jesús Polanco, coincide con la del propietario del más importante grupo multimedia del país, Raúl Garáfulic. Prisa opta por deshacerse de sus medios deficitarios y vende, primero, el diario El Nuevo Día de Santa Cruz y luego, en una operación más dificultosa y discreta, la red de televisión ATB y el diario La Razón, el más influyente del país hasta entonces (2008).

En 2007, Carlos Mesa y sus socios venden PAT a un empresario cruceño de origen libanés. Abdalá Daher no logra retener el canal y tras cinco años de una infructuosa gestión y fuertes inversiones, decide vender nuevamente el medio.

Obedeciendo a una tendencia que se ha convertido en norma en algunos países como Argentina, Ecuador y Venezuela, la estrategia expansiva de los medios estatales o “comprometidos” con el proyecto político del Gobierno fue creciendo.

En enero de 2009 aparece el periódico Cambio, específicamente de información gubernamental, que

complementa la visión informativa de Bolivia TV, ABI y la Red Patria Nueva.

A pesar de las dificultades en que se encontraba el ejercicio del periodismo por las confrontaciones con el poder político y como resultado de una crisis de audiencia que se vivía en todo el mundo con el boom de las nuevas tecnologías y las redes sociales, surge el periódico Página Siete, en abril de 2010. El medio es de propiedad de un grupo empresario del cual es parte fundamental Raúl Garáfulic (hijo).

Aunque con un rezago apreciable respecto al resto del planeta, los medios digitales empiezan a tener presencia en el país. Todos los periódicos ponen en línea sus ediciones diarias y algunos instalan específicamente un portal digital que es actualizado varias veces al día. También condimentan la escena mediática, las redes sociales y recientemente el Twitter (posteo), que cambió la historia de la política en países como EEUU y que en Bolivia, sin llegar a ser masivo, ha demostrado su capacidad de movilizar y generar un debate del que, por lo tenso de la relación con el poder político, está ausente gran parte de los medios.

LA “MADRE DE LAS BATALLAS”

El giro en la relación medios/ política, o medios/Estado, no se circunscribió a la aparición o fortalecimiento de medios estatales que neutralicen la influencia de los privados, también se expresó en una pulseta permanente con el gremio, con los periodistas. Además de varios episodios de en-

frentamiento y agresividad, las autoridades del gobierno de Morales fueron explícitas en demostrar su escasa simpatía con la prensa.

Si bien las promulgaciones de las leyes Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación y del Régimen Electoral provocaron la reacción de medios y periodistas que salieron a las calles a expresar su rechazo e indignación por los contenidos de ambas normas, se prevé que el momento que se intente abrogar la Ley de Imprenta de 1929 —considerada por los periodistas como un patrimonio que garantiza la libertad de expresión— se librá lo que se considera la batalla final, que será también el corolario de una tensa y áspera relación entre medios y Estado...

Es innegable que los medios, en los primeros 25 años de democracia, actuaron con irreverencia, que fueron contestarios, desestabilizadores y excesivamente comerciales. También lo es que emergieron y se consolidaron en un momento de debilidad estatal porque, también hay que decirlo, de lo contrario difícilmente los sucesi-

vos gobiernos hubieran “soltado” el monopolio de la información vertical. Recordemos que existía una ley que prohibía la televisión privada.

De manera que para evaluar sin juzgar a los medios, es necesario entenderlos, comprender su esencia, sus ritmos, sus fortalezas y debilidades. Porque desde la teoría, desde el deber ser, se lanzan furiosas miradas y condenas que no hacen otra cosa que debilitar la legitimidad de un actor fundamental de la democracia, que hace posible no solamente el derecho ciudadano a la información, sino el imprescindible debate público sin el que la democracia se diluye.

Lo importante, en democracia, es su contribución y su aporte a mantener los equilibrios y en esto coincido con la corriente norteamericana del *watching dog* (perro guardián). Efectivamente, si los medios no existiesen, ¿puede alguien imaginarse la cantidad de abusos y delitos políticos que hubiesen quedado en la impunidad? Creo en una posición más realista que moralista —no simplemente moral— o, finalmente, políticamente correcta.

30 años a puerta abierta

Martín Zelaya Sánchez¹

“El universalismo atosiga”, señala Manuel Vargas. “La cultura cambió para bien, los artistas ahora están más preparados, aunque no tienen tanto compromiso”, piensa Luis Rico.

“En nuestro país, entremezclado de diversidades, nos cuesta salir del concepto amplio de cultura”, comenta Marcos Loayza. “No creo en el arte por el arte, esa actitud es tan política como el mal llamado arte comprometido”, sentencia Édgar Arandía.

¿Cómo y en qué cambió —si es que lo hizo— la manera de concebir y de hacer arte en Bolivia desde que el 10 de octubre de 1982 se consolidó la democracia? ¿En qué medida influye en el creador la coyuntura social y política?

Más allá del contexto inmediato, ¿cuánto afectó en la creación artística nacional el advenimiento de la socie-

dad de la información, la omnipresencia que brinda internet, las infinitas posibilidades que se abrieron con el desarrollo de la tecnología?

Puestos en el desafío de reflexionar en torno a la cultura y el arte de Bolivia en el período democrático que acaba de cumplir 30 años, nos enfrentamos a una lluvia de posibilidades, áreas y objetivos tan vastos e inabarcables que, para trazar un recuento analítico sucinto y completo a la vez, proponemos un acercamiento cronológico y temático a partir de las gestiones de Gobierno sólo como marco referencial y, paralelamente, un seguimiento coyuntural al desenvolvimiento de los actores de las áreas artísticas más comunes en producción y consumo: literatura, cine, música y artes plásticas.

Señala el literato Cleverth Cárdenas: “Los cambios en la forma del Estado, la tecnología y la liberación de la censura,

¹ Periodista, jefe de Informaciones del diario Página Siete

sin duda transformaron las cosas. (...) Se afecta la temática por varios lados porque ya no hay una coyuntura contra la cual reaccionar (como durante la dictadura), entonces no podemos hablar de un antes o un después de la democracia, sino de una coyuntura que no fue tematizada como otras”².

¿Será que 30 años son muy pocos para una reflexión en perspectiva? ¿Será que ya pasó un tiempo suficiente como para concluir que la democracia boliviana moderna no significa un momento particularmente prolífico como temática, fuente u objeto de/ para la creación artística, como tal vez lo fueron otros períodos clave como la Guerra del Chaco (en libros capitales como *El Pozo*, de Augusto Céspedes, o *Aluvión de fuego* de Óscar Cerruto, o los boleros de caballería y más de un puñado de canciones) o la misma dictadura y el consecuente exilio?

CRONOLOGÍA

1982- 1985

Cuenta el cantautor tupiceño Luis Rico: “Volví del exilio en noviembre de 1982 trayendo valiosas experiencias antropológicas, etnomusicológicas y de gestión cultural de México. Le expuse al vicepresidente (Jaime Paz Zamora) un plan para replicarlas en Bolivia y la respuesta fue que ‘para hacer algo, la militancia es obligatoria’”.

“Entonces volví a las andadas musicales contestatarias y todo mi recorrido artístico desde entonces me ayuda a concluir que, hasta el año 2003, se desarrolló en Bolivia una democracia pactada y corrupta, y nada cambió para los trabajadores del arte y la cultura”.

Aunque por mucho tiempo fue casi imposible de asimilar en su verdadera magnitud, la transformación que Bolivia y los bolivianos empezaron a experimentar el 10 de octubre de 1982, fue trascendental.

Más allá de la crisis económica extrema, la hiperinflación y la inestabilidad política rayaban en lo estrambótico (pagos y cobranzas con billetes cargados en saquillos, un presidente, Hernán Siles Zuazo, ora en huelga de hambre, otrora secuestrado...), la liberación del régimen dictatorial permitió ingresar de lleno en la posmodernidad³ que Europa y EEUU habían abierto hacia ya varios años y que el resto de América Latina también asimilaba poco a poco, víctima en gran parte de idénticos regímenes.

Vale decir: de escuchar *La caraqueña*, de Nilo Soruco, sólo en guitarreadas o en casetes clandestinos, la juventud empezó ver en la televisión los videoclips de Michael Jackson que, por cierto, fue uno de los grandes pioneros de este género con *Thriller* (1982).

2 *El paso de la literatura por la dictadura boliviana*, por Martín Zelaya, artículo publicado el 7 de octubre de 2007 en el suplemento cultural Fondo Negro del periódico La Prensa.

3 *Guía de la posmodernidad* de Andreas Huyssen. “El surgimiento de la cultura posmoderna se debió a las nuevas tecnologías que se apoyan en el lenguaje: los medios de comunicación y la cultura de la imagen. Las tecnologías comunicativas han producido una sociedad de la información”.

Fueron años difíciles, transitorios en los que como Oswaldo Guayasamín en Ecuador, Wálter Solón Romero y Miguel Alandía Pantoja, con sus murales y cuadros, continuaron en Bolivia alertando, fiscalizando y denunciando la fragilidad del estado de derecho y el constante peligro de la regresión fatal.

Sobre este punto, compartamos un testimonio de Édgar Arandia: “Fui censurado durante la dictadura de Banzer por una obra que hacía referencia a los militares representados como lobos...me imaginé los mirmidones, unos enanos con cascos nazis cabalgando sobre perros rabiosos. El dibujo era el arma de expresión más expedita, era como un poema en el rostro, era de urgencia y emergencia”.

No hay punto de comparación con lo que sucede ahora, por eso muchos artistas —sólo para llamar la atención— quieren hacer su pequeño escandaleta para figurar, pero vaciados de contenido, sólo para llamar la atención. Es el camino más corto a los 15 minutos de fama que preanunció Andy Warhol.

1985- 1989

Reflexiona el cineasta Marcos Loayza: “En general nunca hubo políticas de Estado hacia la cultura; los ministros de Hacienda han sido siempre los que menos valoraron y los que más recortaron presupuesto, como si no pudieran ver que —por ejemplo— Roma es una de las ciudades más visitadas del mundo y de las que más divisas recibe por su arquitectura, por sus esculturas, y no por los discursos políticos que dejaron los emperadores del Imperio Romano”.

“En democracia las cosas no cambiaron mucho, aunque la libertad y el libre albedrío nos permitirán siempre hacer florecer más cosas”.

A partir sobre todo del crucial Decreto 21060, que cambió radicalmente la matriz político-económica del país, el último gobierno de Víctor Paz Estenssoro debe entenderse como una gestión parte aguas.

En lo artístico, tras años de andar “con el testamento bajo el brazo”, los bolivianos se acordaron de reír: el tea-



La liberación del régimen dictatorial permitió ingresar de lleno en la posmodernidad que Europa y EEUU habían abierto hacía ya varios años y que el resto de América Latina también asimilaba poco a poco, víctima en gran parte de idénticos regímenes”

tro de café concert innovó el escenario de las artes escénicas de la mano de Peter Travesí y Dennis Lacunza, que desde Tralalá no sólo echaron mano de la sátira política —poco antes causante de detención o exilio, cuando no tortura y muerte— sino que fueron precursores del hasta entonces inexistente teatro de variedad.

Por lo demás, éste fue el período clave para la canción social de la mano de Luis Rico, Savia Nueva (aquella memorable *Los mineros volveremos*) y otros trovadores que comprendieron que su función social, aunque diferente, no ha-

bía dejado de ser necesaria para acompañar a la sociedad en días difíciles de escasez, inestabilidad e ingreso al feroz mundo del neoliberalismo.

En estos años surgieron además obras capitales en diferentes áreas, prueba de que la creatividad suelta alas de la mano de la libertad. En 1987 Wolfango Montes publicó *Jonás y la ballena rosada*, novela innovadora que retrata los albores de la Santa Cruz metrópoli, del narcotráfico como fenómeno social y de la consolidación de nuevas élites sociales y regionales dominantes.

En 1989, Jorge Sanjinés estrenó *La nación clandestina*, obra capital del maestro del cine boliviano que va a caballo entre el recuerdo aún fresco de las dictaduras, la todavía iniciática pero ya irreversible migración campo-ciudad y el desarraigo que conllevó este paso de la Bolivia provinciana a la Bolivia de las urbes diversas y confrontadas.

Cierra el capítulo un suceso esencial para todo el planeta: la caída del muro de Berlín, símbolo inequívoco del inicio de la globalización que selló el destino intercultural del planeta en la recta final del siglo XX.

1989-1993

Dice Arandía: “Por muchos años la democracia fue endeble, cooptada por las élites. Y el mundo de la cultura no fue más que una reproducción de los valores occidentales sin ningún aporte, es decir que, como dice Juan Achá, ‘las grandes potencias se engulleron a los países del tercer mundo’”.

Durante la presidencia de Jaime Paz Zamora, por primera vez se rescató un elemento esencial de la cultura andina boliviana y se lo reivindicó ante el mundo: la coca y el acullicu.

Así, varios nuevos conceptos y visiones de sociedad y cultura más inclusivos empezaron a gestarse, aunque aún muy incipientemente, de la mano de la reflexión que despertó —en 1992— la conmemoración de los 500 años del “reencuentro de dos mundos”.

Superada ya definitivamente la etapa de gobiernos de facto, el arte se vio por fin desligada de condicionamientos y ataduras.

“¿Compromiso social y político? En verdad —sostiene el narrador Manuel Vargas— éstos ya son términos con olor a pujusó, como dicen mis paisanos orientales. O digamos simplistas. Uno no puede dejar de tener un compromiso, pero consigo mismo, con su obra. Y lo político y social viene por añadidura, porque estamos en el mundo y no podemos sustraernos de él, nos guste o no, nos interese o no”.

“Existimos en el mundo. Todo nos determina: las estupideces de los poderosos, la sonrisa de las muchachas, la ausencia de compromiso, la bondad de los animales y de las plantas... No puedo sustraerme, cuando escribo, de cuanto me rodea y me sostiene”.

1993- 1997

“Intuimos que la libertad, la tecnología, los procesos políticos, el contexto cultural nacional e internacional, la migración cada vez más frecuente tienen que haber influido en la litera-

tura, en el arte... en sus temáticas y estéticas”, comentaba Cárdenas en junio de 2009 cuando junto a otros académicos iniciaba la investigación *Literatura y democracia* (1983-2009).

“Probablemente la búsqueda de una expresión nueva y acorde a estos tiempos es algo que caracteriza a los escritores emergentes”, agregaba⁴.

De la mano de la capitalización —ícono del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada— y de la Participación Popular que dio pie al municipalismo (1994), el individualismo y el existencialismo contemporáneos y acordes cronológicamente a las tendencias internacionales (sociedad de consumo), cambiaron los vientos en las temáticas y motivaciones de los creadores.

La renovación vino de la mano, entre 1995 y 1996, del llamado boom del cine nacional con películas como *Cuestión de fe*, *Jonás* y *la ballena rosada* y *Para recibir el canto de los pájaros*; salvando esta última cinta de Sanjinés, las dos primeras quebraron la tácita y casi inquebrantable regla de que el cine debía reflejar un compromiso de resistencia social y política.

Otro ejemplo es la organización, en 1996, de la primera Feria Internacional del Libro de La Paz, desde entonces y hasta hoy el mayor evento literario del país, y una inmejorable oportunidad —hasta entonces inexistente— de mostrar títulos y autores nacionales al resto del mundo.

1997-2001

Según el novelista Ramón Rocha Monroy, “los jóvenes, los que crecieron en democracia, exploran temas nuevos sobre la sociedad de la información, internet, las tecnologías digitales...compartiendo una literatura ante todo ácida, desengañada y común a una humanidad globalizada cuyos problemas a ratos son los mismos acá que en Corea o Bielorrusia”.

“Descubrimos que en democracia existen temas vitales, eternos: el amor, la muerte, la vida, el goce, el erotismo, el humor... la hiperestesia de la vida cotidiana”⁵.

A la par de la consolidación en Bolivia de los servicios de internet y de la telefonía móvil —y sus consecuentes influencias en la cotidianidad de las nuevas generaciones—, el planeta asistió un hecho crucial, una inflexión histórica que para muchos teóricos marcará un cambio de era, como lo fue la caída del imperio romano o la Revolución Industrial: el atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001.

En casa, mientras tanto, en medio del debate que provocó la elección democrática del ex dictador Hugo Banzer, se generaban nuevas ventanas artístico-culturales de proyección internacional: la consolidación de Edmundo Paz Soldán, hasta hoy uno de los escritores bolivianos contemporáneos más conocidos tras las fronteras, e insignia de la corriente literaria que niega, y para muchos reniega, la larga y

⁴ *Especialistas rastrean la influencia de la democracia en la literatura boliviana*, por Martín Zelaya, artículo publicado el 3 de junio de 2009 en el suplemento cultural Fondo Negro del periódico La Prensa.

⁵ *Ibid* 1

hasta perniciosa tradición de literatura social y política boliviana.

Otro ejemplo es la creación del Festival Internacional de Teatro de La Paz (FITAZ), que supo posicionarse rápidamente como uno de los principales eventos dramáticos de la región, y permitió, años después, el florecimiento de la nueva dramaturgia boliviana y la cada vez más palpable profesionalización del teatro.

2001- 2005

Para Manuel Vargas, “todo tiempo pasado fue mejor. Ahora me sien-

“

Fueron años difíciles, transitorios en los que como Oswaldo Guayasamín en Ecuador, Wálter Solón Romero y Miguel Alandia Pantoja, con sus murales y cuadros, continuaron en Bolivia alertando, fiscalizando y denunciando la fragilidad del estado de derecho y el constante peligro de la regresión fatal”

to un poco fuera de lugar, más fuera de lugar que de costumbre, porque las modas y el universalismo y el comercio literario nos atosigan más que antes. Tengo que cumplir mi función de viejo en defensa de lo que me hizo vivir y me hará morir con gusto y contento”.

Quizás esta reflexión nostálgica-irónica sea pertinente para describir este período, una vez más, de transición; esta vez hacia una nueva

manera de entender y concebir la democracia.

La “guerra del gas”, fenómeno social que signó —políticamente hablando— el inicio del nuevo siglo en Bolivia, no tiene aún un libro, película o canción emblema (hay que destacar la novela *Octubre negro* de Adolfo Cáceres Romero), pero no obstante, las nuevas formas de ver la realidad que se expresaron en ésta y otras muestras de rebeldía y hastío, dieron pie también a novedades en el área de la creación estética.

Poco antes, pero ya en este contexto, las artes plásticas bolivianas aterrizan por fin en el tercer milenio. La organización del primer Salón Internacional del Arte (SIART) pone de manifiesto que la tecnología y las nuevas tendencias son cada vez más determinantes: videoinstalaciones, arte digital, técnicas híbridas, performances mixtas, etc.

Y ni qué decir del Festival Internacional de la Historieta Viñetas con Altura, cuya primera versión, en 2002, marca no sólo la apertura hacia un campo antes marginado y hasta negado, sino además la democratización de nuevos espacios de mayor oportunidad para los trabajadores del arte en diversos niveles y como miembros a pleno derecho de la población económicamente activa.

Pero si entre tanto “salto” se necesitaba un cable a tierra para evitar dejar de lado la raigambre, en 2001 y 2003, la Unesco declaró al Carnaval de Oruro y a la cosmovisión kallawayá, respectivamente, como obras maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad, reconocimiento vi-

tal, reivindicativo de la riqueza cultural nativa, ancestral boliviana.

2006- 2012

Luis Rico admite: “Desde mi punto de vista particular, antimilitante partidario, de formación izquierdista con ingrediente anarquista, creo que a partir de 2006 estamos viviendo una democracia participativa en la que los actores están en las calles, en las vigiliadas, bloqueando las carreteras, marchando y haciendo escuchar sus derechos, mientras estamos buscando gaviones y puntales para sostener la teta que nos dio el pan de cada día durante 500 años: los recursos naturales, la Madre Tierra”.

Entre los conciertos de Inti Illimani y Piero y el magistral discurso de Eduardo Galeano en la plaza de San Francisco, el 22 de enero de 2006 (día de la posesión de Evo Morales como presidente) y el boom —en los dos últimos años— de conciertos de músicos internacionales de talla, o la convocatoria al Premio Plurinacional Eduardo Abaroa que desde este año destina más de dos millones de bolivianos anuales a reconocer a las mejores producciones culturales y artísticas, hubo mucha tela por cortar.

Tanto apologistas como detractores del llamado “proceso de cambio” deberán admitir que las oportunidades se multiplicaron: la coyuntura político-económica —expectativa por el inédito Gobierno encabezado por un indígena y la inmejorable bonanza financiera gracias a los precios de los recursos naturales— abrió paso a la llegada

EL CONTINENTE LATINOAMERICANO HOY ALZA SU VOZ EN UN CANTO SOLIDARIO POR LA SEQUIA EN BOLIVIA.

LOS ARTISTAS SILVIO RODRIGUEZ, PABLO MILANES Y VICENTE FELIU DE "LA NUEVA TROVA" CUBANA, VOLUNTARIAMENTE OFRECEN SU MUSICA A LOS BOLIVIANOS QUE HOY CONFRONTAN LA TERRIBLE SEQUIA QUE AZOTA AL PAIS.

COB, CUB, CESB, IBC, HAM Y DEFENSA CIVIL

Presentan:



LA NUEVA TROVA CUBANA
Silvio Rodríguez---Vicente Feliú---Pablo Milanés
...y Artistas Nacionales

EL PROGRAMA QUE SE DESARROLLARA JUNTO A ARTISTAS NACIONALES SERA UN VERDADERO ACTO DE HERMANDAD Y AMOR HACIA NUESTRO PUEBLO. (ASISTE!)

CALENDARIO DE PRESENTACIONES

SANTA CRUZ:	MARTES 24
COCHABAMBA:	MIÉRCOLES 25
ORURO:	JUEVES 26
SIGLO XX:	VIERNES 27
LA PAZ:	DOMINGO 28

de intelectuales de renombre mundial interesados por nuestra actualidad (Antonio Negri, Michael Hardt, Ernesto Cardenal, Slavok Zizeck, Boaventura Souza,) y más que nunca la creación nacional fue mostrada en diferentes palestras: folklore, arte indígena, textiles, etc. en infinidad de cumbres, encuentros y citas de organismos internacionales.

Y para rematar, la democratización digital dio paso a una oleada —de ambigua valía— de producciones audiovisuales: es tan fácil y barato producir que si bien muchos buenos cineastas tienen una gran herramienta, no pocos escasamente dotados pierden la oportunidad de ahorrar esfuerzos y ahorrar al espectador valiosos minutos.

CONCLUSIÓN

Los 30 años de democracia coinciden con la apertura hacia nuevas tecnologías y, por consiguiente, la ampliación de las posibilidades, canales, medios y recursos muchas veces bien aprovechados por los creadores, de manera individual, más aún no en colectividad, a nivel país, Estado, comunidad.

Todo avance aislado, por muy grande y prometedor que sea, no podrá consolidar, ayudar a crear un todo sólido sin un mecanismo que lo enhebre con iniciativas similares.

Nadie resta mérito a grandes logros como el reconocimiento internacional de escritores, cineastas, pintores, cantautores..., la cada vez mayor visualización turística de las riquezas naturales y culturales, o la revalorización de la cosmovisión indígena, etc.,

por eso más que nunca —en tiempos como este en que la toma de acciones inmediatas es esencial— urge arrojar de una vez por todas medidas de sistematización que sirvan de base, impulso y promoción.

Sea desde la institucionalidad o la legislación. ¿Cómo esperar logros literarios o en el séptimo arte sin siquiera contar con un marco básico como las eternamente postergadas leyes del libro y el cine? ¿Cómo garantizar la preservación y difusión de nuestro rico patrimonio histórico cultural sin una normatividad idónea?

Las puertas —como se vio— se abrieron como nunca en los 30 últimos años, pero aún falta el empujón final y decisivo para que las artes, las culturas bolivianas entren con ambos pies en el siglo XXI, con todo lo que ello implica.

Los actores en primer plano

Capítulo

6

Presidentes de la República. Cada uno, a su manera, en su momento y con un talante propio, ha escrito las páginas de este período histórico.

Y así como detrás de cada retazo de historia se esconden sus protagonistas, detrás de cada protagonista se oculta un ser humano. Seis ex presidentes. Un presidente en ejercicio. Un militar en el génesis, un indígena en el epílogo... en el medio, hombres que leen el país desde su propia perspectiva, y, por ello mismo, ayudan a configurar lo que vivimos hoy.

Guido Vildozo

“Yo busqué redimir a las Fuerzas Armadas”

ALCIDES FLORES MONCADA

El general Guido Vildozo Calderón no tenía que ser presidente. No tenía que ser el sucesor de Celso Torrelio en 1982. Tampoco buscó serlo. Además, no le correspondía. Y él lo sabía. Quien sí debía ocupar el cargo era el general Natalio Morales. De hecho, a fines de febrero o principios de marzo de ese año, Morales ya había sido nombrado para sustituir a Torrelio. La decisión estaba tomada.

Pero el destino cambió. Quizá fue el giro que el país necesitaba para salir definitivamente del fango donde las dictaduras lo habían sumido en los últimos 18 años.

Era la época en que los militares manejaban el país de mano en mano. Sus manos. Por turnos. Por las buenas o por las malas. Era como su hacienda, adonde ingresaban pateando puertas —según su humor y su grado de embriaguez de poder— y con el fusil en alto. Actuaban como si nunca tendrían que rendir cuen-



FOTO: OPINIÓN

PERFIL

El general retirado Guido Vildozo Calderón nació en La Paz el 5 de abril de 1937. Estudió en el Colegio Militar del Ejército. Amplió sus estudios en EEUU, Panamá y Brasil. Fue comandante de la Escuela de Comando y Estado Mayor, comandante de la VII División del Ejército, jefe del Estado Mayor del Ejército. Su última función pública fue la de Presidente.

Vive en Cochabamba desde enero de 1983, tres meses después de entregar el poder a Hernán Siles Zuazo, luego de ser enviado a la reserva activa a los 45 años.

tas. De hecho, sólo algunos lo hicieron. Era la época en que había que andar “con el testamento bajo el brazo”.

“Luis Arce Gómez (dueño de esa frase) era mi compañero de curso. Eso que dijo fue muy personal. Era su carácter. Era su temperamento”, justifica el general Vildoso, presidente de Bolivia por 78 días, el último militar que se sentó en la silla presidencial.

En los últimos cuatro años de dictaduras, entre el derrocamiento de

“

El presidente Celso Torrelío anunció que dejaría el poder. Incluso dijo que estaba enfermo. Entonces, correspondía que el presidente sea Natalio Morales, por ser el general más antiguo, porque así lo establecen los reglamentos de las Fuerzas Armadas. Eso se decidió entre febrero y marzo de 1982”.

Banzer (1978) y la ascensión de Hernán Siles Zuazo al poder (1982), hubo ocho presidentes: Juan Pereda Asbún, David Padilla Arancibia, Wálter Guevara Arce, Alberto Natusch Busch, Lydia Gueiler Tejada, Luis García Meza, Celso Torrelío y Guido Vildoso. En promedio, un presidente cada medio año. Las frecuentes revueltas armadas mostraban a una institución desbandada y corroída por la división interna, pero con una infinita avidez de poder en común.

El último de los militares en llegar a Palacio fue Guido Vildoso, nombra-

do por su institución para suceder a Celso Torrelío, quien decidió renunciar por voluntad propia. Esta vez el general Vildoso —un lector frecuente de la Biblia— quiso dar un paso diferente y para probar su determinación, arrancó compromisos “vitales” de sus camaradas antes de aceptar el cargo. Quizá esa actitud hizo que su paso por Palacio no haya sido un accidente de camino.

Tras casi dos décadas de gobernar la nación, las Fuerzas Armadas estaban inmersas en un profundo desgaste institucional marcado por la división interna y la corrupción. La crisis económica galopaba y tenían enfrente cada vez más revueltas sociales que no daban señales de bajar los brazos en su lucha por libertades y democracia. No había tregua.

Entre los militares había quienes pretendían perpetuar el sistema. Su sistema. Otros buscaban dar paso a la democracia. Finalmente ganaron estos últimos, entre los que estaba Vildoso. Pero éste quiso jugar un rol histórico. Quiso hacer algo diferente. Quiso ser el último militar en el poder, y entonces diseñó una estrategia basada en dos pilares: Dios y sus camaradas.

El general Vildoso —de estatura mediana y al que aparentemente sólo afecta una leve pérdida de audición en el oído izquierdo— aún goza de la satisfacción de haber logrado lo que se propuso antes de asumir el mando: que todos los militares estén de acuerdo con su nombramiento, consenso que fue tomado por él como un compromiso de su institución para dar por finalizado el ciclo de dictaduras.

“Para esas Fuerzas Armadas que están por encima de los hombres... pido a Dios, nuestro Señor, que haga de ellas y todos sus integrantes un instrumento de paz”. Ésta frase de hace 30 años tiene un porqué. Vildoso la expresó ante el Congreso Nacional el día en que traspasó el mando de la nación a Hernán Siles Zuazo, el 10 de octubre de 1982. En ese momento, cuando el país cerraba un ciclo de 18 años de gobiernos de facto, ese pedido a Dios era una exhortación a sus camaradas a cambiar de actitud y un intento de marcarles la senda por donde en adelante debían transitar.

P. “... Un instrumento de paz”. ¿San Francisco de Asís tuvo algo que ver con esa frase?

R. Sí, así es. Además, a los 30 años de la democracia puedo mencionar que la elección del día 10 de octubre no fue una fecha casual. El 10 de octubre es el día de la reconciliación, reconocida incluso por la Biblia. También quiero en estos momentos, a los 30 años de la democracia, que este 10 de octubre sea un día de reconciliación.

Yo elegí el día 10 precisamente para que no haya desmanes, ni la transición se tornara violenta. Recordemos, por ejemplo, que en el discurso que dio el doctor Siles al pueblo en los balcones del Palacio, la gente rechiflaba: “Vildoso al calabozo”, pero no lo decían por una relación con mi apellido (rima), sino porque existía una tendencia radical en algunos grupos para que se tomaran represalias precisamente contra quienes habíamos dirigido los destinos del país hasta ese momento”.

Antes de aceptar la Presidencia, Vildoso estaba consciente de que después de él la democracia podría no estar asegurada. Anteriormente, algunos intentos habían fracasado, como el del general David Padilla, que derrocó a Pereda Asbún. Padilla había llamado a elecciones en julio de 1979 y como ninguno de los candidatos obtuvo la mayoría absoluta, el Congreso eligió a Wálter Guevara Arze como primer mandatario. Sin embargo, cuando éste no había cumplido ni tres meses en el poder, fue derrocado por Alberto Natusch Busch, que dirigió el país por 17 días. El círculo vicioso se repetía.

P. ¿Usted temió que en algún momento la democracia nuevamente fuera interrumpida?

R. No, porque previamente hice una consulta institucional. Una “consulta previa”. Yo busqué que en mi entorno y en las FFAA no hubiera una sola persona en desacuerdo conmigo. Yo les dije: “Si ha de haber un solo comandante de División que no esté de acuerdo con mi nominación, yo renuncio. Yo voy a ocupar la Presidencia si hay un consenso institucional”. Y lo hubo.

Yo quise asegurarme de que ninguna de las grandes unidades de los distritos navales, de los distritos de las Fuerzas Armadas, estuvieran disconformes. Yo buscaba unidad institucional. Ésa fue la condición que puse para ser Presidente. Y todos me apoyaron. Todos. Así que ya no estaba preocupado por un golpe de Estado ni por un derrocamiento interno. Apetitos personales siempre han existido en las FFAA.

P. A usted lo nombraron para un año de gestión, pero duró menos de tres meses.

R. Por mucho tiempo pensé en si debía o no completar el año de gobierno, llamar a elecciones y hacer que gane Siles con más ventaja. Pero en ese año los conflictos y las desavenencias sociales no permitían a ningún presidente permanecer un año en el gobierno. Había muchos peligros. La situación económica del país era terrible. Nadie apoyó el plan económico que presenté, el que posteriormente fue utilizado por Víctor Paz Estenssoro.

P. ¿Qué hubiese pasado si usted no habría buscado consenso para su nombramiento?

R. Se hubiese llegado a una democracia, pero con un alto costo social para el país. Hubiera habido más derramamiento de sangre, porque probablemente íbamos a desencadenar en una guerra interna, en una guerra civil. Era consciente de esa situación. La democracia no estaba garantizada.

P. En 1982 eligió el 10 de octubre para dar el paso a la democracia. Dijo que esa fecha no fue casual. La eligió para pedir reconciliación. ¿Quería un borrón y cuenta nueva?

R. No, porque después hubo purgas, situaciones muy tristes para las FFAA.

P. ¿Cuáles situaciones?

R. Por ejemplo, quien tenía la misión de purgar las Fuerzas Armadas no era el elemento adecuado. Hubo muchas situaciones de venganza dentro de la institu-

“

El Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada emitieron un decreto el 19 de julio de 1982 por el que se me nombraba sucesor de Celso Torrelio. Antes de asumir el mando, busqué el mayor consenso en la institución”.



ción armada. Ése fue el primer pago que hizo la democracia contra la institución.

P. ¿Usted estaba en el grupo de los que fueron purgados de la institución?

R. Así es. Me mandaron a la reserva activa.

P. ¿Por qué a usted?

R. Porque vieron en mí un fantasma. Vieron que les perjudicaría en sus aspiraciones porque yo podía ocu-

par aún muchos cargos. Tenían celos. Además, también yo destaqué en lo político.

P. ¿Quiénes más fueron purgados y con qué argumentos?

R. Muchos valores, con el pretexto de que fueron seguidores de Banzer, Padilla, García Meza.

P. ¿Al hablar de reconciliación



también estaba pidiendo hacer las paces entre ustedes?

R. Yo pedí una reconciliación nacional. Pedí que los apetitos de las tendencias políticas se pudieran dejar para construir un país. Pedí la reconciliación para que no se mire al militar como a un enemigo o a alguien que está en contra de la población civil.

P. Pero había motivos para pensar así.

R. Yo reconocí y reconozco que

hubo muchos errores.

P. También mucha corrupción.

R. Hubo, pero le voy a decir una verdad: menos de lo que ha habido en los gobiernos constitucionales.

P. ¿Reconciliación significaba también un pedido para que se perdona a la institución castrense?

R. En lugar de haber estado un año en el gobierno y haber acortado mi mandato a tres meses, lo que buscaba era una reconciliación, una reivindicación institucional. Yo lo que buscaba era redimir a las Fuerzas Armadas por algunos errores que se habrían cometido.

P. ¿Que “se habrían cometido”?

R. Que se cometieron. El que no hace nada, no comete errores.

P. ¿Y este pedido también se refería a no hacer juicios, como el que inició Marcelo Quiroga Santa Cruz contra Banzer?

R. No precisamente, pero sí era un llamado a un encuentro nacional, en el que no nos miremos como antagonistas, sino —por el contrario— nos abracemos y todos juntos volvamos a construir un verdadero país.

P. En ese discurso dijo que las Fuerzas Armadas “están por encima de los hombres”. Eso podría interpretarse como una justificación de todo lo que su institución hizo durante casi dos décadas, con cientos de muertos, desaparecidos, detenidos, torturados y exiliados.

R. En realidad se ha hecho un mal

uso de las armas, porque también las crisis del país han sido críticas. Particularmente la falta de civismo en la población ha desatado períodos complicados y había que poner orden. Entonces ahí yo justifico la presencia de las Fuerzas Armadas en los períodos anteriores. Tuvieron que usar las armas, aunque éstas no debieron ser para reprimir a la población, porque las armas tienen otro fin: la defensa nacional.

P. ¿Las Fuerzas Armadas están “por encima de los hombres”?

R. Las Fuerzas Armadas no son

“

El 19 de julio, Natalio Morales rechazó ser presidente porque no quería el manoseo de la Fuerza Aérea. Entendí que ese manoseo provendría de los políticos, de tantas fuerzas de oposición que había en ese momento”.

un grupo selectivo, sino son parte del país, que por vocación, por aspiración, asumen la carrera de las armas para dedicarse a la defensa del territorio nacional. Son parte de la población.

P. ¿Eran necesarias las dictaduras?

R. Han existido situaciones engorrosas para el país, situaciones tristes. Entonces, la institución armada era la llamada a preservar el orden interno del país; preservar la seguridad, la tranquilidad, la paz social. Indudable-

mente estos interinatos, algunos con acciones muy buenas, no pueden ser descalificados.

Podemos hacer una valoración para ver quiénes han sido buenos y quiénes han jugado un rol negativo. Pero también yo podría identificar a personas civiles que han estado en el gobierno sin hacer nada.

P. ¿Qué opina del Plan Cóndor? En los hechos, una organización criminal.

R. No puedo justificar eso, particularmente en el caso de Bolivia. Pero la situación ha sido mucho más crítica en otros países, como Argentina y Chile. Pero en el caso nuestro no daba lugar a una aplicación de ese plan. Desconozco de dónde viene esa denominación de “Plan Cóndor” y la inclusión de nuestro país en ese sistema. Eso de que el gobierno del general Banzer haya sido parte Plan Cóndor, lo desconozco. No puedo yo asegurar esa situación.

P. Pero Bolivia formó parte de ese plan.

R. No. Bolivia no fue parte del Plan Cóndor. Lo digo enfáticamente.

P. ¿Cómo ve usted el rol de las Fuerzas Armadas en la actualidad?

R. Las Fuerzas Armadas, hasta este momento, han cumplido a plenitud sus funciones. Su compromiso ha sido el sostén de la democracia. Veo con mucha pena por ejemplo que ex autoridades del Alto Mando, hoy en día, estén presas.

P. ¿A quiénes se refiere?

R. El caso de las ex autoridades militares que están cumpliendo condenas en Sucre por el caso octubre negro. Ellos sólo han cumplido órdenes, y las órdenes han venido de los más altos niveles del poder gubernamental, pasando por el ministerio que se encarga de las Fuerzas Armadas.

Estas ex autoridades no deberían estar en la cárcel, porque no son culpables, como no lo son los de los mandos que han estado en acciones de combate, porque sólo cumplían órdenes. Indudablemente fueron órdenes mal dadas, porque jamás de los jamases se puede ordenar que las Fuerzas Armadas se estrellen contra una población sin armas. Por lo tanto, éstas son las cosas que a mí me chocan.

P. ¿Luis García Meza debía estar en la cárcel?

R. Fue la decisión de un tribunal judicial y ha llegado a una sentencia. Imagino que ha sido para sentar precedente futuro para las FFAA.

P. Después de 30 años, ¿cómo está la democracia hoy?

R. Durante este tiempo han tenido que suceder una serie de eventos, desde la época del doctor Siles hasta el actual gobierno. Ahora la democracia es mucho más amplia. Ya no es la democracia representativa que yo conocí. Ahora veo una democracia directa, amplificada, participativa. Se ha incorporado una serie de cambios, muchos de ellos en los órganos Ejecutivo y Legislativo.

A bocajarro

El Che Guevara

Un héroe ideológico para su ideología

La guerrilla de Teoponte

Una aberración para el país

La Escuela de las Américas de EEUU

Tiene matices muy buenos, pero que han sido utilizados de manera tergiversada.

Luis García Meza

Un hombre sincero

Luis Arce Gómez

Un compañero de curso

Hitler

Fascista

Evo Morales

Un buen presidente

Álvaro García Linera

Un intelectual contemporáneo

La Iglesia Católica

Disminuida

Dios

El más grande. El ser supremo

La familia

Lo más grande que se debe cuidar

La ciudad de La Paz

Un centro convulsionado

Cochabamba

Un centro aglutinador

P. ¿Usted considera que estamos en una mejor democracia?

R. Yo considero que falta educación en nuestra población. Por ejemplo, la ley establece que a partir de los 18 años uno puede ejercer el derecho a elegir y a ser elegido. Pero a esa edad, la gente muy difícilmente va a estar preparada para integrar, por decir, un órgano deliberante. La democracia debe implicar ampliar la educación para lograr mayor eficiencia.

A nivel de la Asamblea Legislativa Plurinacional, tenemos muchos rostros que representan lo que es el país, lo que es Bolivia, pero no todos ellos conocen la Constitución, el funcionamiento de una Cámara de Diputados;

no todos ellos son conocedores de las leyes, de toda la normativa del país. Hay que poner énfasis en la formación.

P. ¿Por qué dentro de la institución militar es difícil saber dónde está el cuerpo de Marcelo Quiroga Santa Cruz?

R. No obstante de que yo he ocupado la jefatura del Estado Mayor, nunca me enteré de dónde estaba el cuerpo de Quiroga Santa Cruz. Debe haber algún círculo que lo sabe. La institución es hermética, no olvide eso.

P. ¿Cree que se llegue a saber?

R. Todo se sabe en la vida.

Jaime Paz Zamora

“Elegimos lo menos dañino para el país”

RODRIGO AYALA BLUSKE

En un primer momento de la entrevista, le pregunto a Jaime Paz Zamora sobre las connotaciones de su primer apellido (me estoy refiriendo a la importancia política, sobre todo en relación a su tío, Víctor Paz Estenssoro). Sin embargo, inmediatamente le imprime un nuevo giro a la conversación y comienza a hablar sobre el significado ideológico de la palabra “paz” y sobre cómo hace ya muchos años en Patacamaya, cuando era candidato a vicepresidente, vio borradas las primeras y últimas letras de su segundo apellido y a partir de entonces empezó a firmar documentos y decretos como “Paz Amor”.

Desde ahí la conversación deriva al instante en que le señaló a una chica tucumana que su apellido común lleva dentro la palabra “amor” y en cómo ésta le hizo caer en cuenta que si se leía al revés se convertía en “Aromaz”. Algo parecido a lo que le ocurrió al llegar a Bélgica, cuando fue a estudiar y una funcionaria le pregun-



PERFIL

Nació en Cochabamba el 15 de abril de 1939. En 1977 creó, junto a Siles Zuazo, la Unidad Democrática y Popular (UDP). Fue dos veces candidato a la Vicepresidencia por este frente. Fue elegido Vicepresidente por el Congreso en 1982. Cuatro veces candidato con el MIR hasta que fue elegido Presidente de la República por el Congreso en 1989, después de haber obtenido el tercer lugar en la elección. Gobernó entre 1989 y 1993, apoyado por la coalición ADN – MIR.

tó su nombre, él respondió “Jaime”, y ella le hizo caer en cuenta sobre el parecido con la expresión francesa “j’aime”, que quiere decir “te amo”. Unos años más tarde, una amiga israelí comentó al político socialdemócrata que le había puesto a su hija el nombre de Jaime, porque se asemejaba al hebreo “Jaim”, que significa vida, y también años después, aunque unos cuantos miles de kilómetros más al oeste, cuando visitaba la República Árabe Saharaui, los beduinos que en ese momento consolidaban su independencia frente a Marruecos, le comentaron que la “jaima”, la carpa de pelo de camello en la que se refugian en el desierto, tiene una connotación amplia que significa vida, protección, una suerte de oasis. Terminamos este retazo de la conversación hablando del significado de “MIR” en ruso, que quiere decir paz, por lo que el término dio su nombre a una célebre estación espacial en las anteriores décadas.

Se trata de un instante en el que Jaime Paz se retrata de cuerpo entero, tanto en su concepción de la vida como en la forma en que visualiza su rol histórico. Y es que si hay algo que emparenta a esta “izquierda” proveniente de la cantera de los 70 con la nueva izquierda consolidada en el gobierno del MAS, es su afición por los simbolismos y eslóganes (recuérdese el “Bolivia, país de ganadores” o el “Coca no es cocaína”).

El Picacho, la residencia en la que llevamos a cabo la entrevista, está llena de significados que se dan en forma de plantas, ornamentos u objetos históricos, y es en ese contexto físico e ideoló-

gico donde le proponemos al ex presidente desentrañar algunas de las claves más importantes acerca de su visión sobre los 30 años de democracia; el rol que le cupo tocar en ella, sus momentos cumbre y su relación con las personalidades más importantes de la época.

P. A la luz de una de tus frases más recordadas: “Qué difícil es amar a Bolivia”, te voy a proponer recapitular tres momentos cumbre en tu paso por la etapa democrática: el gobierno de la UDP, tu gestión de gobierno de la mano con ADN y tu última alianza con Goni en su segunda presidencia.

R. La última etapa se entiende por el momento en que sorprendimos a la derecha y a los gringos con mi presidencia; hicimos una buena gestión y terminamos con el 60% de apoyo en la opinión pública. Estaba clarísimo que íbamos a ganar una nueva elección y entonces viene la gran conspiración de los narcovínculos, lo que nos obliga a que en la tercera etapa tengamos que preocuparnos por la gobernabilidad del país sin ser cabeza de gobierno.

P. Siempre me ha llamado la atención que tanto tú como Banzer se retiraran de la política pocos meses después de la asunción de Goni como presidente, ¿ése fue el momento clave del tema de los narcovínculos?

R. Me retiré pensando que el proyecto mirista podía continuar, pero retorné cuando apresaron a Óscar Eid; entonces me dije: “esto es una estupidez, les voy a hacer el juego”, y volví

oficialmente en un gran evento en el cine México. El núcleo de la conspiración estuvo constituido por la derecha boliviana encabezada por Goni y los gringos, que hoy se arrepienten. Hay tres razones que impulsaron a la embajada de Estados Unidos a actuar en esa línea: una, que todavía se movían con el reflejo de la Guerra Fría, no te olvides que recién acababa de caer la Unión Soviética; la segunda, el triunfalismo superficial e irresponsable que dominó toda la política americana después de haberla ganado; y la tercera, que ellos tenían en ese momento la necesidad de hacer operaciones de efecto para sacar a la sociedad boliviana y sus distintas expresiones de una convivencia con el narcotráfico. Todavía estaban frescas escenas como las del matrimonio de la hija de Roberto Suárez en el Beni, con más de mil invitados, y situaciones similares. No es casual que con poco tiempo de diferencia se haya dado lo de Ernesto Samper en Colombia. También pesó mi mala relación con personajes como el embajador Gelbart, que empezó incluso antes de mi ascunción como presidente. Gelbart se me acercó en una recepción en la embajada americana y me pidió que no votara por Banzer, lo cual en realidad era una forma de pedirme que votara por Goni; yo le respondí: “Embajador, tenga la plena seguridad de que nuestro voto no es por Banzer”, se le iluminó la cara y no sé qué es exactamente lo que habrá informado, pero cuando me eligieron presidente y se hizo el saludo protocolar del cuerpo diplomático, no podía mirarme a la cara de frente. Por

eso mi relación con los Estados Unidos empezó mal; ni esperaban ni querían un mirista en la Presidencia. Después de eso Goni me odió, ya que era un vengativo terrible, me odió porque sin querer le rompí su ciclo biológico en la Presidencia de la República; a él, según su visión, lo que le correspondía era ser presidente ese momento y tener tiempo para volverse a repetir.

P. ¿Cómo se puede explicar entonces el acuerdo con Goni, en 2002?

R. Ahí entiendes la frase “qué difícil es amar a Bolivia”. El acuerdo era con Goni y con Mesa, y por eso cuando lo firmamos, yo dije: “vamos a hacer presidente a nuestro principal adversario político y al periodista que más atacó al mirismo”. No sabíamos que Goni iba a hacer un segundo gobierno tan estúpido; creíamos que la gobernabilidad de la democracia pasaba en ese momento por eso, porque si hubiéramos sido perros, lo hubiéramos elegido a Evo.

P. Dados los antecedentes de tu relación con Goni, mucha gente se pregunta ¿por qué no lo hicieron?

R. Por patriotas, porque era llamar al golpismo. Evo no estaba preparado para nada, no tenía equipo y él mismo desapareció del mapa en la etapa de discusión. El cuadro que yo veía era un Evo presidente por tres meses y luego un golpe de Estado. Y el encargado de organizar todo esto habría sido Goni con su plata; habría dicho “me han escamoteado”, no habría tenido el sentido democrático que tuvo Banzer cuando le ganó a Paz Estenssoro el 85 y luego aceptó su presidencia.

P. Volvamos al principio. ¿Cómo conceptualizas tu participación y la del MIR en la apertura del proceso democrático y el período de la UDP?

R. Fue una construcción que hicimos desde la clandestinidad y que tuvo su punto culminante en los seminarios de Achocalla en 1977. Por eso yo digo que el MIR tuvo dos nacimientos: uno como fuerza orgánica y combativa el 7 septiembre de 1971, y otro ideológicamente, el 77, seis años después. Los antecedentes se dieron en la clandestinidad, en 1975, en París. Después de que me fugué de la prisión tuvimos una primera discusión en la que yo planteé dejar de lado la definición del partido como marxista leninista, todos se opusieron menos Óscar Eid, que es un hombre que ve la política con mucho pragmatismo. En esa línea puse “Bolivia Libre” como el nombre del periódico del partido en la clandestinidad y sufrí un embate en el que me acusaron de derechización, luego los que se oponían en ese momento pusieron como nombre “Bolivia Libre” a su partido, cuando se dividieron. Fue en el tribunal Rusell Dos que se armó en Bélgica para juzgar a las dictaduras latinoamericanas donde planteé por primera vez el tema del entronque histórico y luego éste se aprobó en Achocalla, y la expresión política de esa tesis ideológica fue la UDP.

P. ¿La acción principal del MIR se centró en consolidar el proceso democrático?

P. Sí, pero la democracia unida a la consolidación del Estado nacional boliviano. La democracia entendida

como el ámbito para consolidar el Estado-nación, logrando un equilibrio adecuado entre territorio, población y administración.

P. Las sombras de la UDP se centran en su desempeño administrativo y económico, en temas como el de la hiperinflación, la ingobernabilidad, etc.

R. La UDP fue un movimiento exitoso; el instrumento para la instauración de una democracia moderna y participativa en Bolivia, porque si no había UDP, la democracia boliviana habría sido una democracia pactada, como la de Puerto Cabello en Colombia o Punto Fijo en Venezuela. La UDP rompió el esquema de democracia pactada que se hubiera dado entre Banzer y Paz Estenssoro; en ese sentido, cumplió su misión histórica. Reconquistó una democracia abierta y, desde ese punto de vista, es el antecedente inmediato del MAS; en la UDP se reúne todo lo que



hoy está en el MAS: indígenas, campesinos, obreros, profesionales, clase media; o sea, es el primer gran conglomerado del mestizaje político, pero no le podías pedir otra cosa, primero por sus debilidades intrínsecas....

P. ¿Cuáles por ejemplo?

R. No te olvides que don Hernán era el hombre de la improvisación total, tenía una frase que lo define: “los problemas vienen de dos clases: los que no tienen solución y los que se resuelven solos”, y luego estaba la conspiración que tuvo siempre al frente. La UDP para lograr ser gobierno tuvo que ganar tres veces consecutivas.

P. Hay la idea de que luego de la elección del 89, si no hacías alianza con Banzer, el 93 podías haber ganado con mayoría absoluta.

R. No me la reconocían. Ellos, la derecha, tenían el control sobre la Corte Electoral. Evo no fue el primero

en ganar con mayoría absoluta, fuimos nosotros con la UDP y nunca lo reconocieron, porque la Corte Electoral era tramposa, de Banzer y de Goni, de Banzer y de Paz Estenssoro. Todos hablan de la “banda de los cuatro” en la Corte Electoral, pero nadie se acuerda de la “banda de los seis”. Era una Corte Electoral con tres del MNR, tres de Banzer y sólo uno del MIR. Ése fue el esquema que rompimos. Yo llegué a la conclusión de que en ese momento en América Latina, un gobierno exclusivamente de izquierda era inviable; estaba muy cerca de todo lo que ocurrió con la UDP y antes el antecedente de Allende. Necesitábamos tener un socio de centro-derecha para ser viables y ése fue un modelo que en nuestra experiencia desarrollamos y que luego siguieron en Chile, con la Concertación, con la alianza entre los socialistas y los demócrata cristianos; y que después siguió Lula en Brasil, con la alianza entre el PT y sectores de la derecha brasileña. Por eso teníamos que elegir entre Goni y Banzer, que para mí nunca fue un dictador, que fue parte del golpismo republicano tradicional boliviano.

P. Pero fue un dictador...

R. ¿Pero qué golpista no fue un dictador? El pobre hombre recibió la calificación de lo que ocurría en toda el área donde sí eran dictadores, porque por ejemplo Pinochet era dictador porque no venía de una tradición golpista, sino de una democrática; en cambio Banzer venía de una tradición golpista detrás de Torres, Ovando, Barrientos, etc. El sistema político



hegemónico en Bolivia antes de la democracia era el golpismo civil militar republicano, ése era un modelo de gobierno civil militar. Eran los civiles los que alentaban al golpe; los llamados partidos se estructuraban alrededor de los golpistas que encontraban y así fue desde el gobierno del Mariscal Sucre. En la elección de 1989 no hubo un triple empate, nosotros ganamos esa elección porque teníamos todos los votos de la UDP, pero nos pusieron en tercer lugar porque ellos eran los que controlaban la Corte. Nosotros aprovechamos la enemistad entre Banzer y Goni, y elegimos lo que era menos dañino para el país, porque Banzer todavía mantenía un cierto nacionalismo respecto a las empresas estatales y eso es lo que Goni nunca nos perdonó. En 1985 nosotros ya habíamos ajustado nuestras cuentas históricas con Banzer al votar por Paz Estensoro, que había salido segundo, es por eso que el 89 tenemos moral para aliarnos con él.

P. Has dicho que la democracia es el marco para la consolidación del Estado nacional, ¿cómo contribuyó tu gobierno a ese objetivo?

R. Resumiría mi aporte como gobierno y como MIR en dos palabras: democracia y gas. Democracia en el sentido de la institucionalidad: hago la primera Ley del Ministerio Público, la primera Ley de las Fuerzas Armadas. Se hacen los acuerdos del 9 de julio de 1992, que constituyen el primer intento del sistema político de hacer una agenda nacional independientemente de quién esté en el go-

bierno. De ahí sale la reforma constitucional donde por primera vez, oficialmente, se utilizan los términos pluricultural y pluriétnico; sale la Ley de Partidos Políticos, sale la nueva Ley Electoral, con el nuevo Tribunal Electoral; sale la Reforma Judicial, la Reforma Educativa. También la descentralización municipal y departamental. Y gas, porque diseñamos una política de hidrocarburos que es la más usada en la historia del país. Se hicieron 17 contratos petroleros con empresas extranjeras. Se exploró la estructura de Huamanpampa, que debería ser la primera palabra que los niños escriban en la primaria, porque ese hecho es equivalente a lo que fue en la Colonia el descubrimiento de Potosí: cambió la estructura económica de Bolivia. Cuando Goni fue presidente, dijo que había que traer nuevas inversiones, pero en realidad la única que trajo fue a la Enron, que ni siquiera invirtió; Brasil terminó pagando el gasoducto. Así se explica la insistencia de los gringos en que Goni fuera presidente. Había una relación enfermiza (entre Goni y EEUU), de la que yo fui testigo: en los últimos minutos de su presidencia, Goni alzaba el teléfono de rato en rato y con el único que hablaba era con el embajador americano.

P. ¿Cómo fue tu relación con Goni en su último período de gobierno?

R. Casi ninguna, porque era un tipo que me repugnaba físicamente. La reduje a lo mínimo, bueno, duró un año y tres meses.

P. ¿Y tu relación con Carlos Mesa?

R. Protocolarmente buena. Una vez cuando era Presidente interino lo visité en el Palacio. Él ya sabía lo que dije en el acto de firma del acuerdo: que apoyábamos al periodista más enemigo del MIR. Él había sido parte de la conspiración de los narcovínculos, hizo un filme sobre la conspiración dando su versión y ganó el premio Rey de España. Seguramente es un buen documental, pero para lo único que sirvió fue para repercutir una gran cabronada, ya no con unas personas o con un partido, sino con la democracia boliviana. Luego, participó en todo el operativo que hicieron para convencernos de firmar el acuerdo con Goni. Por eso, cuando se va del Gobierno, es una manera de traición; él dice que había hablado con Goni, pero tenía que hablar también conmigo, porque el pacto era de tres.

P. ¿Cómo viste su presidencia?

R. Habría tenido la gloria si hubiera seguido el ejemplo de Paniagua en el Perú. Hoy, Paniagua, que pacificó el país, es uno de los grandes después de siete meses de gobierno. El problema es que Carlos, por su personalidad, siempre quiere algo trascendente. Él creía que la trascendencia era generar un proyecto de fondo, y la trascendencia para él en ese momento era ser la bisagra entre algo que se caía y algo que volvía. Lo veo mucho más maduro ahora.

P. ¿Cuál fue tu relación con Paz Estenssoro?, ¿tú eres su pariente, no?

R. Sí, era mi tío en segundo grado.

P. No da la impresión que hayas tenido una relación fluida con él.

R. Hay muchas cosas de por medio. Hay componentes políticos y humanos. Entre los humanos, está la leyenda de que en su juventud fue un gran enamorado de mi madre, que era una de las mujeres más bellas de Tarija. Siempre hubo una distancia con mi padre, que era su primo y que era un militar institucionalista. Mi padre decidió en su momento no tener una conducta oportunista, no jurar al MNR y no participar en la reorganización del Ejército con Ovando. Luego, al inicio de la democracia, fue una sorpresa para Paz Estenssoro saber que había un candidato a vicepresidente con nombre Paz y que era yo. Entonces me buscó de diversas maneras para sacarme de la alianza con Siles; se sintió ofendido cuando no asistí a una reunión que teníamos concertada por Cecilia Cerruto, antes de las primeras elecciones; la dirección del MIR no me dio permiso. Luego usó a Guevara como intermediario y finalmente se resignó y me dijo textualmente: “Me estás obligando a meterme con *Motete Zamora*”. Fue ahí cuando *Motete* dejó de ser marginal en la política boliviana.

P. ¿Cómo ves este momento político?, ¿históricamente qué significan el MAS y Evo Morales para la democracia boliviana?

R. Es una parte necesaria que no se hubiera podido hacer sin Evo o sin alguien parecido a Evo. Mucha gente me dice: “compañero Jaime, si no apoyábamos a Goni y a Mesa, tú

eras el próximo presidente”. Yo les digo que sí, pero que se me habría venido toda la avalancha. En ese momento el país estaba maduro para un presidente cholo. Después de haber aguantado la chorrera de culitos blancos como Banzer, Tuto, Goni, Mesa, Rodríguez Veltzé, era el momento del Señor del Gran Poder y como primera dama, la Virgen de Urkupiña. Cholaje cochabambino y cholaje paceño, ésa fue la sustentación inicial del gobierno de Evo; los cunumis cambas entraron después. Era absolutamente necesario que eso ocurra, si no, había sangre. La democracia boliviana llegó a un punto de maduración en que necesitaba otro tipo de actores para equilibrarla.

P. ¿Cuál es tu balance de los seis años de Evo?

R. Es bueno, mientras no continúe un período más. Así como la UDP tuvo una misión que era reconquistar la democracia, el MAS tuvo la misión de llevar el cholaje al poder, lo que significó una catarsis para Bo-

livia. Por eso lo llamo “el Señor del Gran Poder”, con toda la psicología de los morenos que bailan con su matraca en La Paz. Eso sí, debo remarcar que es un proceso que se ha llevado a cabo a un costo altísimo, desde el punto de vista económico y político. Bolivia no está aprovechando uno de sus mejores momentos económicos en su historia.

P. ¿Qué viene después?

R. La democracia boliviana es aún adolescente. 30 años para la democracia son equivalentes a la niñez en una persona. No te olvides que para la quinta república en Francia tuvieron que pasar más de 200 años desde la Revolución Francesa. Estamos en la etapa en la cual a la democracia boliviana le salen granos en la cara, las manos le crecen, no sabe si tenerlas en los bolsillos, sacarlas o pegarle al otro. No sabe cómo sentarse porque las piernas están muy grandes; se pone agresiva por su timidez y se emputa con sus padres. Necesita emputarse para afirmar su personalidad...

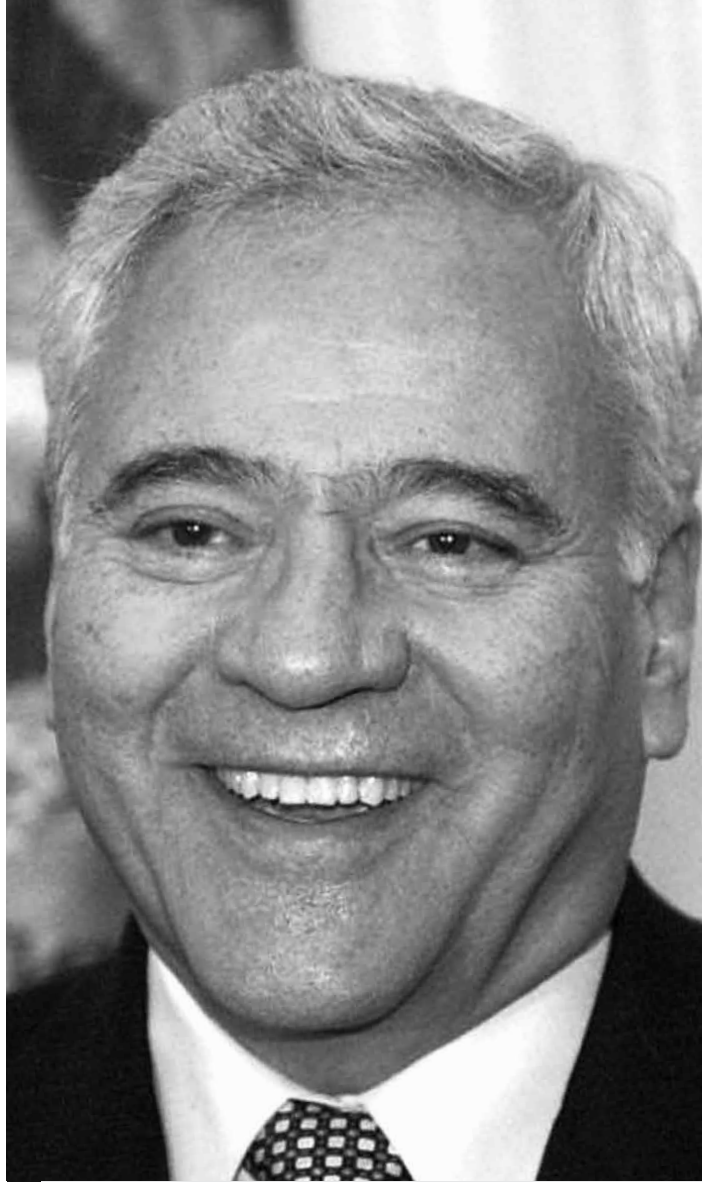
Gonzalo Sánchez
de Lozada

“Mi mandato fenece legalmente en 2007”

ALCIDES FLORES MONCADA
WASHINGTON | LOS TIEMPOS
12 DE JULIO DE 2004

El ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada habló por última vez con un periodista boliviano el 12 de julio de 2004, nueve meses después de que su gobierno se desmoronara tras las revueltas sociales de octubre negro. En esa ocasión no quiso hacer declaraciones sobre su caso, pero sí respondió algunas preguntas, de manera muy escueta. Su esposa, sus hijos y sus cinco nietos vivían con él. A continuación, la nota publicada el 25 julio de 2004.

“¿Qué quiere tomar?, ¿café o Coca-Cola...?” pregunta Gonzalo Sánchez de Lozada al periodista que llega hasta su oficina que alquila en un piso del edificio Metro Building, en Washington, Estados Unidos, adonde va a



PERFIL

Nació en Cochabamba, en 1930. Presidente de Bolivia en dos ocasiones (1993-1997 y 2002-2003). Fue gestor de la política económica liberal en Bolivia.

Varias veces candidato a la Presidencia, ganó las elecciones de 1993 con el 38% de los votos válidos. En la votación en el Congreso obtuvo la Presidencia con los votos y en alianza con diversos partidos. En 2003 asumió la Presidencia y enfrentó una crisis social y económica que culminó en su renuncia, el 17 de octubre de 2003.

trabajar desde las 9:00 hasta las 16:00 o 17:00, horario continuo, de lunes a viernes.

“Agua”, le responde el periodista, y él pide una gaseosa. Quien recibe sus órdenes es una mujer adulta que trabaja para él en una oficina contigua. Ella es boliviana. “Yo trabajaba con él en Bolivia y me vine”, afirma su secretaria.

“No voy a hablar nada hasta que concluyan las investigaciones. No le voy a decir nada, porque quiero evitar las especulaciones”, aclara de entrada Sánchez de Lozada —él aún se llama presidente de la República—, que tiene los cabellos completamente blancos y el rostro más abultado.

“¿Sabe que a su ex ministro de Gobierno, Yerko Kukoc, le dieron dos años de cárcel por hurtar más de dos millones de dólares de los gastos reservados?”. Esta pregunta hace cambiar por un momento sus facciones. “Sí”, dice apresuradamente, e inmediatamente cambia de tema. “¿Cómo está la situación por allá?”, pregunta.

Antes de responder que si conocía la sentencia a Yerko Kukoc, había eludido varias interrogantes, acorde con lo que en principio dijo: que no iba a hablar nada. Para evitar que el tema Kukoc se esfume, viene la pregunta siguiente: “¿Usted sabía que él (Kukoc) tenía en sus manos tanto dinero el día que usted renunció?”. Y su respuesta fue “no”.

Además de la oficina, por la que debe pagar un alquiler mensual, él tiene acceso a un bar y salón de reuniones que los comparte con otras empresas y consultoras que también alquilan apartamentos en el edificio construido

específicamente para ese fin.

Gonzalo Sánchez de Lozada se trasladó a Estados Unidos con toda su familia. Su esposa Ximena Iturralde estudia inglés; su hijo Ignacio, Relaciones Internacionales en la Universidad de Tufts, Massachusetts, y su hija Alejandra trabaja como consultora en temas relacionados al medio ambiente. Sus cinco nietos también están en ese país.

En su oficina hay un escritorio casi vacío. Tiene un teléfono, un colgador, un pequeño armario y cuenta con una vista amplia de la ciudad desde la ventana grande de su oficina.

Afirma que se dedica a dar conferencias en universidades y a actividades académicas e intelectuales, además de asistir a eventos como el Foro de España, donde se encontró con el ex presidente Jaime Paz Zamora. Además, agrega, “yo participo en agrupaciones de izquierda y derecha”.

Desde los hechos en octubre de 2003 hasta ahora, se han publicado decenas de artículos en diferentes diarios del mundo como *Le Monde* de París y *El País* de Madrid sobre los hechos que ocasionaron su caída. La mayoría concluye que la corrupción ha alimentado la revuelta social. “Todo lo que tengo que decir está en mi ayuda-memoria”, dice, y se refiere a un documento que preparó en mayo de este año.

En él, Gonzalo Sánchez de Lozada se sigue llamando presidente de la República y afirma que su mandato constitucionalmente concluye el 6 de agosto de 2007.

Confiesa que quiere volver al país, pero no ahora y no se anima a decir cuándo. “Deben concluir las investiga-

ciones”, vuelve a decir, aunque está seguro de que el presidente Carlos Mesa está empeñado en entorpecerlas.

¿De qué vive?, se le preguntó. “De mis actividades, de lo que aquí hago; del Estado (boliviano) no recibo un centavo y no he ganado nada del Estado”, responde.

¿Le envían dinero de sus empresas en Bolivia? “Eso es algo privado”, dice.

La cita en su oficina dura una hora y concluye a las 19:30 del lunes 12 de julio. A las 20:30 tiene programada una cena en algún lugar de Washington, donde su vida aparentemente transcurre con total normalidad.

“El presidente Sánchez de Lozada tiene la esperanza de que el pueblo de Bolivia superará los trágicos momentos en que se encuentra...”, dice parte del último párrafo de la introducción del documento que lleva el siguiente rótulo: “Ayuda Memoria, Presidente

Sánchez de Lozada”.

FUSTIGA A EVO MORALES, FELIPE QUISPE Y LA COB

En su ayuda-memoria elaborada en mayo de este año, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ataca a Evo Morales, Felipe Quispe y a la Central Obrera Boliviana, y también al gobierno de Carlos Mesa, porque éste entorpece las investigaciones.

Afirma que su derrocamiento el 17 de octubre de 2003 “fue resultado de un conjunto de hechos preparados, premeditados y alimentados políticamente”. Dice que su vida incluso ya estuvo en peligro el 12 y 13 de febrero.

“Los hechos de octubre fueron actos violentos, armados, antidemocráticos que buscaron y produjeron víctimas fatales para usarlas como motivo para derrocar al Presidente, cuyo mandato constitucional vence el 6 de agosto de 2007”, dice la introducción



del documento de 46 páginas, que incluye el informe de la OEA sobre febrero negro, su renuncia, artículos escritos por la prensa estadounidense y otros.

“El MAS de Evo Morales, el MIP de Felipe Quispe, la COB y otros grupos políticos radicalizados que atacaron la democracia y que generaron las víctimas son ahora los acusadores, que con la cooperación del actual Gobierno avanzan en un trámite absolutamente político que

llevará a la condena al ex presidente Sánchez de Lozada y su gabinete”, agrega.

El Gobierno solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la investigación de los sucesos que culminaron con el derrocamiento de Sánchez de Lozada. Al respecto, el ex presidente dice que el gobierno de Carlos Mesa “se ha dado a la tarea de bloquear y evitar esta investigación”.

Cronología de la caída

RAFAEL LÓPEZ Y JAVIER PÉREZ¹

MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE

Bloqueo cocalero en la zona de Santa Bárbara (Yungas), campesinos de la provincia Inquisivi bloquean acceso a Sud Yungas, campesinos de Collana en la carretera La Paz-Oruro.

El Comité Cívico pro Santa Cruz y la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) presentan el documento *Para Refundar Bolivia*, bajo los lemas de “orientalizar a Bolivia y no bolivianizar al oriente” y “refundación de un país verdadero o que cada región tome su camino”.

Multitudinaria marcha de la Central Obrera Departamental en Cochabamba en rechazo al proyecto de exportación de gas a EEUU.

Gonzalo Sánchez de Lozada plantea la necesidad de regular el trabajo

periodístico con el fin de protegerse del “uso desmedido y descontrolado de semejante poder” en la inauguración de un seminario internacional sobre periodismo y ética.

JUEVES 2 DE OCTUBRE

Movilizaciones en La Paz y El Alto. El paro cívico alteño produce 15 detenidos y una veintena de heridos.

El Movimiento Sin Tierra (MST) rompe negociaciones con el Gobierno luego de los enfrentamientos en El Tolar. Exigen la liberación de 16 dirigentes detenidos.

VIERNES 3 DE OCTUBRE

El Parlamento elige a Iván Zegada como nuevo defensor del Pueblo, previa renuncia a la postulación por parte de Ana María Romero de Campero. En la sesión vota “cumpliendo instrucciones del Presidente de la Repú-

¹ Cientistas políticos

blica” el parlamentario Hugo Carvajal, que en horas de la mañana fungía como ministro de Educación.

SÁBADO 4 DE OCTUBRE

Declara el Presidente de la República: “No es necesario el estado de sitio. Gobernaré el país hasta el último día de mi mandato”.

LUNES 6 DE OCTUBRE

Poseionan a Iván Zegada como defensor del Pueblo pese al rechazo de los partidos de oposición y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.

Comienza el bloqueo en el Chapare en contra de la exportación de gas a Estados Unidos y en demanda de la renuncia de Gonzalo Sánchez.

MARTES 7 DE OCTUBRE

La condición del Gobierno de suspender los bloqueos antes del inicio del diálogo es rechazada por Felipe Quispe y la CSUTCB.

Se inicia la marcha de mineros de Huanuni rumbo a La Paz para sumarse al paro convocado por la COB.

El Gobierno militariza el Chapare para frenar la multiplicación de puntos de bloqueo.

JUEVES 9 DE OCTUBRE

En conferencia de prensa, Sánchez de Lozada deslegitima las protestas. “El estado de convulsión es propiciado por una minoría que quiere dividir a Bolivia”.

Un enfrentamiento entre los vecinos y la Policía en Senkata deja dos muertos. Uno de los heridos es el sacerdote Modesto Chino.

VIERNES 10 DE OCTUBRE

Los vecinos de El Alto bloquean la planta procesadora de carburantes de Senkata exigiendo la industrialización del gas y la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada.

El Gobierno asegura que las cisternas detenidas por el bloqueo en Senkata llegarán a La Paz.

La Federación de Campesinos de Santa Cruz, dirigida por Isaac Ávalos, pide la renuncia de Carlos Sánchez Berzaín, ministro de Defensa, por la represión registrada.

SÁBADO 11 DE OCTUBRE

El Gobierno vuelve a culpar a Felipe Quispe y otros dirigentes de promover un golpe de Estado.

Se produce el primer enfrentamiento en la autopista La Paz-El Alto. Vecinos de zona Ballivián chocan contra el Grupo Especial de Seguridad (GES) y la Policía Militar.

Recrudece el enfrentamiento en Senkata por la salida de una cisterna hacia La Paz. Se registran atentados contra Electropaz y Aguas del Illimani en El Alto.

DOMINGO 12 DE OCTUBRE

Comienzan las movilizaciones en la ciudad de Cochabamba comandadas por la Coordinadora de Defensa del Gas y el Estado Mayor del Pueblo.

Arranca el paro indefinido de choferes de La Paz.

El Gobierno promulga el Decreto 27210, que determina que no se iniciará una nueva exportación de gas mientras no se realicen consultas.

Un nuevo intento del Gobierno para garantizar la salida de cisternas

de Senkata provoca un duro enfrentamiento en El Alto. 20 personas murieron y dos caravanas de cisternas lograron llegar a la sede de Gobierno.

LUNES 13 DE OCTUBRE

Carlos Mesa anuncia su alejamiento del Gobierno por las muertes en la víspera, pero no renuncia al cargo.

EEUU dice que no tolerará un gobierno no democrático y la OEA se ofrece para mediar.

Un nuevo enfrentamiento en El Alto deja el saldo de 23 personas muertas. Estalla una gasolinera en Río Seco. La represión policial en la ciudad de La Paz mata a diez personas.

MARTES 14 DE OCTUBRE

NFR condiciona su apoyo. Exige un referéndum para la exportación de gas, modificación de la Ley de Hidrocarburos y una convocatoria a la Asamblea Constituyente.

Se registra una marcha masiva en Sucre convocada por la COD.

Universitarios y trabajadores de Cochabamba, Oruro y Potosí multiplican movilizaciones.

Los mineros de Huanuni, alojados en la UMSA, se incorporan al bloque de marchistas en La Paz.

Vecinos de El Alto derriban pasarelas de la avenida 6 de Marzo.

MIÉRCOLES 15 DE OCTUBRE

El Gobierno ofrece un referéndum consultivo por departamento para el gas, la inclusión de la Asamblea Constituyente y una revisión de la Ley de Hidrocarburos.

Comienza la huelga de hambre de

sectores sindicales, campesinos e intelectuales en varias zonas de la ciudad de La Paz pidiendo la renuncia de Sánchez de Lozada. Ana María Romero encabeza la protesta civil.

Militares y policías allanan casas en varias zonas de El Alto en busca de dirigentes sindicales. 15.000 residentes bolivianos en Buenos Aires piden la renuncia del Presidente.

Operativo militar en Patacamaya, con el fin de impedir el paso de marchistas a la sede de Gobierno, deja dos muertos y 15 heridos de bala.

JUEVES 16 DE OCTUBRE

El Presidente, en conferencia de prensa con medios de comunicación extranjeros, anuncia que sólo un tercio de la población exige su renuncia.

Enorme marcha de protesta en el centro de La Paz pide la renuncia de Sánchez de Lozada. En Tarija, una marcha pide pacificar el país.

VIERNES 17 DE OCTUBRE

En la madrugada del día, la marcha de mineros y gremialistas retenida en Patacamaya rompe el cerco del Ejército.

Jaime Paz Zamora, en horas de la tarde, anuncia de manera tácita la renuncia del Presidente.

En horas de la noche, el Congreso se reúne y acepta la renuncia del Presidente.

Gonzalo Sánchez de Lozada abandona la residencia presidencial con sus principales colaboradores y familia en helicópteros enviados por Perú. Desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru, Santa Cruz, deja el país rumbo a EEUU. Desde entonces no volvió al país.

Jorge Tuto Quiroga

“Hice oposición
sin poner
bombas ni
tomar oficinas
públicas”

RENÁN ESTENSSORO

La primera vez que supe de Tuto Quiroga era ministro de Finanzas en el gobierno de Jaime Paz Zamora. Eran los tiempos en los que el país se recuperaba de la hiperinflación y se esforzaba por reactivar su economía siguiendo las normas del capitalismo triunfante. En este marco, Tuto personificaba al joven profesional tecnócrata e inteligente, formado en los EEUU, adverso a los experimentos con la economía y los ahorros de la ciudadanía. Su carrera política fue exitosa y rápida. A sus 37 años llegó a la Vicepresidencia y cuatro años después a la Presidencia del país, en 2001, tras el fallecimiento del entonces presidente Hugo Banzer Suárez.

Poco después de cumplirse diez años desde que dejó la Presidencia, lo visité en su oficina de la Fundación Fundemos para dialogar sobre lo que fueron estos 30 años de democracia.

PERFIL

Jorge Quiroga Ramírez nació en Cochabamba en 1960. Fue elegido subjefe nacional de ADN y en 1997, candidato a la Vicepresidencia en la fórmula liderada por Hugo Banzer. Llegó a la Vicepresidencia a los 37 años, siendo el más joven en ocupar ese cargo. Fue sucesor de Banzer en la Presidencia (agosto 2001 – agosto 2002) tras la renuncia y muerte de éste en 2001.

Tras renunciar a ADN en 2004, formó la agrupación Podemos, con la que se presentó en las elecciones presidenciales de 2005, en



La conversación me trae recuerdos: la peculiar forma que tenía de armar sus discursos en los que hacía rimar las palabras; su imagen trotando por la Costanera de La Paz con auriculares, y el mote de “pitufos” que, en cierto momento, se les dio a sus seguidores.

Las fotografías de sus padres, de su fallecido hermano y de su familia ratifican lo que él siempre trató de mostrar: su enorme apego por la familia y el valor que le otorga a esta institución. Un par de banderas de Bolivia complementan el escenario.

Abrimos el diálogo con algunos comentarios sobre la actualidad y sus actividades; casi al instante revela su enorme pasión por la tecnología digital y los cambios que ésta provoca en la sociedad. Luego, con enfado pasa algo que le preocupa: un “injusto y abusivo” juicio que le ha ganado el Banco Unión por comentar incidencias del escandaloso caso Catler. Y así, con la elocuencia que le caracteriza, comenzó un diálogo abierto y franco.

P. Han pasado 30 años desde que recuperamos la democracia, ¿qué sabor te deja este proceso?

R. Si algo hay que destacar del doctor Hernán Siles es que tuvo la habilidad de lograr que la democracia no se ponga en riesgo ante la descomunal crisis económica que se sufrió durante su gobierno. Eso nos dio una suerte de vacuna democrática.

Con el paso de los años es evidente que no pudimos entender que lo que es bueno en una fase, seguirlo repitiendo *ad eternum* no necesaria-

mente es positivo. ¿Qué lección quedó de esa crisis económica? Que no era suficiente tener democracia, votar y elegir, sino que había que tener gobernabilidad parlamentaria. El 85 se comienzan a dar los acuerdos de gobernabilidad que tenían como fin salvar a Bolivia de la debacle económica. Un acuerdo de gobernabilidad o, si se quiere, un acuerdo de reconciliación entre adversarios históricos –como lo fueron Hugo Banzer y Jaime Paz Zamora– puede interpretarse como un desprendimiento para, en democracia, encontrar un cauce común y trabajar juntos. Eso sucedió en los gobiernos del 85 y del 89, pero conforme pasan los gobiernos estos acuerdos se empiezan a desgastar; se vuelven más pragmáticos, entre comillas. Apoyo a alguien a cambio de unos ministerios. La gente decía: “... un momentito, él me dice que vote, el punto central de la democracia es votar, voto y resulta que no estoy eligiendo, estoy dando fichas a diferentes fuerzas políticas”.

P. ¿Ése fue el peor de los males de la llamada democracia pactada?

R. No, creo que el mal fue la combinación del desgaste de una cierta cultura política con la inflexibilidad de hacer reformas que vayan en beneficio de la población y no en beneficio de los políticos. La población quería elegir a sus gobernadores, y a los políticos no les convenía, preferían repartirse los espacios: Chuquisaca para ti, Tarija para mí, cosas así... La gente quería elegir, como ahora, aunque ahora hay una nueva ley que dice que el pueblo elige al alcalde, pero el fiscal

lo acusa y lo saca. Ahora estamos con otra clase de ingobernabilidad.

P. Y si sabían del descontento, ¿por qué no impulsaban las reformas constitucionales necesarias?

R. Tuvimos la reforma constitucional de Paz Zamora, que fue la de diputados uninominales, la de la creación del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo. Paz Zamora la propuso y Sánchez de Lozada la pone en vigencia, pero no la aplica. Yo me acuerdo que él hacía cosas que iban contra la Constitución, por eso no aplicó el Tribunal Constitucional, tampoco lo hizo con el Defensor del Pueblo. Fue entre 1997 y 2002 que echamos a andar todo eso. Sánchez de Lozada no dejó ninguna propuesta de reforma constitucional; no se podía hacer nada. La trampa estaba en que para cambiar la Constitución tenías que tener dos tercios de un gobierno y dos tercios del próximo, que debía estar de acuerdo con todo lo que había puesto el anterior. Este sistema es bueno porque evita las aventuras, pero es un poco rígido y se vuelve muy lento, especialmente cuando un gobierno, como el de Sánchez de Lozada, no deja una propuesta. En el período 1997-2002 tuvimos varias discusiones para cambiar la Constitución, pero para implementarlas debías buscar los dos tercios con la oposición, que en ese entonces era muy intransigente.

P. ¿Cuáles eran las reformas que deseabas implementar?

R. La segunda vuelta y la elección de gobernadores, principalmente.

Pero Sánchez de Lozada no las quería y nosotros no teníamos los dos tercios. Además nos debilitamos aún más cuando pasaron las elecciones de 2002 y Sánchez de Lozada formó una alianza con el MIR. Entonces, tanto la brigada saliente de ese partido como la entrante estaban más preocupadas en apoyar su nuevo acuerdo que en hacer una reforma constitucional. Con todo, algunas cosas, como el referéndum, se lograron incorporar. Había que avanzar diez pasos, por lo menos dimos tres. Ésa era mi lógica. La ley de necesidad que promulgamos era insuficiente, pero tenía válvulas que después de 2003 permitieron cambios más rápidos y profundos.

P. ¿Cuáles fueron esas válvulas?

R. Pusimos algunos artículos que permitían hacer la convocatoria a la Asamblea Constituyente y el referéndum. Hubiéramos avanzado más con la elección de prefectos, pero Sánchez de Lozada no quiso. Eso incubó las frustraciones.

P. ¿Las razones?

R. La naturaleza de los acuerdos. Tú recordarás que la lucha entre Jaime Paz y Sánchez de Lozada fue encarnizada. Sánchez de Lozada le sacó los narcovínculos y mandó a Eid a la cárcel. Fue una lucha dura, quizá la más dura que hubo desde el retorno de la democracia hasta lo que vivimos en este gobierno. Leopoldo Fernández seguramente te va a decir que lo que hoy vivimos es más duro de lo que pasaba entonces. En 2002, el que votó por Sánchez de Lozada jamás pensó

que éste haría un acuerdo con Jaime Paz, y viceversa, el que votó por Jaime Paz jamás pensó que su voto serviría para hacer un acuerdo con Sánchez de Lozada. Incluso recordarás que en la campaña, Sánchez de Lozada y Reyes Villa polarizaron mucho. Eran campañas durísimas. La gente pensaba que ambos representaban cosas diferentes, pero cuando pasó la elección vieron que, después de años de gresca, pudieron hacer un acuerdo y repartirse ministerios y embajadas. Ahí se viene la crisis de febrero de 2003. Holgadamente, ese gobierno (el de Goni) tenía dos tercios en el Parlamento, pero cada vez que hacía un pacto, más pequeño y esmirriado quedaba su apoyo popular.

P. De ahí se vino octubre de 2003, ¿cuál fue el detonante?

R. Yo te diría que la reelección de doña Ana María Campero como defensora del Pueblo. El MNR se negó de forma contundente a reelegirla. Coincide con el hecho de que partidos que eran opositores estaban en el Gobierno y que cuando percibieron cierta debilidad, incorporaron a otro que estaba en las antípodas, que era Reyes Villa. La primera acción que hace esa nueva coalición con sus dos tercios en el Parlamento es designar a un personaje, no recuerdo ni su nombre, como defensor del Pueblo. A Carlos Mesa, que era el vicepresidente, le dio vergüenza posesionarlo. Cuando designamos a Ana María Campero como defensora del Pueblo, en 1998, nos costó mucho trabajo lograr los dos tercios en el Parlamento; había la tendencia de conver-

tir a la Defensoría en algo de raigambre popular. Cristina Corrales era la otra candidata y si hacías una encuesta, ella destrozaba a cualquier adversario. Y esto coincide con algo que a veces la gente no calcula: en ese entonces, acababa de fallecer una persona que era una suerte de defensor del pueblo. El compadre Palenque era un hombre que quizá hoy no se aprecie, pero que era muy hábil en la política. Me acuerdo que cuando conversaba con él, me decía: “Mí querido Jorge, yo mantengo tranquilo al pueblo alteño”. Cuando pasa el tiempo y uno recuerda esas cosas dice: “caramba, él sabía y entendía lo que estaba pasando”. Él defendía a los ciudadanos en todas partes; ibas a la Tribuna Libre del Pueblo y te quejabas y al día siguiente te daban una respuesta. Es lo que después, legalmente y formalmente, hacía la Defensoría del Pueblo: Ana María Campero reemplaza –sin la empatía que tenía el compadre, pero con facultad constitucional – lo que se hizo desde la Tribuna Libre del Pueblo.

P. Sin embargo, en esos años también se avanzó en la institucionalidad del Estado y muchos dicen que se sentaron las bases de la bonanza económica actual, ¿coincides en esto?

R. En ese período se abrieron mercados, se atrajeron inversiones y se implementaron proyectos que hoy son los que nos dan la bonanza económica más grande de nuestra historia. Está, por ejemplo, el contrato de venta de gas al Brasil y la construcción del gasoducto a ese país; se

trae inversión para San Cristóbal, San Bartolomé y San Vicente, entre otros proyectos mineros. Se desarrolla la frontera agrícola, especialmente para la soya. Sentamos las bases para una Bolivia competitiva y creíble a nivel internacional. En 2001 se exportaban 1.200 millones de dólares, ahora se exportan 10.000 millones de dólares. ¿Por qué crees?, ¿nos volvimos chinos? No, es el efecto de los precios que, obviamente, tiene una influencia china. En 2002, el gas valía \$us 1,20, ahora está en \$us 11; el estaño valía \$us 1,90 y ahora ha llegado a costar \$us 14. ¿Qué paso? Pasamos de la crisis asiática a lo que la CEPAL denomina el “lustro de oportunidades”, que es, en esencia, la irrupción de China en el mundo global. Entonces llega

la bonanza económica... Es verdad, puedes cuestionar estos acuerdos de gobernabilidad, pero lo que se hizo dio pie a la coyuntura económica del 2007 para adelante.

P. ¿Por qué la crisis de 2003, además de llevarse a un gobierno constitucional, se llevó también a los partidos políticos?

R. Buena parte de los partidos estaban hechos para responder a las reglas vigentes en ese momento, y las reglas señalaban que para ser líder político tenías que estar lo más cerca posible del jefe. Había una sola persona que conseguía los votos: el jefe o candidato a presidente. Eran partidos extremadamente personalizados, una persona conseguía los votos y el



resto era una lista. ¿Cómo podías ser prefecto?, ¿recorriendo tus provincias para hacer propuestas o estando parado en aeropuertos urbanos para recibir y llevar al hotel al jefe de partido? Esas reglas te llevaban a la concentración del poder en cúpulas partidarias y a reiteradas postulaciones de los presidenciables. El hombre más grande de nuestra política, Paz Estenssoro, se postuló varias veces. ¿Qué significaba esto? Que pasada la elección casi ya estaba predeterminado quiénes eran los candidatos para la próxima, y no sólo eso, ya estaba predeterminado quién sería el primer senador de cada una de las regiones. Fíjate que en muy pocos casos el operador político regional era el que tenía los votos; acuérdate de los símbolos que tenía el MIR en Chuquisaca y en Potosí. Cuando llegó la apertura, se postularon al espacio municipal y sacaron apenas un concejal. Era gente que decía: “yo manejo la región”, y que puestos al examen electoral tuvieron fracasos durísimos.

P. ¿Qué pasó con la ADN?

R. Los partidos no eran abiertos a la participación y eso los llevó a acumular una serie de pasivos. Aunque es cierto que tuvieron un rol muy importante en la recuperación de la democracia, no se tuvo la capacidad de abrirlos, renovarlos y hacerlos más participativos. ¿Más culpa de unos que de otros? Ya no es relevante, sucedió lo que sucedió.

P. ¿Cómo ubicas a Banzer en esta transición?

R. Un hombre que tuvo un papel

en la historia de Bolivia en momentos en que no había democracia y había una guerra fría que aquí era caliente. Banzer tuvo la gran virtud de reinserirse en democracia y con una enorme paciencia supo labrarse un lugar. Sistemáticamente trabajó para reconciliarse con enconados adversarios. Benjamín Miguel terminó siendo su amigo, lo mismo que Mario Rueda Peña, *Motete* Zamora, Jaime Paz y Óscar Eid, entre otros.

P. ¿Cómo se encaró el trabajo que hizo Podemos en el Parlamento y la Constituyente?

R. En las elecciones de 2005 ganamos la mayoría en el Senado y eso hizo posible el desarrollo del debate político parlamentario. Como el MAS no tenía mayoría, hacía cercar con sus movimientos sociales la plaza Murillo —o cualquier otra, como sucedía en Sucre— cada vez que quería aprobar algo. Fue una práctica muy reñida con la democracia. Nosotros defendimos nuestras posiciones y fuimos víctimas de actos antidemocráticos, como las turbas que se enviaban al Congreso.

Coordinar los trabajos de la oposición parlamentaria es sumamente duro e ingrato. La buena oposición no es aquella que dice chau Sánchez de Lozada y al poco tiempo chau Mesa, ahora no Vaca Díez, él no puede jurar y el otro tampoco, que venga otro. Te digo que es ingrato y frustrante porque a los que apoyan al Gobierno no les gusta lo que hace la oposición, y los que no quieren al Gobierno piensan que no hay efectividad cuando no lo derrocas. Es evidente que la oposi-

ción se ha quedado sin liderazgo, su principal líder está hoy encerrado en la embajada de Brasil (Roger Pinto). En tema de juicios, Roger me gana por goleada, yo tengo dos y él tiene 21 ó 22.

P. Te acusan de errores políticos, el revocatorio y la aprobación de la Constitución vigente, ¿cómo te sientes al respecto?

R. Hay una gran diferencia entre el texto de la Calancha y el que se aprobó en La Paz. El texto de Oruro era desastroso y nuestra misión era frenarlo, aunque no teníamos ni un tercio de los asambleístas. Ahora veo a gobernadores, alcaldes, periodistas e Iglesia Católica defendiéndose con los artículos de la Constitución que logramos insertar. La defensa de El Diario, Página Siete y de ANF está basada en el artículo que pusimos relacionado a la libertad de expresión.

El Gobierno logró aprobar un texto en Oruro, pero en el procedimiento había una válvula de seguridad: tenía que ir al Congreso para aprobarse por dos tercios, ésa era nuestra defensa. En febrero de 2008, cuando ya no podían con el debate, hicieron un cerco y convocaron a votar el texto constitucional aprobado en Oruro. Ahí es que los prefectos electos le exigen al Presidente un referéndum revocatorio. No fue idea nuestra; ellos lo desafían.

El único mecanismo parlamentario para evitar que se apruebe el texto de Oruro fue proponer el revocatorio como obstáculo porque la ley impide hacer dos elecciones a la vez. Con el revocatorio, el Gobierno tenía que

hacer votar el texto constitucional o hacerle frente y ver quién resultaba revocado. No éramos ilusos, no pensábamos que al Presidente lo podían revocar.

Pasa el revocatorio y el Presidente lo primero que hace es un decreto convocando a la votación para aprobar el texto de Oruro. Sólo el Congreso, por dos tercios, podía hacer esta convocatoria. Él lo hace por decreto: “le meto nomás”. Allí surge otra vez la polarización. Y acá hay que tomar en cuenta el rol de Leopoldo Fernández en la democracia; lo que pasa con Leopoldo y el abuso que cometen con él atrae la atención del mundo. Llegaron observadores y mediadores de varios países y organizaciones. Fue entonces que se entabló una discusión con dos fases; una en Cochabamba con los gobernadores, donde se discuten 15 artículos sobre las autonomías; y la segunda en La Paz, en el Congreso, donde el Gobierno entra diciendo “no se cambia ni una coma del texto de Oruro”, y le cambiamos 150 artículos.

Si no había el revocatorio, se aprobaba el texto de Oruro y Bolivia quedaba destrozada. Ahora, la pregunta es cómo sentamos al Gobierno a dialogar y a cambiar artículos. Era la primera vez que teníamos mediación internacional; estaba la señora Yoriko del PNUD y otros 12 delegados extranjeros.

P. ¿Cómo ves ahora, a la distancia, el artículo referido a la reelección, ante la posibilidad de que el Presidente se reelija?

R.- Para ser franco, nosotros también habíamos propuesto una sola

reelección inmediata. Me parece sano un sistema de dos mandatos y cuatro años en lugar de cinco. Con el texto de Oruro, el Presidente podía quedarse hasta el 2019. En las negociaciones, el ahora ministro Romero y el vicepresidente García Linera nos dijeron: “el Presidente ha cedido”. No hay equivocación o mala interpretación, lo dice la Constitución y también las declaraciones de la época. Además revisa el Código Electoral, en el que pusimos el padrón biométrico, que dice textualmente: “los mandatos vigentes a la fecha de la promulgación de este Código, cuentan y se contabilizan para efectos de mandatos permitidos para la reelección. Firmado Evo Morales Ayma, Álvaro García Linera”, etc. Si la justicia y el Tribunal Constitucional fuesen independientes, señalarían que una nueva reelección no procede. La señora Yoriko del PNUD estaba presente en las negociaciones, hay declaraciones de ella, pregúntale a ella. No hay finta, está escrito.

P. ¿Cómo evalúas esta fase democrática que vivimos?, ¿estamos mejor?

R. Yo creo que hemos mejorado, al menos teóricamente, en tener un marco que respeta la voluntad popular expresada en las urnas. Es superior un régimen de reglas democráticas que dan lugar a una segunda vuelta presidencial, elecciones de gobernador, elecciones de asambleas legislativas departamentales, que dan participación a grupos históricamente ignorados. El sistema de elección de alcaldes con listas separadas de los concejales

es mejor que votar sin elegir. Eso en el marco teórico, pero qué sucede en la práctica. ¿De qué sirve un marco democrático que te permite elegir gobernadores que antes eran elegidos a dedo y ahora se sacan a dedo? Todos votamos y luego una persona designada por un designado decide si la votación valió o no valió y defenestra a un alcalde o a un gobernador. Eso es profundamente antidemocrático y hace un daño enorme a la legitimidad de la democracia. Hay muchos municipios y regiones que tienen en el cargo a alguien totalmente diferente al que ganó las elecciones y que está suspendido sin sentencia ejecutoriada. Extrañamente, ninguna autoridad relevante del Gobierno central ni de los departamentales y locales del MAS recibe este tratamiento.

P. ¿Qué destacas de tu gobierno?

R. Haber podido sortear la crisis económica que se registró entre 1998 y 2002, y ejecutar el PLANE (plan de empleos), que fue todo un éxito. En medio de eso, haber mantenido ciertos programas sociales, salvar la economía y fortalecer instituciones como el Servicio de Caminos, el Servicio de Impuestos y la lucha contra el narcotráfico, que viendo lo que pasa hoy está claro que es un enemigo que es necesario derrotar. En ese entonces, el único país en el mundo que redujo las plantaciones de coca y la fabricación de cocaína fue Bolivia. En esos años no veías ajusticiamientos en Santa Cruz ni cárteles que llegaban por derecha e izquierda, como ahora.



P: ¿Cómo te ves en el futuro?

R. Estoy dedicado a las actividades particulares porque obviamente en Bolivia es difícil trabajar. Las autoridades del actual Gobierno piensan que a todas las ex autoridades hay que tratarlas mal. En otros lados me preguntan: ¿tienes seguridad?, no; ¿jubilación?, no; ¿pensión de ex presidente?, no; ¿pasaporte diplomático?, no; y no es que sea importante ni el fin del mundo, pero debe haber un trato con un mínimo de respeto como existe en otros países. Soy vicepresidente del directorio del Club de Madrid, que integramos 85 ex mandatarios. Estoy en Diálogo Latinoamericano y en el Ins-

tituto de Participación Global. Hay que ver qué sucede en el futuro. Los que tienen planes conmigo son los del Gobierno. Antes se decía que era con todos los ex presidentes, ahora sólo es conmigo. Me tienen un cariño especial porque a nadie le van a hacer creer que el juicio que aprobaron en el Congreso es contra Sánchez de Lozada y Quiroga; Sánchez de Lozada no va a volver. A estas alturas nadie se traga eso.

P. El político boliviano de los últimos 100 años...

R. Víctor Paz Estenssoro fue, es y seguirá siendo el hombre más grande que ha producido nuestro país. Es

difícil encontrar una persona con una trayectoria tan larga y dilatada, que supo adecuar su respuesta a los tiempos. Yo lo vi sólo una vez, cuando fuimos a un seminario en Tarija. El doctor Paz Estenssoro tenía una buena amistad con Banzer, a quien acompañé. Esto era el año 1996. Un hombre que hizo tanto por Bolivia y vivía con tanta simplicidad y austeridad. Volví a Tarija cuando falleció; fui al entierro y Banzer al velorio. Banzer no quiso ir al entierro y al poco tiempo le llegó el diagnóstico de cáncer. Después entendí por qué no quiso ir, quizá ya sabía lo que se venía. Hablé en el entierro y de ahí me fui a Londres, con todos los recuerdos de la ceremonia. Al llegar, un periodista de *The Economist* me entrevistó y me preguntó sobre el gas y la cocaína; yo le dije: “¿me puedes hacer un favor?, ha muerto

una persona en mi país que si hubiera sido inglés o norteamericano sería tan grande como Roosevelt o Churchill, un veterano de nuestra guerra, la Guerra del Chaco, la más importante y simbólica que hemos tenido, el que hizo la reforma agraria, el voto universal y la nacionalización de las minas”.

También le dije una vez a Condoleezza Rice que gracias a Paz Estenssoro, los aymaras y los quechuas votaban 13 años antes que los padres de ella en Alabama. El doctor Paz vivió fuera del país de 1964 a 1985, 21 años, con un pequeño intervalo. No lo utilizamos en la época más productiva de un estadista. Por eso duelen ciertas cosas que hace este Gobierno: que a nosotros, seres normales, nos insulten y nos enjuicien no es tan importante, pero, ¿por qué sacar el busto del doctor Paz Estenssoro del Congreso? Eso duele mucho más.

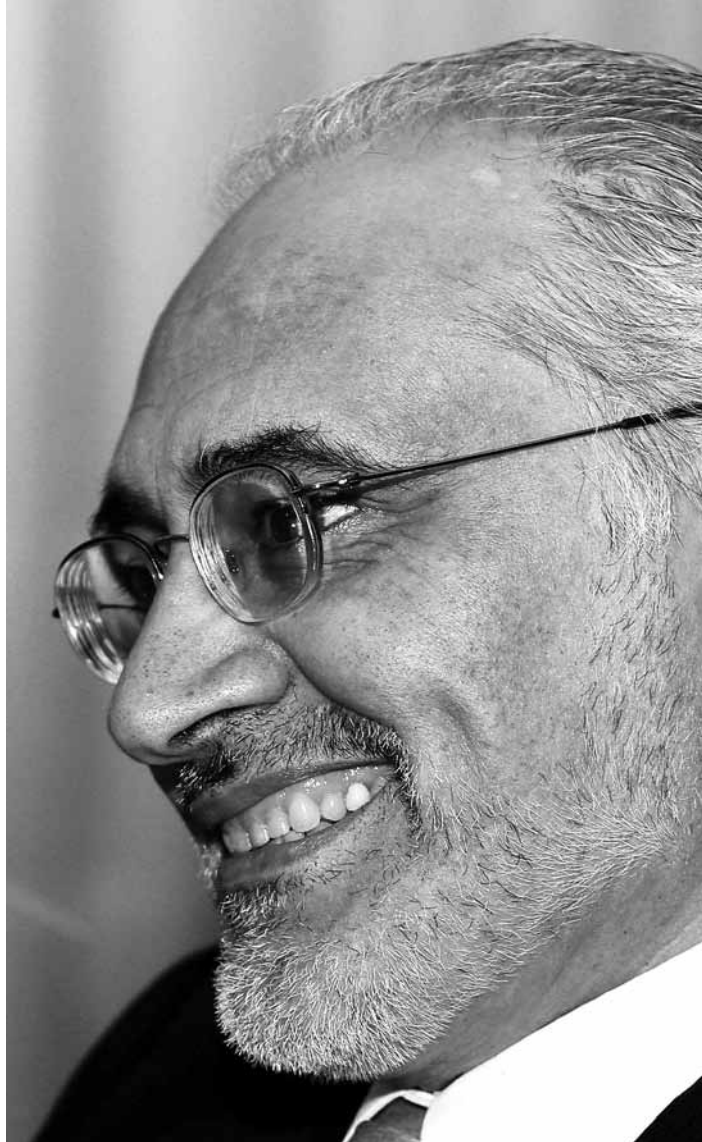
Carlos D. Mesa

“Muestras quién eres cuando tienes poder”

JUAN CARLOS SALAZAR

Carlos Diego Mesa Gisbert vivió tres décadas de democracia desde las múltiples facetas de su formación, experiencia y personalidad. Como cronista, libreta en mano, cuando los tanques del general Alberto Natusch Busch entraban a la plaza Murillo durante el sangriento golpe de Todos Santos, y como protagonista privilegiado, desde el Palacio Quemado, donde vio las “miserias de la política” en carne viva. Periodista, historiador, escritor y político, el hombre de la “presidencia sitiada” no tiene ninguna duda a la hora del balance histórico: “Creo que debemos sentirnos orgullosos como país de estos 30 años de democracia, con sus luces, con sus sombras, con momentos terribles, pero también con momentos espléndidos”.

Cineasta y cinéfilo al fin, resume el período democrático en una secuencia cinematográfica. Primera imagen: Banzer abandona el Palacio entre lágrimas, que es “el momento en que se



PERFIL

Nació en 1953 en La Paz. Es historiador y periodista. Fue subdirector del periódico Última Hora y director de los canales 6 América Televisión y 2 Telesistema Boliviano. Fue fundador y director de Periodistas Asociados de Televisión (PAT). Ganó las elecciones generales de 2002 como candidato a la Vicepresidencia junto a Sánchez de Lozada. Fue elegido Vicepresidente de la República por el Congreso para el período 2002- 2007. Ante la renuncia de Sánchez de Lozada, asumió el mando el 17 de octubre de 2003 y renunció al cargo el 6 de junio de 2005.

abre el telón del proceso histórico”; segunda imagen: una manifestación en San Francisco con un “inflamado discurso” de Jaime Paz Zamora, “levantando una naranja y diciendo que el color del país es naranja”; tercera imagen: Marcelo Quiroga en el Parlamento, enfrentándose a la dictadura de Banzer, que es “el ejercicio de su propia condena de muerte”; cuarta imagen: los tanques delante del Palacio Legislativo, con muchachos adolescentes, casi niños, armados con palos, enfrentando a los golpistas; quinta imagen: Luis Arce Gómez, con la amenaza del “testamento bajo el brazo” y la imagen fundida de los obreros destruyendo a pico y pala el edificio de la COB; sexta imagen: Hernán Siles Zuazo bajando del avión en medio de la lluvia para asumir la Presidencia.

Carlos Mesa tenía 11 años cuando el general René Barrientos Ortuño derrocó al presidente Víctor Paz Estensoro, el 4 de noviembre de 1964, pero recuerda a su madre, Teresa Gisbert, afanada en cubrir las ventanas de la casa con colchones para proteger a sus moradores de las balas perdidas, y la siluetas recortadas de los aviones Mustang sobre el Laikakota mientras ametrallaban las posiciones de las milicias movimientistas. “Ésa es una imagen que aparece como un fogonazo en mi mente. Veías claramente el Mustang y escuchabas el ruido de los disparos, que uno pensaba que eran bombas, pero no, eran las ametralladoras”, rememora a casi 50 años de distancia.

El golpe del general Barrientos Ortuño no sólo puso fin al “doble

sexenio” de la Revolución Nacional (1952-64), sino que inauguró el “triple sexenio militar” (1964-82), con sus dictadores fascistas y generales progresistas, en una secuencia que terminaría con el restablecimiento de la democracia el 10 de octubre de 1982.

Mesa ya era periodista, corresponsal del Diario 16 de Madrid, cuando Natusch Busch lanzó sus tanques contra el gobierno interino de Wálter Guevara Arce, el 1 de noviembre de 1979, en vísperas de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). “Las ametralladores disparaban al aire. Entonces tú veías los fogonazos en la noche, una cosa absolutamente surrealista”, es la imagen que guarda de ese “golpe su-



rralista” de Todos Santos. Recuerda también el despliegue de los tanques, en actitud provocadora, frente al Palacio Legislativo, y a los militares disparando en la avenida 16 de Julio contra cientos de jóvenes manifestantes que lanzaban gritos contra los golpistas.

Otra imagen salta a su memoria al evocar el sangriento golpe de Luis García Meza. “¿Quién puede olvidar la telenovela *Rosa de lejos*, que teníamos que ver obligatoriamente todos los bolivianos?”, se pregunta. “Tú sabías exactamente que habías llegado a tiempo a tu casa, a las nueve de la noche, porque el Canal 7 empezaba a transmitir la telenovela, que era la señal del último punto horario, la hora del toque de queda. Si tú no habías llegado, tu familia se podía empezar a preocupar”.

Mesa trabajaba en radio Cristal cuando los paramilitares asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) y asesinaron a Marcelo Quiroga Santa Cruz, en el inicio del golpe del 17 de julio de 1980. A partir de entonces, recuerda, la radio se convirtió en “un escenario imposible”, debido a que los militares impusieron una cadena nacional en sustitución de los informativos radiales. Mario Castro, el director, le dijo: “Bueno, lamentablemente no podemos hacer el noticiero, pero tú estás contratado en la radio, así que invéntate un programa”. Y así lo hizo. Durante un año y medio realizó *Posdata*, un programa de música, en el que pasaba a Serrat, a los Beatles, etc. Mesa no había sufrido el exilio, como otros periodistas, ya que no estaba vinculado a la política, pero aun así

recuerda el “ambiente absolutamente tenso y pesado” de esos momentos.

De esa época guarda en la memoria “dos episodios periodísticos duros”, la famosa declaración de Arce Gómez sobre el “testamento bajo el brazo”, y una “imagen terrible”, la presentación de Juan Lechín y Simón Reyes en la televisión, cuando Arce Gómez los mostró y humilló para desmentir un rumor sobre su muerte.

Mesa admite que tiene la cabeza “demasiado contaminada con imágenes” porque ha hecho muchos documentales históricos y se los conoce de memoria, pero dice que cuando piensa en la dictadura la primera imagen que le viene a la mente, tal vez por su repercusión, es la de “un hombre torvo, un rostro torvo”, Arce Gómez en pantalla, “amenazando a los opositores con que no tendrán perdón, y advirtiendo a todos los bolivianos con que deberán ir con su testamento bajo el brazo”.

Tampoco olvida cuando García Meza celebró su primer año de gobierno, el 17 de julio de 1981, y afirmó en una concentración que él quería dejar el poder, pero que no lo dejaban, y como le pedían que se quedara, no tenía más remedio que hacerlo. Fue cuando un dirigente de los transportistas le preguntó a gritos: ¡general, por qué no nos das las medidas de tus pantalones! Es decir, ¡cuántos huevos tienes!

“La dictadura de Banzer tiene unas características brutales, pero hay detrás un proyecto histórico. Ésa es la diferencia. El proceso de quiebra, con la salida de Banzer, que abre los cua-

tro años de mayor inestabilidad política de nuestra historia, de 1978 a 1982, muestra la falta de rumbo de una democracia que busca desesperadamente un camino, unos líderes políticos que probablemente no están a la altura del desafío, a pesar de ser las figuras que fueron, porque ahí están Siles Zuazo, Paz Estenssoro, Guevara Arze, etc., más la juventud del MIR. Y el núcleo militar que perdió completamente el rumbo”, resume Mesa al comentar ese dramático período.

“Es decir –agrega–, ahí no hay proyecto histórico; ahí hay un proyecto de poder duro y puro que termina absolutamente entregado al narcotráfico y la corrupción. La dictadura de Banzer, en cierto sentido, es más brutal porque es un proyecto histórico, porque tiene un sentido histórico (...). En el caso del proceso de transición, tú tienes un grupo de generales sin ningún tipo de convicción que no sea la permanencia en el poder y que terminan como terminan, con la brutalidad de la alianza de García Meza con la dictadura argentina y la acción terrible desde la muerte de Marcelo Quiroga, los paramilitares, los torturadores argentinos, es decir, todo ese mecanismo sórdido que afortunadamente no llega a las cotas que vivió Argentina, pero que tuvieron un período inicial brutal, desde la muerte de Marcelo más todo lo que pasó en las caballerizas del Gran Cuartel General de Miraflores”.

Entre el derrocamiento de Banzer en 1978 y el restablecimiento de la democracia en 1982, Bolivia sufrió la seguidilla de seis gobiernos

militares –Juan Pereda Asbún, Natusch Busch, David Padilla Arancibia, García Meza, Celso Torrelio Villa y Guido Vildoso Calderón– y los interinatos de dos civiles, Wálter Guevara Arce y Lydia Gueiler, resultado de la reticencia de los militares a aceptar un gobierno izquierdista (Unidad Democrática y Popular) y de la incapacidad de las fuerzas políticas de la época para definir la elección presidencial en el Congreso. En el ínterin, los bolivianos acudieron tres veces a las urnas.

Mesa recuerda por quién voto en cada elección. En la primera, en 1978, por Siles Zuazo. “Sin ninguna duda, había que derrotar a la dictadura, y Siles Zuazo era la esperanza”. Era la época en que Mesa se sentía “muy próximo a la gente del MIR”, aunque nunca militó en esa partido ni en ningún otro. En 1979 lo hizo por Paz Estenssoro, por quien sentía una gran admiración (“la figura de Paz Estenssoro me fascinó desde niño, por alguna rara y extraña razón. Y ésa fue probablemente la razón por la que yo no me hice militante del MIR”). Pero en 1980 no votó por el líder histórico del MNR, porque “era muy difícil creer que Paz Estenssoro no hubiera estado vinculado con el golpe de Natusch”. Entonces, en esa tercera elección, que al final fue la que valió, votó nuevamente por Siles Zuazo.

Por entonces, el periodista, historiador, escritor y testigo del difícil parto democrático boliviano no imaginaba que algún día se convertiría en protagonista de ese mismo proceso. Admite que la oferta que le hizo Sán-



chez de Lozada para que lo acompañara en el binomio presidencial no fue la primera tentación política. Fue Paz Estenssoro quien le ofreció el Ministerio de Información en 1986, cuando sustituyó a Guillermo Bedregal por Sánchez de Lozada en el Ministerio de Planeamiento para hacer frente a una nueva amenaza inflacionaria.

“Yo tenía entonces 33 años. A mí me honró (con la invitación). Yo tenía una profunda admiración por Paz Estenssoro. Lo pensé profundamente y dije ‘no estoy preparado, es decir, no creo tener la capacidad ni la experiencia como para poder cumplir una obligación de esta naturaleza’. Estaba además yo naciendo en la televisión

(...). Y le mandé una carta a Paz Estenssoro rechazando la invitación en los términos más conceptuosos (...). Ésa fue la primera invitación que yo tuve para participar en política y no me arrepiento porque creo que hice lo correcto”, recuerda.

A fines de 2001, el politólogo Jorge Lazarte lo tentó con un razonamiento político que Mesa reconoce hoy que era correcto. “Lazarte me dijo: ‘mira Carlos, el sistema político está agotado, los partidos políticos están llegando a un punto de no retorno, es necesaria una renovación generacional, la creación de una estructura política nueva y creo que la persona que puede encarnar eso eres

tú””. Mesa rechazó la oferta, no porque estuviera en desacuerdo con el razonamiento, sino porque simplemente no quería entrar en política. Tres meses después, en enero de 2002, llegó Sánchez de Lozada. Y la tercera fue la vencida.

Hoy se pregunta por qué dijo no a “la mejor opción, a la opción que tenía más sentido histórico”, y por qué dijo sí a “una opción que estaba condenada al desastre”. Y admite que fue víctima de su visión de historiador y de su propia inexperiencia e ingenuidad política, al pensar que podía cambiar y renovar un partido como el MNR desde dentro. “Y como no estás en política, tú crees algo que es absurdo, que las cosas pueden cambiar desde el punto de vista ético, del comportamiento, de construcción, desde dentro. Visto lo visto y ahora que sé lo que es la política en su más descarnada acepción, puedo decir que no”.

Dice que haber sido presidente de la República ha sido un privilegio que nunca dejará de agradecer, pero que desde el punto de vista del análisis frío, aceptar la candidatura de Sánchez de Lozada fue una “lectura equivocada”, aunque no por las consecuencias que le tocó vivir posteriormente en la Presidencia. “Sánchez de Lozada estaba agotado como propuesta política, representaba generacionalmente un punto de quiebre que Tuto (Quiroga) había marcado y se había identificado con lo más negativo del proceso político de los años 90. Entonces, la pretensión de que se podía renovar el partido era absurda porque además el partido había sido capturado por sectores tan

duros como el de Carlos Sánchez Berzaín”, admite en su autocrítica.

Con la mirada hacia atrás, Mesa ve hechos luces y sombras en el proceso democrático. Y lo hace a partir de un punto clave: Hernán Siles Zuazo es “el fundador de la democracia desde la perspectiva del respeto a la libertad en el más pleno sentido de la palabra y el respeto a los derechos humanos en su gobierno democrático”. Y apunta como un segundo hito, positivo y negativo al mismo tiempo: el Decreto 21060, que a su juicio retrata a Víctor Paz Estenssoro en el “momento de mayor consolidación de un estadista en la historia del país”, porque es, además, el “momento del sacrificio de todo su pasado histórico”.

“Es una decisión muy dura y es un paso atrás —explica— porque el costo social para el conjunto de lo que fue el país el 52 es brutal. Ahí se hunde el 52. Paz salva la economía del país y lo encamina a un futuro con ciertas perspectivas, pero hunde lo que había sido uno de los momentos épicos más extraordinarios de nuestra historia, el 52”.

Luego menciona otros dos pasos adelante dentro del período democrático. El primero, la Participación Popular, la Reforma Educativa y la Ley INRA. “No hay Evo Morales sin ese paquete de reformas estructurales profundamente revolucionarias en el mejor sentido de la palabra del primer gobierno de Sánchez de Lozada”. Y el otro, el “elemento simbólico que representa Evo Morales al ser primer presidente indígena de la historia”. Como otro paso atrás, cita “la incom-

presión de los líderes democráticos de que se había producido un divorcio muy fuerte entre el triángulo MIR-MNR-ADN y la base de la sociedad boliviana”, de unos partidos que “no se dan cuenta de que el barco se está hundiendo”. Y, en este contexto, la “esquizofrenia de un sistema político que cree que puede permanecer indefinidamente con alianzas parlamentarias, más o menos inteligentes, pero que no son capaces de comprender esa presión popular”

Siete años después de haber dejado la Presidencia de la República, Mesa admite que la visión que tenía de la democracia desde la calle era muy diferente a la que tuvo posteriormente desde el Palacio Quemado. “Yo aprendí de las miserias de la política desde dentro del Palacio de Gobierno muy, muy intensamente”, dice.

“Descubrí que la política revela a los seres humanos en lo que realmente son. Tú no muestras quién eres hasta que no tienes poder. Cuando tú tienes poder, ahí verdaderamente se prueba si tú eres un hombre honesto, un hombre comprometido, si eres un taimado, si eres un “doble cara” o no. Y pruebas si realmente eres un político de sangre. La sangre del político debe estar vinculada al poder como

elemento central. Un conocido político boliviano dice algo que me parece que es elemental, terrible, brutal. La política sólo tiene dos objetivos: tomar el poder, es el primero; quedarse en el poder, es el segundo. Lo demás es literatura”.

Mesa valora muchísimo los 30 años de democracia y le parece de una “injusticia flagrante, inaceptable” la lógica del gobierno de Evo Morales de “descalificar el pasado”, como lo hace, en una actitud “típica de gobiernos que creen que son el año cero de la revolución”.

“Creo que debemos sentirnos orgullosos como país de estos 30 años de democracia, con luces, con sombras, con momentos terribles, pero con momentos espléndidos también”, sostiene. “En suma, entendiendo las miserias de la política que son muchas; creo que hay grandeza en la política boliviana y creo que hemos desarrollado 30 años de política en un país complejo con unos antecedentes de inestabilidad crónica graves y hemos demostrado que en los peores momentos, uno de los cuales me tocó vivir a mí, fuimos capaces de sortear los escollos, limitando dentro de lo posible una violencia desmesurada”, concluye.

Eduardo Rodríguez Veltzé

“La democracia hizo muy poco por la justicia”

GROVER YAPURA

Los títulos que ha acumulado Eduardo Rodríguez Veltzé no afectan al abogado que, día tras día, hoy está ocupado dirigiendo la formación de nuevas generaciones de juristas bolivianos.

Su desempeño profesional le llevó a la Contraloría General y de ahí a la Corte Suprema de Justicia. Fue presidente del Tribunal Supremo y el destino de la historia le convirtió en el hombre de la transición histórica más importante de la democracia. Fue el último Presidente de la República de Bolivia, pero, quizás por su activismo constitucional, fue el primero en poner las bases para el nuevo Estado.

Hoy, desde su despacho de director de la carrera de Derecho de la Universidad Católica Boliviana, en La Paz, hace un repaso de la democracia, con una mirada diferente: la del jurista.

P. ¿Qué evoca cuando oye la palabra democracia?

R. Varias cosas a la vez. Una generación de bolivianos que cumplió un cometido extraordinario: vivimos



PERFIL

Nació en Cochabamba el 2 de marzo de 1956. Abogado de profesión. En 1999, tras una destacada carrera en la Contraloría de la República, fue postulado a la primera elección de magistrados del máximo tribunal por dos tercios de voto. El 9 de junio de 2005, desde el Poder Judicial, tuvo que asumir el mando de la nación en una de las crisis políticas más profundas. Es el Presidente de la transición. Dirigió las elecciones generales de ese año y entregó el poder a Evo Morales, en enero de 2006, cuando se inició un viraje histórico del país.

una fracción de la dictadura y hemos recuperado, madurado y consolidado la democracia; esto es obra de una generación más que de quienes se apegan a una línea ideológica. Somos una generación que apostamos por las libertades, la tolerancia. Eso es maravilloso. Evoco un conjunto de instituciones para los ciudadanos. Y tercero, la democracia me hace evocar libertad y justicia.

En libertad, avanzamos extraordinariamente. Los ciudadanos no solamente votamos, también opinamos. Hoy puede haber algunos resquemores, pero ésta es una característica de los 30 años. Y en justicia, tenemos muchísimo por andar, la buena noticia es que la democracia está de pie y que podemos y debemos construir instituciones justas, en el concepto de que todos debemos sentirnos iguales ante la ley.

P. ¿Qué experiencia personal puede compartir de su participación en la recuperación de la democracia?

R. Después de terminar mis estudios, trabajé en la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial de la Cámara de Diputados, aquí en La Paz. Fui funcionario auxiliar y en la comisión había un caso muy grande: el juicio al ex presidente Hugo Banzer. Estoy hablando de 1979, de los meses en que hubo democracia, hablo de Wálter Guevara y Lydia Gueiler. Era un entusiasta egresado de Derecho, pero vi con enorme preocupación cómo los esfuerzos democráticos del pueblo chocaban con los golpes militares de

Natusch Busch y García Meza. Fui protagonista de segunda línea de la lucha democrática en esos momentos violentos y tremendamente frustrantes: la democracia pudo haber sido recuperada en 1979, pero hubo una sucesión de golpes militares. Luego sobrevinieron otras experiencias, de mayor realización ciudadana.

P. ¿El entusiasmo del egresado por alentar el juicio a Banzer se frenó con la realidad del golpismo?

R. Así es, fue frustrante. El juicio fue un detonante para que el proceso democrático no avanzara. Hubo contingencias políticas que alentaron a los movimientos militares a alterar el orden democrático. Yo estaba en el lado del juzgador, en el Congreso, que mediante la comisión había empezado con las primeras diligencias. Y desde allí trabajaba en mi tesis sobre ese tema, que sólo la pude concluir un par de años más tarde.

P. ¿Cómo se ve la democracia desde la administración de la justicia?

R. Es una pregunta fundamental, porque hay la tentación de asociar a la democracia con la justicia, pero sólo en los grandes casos, como el juicio a Banzer o de aquellos que ocupan a los medios, juicios políticos que llenan las páginas. Prefiero ver la democracia a partir del ejercicio de los derechos ciudadanos, el ejercicio del rol del Estado, que debe permitir condiciones básicas de convivencia, de justicia, de igualdad en el ejercicio de los derechos ciudadanos frente a la ley. El sistema

judicial debe contribuir a la convivencia pacífica de las personas; en cualquier sociedad hay conflictos que no pueden resolverse entre las partes y entonces se acude a un juez. Sólo para tener una idea, el año 2005, el sistema judicial boliviano revelaba que poco más de medio millón de ciudadanos buscan resolver sus problemas en la justicia. Es un nivel muy alto de litigiosidad.

En el ámbito interpersonal, hay una larga tradición de solución de conflictos; la proporción más alta de casos resueltos tiene que ver con los particulares y la mayor proporción de casos resueltos no es el de la justicia penal, sino los casos relativos al patrimonio, las sucesiones, la familia, divorcios, las deudas, temas comerciales. Por otro lado, está la dimensión de la relación del boliviano con el Estado, mediante el municipio, el ministerio, la

Gobernación, el Ejecutivo, con el cual tiene asuntos. Acá tenemos un déficit de justicia monumental; gran parte de la conflictividad diaria que tenemos, con expresiones violentas de protesta, se debe al escasísimo desarrollo de relaciones entre ciudadanos y el Estado. En buenas cuentas, tenemos grandes preguntas y grandes desafíos para encarar el sistema judicial; hay un largo camino por recorrer.

P. ¿Qué hizo la democracia por mejorar el sistema judicial y qué hizo el sistema judicial por la democracia?

R. Empezaría por la pregunta de qué hizo la democracia por mejorar la justicia. Hizo relativamente poco y fue mucho menos que lo que hizo por el sistema legislativo o por el sistema electoral. En 30 años se dieron avances extraordinarios en pluralidad



e inclusión política, pero en materia de justicia se hizo muy poco. Por ejemplo: el gran paquete de normas es anacrónico, en 30 años no hemos sido capaces de transformar la legislación Banzer que reemplazó la legislación de Santa Cruz. Los dos grandes momentos codificadores no tuvieron un reemplazo; se hizo poco, salvo en el sistema penal procesal, que ya ha recibido modificaciones.

Ahora bien, tenemos que destacar que la nueva Constitución introdujo el concepto de pluralismo jurídico y, claro, llama la atención que una persona

“

Gran parte de la conflictividad diaria que tenemos hoy, con expresiones violentas de protesta, se debe al escasísimo desarrollo de relaciones entre ciudadanos y el Estado. Hay un déficit monumental de justicia.”

como yo, formada en el sistema liberal y positivo, lo destaque; lo hago porque precisamente me desarrollé en ese sistema. Hoy encuentro que la transformación debe ser estructural, que la transformación debe llegar a la concepción normativa. No podemos seguir viviendo en un sistema conservador. Debemos transformar la justicia de un país que interna y externamente despliega sus relaciones en múltiples fuentes normativas, ya no es sólo un marco vertical.

Me inspira la idea de que el pluralismo puede transformar la justicia,

la forma de ejercer el derecho; sin embargo, obviamente las señales que se dan con la elección de autoridades, restan la legitimidad. Todavía la política está muy presente en la conformación de los órganos judiciales.

Ahora qué hizo la justicia por la democracia: muchísimo, sobre todo resolviendo muchos problemas en los tribunales. El número de gente que va a los tribunales es mucho mayor; los ciudadanos se empoderaron de los derechos y reclaman más a las instituciones a partir de sus relaciones cotidianas.

El año 1999, como resultado de la reforma constitucional del 94, fue posible la elección de magistrados por dos tercios, lo que alteró definitivamente la composición de los altos cargos del Poder Judicial. La deliberación parlamentaria configuró la primera Corte Suprema, que cualitativamente era muy diferente a las anteriores; era un avance extraordinario. Cuando asumí el cargo de magistrado, dije algo válido incluso para hoy: lo importante no está en la legitimidad del nombramiento sino en la legitimidad de sus fallos. Si los políticos me eligen a mí, eso no me convierte en político. Lo mismo puedo decir del presente, lo importante son los fallos, que el desempeño sea correspondiente a la norma que va a aplicar y a su conciencia.

Algo importante: los medios y los políticos no contribuyen a que los ciudadanos crean en la justicia, porque repiten que todos han sido cuoteados, que son de tal o cual partido, pero no examinan el desempeño de los jueces,

no revisan su conducta. En esta línea, el activismo fue muy importante para la creación del Tribunal Constitucional, como fueron importantes los fallos de la justicia ordinaria, como ese que obligó a una cervecera a pagar los tributos que debía.

La justicia ordinaria tomó decisiones importantes, pero no fueron visibilizadas, a pesar de su importancia. Hubo y hay fallos sobre la cuestión laboral o tributaria, pero su cooperación más visible fue en la crisis del año 2005, cuando el sistema político desde el Legislativo y desde el Ejecutivo se autodescalificó mediante renunciaciones o designaciones.

Entonces, tomamos el desafío de sostener la democracia en un periodo de siete meses, con gravísimas dificultades porque ni el Legislativo ni Ejecutivo tomaron la transición con responsabilidad, hubo mucha susceptibilidad de los actores hacia el personaje del sistema judicial. La transición fue compleja, pero el sistema judicial se mantuvo independiente.

P. ¿En algún momento el Poder Judicial dudó en asumir la responsabilidad?

R. No, lo que pasa es que teníamos un contexto más amplio. El Poder Judicial se encontraba en un esfuerzo institucional muy fuerte para la reforma institucional, era la aproximación inicial a la justicia plural. Desde nuestro activismo veíamos un proceso inminente de renovación constitucional constituyente, lo que no fue suficientemente considerado por el poder político. Todas las divergencias entre

el Legislativo y el Ejecutivo eran más importantes que el proceso constituyente y la Corte Suprema se encontraba en la mediterránea Sucre. Lamentábamos las secuencias políticas, pero era claro que había un proceso inminente.

El sistema judicial siempre tuvo poco poder político. Cuando se produjo la crisis, el 9 de junio de 2004, recibí el más grande respaldo, pero duró poco porque algunos magistrados desafiaron la legalidad de mi derecho de retornar a la Corte. Incluso llegaron a hacer una consulta al Tribunal Constitucional, en una actitud mezquina y poco oportuna. El Tribunal Constitucional decidió que el ejercicio de la presidencia no representaba una renuncia, pero mi retorno fue muy ingrato, porque ese grupo de magistrados, encabezados por el doctor Sandóval, decidió hacerme la vida no grata. Ahí quedó ese Poder Judicial, que acabó desintegrado por aspiraciones individuales y arremetidas políticas con el nuevo Gobierno, la reducción de salarios y juicios. El protagonismo que tuvimos en la crisis del 2005 se vio deslucido por aspiraciones personales y la vorágine política acabó desmantelando el sistema judicial.

P. ¿Cuáles han sido los valores positivos de su gestión como Presidente de la República?

R. Hubo algunos muy significativos y uno de ellos fue el régimen de hidrocarburos. A mi juicio, la verdadera nacionalización de los hidrocarburos se dio con la Ley 3058, que fue promulgada por Hormando Vaca Díez.

En rigor, los recursos naturales siempre fueron del Estado, en la Constitución de 1967 como en la actual; claro, había condiciones diferentes sobre explotación o exploración. El punto de quiebre ha sido esa ley. Cuando me hice cargo de la Presidencia, la ley estaba vigente, pero no en ejecución, me tocó ejecutarla en la etapa más crítica, transformar el régimen de cobranzas.

En mi gobierno aprobamos más de una treintena de decretos y los ingresos se multiplicaron en 400%. Hubo una multiplicación de ingresos del IDH, que provocaron contingencias muy críticas, todas las instituciones públicas querían tener una mayor participación. En ese contexto trabajamos en un diálogo muy complejo para la redistribución de la torta. En esto, debo mencionar algo que nunca se visibilizó mucho: nos pusimos de acuerdo con las naciones indígena-origina-

rias para una asignación porcentual del IDH. Si hay algo que puede distinguirse como un hecho importante fue el acuerdo después de la Ley 3058, el verdadero factor nacionalizador.

En mi despacho recibí las notificaciones de demandas internacionales de todas las empresas petroleras que operaban en el país, desde Petrobras. Todas acudieron ante tribunales arbitrales internacionales y como Gobierno lo reportamos al Poder Legislativo. Estábamos imposibilitados de actuar, era necesario que las asuma el nuevo Gobierno, que fue el que acabó renegociando y firmando nuevos contratos.

P. ¿Qué respaldo recibió usted cuando el sistema político estaba caído?

R. Ninguno, cuando llegué a La Paz sólo contaba con el apoyo de quien era secretario general de la



Corte y quien se hizo ministro de la Presidencia, Iván Avilés, un gran colaborador. Recibimos un aparato gubernamental que no acababa de pasar la sorpresa de que había terminado su gestión por la renuncia del Presidente. No pensaban que se había originado la transición como ocurrió.

P. ¿A qué se refiere?

R. Estimo que hubo sorpresas en algunos actores políticos, ellos no pensaban que el presidente de la Corte iba a asumir la Presidencia. En algunos sitios se comentó que la renuncia iba a ser retirada.

P. ¿La de Carlos Mesa?

R. Sí, pero obviamente no desarrollé ningún tipo de polémica. A mí me tocó hacer lo que me tocó hacer, pero no fue una transición amigable; por ejemplo, en la entrega de despachos e información. Sin embargo, yo no estaba en ánimo de entrar en controversia, sino en conformar un equipo de apoyo, que fue muy difícil. Hubo gente que no se sumó porque decía que este Gobierno era muy débil y tenía muy poco tiempo. Por eso agradezco el extraordinario respaldo de quienes me apoyaron, pese a las gravísimas dificultades. Fue capital recuperar el sentido de la confianza y entendimiento con el Legislativo. No fueron tiempos fáciles, luego sobrevino la crisis de la asignación de escaños, que me llevó prácticamente a una renuncia.

El Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la ley de convocatoria a las elecciones generales, con el argumento de que no consideraba los resultados del censo 2001 para la dis-

tribución de escaños en los comicios 2005, cosa que no hizo para las elecciones de 2001. Entonces, se desató una crisis que pudo convertirse en la oportunidad para replantear la construcción del país.

Desde el 1 de septiembre (2005) buscamos generar un nuevo momento; dijimos que si no hay un acuerdo entre los actores políticos, se daba lugar a mi renuncia. Fue el tiempo más crítico. En el curso de la semana hubo reuniones y hubo una voluntad política, como no había ocurrido antes, para un acuerdo que permitió elección



En 30 años se dieron avances extraordinarios en mayor pluralidad e inclusión política, pero en materia de justicia se hizo muy poco. Los dos grandes momentos codificadores (Santa Cruz y Banzer) no fueron reemplazados.”

nes prácticas.

Fue una lección muy importante. El Tribunal Constitucional no puede ser el único intérprete de la CPE, el Legislativo debe tener la capacidad de resolver los problemas. Es decir, el modelo español, europeo no funciona. El Congreso debe tener la capacidad de interpretar la Constitución.

P. ¿Usted tuvo la tentación de quedarse en el poder?

R. No, al contrario. Me resistí a las ofertas de algunos movimientos polí-

//

Algo importante: los medios y los políticos no contribuyen a que los ciudadanos crean en la justicia, porque repiten que todos han sido cuoteados, que son de tal o cual partido, pero no examinan el desempeño de los jueces, no revisan su conducta.”

ticos frente a la crisis, me sugirieron que expanda mi mandato hasta el año 2007, me dijeron que podía llevar adelante el proceso constituyente. Mi posición definitiva fue negativa, yo debía llevar adelante únicamente las elecciones, que en rigor debería ser elección de Presidente y Vicepresidente, pero como resultado de un gran acuerdo político, se hizo una enmienda constitucional, que dio paso a las elecciones generales, incluyendo a senadores y diputados y, por primera vez, de prefectos, a partir de una interpretación de la Constitución. Además, se definió la realización de los referendos autonómicos y se puso la semilla de la Asamblea Constituyente. No cabía

en mí el mínimo interés de expandir el mandato.

P. ¿Cómo le ha reconocido el país?

R. Hay dos dimensiones: Una es la negativa y la otra, la más importante, la positiva. Cuando retorné a Sucre, como presidente de la Corte Suprema, encontré una actitud negativa y al poco tiempo me instalaron un juicio de responsabilidades, por el delito más grave por el cual se puede acusar a un boliviano: traición a la patria. Por eso decidí renunciar, me alejé del cargo por ética y me tomó prácticamente seis años lograr que me escuchen. Los partidos y los fiscales me negaron el derecho de declarar, pero afortunadamente el Congreso me escuchó y me excluyó del caso (misiles chinos). Fue un juicio muy duro. Por otro lado, ser presidente no representa ningún privilegio. Sin embargo, lo positivo es que tuve el privilegio de haber servido a la patria, con la convicción de haberlo hecho con conciencia. Puedo caminar de frente con enorme satisfacción y seguir compartiendo.

Evo Morales Ayma

“En temas
de servicios
básicos tenemos
un control
total del Estado”

RAÚL PEÑARANDA,
JAVIER VISCARRA, CÁNDIDO
TANCARA Y FERNANDO MOLINA
PÁGINA SIETE /
LA PAZ - 01/05/2011

No fue posible entrevistar al presidente Evo Morales para la edición del presente texto. El Presidente no se negó. En realidad, los intentos de realizar una entrevista para conocer su evaluación de estas tres décadas de democracia, de las cuales fue y es activo protagonista, nunca fueron respondidos. No quisimos, sin embargo, dejar en blanco las páginas que él ha escrito en este pedazo de historia, por ello recurrimos a reeditar la última entrevista que sostuvo con Página Siete, en mayo de 2011, y extraer algunas de sus opiniones más destacadas emitidas en sus discursos.



PERFIL

Nació en Orinoca (Oruro), el 26 de octubre de 1959. Sus primeros años los combinó con las tareas de labranza y pastoreo. En los 80 se traslada al Chapare, donde inicia su vida sindical, primero en la cartera de deportes, donde se lo conocía como “el joven pelotero”. De líder sindical salta a diputado nacional y en 2005, con el MAS, gana las elecciones con 53,7%. Asumió su primer período presidencial el 22 de enero de 2006; y el segundo, el 22 de enero de 2010.

Se ha entrevistado a jefes de Estado en sus oficinas, en sus domicilios, en sus aviones, en sus vehículos, en sus casas de veraneo, en sedes de organismos internacionales. Pero es inusual entrevistar a un Presidente en su sala de fisioterapia, mientras recibe asistencia especializada. Y es más inusual todavía que la entrevista se realice a las cinco de la mañana... con el interlocutor en polera y short. Página Siete conversó con el presidente Evo Morales precisamente en esas circunstancias.

El periódico había insistido en lograr una entrevista con Morales pero su recargada agenda impedía que la idea se concretara. Volvió a intentar con ocasión del primer aniversario del periódico, que se cumplió la última semana de abril. El ministro de Comunicación, Iván Canelas, informó el martes 26 que la entrevista se realizaría ese día, a las 16:30, en Palacio de Gobierno.

Al llegar a Palacio, el Presidente nos recibió en uno de los salones, pero informó que tendría menos de media hora para realizar el diálogo porque debía partir casi de inmediato a Tarija. Entonces surgió la posibilidad de llevar adelante la entrevista al día siguiente en la residencia presidencial. “¿Quieren madrugar?”, preguntó el Presidente. “Podemos empezar mientras me hacen la fisioterapia, los espero a las cinco de la mañana y luego desayunamos. ¿Una hora y media estará bien?”. Sí, obviamente.

A la hora convenida, el mismo equipo de periodistas llegó a la residencia. El Presidente, echado en una camilla, ya era atendido por su fisioterapeuta. Nuevos saludos de rigor y

el diálogo empezó. La primera media hora sería dedicada a preguntas sobre su vida y los 60 minutos restantes a temas de actualidad política, social y económica. Cuando alrededor de las 5:45 la sesión médica terminó, el Presidente y los periodistas se trasladaron a una sala contigua, donde fue servido un poco después el desayuno. A las 6:30, el ministro Canelas le recordó al Presidente que debía trasladarse a Palacio para dirigir la reunión de gabinete. A las siete de la mañana, tras dos horas de valioso diálogo, terminó la conversación.

P. Una vez enterrado el 21060, ¿Bolivia se encaminará hacia el socialismo?

R. El 21060 está muerto. En temas de servicios básicos el agua es ahora un derecho humano, tenemos un control total del Estado; en las tarifas de ENTEL bajamos los costos, en la electricidad igual, con la “tarifa dignidad”. Lo que queda, y yo lo dije hace unos dos años, son algunas leyes, como las de minería, forestal y otras.

Me dirán ustedes, ¿por qué no lo hizo en una primera gestión? Porque entonces no teníamos mayoría en el Senado y el año pasado la Asamblea Plurinacional tenía la responsabilidad de apoyar las leyes orgánicas por mandato del pueblo. No había mucho tiempo, pero ya llegó la hora y está en nuestros planes aprobar esas leyes, como decimos, para enterrar el 21060.

P. Presidente, ¿habrá libertad de mercados? En el oficialismo hay quienes dicen que no debería haber libertad de mercados.

R. ¿Cuándo el Estado, especialmente en productos agropecuarios o los minerales, incluso el petróleo, tenía un control total? Eso siempre ha sido regulado por el mercado.

Nuestras luchas, durante los 20 años de gobiernos neoliberales, eran contra la libre importación, bloqueábamos caminos contra la libre importación y recordarán ustedes que los empresarios, los agroindustriales en Santa Cruz, también bloqueaban caminos pidiendo que se garantice el precio en el mercado para sus productos agropecuarios.

Eso qué me hace pensar, que antes nuestros productos agrícolas eran más caros aquí, mientras que en los países vecinos, que además tenían una producción mecanizada, eran más baratos que en Bolivia.

En nuestro debate con el Vicepresidente sobre la zafra, hace unos pocos días yo decía -no sé si estoy equivocado- que el precio no puede bajar a cuatro o cinco bolivianos por kilo de azúcar, pues en Perú está a nueve bolivianos y en otros países hasta en diez bolivianos, y entonces otra vez el azúcar se va a ir de contrabando.

Siempre el mercado nivelará, regulará los precios en petróleo, en minerales, etc., pero en servicios básicos estará bajo el control de Estado.

P. ¿Y sobre la posibilidad de que Bolivia se encamine hacia el socialismo?

R. ¿Qué entiende usted por socialismo?

P. Varios aspectos, el control absoluto del Estado, sobre todo el

proceso productivo, la redistribución de la riqueza de forma igualitaria...

R. Yo entiendo por socialismo que haya igualdad entre la sociedad y para ello debe haber participación del Estado en el tema de producción. Hay otro tema de fondo, nosotros apostamos por la universalidad en temas de salud y educación, pero algunos sectores de la COB no lo quieren.

En algunas minas que eran del Estado antes nosotros queríamos nacionalizarlas, pero los sindicatos de esas minas no quieren.

“¿Son sectores conservadores que no quieren el socialismo?”. Ésa es la pregunta que me hago.

Imagínese el control privado en ENTEL, en electricidad—donde se estaban disparando las tarifas— o agua. ¿Cuánto sería el costo? El Estado tiene ahora el control de los servicios básicos.

P. En el último tiempo se han escuchado estribillos contra usted, que eran usuales contra gobiernos anteriores. ¿Cómo se siente estar ahora al otro lado?

R. Ustedes, creo que no tienen memoria, son periodistas que no se acuerdan. No es la primera vez que sucede, se dio el primer año de mi gobierno, tras el problema entre mineros cooperativistas y mineros nacionalizados en Huanuni. Pedro Montes dijo: “Evo no sirve y debe dejar la presidencia”. Solares y Costas ya pedían el primer año un revocatorio.

También he escuchado estribillos. Un día entraron a plaza Murillo unos

20 ó 30 *traskos* y me gritaron “muestra Evo”, entonces es normal. Ahora bien, es verdad que eso se ha masificado un poco, seamos realistas, pero siempre hubo protestas. Para mí no es una novedad.

Pero eso sí, hay una fuerte infiltración de la derecha en las fuerzas sociales.

P. Usted ha anunciado que se va a construir un museo en Orinoca, su tierra natal, pero han surgido críticas en el sentido de que primero allí hay poca población, que es lejos y que debería usarse ese dinero, por ejemplo, para mejorar el museo de Tiwanaku.

R. Con el museo Tiwanaku y con el programa Bolivia cambia, Evo cumple hemos invertido casi un millón de dólares. ¿Por qué no podemos diversificar centros de visitas pequeños, medianos y grandes? El problema es

que no debemos hacer todo sólo por Tiwanaku, ésa es la verdad. Entonces hay que crear otros centros.

Yo nunca di importancia al turismo y el turismo genera muchos ingresos al país. Entonces el museo de Orinoca está ligado a un circuito turístico de Oruro; si hay un museo de la Revolución Cultural en Orinoca —que va a ser grande por supuesto— el turista seguirá hacia Uyuni.

P. El gran personaje de Orinoca es usted, entonces el hecho de que se ubique ahí, ¿convierte a la iniciativa en un museo a Evo Morales?

R. Primero es un justo reconocimiento a mi tierra, me debo a esa tierra que me ha parido, que me ha criado y educado. Es una responsabilidad. También el Chapare, que me ha educado sindicalmente, políticamente. Allí estamos proyectando un centro de



convenciones.

¿Cómo se me viene esta idea? Yo no soy egoísta, no tengo ninguna ambición ni tengo intereses económicos. Con tal de que no me falte para comer, algo para andar y nada más. Esa es mi educación.

Y tengo tantos regalos y obsequios, casi una casa llena en la ciudad

de Cochabamba y aquí en la 20 de Octubre ya hay dos cuartos llenos de regalos. Algunos muy buenos regalos, de estadistas del exterior, por ejemplo cosas bañadas en oro. En ponchos debe haber unos mil. Entonces digo, ¿dónde voy a dejar todo esto? Ahí viene la idea. Entonces me propusieron ampliarla y ahí está.

Su niñez y el inicio de su carrera política

“Me hubiera gustado ser periodista”

RAÚL PEÑARANDA U.

Un niño indígena pobre, nacido en una zona rural alejada de los principales centros urbanos, que hablaba solamente aymara durante los primeros años de su vida, que perdió a cuatro de sus seis hermanos por enfermedades prevenibles, se convierte primero en un dirigente sindical para luego dedicarse a la política y finalmente llegar a la primera magistratura. No es poco.

Evo es un líder polarizante, a la vez tan carismático como autoritario; tan flexible en algunos temas como rígido en otros, tan agudo para conocer las fibras y matices más escondidas de la nacionalidad como proclive a las generalizaciones y a los preconceptos; y tan hábil para dar un giro completo en sus propuestas como insultar a ex presidentes un día y pedirles apoyo al día siguiente. Será un Presidente que pasará a la historia, el que hizo posible el paso trascendental de incorporar a los indígenas a la toma de decisiones y a la vez el que gobernó desoyendo

sistemáticamente las ideas de sus adversarios.

EL PEOR RECUERDO

“El peor recuerdo de mi niñez debe ser cuando mis tíos o vecinos no tenían comida. Era el año 1971, había una sequía tremenda. Yo tenía 13 años y veía que sólo hacían hervir un tubérculo, el ankañoco, que sale de los arbustos del altiplano, de la tola. Lo golpeaban y lo hacían hervir como su único alimento. Me dolía ver cómo a base de eso vivían”, dice el Presidente echado en su camilla de la residencia presidencial mientras realiza su fisioterapia para terminar de curar su rodilla izquierda, operada recientemente. Su familia no la pasaba mucho mejor. Ese verano sus padres y hermanos tenían un gangocho de maíz blanco, que era una buena parte de su dieta. “Ése era el desayuno, el almuerzo y la cena”, dice Morales. “Pero se estaba terminando”. Ante la situación, Dionisio, su padre, decide sacarlo de la escuela para que lo acompañe a arriar su recua de llamas y venderlas.

Sin duda el viaje marcó la infancia de Morales, porque ha relatado la historia decenas de veces: que durmió en el camino, que llovió y no tenían dónde guarecerse, que llevaban poca comida, que recogía cáscaras de naranja que tiraban los pasajeros de los buses. No es para menos, un mes entero viajando junto a su padre, quizás sintiéndose ya adulto, quizás imaginando que sería mejor tener una adolescencia que no requiriera viajar 30 días a pie sin lugares para guarecerse.

“¿Y el mejor recuerdo?”. Que era el mimado de su familia, que era el mejor futbolista de su pueblo, Orinoca, que lo eligieron director técnico del equipo de la comunidad cuando tenía 15 años. Para entonces ya había regresado de Argentina, país al que viajó con su padre, su hermano menor Hugo y su hermana Esther, la mayor “que nos cuidaba y cocinaba para nosotros”. Tenía seis años. “Yo era un aymara cerrado, no sabía castellano”. Llegó a un campamento de zafreros cerca de Jujuy, en el que los trabajadores estaban obligados a enviar a sus hijos a la escuela. “La profesora no me entendía nada y yo tampoco podía entenderle”, recuerda. “Me decía Evito, Evito y después se sentaba a mi lado”.

Aymara, lengua materna

Perdió la fluidez en el uso del aymara con el paso de los años, debido a que utilizó el español cada vez más. “Cuando llegué al Chapare (1980) se hablaba quechua y aymara, pero había disputas entre los comunarios sobre el idioma a usarse. Entonces, el idioma que centralizaba los debates era el cas-

tellano, de esa manera estaba obligado a hablar español”. Y ésa es la lengua que habla hasta hoy

Llega al Chapare en 1980, a los 21 años, escapando de una nueva sequía. “Primero me nombran secretario de Deportes del sindicato, mi primer cargo del Sindicato San Francisco el año 1980. Por eso mi primer apodo en el Chapare era ‘joven pelotero’, después pasó a ‘compañero Evo’”.

Ocho años después, un grupo de compañeros lo visita en su chaco y le dicen: “tú vas a ser nuestro candidato a la federación”. Acepta el desafío y al trasladarse, en bicicleta, a la localidad Villa 14 de Septiembre se le ocurre el nombre del movimiento: Frente Amplio de Masas Antiimperialistas (FAMA). En esa ocasión, perdió las elecciones. “Después otra vez me llevaron a ser dirigente de la Central, pero no quería abandonar mi chaco, porque ir como dirigente era abandonar todo. Pero decidí hacerlo y dedicarme al cien por ciento a la dirección sindical”.

“Y si no hubiera sido dirigente sindical, ¿qué le hubiera gustado ser?”. “(Al llegar al Chapare) mi gran deseo era hacer plantaciones de naranja, plátano, coca, y con las ganancias estudiar en Cochabamba. Mi deseo era ser periodista, ése era mi plan. Cuando era niño escuché en la radio que un presidente de Ecuador era periodista. Así que yo quería ser periodista, ése era mi plan cuando empecé a trabajar”. Curioso que mencione que “un presidente era periodista”. Tal vez más que periodista deseaba, ya entonces, ser presidente.

En sus palabras

Los temas que el Presidente tocó en mensajes claves a la nación. El de posesión de su primer mandato, el 22 de enero de 2006; el de posesión de su segundo mandato, el 22 de enero de 2010; y el del 6 de agosto de 2012.

2006

“A todo el pueblo boliviano, saludar desde acá, agradecer a la vida por darme la vida, agradecer a mis padres -que en paz descansen-, convencido que siguen conmigo ayudándome; agradecer a Dios, a la Pachamama, por haberme dado esta oportunidad para conducir el país”.

“Estos pueblos, históricamente hemos sido marginados, humillados, odiados, despreciados, condenados a la extinción. Ésa es nuestra historia; a estos pueblos jamás los reconocieron como seres humanos, siendo que estos pueblos son dueños absolutos de esta noble tierra, de sus recursos naturales”.

“... A los primeros aymaras, quechuas que aprendieron a leer y escribir, les sacaron los ojos, cortaron las manos para que nunca más aprendan a leer, escribir. Hemos sido sometidos, ahora estamos buscando cómo resolver ese problema histórico, no con venganzas, no somos rencorosos”.

“... Yo me siento orgulloso de ellos, de nuestra clase media, intelectual, profesional, hasta empresarial, pero también les invito a ustedes que se sientan orgullosos de los pueblos in-

dígenas, que es la reserva moral de la humanidad”.

“Permanentemente antes se hablaba de la democracia, se luchaba por la democracia, se hablaba de pacto por la democracia, pacto por la gobernabilidad. El año 1997, cuando llegué a este Parlamento que he visto personalmente, ningún pacto por la democracia ni por la gobernabilidad, sino los pactos de la corrupción, pacto de cómo sacar plata de dónde y cómo, felizmente había tenido límite y se acabó gracias a la conciencia del pueblo boliviano”.

“... Nos dejaron un país loteado, un Estado loteado, un país subastado. Yo estoy casi convencido: si hubieran sido inteligentes administradores del Estado, si hubieran querido esta patria, amado esta patria y no como algunos sólo quieren a esta patria para saquear y enriquecerse, si realmente hubiera habido gente responsable para manejar amando a esta patria, a su pueblo, Bolivia sería mejor que Suiza”.

“... Dijimos: hay que pasar de las protestas a las propuestas. Nosotros mismos nos gobernaremos como mayoría nacionales. Ahí felizmente encontramos gente consciente, sana, de las ciudades, profesionales que se suman y el compañero Álvaro García Linera es uno de los intelectuales profesionales de la clase media de la ciudad que se suma para apoyar al movimiento indígena originario. Mi respeto, mi admiración al hermano Linera”.

“¿Qué hizo el instrumento político?, sólo ha puesto en balanza, como decía el compañero Santos Ramírez, que viene de una comunidad, profesor rural, quechua neto, pasando por la lucha sindical, por la Confederación de Maestros Rurales de Bolivia, y con mucho orgullo los quechuas deben sentirse orgullosos, un quechua presidente de la Cámara de Senadores (...) Y nos decía, como profesor muy didáctico, que hemos puesto en la balanza dos poderes: el poder de la conciencia y el poder económico de la prebenda”.

“Y no solamente un triunfo con simple mayoría. Imagínense, del 100% de inscritos para participar en estas elecciones nacionales, 84% va a las urnas, creo que ni siquiera en Estados Unidos hay esta clase de participación. Ésa es la vocación democrática del pueblo boliviano”.

“Quiero reconocer a algunos medios de comunicación, profesionales que permanentemente nos recomendaban para aprender, pero también a algunas periodistas mujeres. Permanentemente satanizaron la lucha social, permanentemente la condenaron con mentiras. Estamos sometidos por algunos periodistas y medios de comunicación a un terrorismo mediático, como si fuéramos animales, como si fuéramos salvajes”.

“Esta mañana, un compañero Héctor Arce, nuestro abogado, me recordaba, antes de salir acá a esta sesión,

y me dice: ‘Evo, un día como hoy, 22 de enero, te expulsaron del Congreso nacional’. ¿Recuerdan algunos compañeros?, que Evo es asesino, Evo es narcotraficante, Evo es terrorista. Yo dije ese momento: ‘me estarán expulsando, pero voy a volver con 30, 40 parlamentarios, si es posible con 70, 80’. Lo que dije un día en el 2002, se ha cumplido”.

“No se asusten, compañeros parlamentarios electos posesionados de otros partidos que no son del MAS. No haremos lo que ustedes nos han hecho a nosotros, el odio, el desprecio, la expulsión del Congreso Nacional. No se preocupen, no se pongan nerviosos. Tampoco va a haber rodillo parlamentario”.

“... Queremos autonomía, autonomía con solidaridad, autonomía con reciprocidad, autonomía donde se redistribuya las riquezas, autonomía para los pueblos indígenas, para las provincias, para las regiones. Buscamos eso, y eso se debe hacer uniendo a Bolivia y eso debe hacerse mediante la Asamblea Constituyente”.

“Y no solamente nacionalizar por nacionalizar, tenemos la obligación de industrializarlos. ¿Cómo es posible?, desde el 6 de agosto del año 1825 ningún recurso natural ha sido industrializado en nuestro país. ¿Cómo es posible que eso sólo haya permitido exportar materia prima?, ¿hasta cuándo Bolivia va a seguir siendo exportador de materia prima?, ¿cómo es posible?, esos gober-

nantes, durante la república nunca han pensado en el país. No se puede creer, no se puede aceptar”.

2010

“A esta histórica Asamblea Legislativa Plurinacional, es una emoción, es una alegría, es un orgullo, es honor ver sentados como concurso de sombreros, como concurso de guardatojos, como concurso de vestimentas, ésa es la Asamblea Legislativa Plurinacional que representa a todos los sectores del pueblo boliviano, también a nuestros hermanos profesionales, intelectuales con su corbata, aunque no veo distintas corbatas, sino un solo color de corbata, felicidades por llevar esa representación”.

“Dentro de nuestras políticas sociales empezamos cómo atender a los

sectores más sensibles de la humanidad, la sociedad civil, que es la niñez y la vejez, el bono Juancito Pinto; gracias a la lucha del pueblo boliviano se atendió el último año a 5.818.000 niños que estudian del primero al octavo grado. ¿Y el resultado qué es?, el 2005 la deserción escolar era del 5,3 por ciento, gracias al bono Juancito Pinto, aún hay deserción, pero es pequeña, es del dos por ciento, bajamos del 5,3 por ciento al dos por ciento de deserción escolar con el bono Juancito Pinto.

“... Me acuerdo perfectamente que el día 12 de octubre, cuando empezamos la campaña el 2005, un periodista extranjero se me acercó y me dijo: ¿Para qué quiere ser presidente? Yo dije que ninguno de mis hermanos y hermanas puede quedar analfabetas, quiero liberar a mis hermanos del analfabetismo”.



“... Estoy convencido de que la adversidad se combate con la verdad, se acabaron esas acusaciones, falsas acusaciones de que iba a acabar con toda propiedad privada, hasta con las universidades privadas; las universidades privadas, mientras respeten las normas del Estado Plurinacional, siempre serán respetadas”.

“Para combatir la corrupción creamos el Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción. Había antes una oficina de los gobiernos, de lucha contra la corrupción, pero en nuestra gestión, 2009, Bolivia pasa al puesto 103, de verdad parece mucho, seguro para algunos países debe ser algo que no se puede aceptar; pero ustedes saben, en los tiempos neoliberales, Bolivia, de acuerdo con Transparencia Internacional, era subcampeón mundial en corrupción. De 180 países ahora bajamos a 103, y esto vamos a continuar para erradicar la corrupción, que es una herencia del Estado colonial”.

“Ni las cooperativas mineras, tampoco el sector minero nacionalizado pueden cuestionarme de la no atención. Sabe el compañero Villca, hicimos los esfuerzos por atender las demandas, aunque el sector minero cooperativizado es como una instancia privada; pero dotando, para liberar de los dueños de ingenios, dotando también la modernización mediante la tecnología al sector cooperativista minero. Esta política va a continuar, por supuesto”.

“Quiero decirles, hermanas y hermanos, esta Bolivia indigna y men-

diga felizmente ha terminado, es el resultado si hablamos de superávit o déficit fiscal”.

“Ustedes saben, felizmente la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico informó permanentemente de algunas fábricas más grandes que de Huanchaca, felizmente sin la DEA de Estados Unidos mejoramos la intervención a estas fábricas grandes en Bolivia”.

“Quiero aprovechar también esta oportunidad de decir de cara al pueblo boliviano y del mundo, que no nos vengán otra vez desde la embajada de Estados Unidos queriendo prohibirnos con qué país vamos a tener relaciones y con qué país no. Quiero que sepan, compañeros, compañeras, el 2002 yo recibí visitas de la embajada de Estados Unidos, por supuesto queremos tener buenas relaciones, y me decían: ‘ustedes no pueden tener relaciones con Cuba ni con Venezuela ni con Irán’”.

“Algo importante, el 2005 conflictos sociales eran de 1.048, todos contra el Estado colonial, 2009 todavía tenemos conflictos que son 295, pero un 70, 80 por ciento son conflictos de las alcaldías, con tema de límites o con temas de corrupción, esto será una nueva responsabilidad para erradicar los conflictos sociales”.

“Una de las debilidades que hemos tenido ha sido justamente la gran industrialización del sector productivo, tenemos ya programas y financia-

miento garantizado para el sector de gas y petróleo; hemos empezado con la planta piloto de litio, queremos mejorar, ahí sí necesitamos socios, no patrones de estos recursos naturales”.

“... Por qué decidimos instalar un satélite Túpac Katari. Ustedes saben, hermanas y hermanos, el pueblo boliviano sabe que tenemos familias, que todavía no conocen la ciudad, familias campesinas indígenas por muchas razones, caminos, recursos económicos, por tanto estas familias no tienen comunicación, por eso hemos pensado en esas familias para tener un satélite de comunicación Túpac Katari”.

“Antes marchaba que marchaba, y ahora hay que dirigir y dirigir para el bien del pueblo boliviano. Antes, compañeras y compañeros, cuestionaba y cuestionaba a un Estado colonial, ahora feliz, tenemos un Estado Plurinacional, es el gran avance y una revolución con el pueblo boliviano, sometido al pueblo boliviano”.

2012

“Antes de la invasión europea, nuestros antepasados vivían sin (sectores) privados, sin propiedad privada, sin odio, son racismo, sin discriminación y, fundamentalmente, en armonía con la Madre Tierra. ¿Qué nos trajo esta invasión, la intervención de un continente a otro continente, el Abya Yala? Nos trajo división, racismo, odio. Finalmente, vinieron a robar nuestros recursos naturales. Ése fue el resultado de la invasión”.

“La primera independencia, de 1825, fue una independencia, yo diría, a medias (...) La independencia política y administrativa, para el movimiento indígena, fue sólo una prolongación del sistema colonial con el pongueaje y el racismo. (...) Sólo fue prolongar las políticas de exterminio y de saqueos de nuestros recursos naturales”.

“Podemos contar todos lo que ha sido la lucha contra el modelo neoliberal, entregando, entregando, nuestros recursos naturales, nuestras empresas. Después de tantos años de lucha, llegó el 2005. Quiero decirles que no creo mucho en los medios de comunicación. Recordemos que nos decían: ‘Evo va a ganar con un 30%, máximo 32% (...)’. Ellos sabían que iba a ganar con más del 50%, pero la prensa dijo que íbamos a ganar con 3% de diferencia”.

“El régimen autonómico será todo un proceso (...) Para nuestros gobernadores la autonomía está siendo más bien una carga económica (...) Quiero aprovechar esta oportunidad para hacer un llamado a nuestras gobernaciones, a nuestras alcaldías, hasta este momento tenemos por lo menos 2.000 millones de dólares en el banco, en las cuentas de las gobernaciones y alcaldías. No están gastando su plata, es para gastar, para beneficiar al pueblo (...) Yo quisiera tener esa plata para el programa Evo Cumple, ahí podemos gastar rápidamente en sus departamentos, con los movimientos sociales, para que el pueblo pueda beneficiarse”.

“La Constitución recoge tres valores: el ama sua, ama llulla y ama kella, y quienes siguen pensando en robar, se equivocan, ahí está la justicia para meter a la cárcel a cualquier corrupto, mejor si son del MAS o dirigentes sindicales, para demostrar que aquí se castiga, primero en casa, ése siempre será el comportamiento del Gobierno nacional”.

“En la lucha contra el narcotráfico seguimos sin mucha cooperación: solos (...) Pese a las debilidades en la reducción de cultivos de coca tuvimos resultados muy interesantes. Quiero advertir a cualquier compañero, en los parques nacionales, como hemos visto últimamente en el Parque Carrasco y el Parque Isiboro, deben ser respetados. No se va a permitir cultivos de coca, así que todos a concientizar y trabajar para evitar cultivos de coca en nuestros parques nacionales”.

“¿Qué viene ahora? Hemos empezado con la industrialización de algunos recursos naturales, en litio pronto habrá novedades. (...) La inversión es de 130 millones de dólares; nos dicen los técnicos que cuando funcione va a rentar 300 millones de dólares al año”. “Propongo a ustedes y a toda Bolivia, el 2025, en el Bicentenario: erradicaremos la extrema pobreza hasta esa fecha. Está en nuestras manos. (...) Que todo nuestro pueblo esté con servicios básicos”.

“No estamos buscando el poder político, no estamos buscando el poder de un país, nuestro mejor aporte con la humanidad van a ser nuestras políticas sociales. (...) Como dirigente sindical he aprendido que primero es la patria, segundo nuestra reivindicación regional y sectorial, por supuesto”.

Anexos

Capítulo

6

Resultados electorales, compendio del conjunto de normas y leyes principales, indicadores económicos, sociales y de conflictividad, además de un anexo con los miembros de los gabinetes presidenciales de estos 30 años.

Datos para descubrir, recordar y comparar. ¿De dónde venimos y dónde estamos?

Resultados electorales

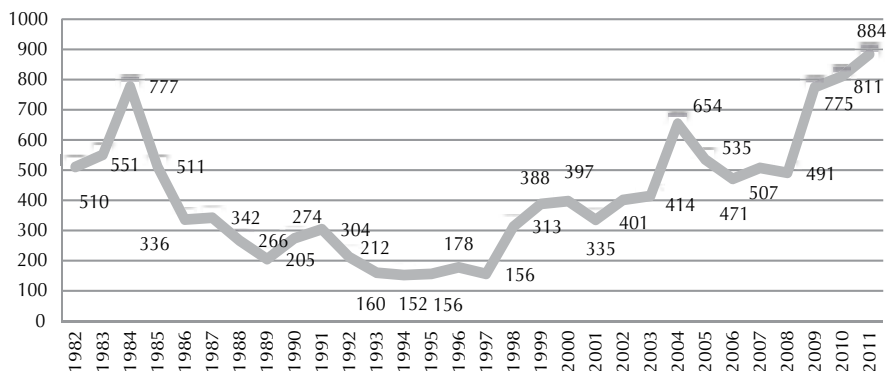
ANEXO

Año	Ganador y segundo	Partido	Votos	Porcentaje
1980	Hernán Siles Zuazo	UDP	507.173	38,74%
	Víctor Paz Estenssoro	MNRA	263.706	20,17%
1985	Hugo Banzer Suarez	ADN	493.735	32,82%
	Víctor paz Estenssoro	MNR	456.704	30,36%
1889	Gonzalo Sanchez de Lozada	MNR	363.113	25,64%
	Hugo Banzer Suarez	ADN	357.298	25,23%
	Jaime Paz Zamora	MIR	309.033	21,82%
1993	Gonzalo Sanchez de Lozada	MNR	363.113	25,64%
	Hugo Banzer Suarez	AP	346.811	21,04%
1997	Hugo Banzer Suarez	ADN	484.705	22,26%
	Juan Carlos Durán	MNR	396.235	18,19%
2002	Gonzalo Sanchez de Lozada	MNR-NA	624.126	22,46%
	Evo Morales Ayma	MAS	581.884	20,94%
2005	Evo Morales Ayma	MAS	1.539.045	53,72%
	Jorge Quiroga Ramírez	Podemos	819.817	28,62%
2009	Evo Morales Ayma	MAS	2.943.209	64,22%
	Manfred Reyes Villa	PPB-APB	1.212.795	26,43%

Referendos			
Año			
2008 (revocatorio)			
Opción sí	2.103.732 (67,41%)		
Opción no	1.016.992 (32,59%)		
2009 (constitucional)			
Opción sí	2.064.417 (61,43%)		
Opción no	1.296.175 (38,57%)		

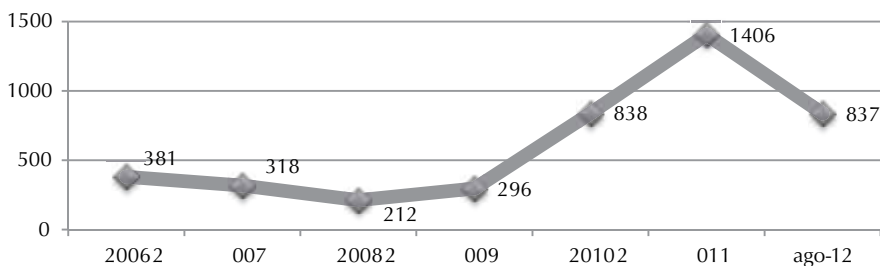
Conflictividad en Bolivia

Cantidad de Eventos de Conflicto 1982-2011
(CERES)



Fuente: Observatorio de Conflictos, CERES

Cantidad de Conflictos 2006-2012 (*)
UNIR



Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos, Fundación UNIR Bolivia.

Entre 2006 y 2009 la conflictividad social experimentó un claro proceso de reducción debido a varios factores: la salida política que parecía resolver la crisis estatal iniciada el año

2000, la legitimidad del nuevo gobierno respaldado por el voto mayoritario de la población, las grandes expectativas depositadas en el gobierno y en el proceso constituyente, el apoyo de las

organizaciones sociales al gobierno y la unidad del bloque oficialista frente a un adversario político concentrado en prefecturas y comités cívicos de tierras bajas que parecía capaz de poner en riesgo el desarrollo del proceso. Pese a la reducción cuantitativa, la intensidad que alcanzó la conflictividad política fue muy alta, dando lugar a momentos de crisis, como los de Cochabamba y Sucre en 2007 y de Pando en 2008.

En 2010 la intensidad de los conflictos se revirtió y se inició un proceso de incremento cuantitativo debido a la emergencia de un proceso inflacionario, que afectó especialmente a los precios de los alimentos, y a la escasez de algunos productos que generaron

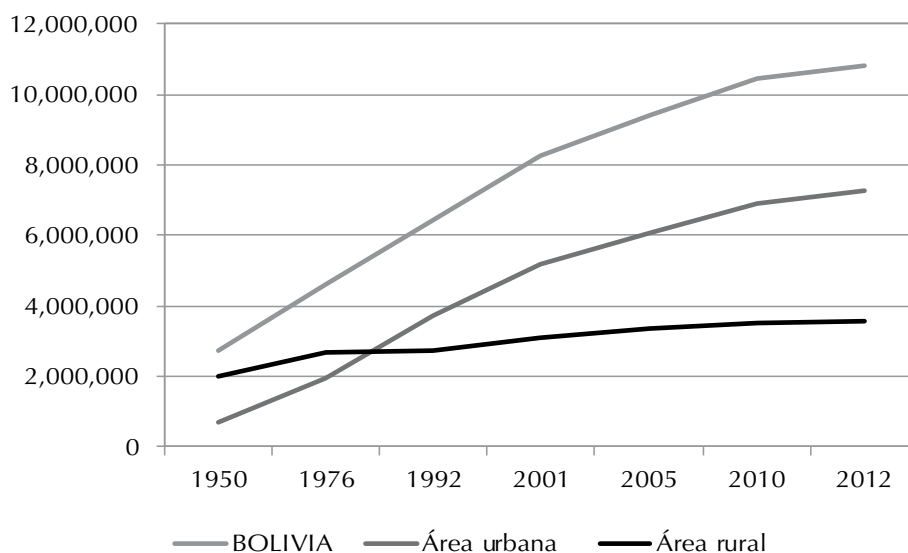
malestar ciudadano; las expectativas de la población de mejoramiento de sus condiciones de vida que no parecen haber sido satisfechas; el progresivo resquebrajamiento de la unidad del bloque oficialista y el distanciamiento entre algunas organizaciones sociales y el gobierno; la formulación de una nueva legislación que dio lugar a demandas de aprobación de leyes y de cuestionamiento de otras; la pugna al interior de la sociedad y con el Estado por controlar espacios y recursos que permitan la sobrevivencia y un mayor margen para el desarrollo en un contexto general de pobreza; la fragmentación socioeconómica, cultural e ideológica del país que dificulta la resolución de reivindicaciones históricas distintas.

Índices socioeconómicos

DEMOGRAFÍA

GRÁFICO 1

BOLIVIA. POBLACIÓN TOTAL SEGÚN ÁREA (1950 – 2012)



Fuente: Elaboración PNUD. En base a INE

Tabla 1

Bolivia. Población Total según área (1950 – 2012)

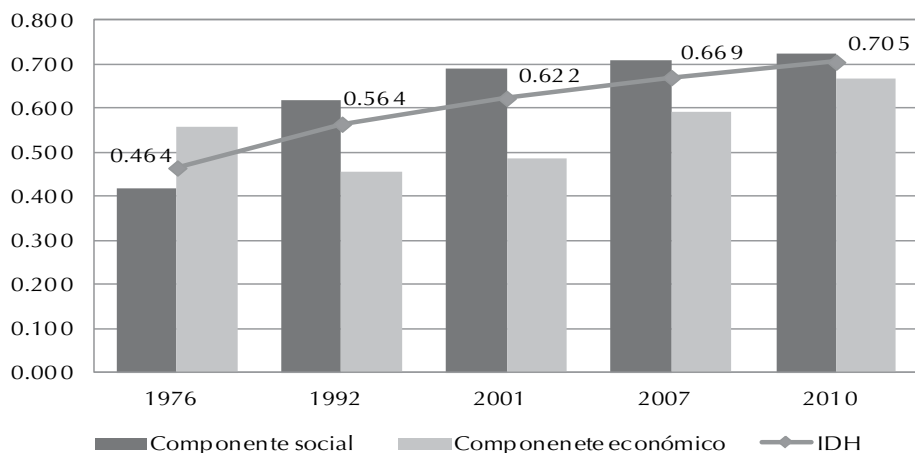
	1950	1976	1992	2001	2005	2010	2012
BOLIVIA	2,704,165	4,613,486	6,420,792	8,274,325	9,427,219	10,426,154.0	10,822,546
Área urbana	708,568	1,925,840.0	3,694,846.0	5,165,230.0	6,055,392.0	6,922,107.0	7,271,372
Área rural	1,995,597	2,687,646.0	2,725,946.0	3,109,095.0	3,371,827.0	3,504,047.0	3,551,174

Fuente: INE

DESARROLLO HUMANO

GRÁFICO 2

BOLIVIA. ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO POR COMPONENTE (1976 – 2010)

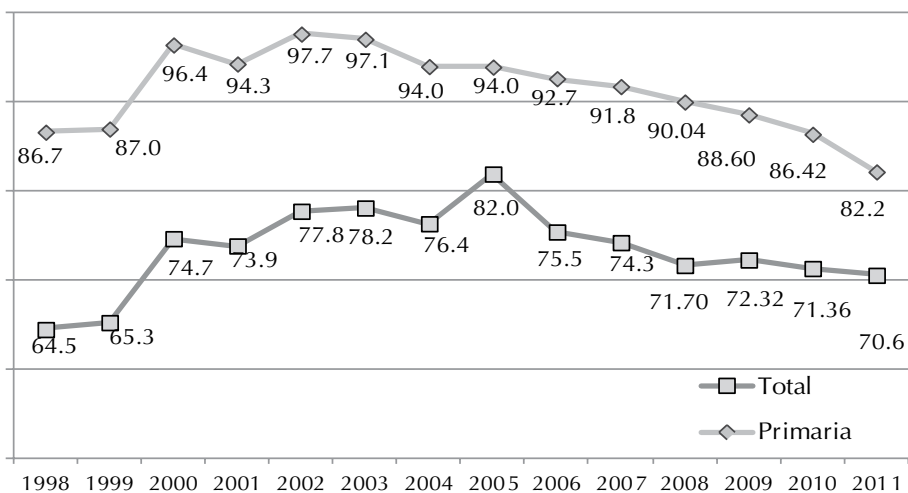


Fuente: Elaboración PNUD. En base a INE

EDUCACIÓN

GRÁFICO 3

BOLIVIA. COBERTURA NETA* DE MATRICULACIÓN SEGÚN NIVEL PRIMARIA (1998 – 2011)



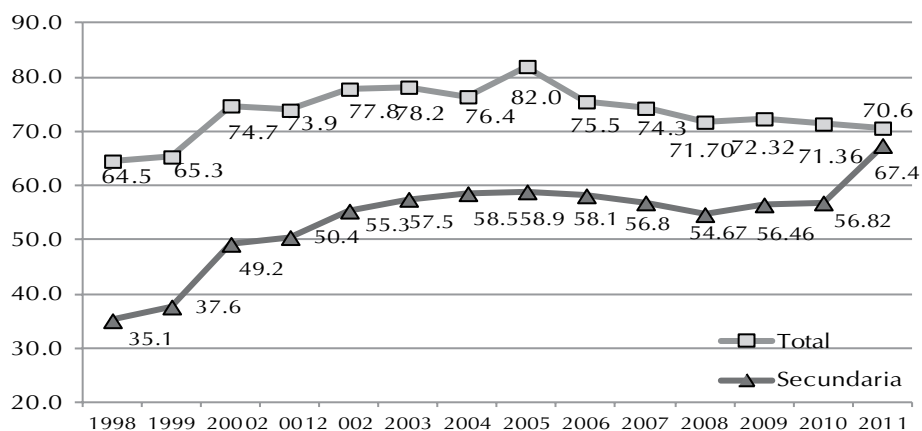
* Definición Cobertura Neta = Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educativo y que tiene la edad correspondiente a ese nivel/Población en el mismo grupo de edad. A partir de la gestión 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070 (Primaria de 1° a 6° y Secundaria de 1° a 6°)

Fuente: Elaboración PNUD.

De 1997 al 2008 En base a Dossier UDAPE

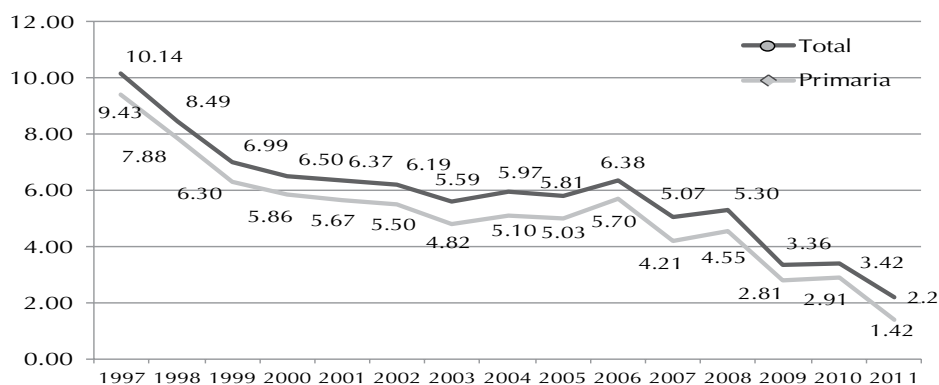
De 2009 al 2011 En base a Ministerio de Educación

GRÁFICO 4
BOLIVIA. COBERTURA NETA DE MATRICULACIÓN
SEGÚN NIVEL SECUNDARIO (1998 – 2008)



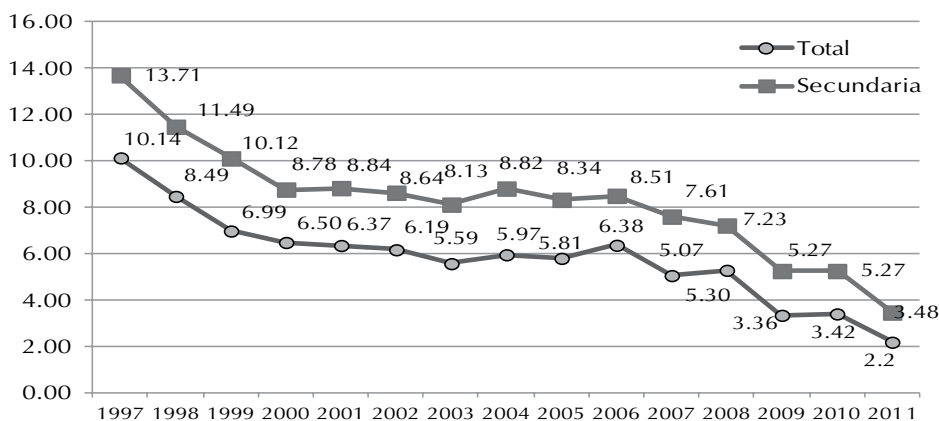
* Definición Cobertura Neta =Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educativo y que tiene la edad correspondiente a ese nivel/Población en el mismo grupo de edad. A partir de la gestión 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070 (Primaria de 1° a 6° y Secundaria de 1° a 6°)
 Fuente: Elaboración PNUD.
 De 1997 al 2008 En base a Dossier UDAPE
 De 2009 al 2011 En base a Ministerio de Educación

GRÁFICO 5
BOLIVIA. TASA DE ABANDONO* SEGÚN
NIVEL PRIMARIA (1997 – 2008)



* Definición: Tasa de abandono=Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación que dejaron de asistir/Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación. A partir de la gestión 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070 (Primaria de 1° a 6° y Secundaria de 1° a 6°)
 Fuente: Elaboración PNUD.
 De 1997 al 2008 En base a Dossier UDAPE
 De 2009 al 2011 En base a Ministerio de Educación

GRÁFICO 6
BOLIVIA. TASA DE ABANDONO* SEGÚN
NIVEL SECUNDARIA (1997 – 2008)



* Definición: Tasa de abandono=Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación que dejaron de asistir/Número de alumnos matriculados en un determinado nivel de educación.

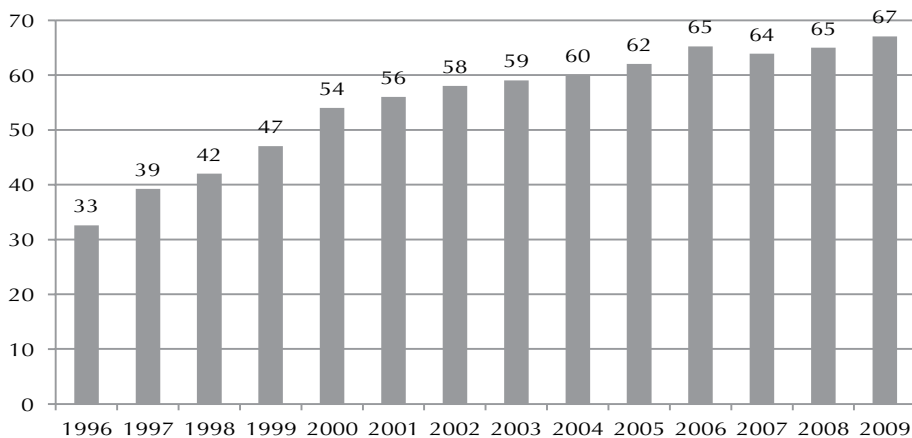
A partir de la gestión 2011, se adopta la estructura definida en la Ley N° 070 (Primaria de 1° a 6° y Secundaria de 1° a 6°)

Fuente: Elaboración PNUD.

De 1997 al 2008 En base a Dossier UDAPE

De 2009 al 2011 En base a Ministerio de Educación

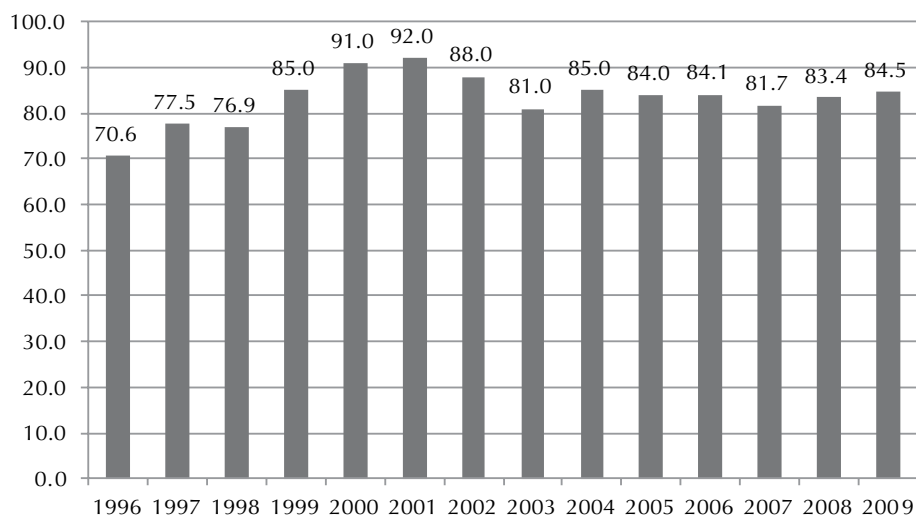
SALUD
GRÁFICO 7
BOLIVIA. COBERTURA DE PARTOS
INSTITUCIONALES*, (%) (1996 – 2009)



* Definición: Cobertura de Partos Institucionales = Número de Partos atendidos por medico y/o enfermera/Número de Partos Esperados

Fuente: Elaboración PNUD. En base a Dossier UDAPE

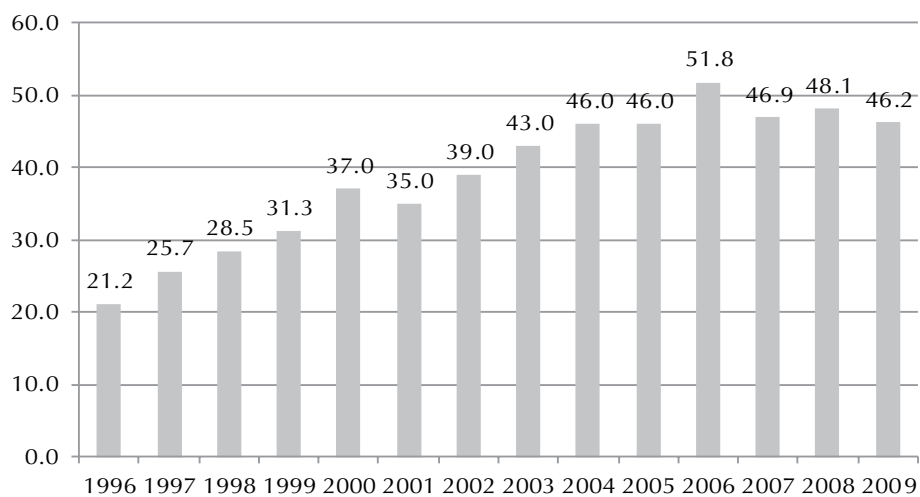
GRÁFICO 8
**COBERTURA DE VACUNACIÓN 3RA DOSIS DE DPT/
 PENTAVALENTE EN MENORES DE 1 AÑO*, (%) (1996 – 2009)**



* Definición: Cobertura de Vacunación con DPT3 = Niños Vacunados con DPT 3ra dosis/Población menor de 1 año.

Fuente: Elaboración PNUD. En base a Dossier UDAPE

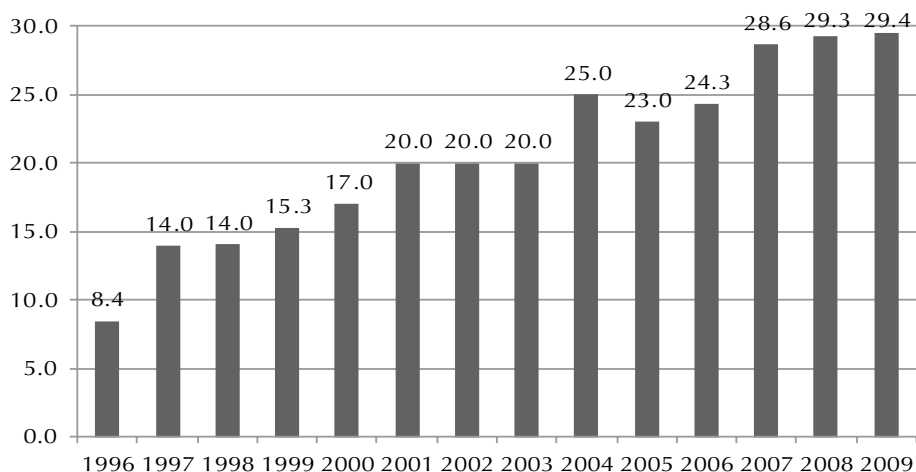
GRÁFICO 9
**COBERTURA DE ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
 DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS*, (%) (1996 – 2009)**



* Definición: Cobertura de Atención EDAs = Número de Casos Atendidos de EDAs/Población menor de 5 años.

Fuente: Elaboración PNUD. En base a Dossier UDAPE

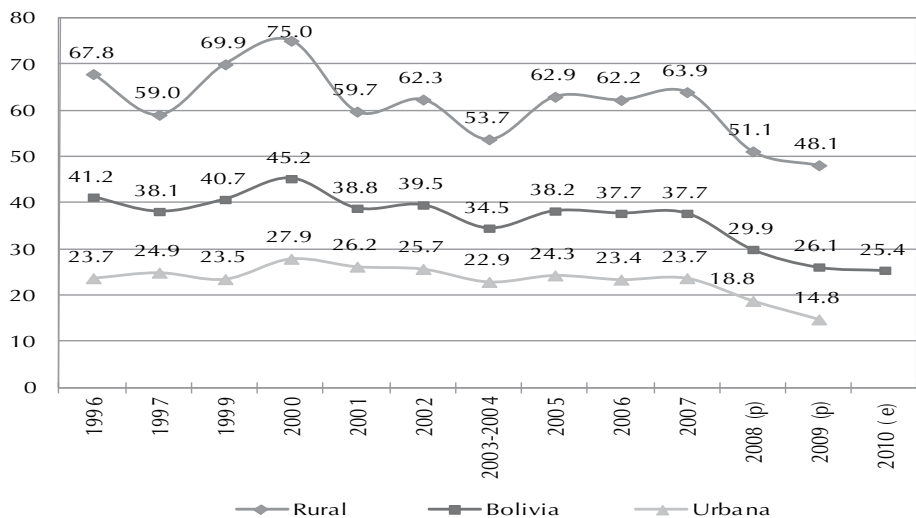
GRÁFICO 10
COBERTURA DE ATENCIÓN DE NEUMONÍAS
EN MENORES DE 1 AÑO*, (%) (1996 – 2009)



* Definición: Cobertura de Atención Neumonías = Niños menores de 1 año atendidos por neumonías/Población menor de 1 año.

Fuente: Elaboración PNUD. En base a Dossier UDAPE

POBREZA
GRÁFICO 11
PERSONAS EN EXTREMA POBREZA*, (%) (1996 – 2009)



* Definición: Extrema pobreza= Población que no logra obtener ingresos para adquirir una canasta alimentaria.

(p) Preliminar

(e) Cifra preliminar estimada por UDAPE

Fuente: Elaboración PNUD. En base a Dossier UDAPE

Gabinetes 1982 - 2012

Tabla histórica elaborada por Carlos Mesa Gisbert

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO	
SILES ZUAZO	VELARDE DORADO MARIO	REL	CUL
SILES ZUAZO	RONCAL ANTEZANA MARIO	INT	MIG
SILES ZUAZO	ORTIZ MERCADO JOSÉ	DEF	
SILES ZUAZO	NÚÑEZ DEL PRADO ARTURO	PLN	COO
SILES ZUAZO	ARANIBAR QUIROGA ERNESTO	FIN	
SILES ZUAZO	CAMACHO PEÑA ALFONSO	EDU	CUT
SILES ZUAZO	POPPE MARTÍNEZ HERNANDO	TRS	COM
SILES ZUAZO	CRÉSPIDO VELASCO JORGE	IND	COR
SILES ZUAZO	ARNEZ ROBERTO	TRA	DEL
SILES ZUAZO	ARGANDONA MARIO	PRE	SAL
SILES ZUAZO	BARRAGÁN CARLOS	MIN	MET
SILES ZUAZO	BARRIENTOS MAMANI ZENÓN	ACP	AGP
SILES ZUAZO	O'CONNOR D'ARLACH JORGE	ENE	HID
SILES ZUAZO	TORRES GUZMÁN HORACIO	SEC	
SILES ZUAZO	GONZÁLEZ RODA JORGE	INF	
SILES ZUAZO	VACA DIEZ HORMANDO	ITG	
SILES ZUAZO	VILLA URIOSTE OSCAR	AER	
SILES ZUAZO	PONCE GARCÍA JAIME	URB	VIV
SILES ZUAZO	LUPO GAMARRA JAVIER	IND	COR
SILES ZUAZO	TORRES GOTTI JAVIER	PRE	SAL
SILES ZUAZO	MEDINA PINEDO JORGE	ENE	HID
SILES ZUAZO	RUEDA PEÑA MARIO	INF	
SILES ZUAZO	GONZÁLEZ RODA JORGE	ITG	
SILES ZUAZO	MACHICADO SARAVIA FLAVIO	FIN	
SILES ZUAZO	IPÍÑA MELGAR ENRIQUE	EDU	CUT
SILES ZUAZO	TAMAYO MARCIAL	REL	CUL
SILES ZUAZO	BARRÓN MARCELO	IND	COR
SILES ZUAZO	MERCADO REINALDO	ACP	AGP
SILES ZUAZO	ORTIZ MERCADO JOSÉ	REL	CUL
SILES ZUAZO	ÁLVAREZ PLATA FEDERICO	INT	MIG
SILES ZUAZO	CÁRDENAS MALLO MANUEL	DEF	
SILES ZUAZO	JORDAN PANDO ROBERTO	PLN	COO
SILES ZUAZO	BAPTISTA GUMUCIO FERNANDO	FIN	
SILES ZUAZO	ÁLVARADO ALCIDES	EDU	CUT
SILES ZUAZO	MUR GUTIÉRREZ HUMBERTO	IND	COR
SILES ZUAZO	BARRENECHEA RAMIRO	TRA	DEL
SILES ZUAZO	CARVAJAL NAVA CARLOS	MIN	MET
SILES ZUAZO	ÁGREDA VALDERRAMA JORGE	ITG	
SILES ZUAZO	YAMPARA SIMÓN	ACP	AGP
SILES ZUAZO	MIGUEL HARB BENJAMÍN	SEC	
SILES ZUAZO	GREBE LÓPEZ HORST	TRA	DEL
SILES ZUAZO	BONIFAZ GUTIÉRREZ OSCAR	IND	COR
SILES ZUAZO	MEDINA PINEDO JORGE	ACP	AGP
SILES ZUAZO	MIRANDA PACHECO CARLOS	ENE	HID
SILES ZUAZO	ARNEZ CAMACHO ANTONIO	AER	
SILES ZUAZO	GUARDIA FERNANDO	URB	VIV
SILES ZUAZO	JUSTINIANO FLORES FREDDY	IND	COR
SILES ZUAZO	FERNÁNDEZ SAAVEDRA GUSTAVO	REL	CUL
SILES ZUAZO	ARANIBAR QUIROGA ERNESTO	PLN	COO
SILES ZUAZO	MACHICADO SARAVIA FLAVIO	FIN	
SILES ZUAZO	CAMACHO PEÑA ALFONSO	EDU	CUT
SILES ZUAZO	SAUCEDO LUIS	ENE	HID
SILES ZUAZO	URIOSTE FERNÁNDEZ MIGUEL	SEC	
SILES ZUAZO	DELGADILLO TERCEROS WALTER	URB	VIV
SILES ZUAZO	CAPOBIANCO RIVERA GUILLERMO	URB	VIV
SILES ZUAZO	MENDOZA HUAYNOCA JULIO	ACP	AGP

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO	
SILES ZUAZO	BONIFAZ GUTIÉRREZ OSCAR	FIN	
SILES ZUAZO	FERNANDEZ ARAOZ RENE	PLN	COO
SILES ZUAZO	KUAJARA ARANDIA ADALBERTO	TRA	DEL
SILES ZUAZO	GREBE LOPEZ HORST	MIN	MET
SILES ZUAZO	ZAVALETA MERCADO RONANTH	ENE	HID
SILES ZUAZO	MERCADO RODRIGUEZ GUALBERTO	FIN	
SILES ZUAZO	MONTERO MUR HUGO	IND	COR
SILES ZUAZO	MOSCOSO RIVERO GUILLERMO	ACP	AGP
SILES ZUAZO	FERNANDEZ PERCY	ITG	
SILES ZUAZO	MEDINA PINEDO JORGE	TRA	DEL
SILES ZUAZO	POMMIER GÓMEZ LUIS	MIN	MET
SILES ZUAZO	CAMACHO OMISTE EDGAR	REL	CUL
SILES ZUAZO	JUSTINIANO FLORES FREDDY	PLN	COO
SILES ZUAZO	BELMONTE CORTEZ FRANCISCO	FIN	
SILES ZUAZO	CHÁVEZ TABORGA CESAR	EDU	CUT
SILES ZUAZO	GUZMÁN EGUEZ GONZALO	TRA	DEL
SILES ZUAZO	PENALOZA ORRICO FREDDY	SEC	
SILES ZUAZO	ASCARRUNZ PAREDES EMILIO	URB	VIV
SILES ZUAZO	PORCEL SALAZAR GABRIEL	TRA	DEL
SILES ZUAZO	SÁNCHEZ SALAZAR GUSTAVO	INT	MIG
SILES ZUAZO	GUTIÉRREZ ARDAYA ELIAS	DEF	
SILES ZUAZO	FARFÁN MEALLA OSCAR	IND	COR
SILES ZUAZO	VELARDE ORTIZ ADHEMAR	ENE	HID
SILES ZUAZO	CAMACHO FLORES PERCY	INF	
PAZ ESTENSSORO	ARAOZ LEVY GASTÓN	REL	CUL
PAZ ESTENSSORO	KAUNE ARTEAGA FEDERICO	INT	MIG
PAZ ESTENSSORO	VALLE QUEVEDO FERNANDO	DEF	
PAZ ESTENSSORO	GISBERT BERMUDEZ ROBERTO	FIN	
PAZ ESTENSSORO	BEDREGAL GUTIÉRREZ GUILLERMO	PLN	COO
PAZ ESTENSSORO	IPINA MELGAR ENRIQUE	EDU	CUT
PAZ ESTENSSORO	DALENZ MEJIA NESTOR	TRS	COM
PAZ ESTENSSORO	ASCARRUNZ EDUARDO DOUGLAS	IND	COR
PAZ ESTENSSORO	COSTAS BADANI WALTER	TRA	DEL
PAZ ESTENSSORO	RODRIGUEZ SERRANO HUGO	PRE	SAL
PAZ ESTENSSORO	CABRERA ROMERO SINFOROSO	MIN	MET
PAZ ESTENSSORO	MAMANI POCOATA MAURICIO	ACP	AGP
PAZ ESTENSSORO	DONOSO TORREZ ORLANDO	ENE	HID
PAZ ESTENSSORO	ALIAGA AYOROA CARLOS ALCIDES	URB	VIV
PAZ ESTENSSORO	RIVEROS TEJADA GUILLERMO	SEC	
PAZ ESTENSSORO	PETERS ARZABE REINALDO	INF	
PAZ ESTENSSORO	CÁCERES ROMERO FERNANDO	ITG	
PAZ ESTENSSORO	TOVAR PIÉROLA ANTONIO	AER	
PAZ ESTENSSORO	BARTHELEMY MARTINEZ FERNANDO	INT	MIG
PAZ ESTENSSORO	BEDREGAL GUTIÉRREZ GUILLERMO	REL	CUL
PAZ ESTENSSORO	CARIAGA OSORIO JUAN	FIN	
PAZ ESTENSSORO	SÁNCHEZ DE L. SÁNCHEZ B. GONZALO	PLN	COO
PAZ ESTENSSORO	PETRICEVIC RASTANOVIC ANDRÉS	TRS	COM
PAZ ESTENSSORO	GISBERT BERMUDEZ ROBERTO	IND	COR
PAZ ESTENSSORO	RÍOS GAMBOA WALTER	TRA	DEL
PAZ ESTENSSORO	PÉREZ GUZMÁN CARLOS	PRE	SAL
PAZ ESTENSSORO	VILLALOBOS SANJINÉS JAIME	MIN	MET
PAZ ESTENSSORO	SANDOVAL MORÓN EDIL	ACP	AGP
PAZ ESTENSSORO	MORALES LANDIVAR CARLOS	ENE	HID
PAZ ESTENSSORO	ANAYA VÁSQUEZ FRANKLIN	AUR	VIV
PAZ ESTENSSORO	DURAN SAUCEDO JUAN CARLOS	SEC	
PAZ ESTENSSORO	ANTELO LAUGHILIN HERMAN	INF	
PAZ ESTENSSORO	MOSCOSO SALMÓN FERNANDO	IND	COR
PAZ ESTENSSORO	CABEZAS MASSES RAMIRO	REC	
PAZ ESTENSSORO	DURAN SAUCEDO JUAN CARLOS	INT	MIG
PAZ ESTENSSORO	FRANCO GUACHALLA ALFREDO	TRA	DEL
PAZ ESTENSSORO	JUSTINIANO SANDOVAL JOSÉ GUILLERMO	ACP	AGP
PAZ ESTENSSORO	ZULETA RONCAL WALTER	SEC	
PAZ ESTENSSORO	ZEGADA HURTADO JAIME	AER	
PAZ ESTENSSORO	REVOLLO THENIER ALFONSO	DEF	
PAZ ESTENSSORO	ILLANES DE LA RIVA FERNANDO	ENE	HID
PAZ ESTENSSORO	CABEZAS MASSES RAMIRO	FIN	

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO	
PAZ ESTENSSORO	ROMERO MORENO FERNANDO	PLN	COO
PAZ ESTENSSORO	PALENQUE CORDERO LUIS FERNANDO	IND	COR
PAZ ESTENSSORO	PENA RUEDA ALFONSO	TRA	DEL
PAZ ESTENSSORO	ARCE LEMA JOAQUIN	PRE	SAL
PAZ ESTENSSORO	ABECIA BALDIVIESO VALENTIN	REL	CUL
PAZ ESTENSSORO	PEREZ BELTRAN EDUARDO	INT	MIG
PAZ ESTENSSORO	BALDERRAMA MALDONADO ALFONSO	TRS	COM
PAZ ESTENSSORO	ROCA ROBERTO	AUR	
PAZ ZAMORA	ITURRALDE BALLIVIAN CARLOS	REL	CUL
PAZ ZAMORA	CAPOBIANCO RIVERA GUILLERMO	INT	MIG
PAZ ZAMORA	ORMACHEA PENARANDA HECTOR	DEF	
PAZ ZAMORA	GARCIA RODRIGUEZ ENRIQUE	PLN	COO
PAZ ZAMORA	BLANCO ZABALA DAVID	FIN	
PAZ ZAMORA	BAPTISTA GUMUCIO MARIANO	EDU	CUT
PAZ ZAMORA	VARGAS VACAFLOR WILLY	TRS	COM
PAZ ZAMORA	CESPEDES ARGANDONA GUIDO	IND	COR
PAZ ZAMORA	ZAMORA MEDINACELLI OSCAR	TRA	DEL
PAZ ZAMORA	PAZ ZAMORA MARIO	PRE	SAL
PAZ ZAMORA	SORIANO LEA PLAZA WALTER	MIN	MET
PAZ ZAMORA	ZANNIER CLAROS ANGEL	ENE	HID
PAZ ZAMORA	BERTERO GUTIERREZ MAURO	ACP	AGP
PAZ ZAMORA	FERNANDEZ SAAVEDRA GUSTAVO	PSD	
PAZ ZAMORA	KEMPPF SUAREZ MANFREDO	INF	
PAZ ZAMORA	PRADA ABASTO ENRIQUE	AUR	
PAZ ZAMORA	FORTUN SUAREZ GUILLERMO	S/C	
PAZ ZAMORA	GONZALEZ QUINTANILLA LUIS	AER	
PAZ ZAMORA	VELASCO URRESTI DE ELENA	AUR	
PAZ ZAMORA	RUEDA PENA MARIO	INF	
PAZ ZAMORA	SAAVEDRA BRUNO CARLOS	INT	MIG
PAZ ZAMORA	SAINZ KLINSKY ALBERTO	DEF	
PAZ ZAMORA	DORIA MEDINA SAMUEL	PLN	COO
PAZ ZAMORA	CESPEDES COSSIO HEDIM	EDU	CUT
PAZ ZAMORA	LOPEZ COSSIO LEOPOLDO	IND	COR
PAZ ZAMORA	VALDA CARDENAS GONZALO	MIN	MET
PAZ ZAMORA	MULLER COSTAS HERBERT	ENE	HID
PAZ ZAMORA	KIEFFER GUZMAN FERNANDO	AUR	
PAZ ZAMORA	LANDIVAR ROCA JORGE	S/C	
PAZ ZAMORA	MACLEAN ABAROA RONALD	REL	CUL
PAZ ZAMORA	QUIROGA RAMIREZ JORGE	FIN	
PAZ ZAMORA	APONTE PINTO CARLOS	TRS	COM
PAZ ZAMORA	CAMPERO PRUDENCIO FERNANDO	IND	COR
PAZ ZAMORA	DABDOUB ARRIEN CARLOS	PRE	SAL
PAZ ZAMORA	REJAS VILLARROEL ALVARO	MIN	MET
PAZ ZAMORA	ANTEZANA VACA DIEZ OSVALDO	ACP	AGP
PAZ ZAMORA	CESPEDES TORO JAIME	INF	
PAZ ZAMORA	ZEGARRA ARANA JUAN PABLO	FIN	
PAZ ZAMORA	SAAVEDRA QUEREJAZU DE OLGA	EDU	CUT
PAZ ZAMORA	GIRONDA CABRERA EUSEBIO	TRA	DEL
PAZ ZAMORA	LUPO JOSE LUIS	INF	
PAZ ZAMORA	PENA ROBERTO	S/C	
PAZ ZAMORA	NAVAJAS ALANDIA, DE EMMA	EDU	CUT
PAZ ZAMORA	VELASCO GERMAN	AUR	
PAZ ZAMORA	PENA ROBERTO	REL	CUL
SANCHEZ DE LOZADA	ILLANES DE LA RIVA FERNANDO	HAC	DEC
SANCHEZ DE LOZADA	ROMERO MORENO FERNANDO CARLOS	DHU	
SANCHEZ DE LOZADA	CESPEDES TORO ANTONIO	DEF	
SANCHEZ DE LOZADA	ANTELO LAUGHLIN HERMAN	CSO	
SANCHEZ DE LOZADA	QUIROGA GOMEZ GERMAN	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	JUSTINIANO SANDOVAL JOSE GUILLERMO	DSO	MAM
SANCHEZ DE LOZADA	MORALES GUILLEN CARLOS	JUS	
SANCHEZ DE LOZADA	SANCHEZ BERZAIN CARLOS JOSE	PSD	
SANCHEZ DE LOZADA	ARANIBAR QUIROGA ANTONIO	REL	CUL
SANCHEZ DE LOZADA	PETERS ARZABE REYNALDO	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	REVOLLO THENIER ALFONSO	CAP	
SANCHEZ DE LOZADA	COSSIO FERNANDO ALVARO	HAC	DEC
SANCHEZ DE LOZADA	IPINA MELGAR ENRIQUE	DHU	

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO	
SANCHEZ DE LOZADA	TOVAR PIEROLA RAÚL	DEF	
SANCHEZ DE LOZADA	MACHICAO ARGIRO ERNESTO JORGE	CSO	
SANCHEZ DE LOZADA	BLATTMANN BAUER RENE	JUS	
SANCHEZ DE LOZADA	CESPEDES G. MARCELO	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	PETERS ARZABE REYNALDO	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	VILLALOBOS SANJINES JAIME	DEC	
SANCHEZ DE LOZADA	SANCHEZ BERZAIN CARLOS JOSE	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	LEMA MOLINA LUIS	DSO	MAM
SANCHEZ DE LOZADA	KREIDLER GUILLAUX ALFONSO	DSO	MAM
SANCHEZ DE LOZADA	JUSTINIANO SANDOVAL JOSE GUILLERMO	PSD	
SANCHEZ DE LOZADA	CANDIA CASTILLO FERNANDO JUAN	HAC	
SANCHEZ DE LOZADA	TEODOVICH ORTIZ FREDDY	DHU	
SANCHEZ DE LOZADA	OTACEVICH JORGE	DEF	
SANCHEZ DE LOZADA	ALCARAZ DEL CASTILLO IRVING	CSO	
SANCHEZ DE LOZADA	JARMUSZ LEVY MOISES	DSO	MAM
SANCHEZ DE LOZADA	RICHTER ASCIMANI GUILLERMO	CSO	
SANCHEZ DE LOZADA	KREIDLER GUILLAUX ALFONSO	DEF	
SANCHEZ DE LOZADA	BALCAZAR GUTIERREZ MAURICIO	CSO	
SANCHEZ DE LOZADA	ANAYA VASQUEZ FRANKLIN JUAN	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	ESPAÑA SMITH RAÚL	JUS	
SANCHEZ DE LOZADA	SAN MARTIN ARZABE HUGO	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	ANAYA VASQUEZ FRANKLIN JUAN	DHU	
SANCHEZ DE LOZADA	SANCHEZ BERZAIN CARLOS JOSE	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	BLATTMANN BAUER RENE	JUS	
SANCHEZ DE LOZADA	ANTEZANA MAURICIO	CSO	
SANCHEZ DE LOZADA	CANELAS VICTOR HUGO	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	VARGAS ALBERTO	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	JUSTINIANO SANDOVAL JOSE GUILLERMO	DSO	MAM
BANZER	MURILLO DE LA ROCHA JAVIER	REL	CUT
BANZER	NAYAR PARADA GUIDO EDUARDO	GOB	
BANZER	KIEFFER GUZMAN FERNANDO	DEF	
BANZER	REYES VILLA BACIGALUPI ERICK	DSO	MAM
BANZER	MARINCOVICH TONCHI	DHU	
BANZER	MILLARES ARDAYA EDGAR OSCAR	HAC	
BANZER	KULJIS FUCHNER IVO MATEO	DEC	
BANZER	LOPEZ COSSIO LEOPOLDO	TRA	MIC
BANZER	CORTEZ SORIANO, DE ANA MARÍA	JUS	DHH
BANZER	ITURRALDE BALLIVIAN CARLOS	PSD	
BANZER	ESCOBAR SALGUERO JAVIER	VIV	SUR
BANZER	HOZ DE VILA QUIROGA TITO	EDU	CUT
BANZER	CONDE LOPEZ FREDDY LUIS	AGR	GAN
BANZER	CRESPO VELASCO JORGE	CEX	INV
BANZER	PACHECO FRANCO JORGE	DEC	
BANZER	ANTEZANA VACA DIEZ OSWALDO	AGR	GAN
BANZER	MULLER COSTAS HERBERT	HAC	
BANZER	BALLIVIAN AMPARO	VIV	SUR
BANZER	CUENTAS YANEZ GUILLERMO	SAL	PRE
BANZER	SOLIZ ANTEZANA ADOLFO	TRA	MIC
BANZER	SAAVEDRA BRUNO CARLOS ARMANDO	CEX	INV
BANZER	CRESPO VELASCO JORGE	DEF	
BANZER	LUPO FLORES JOSÉ LUIS	DEC	
BANZER	GUTIERAS DENIS WALTER	GOB	
BANZER	LANDIVAR ROCA JORGE	INF	
BANZER	SUBIRANA SUAREZ CARLOS	JUS	DHH
BANZER	ONDARZA LINARES FRANZ	PSD	
BANZER	VASQUEZ VILLAMOR LUIS	TRA	MIC
BANZER	POMA ROJAS RUBEN	VIV	SUR
BANZER	CHAHIN LUPO JUAN	JUS	DHH
BANZER	CARVAJAL PALMA JOSE LUIS	DSO	MAM
BANZER	MACLEAN ABAROA RONALD	INF	
BANZER	VARGAS LORENZETTI OSCAR	DEF	
BANZER	FORTUN SUAREZ GUILLERMO	GOB	
BANZER	MACLEAN ABAROA RONALD	HAC	
BANZER	KEMPPF SUAREZ MANFREDO	INF	
BANZER	GUTIERAS DENIS WALTER	PSD	
BANZER	CARVAJAL DONOSO HUGO ARTURO	AGR	GAN

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO	
BANZER	MANSILLA PEÑA CLAUDIO	CEX	INV
BANZER	SAAVEDRA BRUNO CARLOS ARMANDO	DEC	
BANZER	MACLEAN ABAROA RONALD	DSO	MAM
BANZER	LUPO FLORES JOSE LUIS	HAC	
BANZER	VÁSQUEZ VILLAMOR LUIS	JUS	DHH
BANZER	PACHECO FRANCO JORGE	TRA	MIC
BANZER	RIBERO PINTO WIGBERTO	ACP	PIO
BANZER	PÉREZ MONASTERIOS MARCELO	PSD	
BANZER	GOITIA CABALLERO CARLOS ALBERTO	JUS	DHH
QUIROGA	ANAYA JALDIN AMALIA	EDU	CUT
QUIROGA	BERTERO GUTIÉRREZ MAURO	INF	
QUIROGA	CAVERO URIONA RAMIRO	DSO	MAM
QUIROGA	FERNANDEZ FERREIRA LEOPOLDO	GOB	
QUIROGA	FERNANDEZ SAAVEDRA GUSTAVO	REL	CUL
QUIROGA	GUILARTE LUJAN OSCAR	DEF	
QUIROGA	KEMPF BRUNO CARLOS	DEC	
QUIROGA	NOGALES ITURRI XAVIER	VIV	SUR
QUIROGA	NÚÑEZ RODRÍGUEZ WALTER F.	AGR	GAN
QUIROGA	PAZ ARGANDONA LUIS ENRIQUE	SAL	
QUIROGA	TRIGO LOUBIERE JACQUES	HAC	
QUIROGA	SERRATE RUIZ MARIO	JUS	DHH
QUIROGA	LUPO FLORES JOSE LUIS	PSD	
QUIROGA	CHAHIN LUPO JUAN	TRA	
QUIROGA	LEYTON AVILES ALBERTO	PSD	
QUIROGA	LUPO FLORES JOSE LUIS	GOB	
QUIROGA	TERRAZAS ERGUETA HERNAN	INF	
QUIROGA	YARHUI JACOMÉ TOMASA	ACP	
QUIROGA	GOITIA CABALLERO CARLOS ALBERTO	JUS	DHH
SANCHEZ DE LOZADA	SAAVEDRA BRUNO CARLOS	REL	
SANCHEZ DE LOZADA	JUSTINIANO SANDOVAL JOSE GUILLERMO	DSO	PLA
SANCHEZ DE LOZADA	SANCHEZ BERZAIN CARLOS	PSD	
SANCHEZ DE LOZADA	MORALES LANDIVAR CARLOS	VIV	
SANCHEZ DE LOZADA	SUÁREZ RAMÍREZ FRANCISCO JAVIER	SPN	
SANCHEZ DE LOZADA	MÉNDEZ HURTADO GINA LUZ	JUS	DHH
SANCHEZ DE LOZADA	GASSER VARGAS ALBERTO WERNER	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	TEODOVICH ORTIZ FREDDY	DEF	
SANCHEZ DE LOZADA	PARÉDES MUÑOZ HERNÁN	DMC	
SANCHEZ DE LOZADA	COMBONI SALINAS JAVIER	HAC	
SANCHEZ DE LOZADA	VELARDE OLMOS SILVIA AMPARO	ING	IND
SANCHEZ DE LOZADA	VIRREIRA MÉNDEZ JUAN CARLOS	CEX	
SANCHEZ DE LOZADA	FARFAN MEALLA OSCAR	DEC	
SANCHEZ DE LOZADA	MAIDANA QUISBERT ISAAC	EDU	CUT
SANCHEZ DE LOZADA	NAVARRO TARDIO JAIME ROLANDO	TRA	MIC
SANCHEZ DE LOZADA	TORRES-GOITIA CABALLERO JAVIER	SAL	PRE
SANCHEZ DE LOZADA	LIEBERS ARTURO	AGR	GAN
SANCHEZ DE LOZADA	ILLANES DE LA RIVA FERNANDO	HID	
SANCHEZ DE LOZADA	JUSTINIANO SANDOVAL JOSE GUILLERMO	PSD	
SANCHEZ DE LOZADA	KUKOC DEL CARPIO YERKO	GOB	
SANCHEZ DE LOZADA	PAZ ESTENSSORO CORTÉZ MOIRA	DSO	
SANCHEZ DE LOZADA	SUBIRANA SUÁREZ JUAN WALTER	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	CARVAJAL DONOSO HUGO ARTURO	EDU	
SANCHEZ DE LOZADA	TORRES OBLEAS JORGE	DEC	
SANCHEZ DE LOZADA	MORALES LANDIVAR CARLOS	SER	OBP
SANCHEZ DE LOZADA	BERINDOAGUE ALCOCER JORGE JOAQUIN	MIN	HID
SANCHEZ DE LOZADA	SANCHEZ BERZAIN CARLOS	DEF	
SANCHEZ DE LOZADA	REYES VILLA BACIGALUPI ERICK	DSO	
SANCHEZ DE LOZADA	KUAJARA ARANDIA ADALBERTO	TRA	
SANCHEZ DE LOZADA	ÁÑEZ MOSCOSO GUIDO	AGR	
SANCHEZ DE LOZADA	PINO ARCHONDO DANTE	SPN	
SANCHEZ DE LOZADA	QUEVEDO ACALINOVIC MIRIHA	PPO	
MESA GISBERT	MONTENEGRO ERNST DIEGO	ACP	AGP
MESA GISBERT	SEOANE PARAPAINO JUSTO	AIJ	
MESA GISBERT	ARREDONDO MILLÁN GONZALO	DEF	
MESA GISBERT	NOGALES ITURRI XAVIER	DEC	
MESA GISBERT	CORTÉS RODRÍGUEZ JORGE	DSO	
MESA GISBERT	AYMA ROJAS DONATO	EDU	

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO	
MESA GISBERT	FERRUFINO VALDERRAMA ALFONSO	GOB	
MESA GISBERT	CUEVAS ARGOTE JAVIER	HAC	
MESA GISBERT	BARBERY ANAYA ROBERTO	PPO	
MESA GISBERT	GALINDO NEDER JOSE	PRS	
MESA GISBERT	SILES DEL VALLE JUAN IGNACIO	REL	CUL
MESA GISBERT	URQUIDI BARRAU JORGE	SER	OBP
MESA GISBERT	FERNANDEZ FAJALDE LUIS	TRA	
MESA GISBERT	RIOS ROCA ALVARO	MIN	HID
MESA GISBERT	ANTEZANA ARANIBAR FERNANDO	SAL	DEP
MESA GISBERT	ARANIBAR QUIROGA ANTONIO	MIN	HID
MESA GISBERT	CALLA ORTEGA, RICARDO	AII	
MESA GISBERT	GREBE LÓPEZ HORST	DEC	
MESA GISBERT	PEDRAZA MÉRIDA GUSTAVO	DSO	
MESA GISBERT	NOGALES ITURRI XAVIER	MIN	HID
MESA GISBERT	TORRES ORÍAS GUILLERMO	MIN	HID
MESA GISBERT	QUIROGA TRIGO MARÍA SOLEDAD	EDU	
MESA GISBERT	LARA TORRICO SAUL	GOB	
MESA GISBERT	JEMIO MOLLINADO LUIS CARLOS	HAC	
MESA GISBERT	BARRIOS ARANCIBIA VÍCTOR GABRIEL	ACP	AGP
MESA GISBERT	TICONA CRUZ PEDRO	AII	
MESA GISBERT	KREIDLER GUILLAUX WALTER	DEC	
MESA GISBERT	AGUILERA ANTUNEZ, EDWIN	DSO	
MESA GISBERT	ESPINOZA MORALES JORGE	MIN	
MESA GISBERT	ARDAYA SALINAS GLORIA	PPO	
MESA GISBERT	PAZ PRUDENCIO MARÍA TERESA	SAL	DEP
MESA GISBERT	GÓMEZ GARCÍA PALAU RENÉ	SER	OBP
MESA GISBERT	ZURITA ZELAYA AUDALIA	TRA	
MESA GISBERT	QUIROGA MORALES ROSARIO	SAL	DEP
MESA GISBERT	CHOQUE VILLCA CELESTINO	EDU	
RODRIGUEZ	MÉNDEZ G. GONZALO	DEF	
RODRIGUEZ	MEJÍA BARRAGÁN, MARÍA C.	EDU	
RODRIGUEZ	AVILA BUSTAMANTE GUSTAVO	GOB	
RODRIGUEZ	DUNN CASTELLANOS JAIME	HID	
RODRIGUEZ	GARZON M. DIONISIO J.	MIN	
RODRIGUEZ	PONCE FORTUN NAYA	PPO	
RODRIGUEZ	AVILES MANTILLA IVAN	PRS	
RODRIGUEZ	LOAIZA MARIACA ARMANDO	REL	CUL
RODRIGUEZ	MUNOZ REYES, ALVARO	SAL	DEP
RODRIGUEZ	MORENO VIRUEZ MARIO A.	SER	OBP
RODRIGUEZ	RIVERA CUELLAR GUILLERMO	ACP	AGP
RODRIGUEZ	DÍAZ VILLAVICENCIO CARLOS MELCHOR	DEC	
RODRIGUEZ	PEREDO OBLEAS IRMA ELIZABETH	DSO	
RODRIGUEZ	LAGUNA NAVARRO CARLOS DEMETRIO	TRA	
RODRIGUEZ	BOZO ESPINOZA MARTA	DSO	
RODRIGUEZ	GUTIERREZ IRIARTE WALDO MARIO	HAC	
RODRIGUEZ	MEDINACELLI MONROY, MAURICIO	HID	
RODRIGUEZ	ROCABADO GONZALO	DEF	
MORALES	David Choquehuanca Céspedes	REL	
MORALES	Juan Ramón Quintana	PSD	
MORALES	Alicia Muñoz Ala	GOB	
MORALES	Walker San Miguel Rodríguez	DEF	
MORALES	Luis Alberto Arce Catacora	HAC	
MORALES	Carlos Villegas Quiroga	DSO	
MORALES	Carlos Villegas Quiroga	HID	
MORALES	Carlos Villegas Quiroga	PLN	
MORALES	Celinda Sosa Lunda	PRD	
MORALES	Salvador Ric Riera	OBP	
MORALES	Andrés Soliz Rada	HID	
MORALES	Félix Patzi Paco	EDU	
MORALES	Nila Heredia Miranda	SAL	
MORALES	Santiago Alex Galvez Mamani	TRA	
MORALES	Hugo Salvatierra Gutierrez	AGP	
MORALES	Walter Villarroel Morochi	MIN	
MORALES	Casimira Rodríguez Romero	JUS	
MORALES	Abel Mamani Marca	MAM	
MORALES	Gabriel Loza Tellería	DSO	

PRESIDENTE	MINISTRO	MINISTERIO
MORALES	Guillermo Dalence Salinas	MIN
MORALES	Alfredo Octavio Rada Vélez	GOB
MORALES	Celima Torricos Rojas	JUS
MORALES	Jerjes Mercado Suarez	OBP
MORALES	Victor Cáceres Rodríguez	EDU
MORALES	Susana Rivero Guzmán	MAM
MORALES	Luis Alberto Echazú Alvarado	MIN
MORALES	María Magdalena Cajías de la Vega	EDU
MORALES	José Kinn Franco	OBP
MORALES	Walter Valda Rivera	MAM
MORALES	Graciela Toro Ibañez	PLN
MORALES	Ángel Gonzalo Javier Hurtado Mercado	PRD
MORALES	Oscar Coca Antezana	OBP
MORALES	Oscar Coca Antezana	HID
MORALES	Oscar Coca Antezana	PSD
MORALES	Walter Juvenal Delgadillo Terceros	TRA
MORALES	Walter Juvenal Delgadillo Terceros	OBP
MORALES	Walter Selúm Rivero	SAL
MORALES	René Orellana Halkyer	MAM
MORALES	Héctor Enrique Arce Zaconeta	DEL
MORALES	Carlos Romero Bonifaz	DRU
MORALES	Carlos Romero Bonifaz	AUT
MORALES	Carlos Romero Bonifaz	PSD
MORALES	Carlos Romero Bonifaz	GOB
MORALES	Saúl Avalos	HID
MORALES	Jorge Ramiro Tapia	SAL
MORALES	Susana Rivero Guzmán	PRD
MORALES	Roberto Iván Aguilar Gómez	EDU
MORALES	Noel Aguirre Ledezma	PLN
MORALES	Susana Rivero Guzmán	DRU
MORALES	Julia Ramos Sánchez	DRU
MORALES	Calixto Chipana Calizaya	TRA
MORALES	Pablo César Groux Canedo	CUT
MORALES	Nardy Suño Iturrn	TRI
MORALES	Sacha Sergio Llorentti Soliz	GOB
MORALES	Rubén Saavedra Soto	DEF
MORALES	Elizabeth Anismendi Chumacero	DEL
MORALES	Elba Viviana Caro Hinojosa	PLN
MORALES	Luis Fernando Vincentti Vargas	HID
MORALES	Antonia Rodríguez Medrano	DRU
MORALES	Milton Gómez Mamani	MIN
MORALES	Nilda Copa Condori	JUS
MORALES	Carmen Trujillo Cárdenas	TRA
MORALES	Sonia Polo Andrade	SAL
MORALES	María Esther Udaeta Velásquez	MAM
MORALES	Nemesia Achacollo Tola	DRU
MORALES	Zulma Yugar Parraga	CUL
MORALES	José Gutiérrez Pérez	HID
MORALES	Ana Teresa Morales Olivera	DRU
MORALES	Julieta Monje Villa	MAM
MORALES	Iván Canelas	COM
MORALES	Félix Rojas Gutierrez	TRA
MORALES	Elizabeth Salguero	CUL
MORALES	María Cecilia Chacón Rendón	DEF
MORALES	Claudia Peña Claros	AUT
MORALES	Wilfredo David Chávez Serrano	GOB
MORALES	Rubén Saavedra Soto	DEF
MORALES	Daniel Santalla Torrez	TRA
MORALES	Amanda Dávila	COM
MORALES	Juan José Sosa Soruco	HID
MORALES	Vladimir Arturo Sánchez Escobar	OBP
MORALES	Mano Virreira Iporre	MIN
MORALES	Cecilia Aylón Quinteros	JUS
MORALES	Juan Carlos Calvimontes	SAL
MORALES	Felipe Quispe Quenta	MAM
MORALES	José Antonio Zamora Gutierrez	MAM

SIGLAS DE LOS MINISTERIOS:

ACP	ASUNTOS CAMPESINOS	GUE	GUERRA
AER	AERONÁUTICA	HAC	HACIENDA
AGP	AGROPECUARIOS	HID	HIDROCARBUROS
AGR	AGRICULTURA	HIG	HIGIENE
ASE	ASESOR DE LA PRES.	IND	INDUSTRIA
ASI	ASUNTOS SINDICALES	INF	INFORMACIONES
AUR	ASUNTOS URBANOS	ING	ASUNTOS INDÍGENAS
AUT	AUTONOMIA	INM	INMIGRACIÓN
BAR	BELLAS ARTES	INS	INSTRUCCIÓN
BIE	BIENESTAR SOC. Y FLIA.	INT	INTERIOR
CAP	CAPITALIZACIÓN	INV	INVERSIONES
CEX	COMERCIO EXTERIOR	ITG	INTEGRACIÓN
COL	COLONIZACIÓN	JUS	JUSTICIA
COM	COMUNICACIONES	MAM	MEDIO AMBIENTE
COO	COORDINACIÓN	MAN	MANCOMUNADO
COR	COMERCIO	MAR	MARINA
CSO	COMUNICACIÓN SOCIAL	MET	METALÚRGIA
CUL	CULTO	MIC	MICROEMPRESA
CUT	CULTURA	MIG	MIGRACIÓN
C&T	CORREOS Y TELEGRAFOS	MIN	MINERIA
DEC	DESARROLLO ECONÓMICO	OBP	OBRAS PÚBLICAS
DEF	DEFENSA	PET	PETRÓLEO
DEL	DESARROLLO LABORAL	PIO	PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGI- NARIOS
DEP	DEPORTES	PLN	PLANTEAMIENTO
DES	DEFENSA SOCIAL	PRD	PRODUCCIÓN
DHH	DERECHOS HUMANOS	PRE	PREVISIÓN
DHU	DESARROLLO HUMANO	PRO	PROPAGANDA
DLE	DEFENSA LEGAL	PRS	PRENSA
DMC	DESARROLLO MUNICIPAL	PSD	PRESIDENCIA
DRU	DESARROLLO RURAL	REC	RECAUDACIONES
DHU	DESARROLLO HUMANO	REL	RELACIONES EXTERIORES
DRU	DESARROLLO RURAL	RIE	RIEGO
DSO	DESARROLLO SOSTENIBLE	SAL	SALUD
ECO	ECONOMÍA	SEC	SECRETARIO
EDU	EDUCACIÓN	SES	SEGURIDAD SOCIAL
EJE	EJÉRCITO	SER	SERVICIOS
ENE	ENERGÍA	SFN	SERVICIOS FINANCIEROS
EST	ESTADÍSTICA	SUR	SERVICIOS URBANOS
ETD	ESTADO	S/C	SIN CARTERA
FAM	FAMILIA	TRA	TRABAJO
FIN	FINANZAS	TRI	TRANSAPARIENCIA INSTITUCIONAL
FOM	FOMENTO	TRS	TRANSPORTES
GAN	GANADERÍA	TUR	TURISMO
GEN	GÉNERO	URB	URBANISMO
GER	GENERACIONAL	VIV	VIVIENDA
GOB	GOBIERNO		
GRL	GENERAL		

Bolivia cumple 30 años de democracia. En un país caracterizado por la inestabilidad política y la falta de institucionalidad, éste es un hecho verdaderamente extraordinario. Significa que, contra las tradiciones del pasado y enfrentando una serie de amenazas, los bolivianos hemos logrado ponernos de acuerdo en ciertos aspectos básicos de convivencia social y política.

Pero a pesar de haber construido un sistema democrático, los bolivianos no hemos podido realmente establecer un genuino estado de derecho. Con cada avance hay también un tema pendiente, un desafío que cumplir. A la par de cada reforma social o política importante, existe una norma que no se cumple o un derecho que es violado por las autoridades.

Para hablar de estas tres décadas apasionantes de nuestra historia, Página Siete solicitó el concurso de los mejores periodistas y ensayistas del país, que abordaron estos aspectos desde innumerables miradas y enfoques.

Los textos se caracterizan por su profundidad y equilibrio. En el conjunto, el resultado obtenido es pluralista y complejo. Página Siete está seguro de que este documento se convertirá en un libro de referencia para especialistas y que también será de interés del público en general.

Raúl Peñaranda U.

